

La edición del presente número del OSAL fue concluida en vísperas de la XX Asamblea General de CLACSO a realizarse en Guadalajara, México. Han transcurrido dos años de intenso trabajo desde que, en noviembre de 1999, la XIX Asamblea General de CLACSO reunida en Recife, Brasil, aprobara la creación de un programa especial destinado al análisis y seguimiento de la conflictividad y de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe.

El resultado provisorio del esfuerzo realizado es la edición de cinco números de la revista del OSAL, los cuales permiten disponer de una información detallada sobre las principales características de las luchas sociales en Latinoamérica y el Caribe. Los números publicados cubren un período (enero 2000-agosto 2001) caracterizado por el aumento de la protesta social en nuestro continente, en concomitancia con la profundización de las respuestas neoliberales a las crisis atravesadas por los países de la región. Asimismo el período abarcado coincidió a nivel mundial con la consolidación de un vasto movimiento internacional de resistencia a la mundialización neoliberal. Diferentes movimientos y organizaciones sociales latinoamericanos, analizados en los sucesivos números del OSAL, se reconocieron en dicha experiencia y son un componente relevante de este dinámico y heterogéneo movimiento. En las protestas de Seattle en noviembre de 1999 y de Génova en agosto de este año, como también en el Primer Foro Social Mundial realizado en Porto Alegre, Brasil, en enero de 2001, se hicieron sentir las voces y las propuestas de miles de latinoamericanos que creen que otro mundo es posible.

Este escenario internacional, caracterizado en los dos últimos años por un creciente cuestionamiento a las políticas neoliberales y sus consecuencias, ha sido sacudido recientemente por los criminales atentados ocurridos en Estados Unidos y por la posterior escalada bélica desatada a partir de la intervención armada en Afganistán. Quienes cotidianamente bregamos por un mundo donde imperen la justicia, la solidaridad, la paz y la democracia no podemos sino manifestar nuestro más enérgico repudio ante los acontecimientos mencionados que, sin duda, resultan de las tensiones e injusticias acumuladas en las dos últimas décadas al calor del modelo de “capitalismo global” promovido por los sucesivos gobiernos de los países industrializados. La creciente militarización de las relaciones internacionales, alentada por los “fundamentalistas de la guerra” y el capital financiero, encuentra hoy su justificación teórica a través de la revitalizada y maniquea tesis sobre el “choque civilizatorio”.

Un análisis objetivo de la realidad permite comprender las verdaderas razones de este conflicto, que evidencia intereses económicos y políticos mucho más palpables que la supuesta “lucha civilizatoria” entablada por el gobierno de los Estados Unidos contra sus antiguos aliados en Afganistán. El control por parte de las potencias occidentales de los recursos energéticos (petróleo y gas) existentes en la región constituye sin duda una razón de peso para entender la dinámica de esta ofensiva armada. En el plano interno de la política norteamericana, el nuevo escenario ha permitido al gobierno del presidente Bush reconstruir, al menos provisoriamente y pese al significativo recorte de las libertades públicas experimentado a partir de los atentados, un apoyo político que le había sido denegado por el voto democrático de la mayoría de los ciudada-

nos norteamericanos. La amalgama discursiva entre capitalismo y supremacía cultural de Occidente intenta clausurar todo debate democrático en torno a las consecuencias sociales y políticas del actual modelo neoliberal liderado por los Estados Unidos, de las cuales los atentados del 11 de septiembre no son sino su manifestación más aberrante. Es por ello que la actual coyuntura puede menoscabar en el futuro inmediato la legitimidad democrática de las acciones y reclamos conquistada en el pasado reciente por los movimientos de protesta contra las políticas neoliberales. En esta perspectiva, los acontecimientos ya señalados constituyen una trágica involución en la correlación de fuerzas internacionales que, tal como señaláramos más arriba, había colocado al neoliberalismo a la defensiva. Así, la situación actual no sólo no nos exime, sino que nos obliga como investigadores sociales e intelectuales, a redoblar aún más nuestros esfuerzos en la construcción de un mundo desprovisto de guerras y explotación.

■ La protesta social en Argentina

El dossier central que se presenta en este número está dedicado al análisis de la protesta en la Argentina que, por su magnitud y su impacto político, ha sido –según nuestro entender– el proceso más significativo de la conflictividad social del período en la región. Dicha cuestión ya había sido abordada, en el número anterior a esta publicación, a través de la colaboración de Nicolás Iñigo Carrera y María Celia Cotarelo en la sección de “Cronologías”. Para la presente edición se incluyeron cinco contribuciones que abordan, desde distintas perspectivas, diferentes aspectos de las luchas y movimientos sociales recientes en este país. Sin embargo, puede establecerse un diálogo enriquecedor entre los textos que publicamos, particularmente en lo relativo a la conceptualización del movimiento de desocupados y su vínculo con la modalidad del corte de ruta; a la relación entre aquel, el sindicato y la clase obrera y, finalmente, respecto a la significación política y los futuros que plantea el ciclo de protestas abierto en la Argentina.

Abre el dossier un detenido análisis de Claudio Lozano sobre el contexto económico y político actual en el que se inscribe la protesta social contemporánea en este país. Tras el señalamiento de los fundamentos estructurales de la crisis y la significación –en este contexto– de la política de “déficit cero”, el autor concluye que la mayor capacidad de resistencia de los sectores populares y las crecientes contradicciones al interior de los sectores dominantes configuran un escenario de crisis de hegemonía cuya resolución aún permanece en la incertidumbre.

A continuación, Ana Dinerstein reflexiona sobre los significados del corte de ruta como reinvencción de la política en tanto lucha contra la desaparición virtual que prolonga la desaparición física y el terrorismo de estado de la última dictadura militar. En este sentido, para Dinerstein el poder político del corte de ruta reside justamente en su capacidad de conjurar los mitos del complejo ideológico que acompañó las políticas neoliberales de la última década y se emparenta con las luchas del movimiento antimundialización en su potencial cuestionador de las formas particulares que adopta el dominio del capital, en su versión neoliberal.

Por otra parte Federico Schuster y Adrián Scribano presentan un análisis de las características que asume la protesta social en los ‘80 y ‘90, señalando tanto la mutación

de las entidades clásicas asociadas al sindicalismo como la emergencia –para esta última década– de nuevos actores colectivos que, bautizados “piqueteros” y “fogoneiros”, remiten –para los autores– a la conceptualización de “desafiliados”. Tras el señalamiento de los síntomas, mensajes y ausencias que plantean los conflictos actuales, los investigadores se interrogan sobre si el ciclo de protestas recientes se constituirá en una práctica cuasi normal en los márgenes del sistema político, o bien en un modo de ruptura que abra un nuevo escenario social y político en el país.

También bajo la consideración de las características que asumieron las luchas sociales en las décadas pasadas, Ricardo Spaltenberg y Verónica Maceira analizan los diferentes puntos de ruptura que pueden considerarse en esta serie y, particularmente, la constitución del movimiento de desocupados. En cuestionamiento al paradigma de la exclusión, los autores señalan –en base a los resultados obtenidos en un trabajo de campo realizado en el distrito de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, uno de los epicentros de la protestas de los trabajadores desocupados– las articulaciones que pueden observarse entre éstos y los trabajadores ocupados, a nivel subjetivo y de las trayectorias laborales. Por último, el artículo aborda el proceso y los desafíos abiertos a partir de la consolidación nacional del movimiento de desocupados y su relación con las organizaciones sindicales.

Finalmente, alrededor de la experiencia de las luchas recientes en la ciudad de Rosario –otroza bautizada la Chicago argentina y cuyo cordón industrial se encuentra hoy diezmado por el cierre de empresas y la desocupación– Gloria Rodríguez analiza las formas que adopta la construcción y reconstitución de marcos organizativos y prácticas de lucha. A través de la consideración de tres experiencias particulares –el conflicto ante el cierre de un hipermercado, las protestas estudiantiles y el movimiento local de desocupados– la autora presenta las novedosas líneas de fuerza que caracterizan a estas experiencias colectivas.

En la sección cronologías, por otra parte, Fernando Marcelo de la Cuadra, Breny Cuenca Saravia y Rodrigo Páez Montalbán, y Jaime Zuluaga Nieto, analizan las características y problemáticas del conflicto mapuche, las protestas sociales en Centroamérica y la evolución del proceso de paz en Colombia, respectivamente.

Para concluir, presentamos en la sección de debates teóricos un fragmento del libro *De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad* del sociólogo y jurista portugués Boaventura de Sousa Santos sobre la problemática de los nuevos movimientos sociales. También incluye un artículo de Alvaro García Linera que explora las características de las estructuras de movilización desplegadas por los sectores populares que protagonizaron las recientes jornadas de protesta urbana y rural en Bolivia. En este sentido, estos textos –en diálogo con los artículos que constituyen el dossier temático– presentan distintos abordajes y herramientas conceptuales en torno a la valoración y comprensión de las configuraciones actuales de los movimientos sociales. De esta manera pretendemos aportar nuevos elementos para el imprescindible debate sobre los marcos teóricos que nos permitan interpretar las nuevas formas organizativas, prácticas de lucha, identidades y significaciones políticas que caracterizan la experiencia de los movimientos sociales en la historia latinoamericana reciente.

La protesta social en Argentina



Claudio Lozano

Contexto económico y político en la protesta social de la Argentina contemporánea

Ana C. Dinerstein

*El poder de lo irrealizado.
El corte de ruta en Argentina y el potencial subversivo de la mundialización*

Adrián Scribano y Federico Schuster

Protesta social en la Argentina de 2001: entre la normalidad y la ruptura

**Ricardo Spalteberg
y Verónica Maceira**

Una aproximación al movimiento de desocupados en el marco de las transformaciones de la clase obrera en Argentina

Gloria Rodríguez

*Un "Rosario" de conflictos.
La conflictividad social en clave local*

Contexto económico y político en la protesta social de la Argentina contemporánea

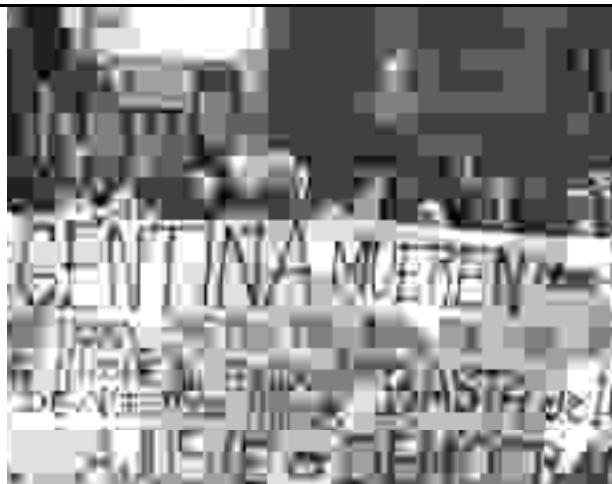
Por Claudio Lozano*

E

s objeto de estas notas presentar elementos que permitan dimensionar las condiciones que exhibe la crisis actual de la Argentina con el fin de situar adecuadamente el carácter, los contenidos y perspectivas que se le plantean a la protesta social en este país. Es imprescindible para esto situar algunas definiciones en torno al proceso estructural, ubicar en ese marco las políticas que implementa hoy el oficialismo gobernante y observar el contenido que adoptan las luchas de confrontación con el rumbo hoy dominante. Esto permitirá a su vez observar las diferencias sustantivas que distinguen al momento actual respecto de la última crisis profunda vivida en 1989.

Es imposible pensar la Argentina sin definir la crisis actual como una crisis de régimen, cuyos cimientos fueron plasmados en 1976 y cuyos rasgos se consolidaron durante la década menemista y se perpetúan hasta el gobierno actual. Régimen instituido por vía del ejercicio de la violencia que los sectores dominantes ejercieran sobre los cuerpos en el marco dictatorial (genocidio), que mantuvieran por vía del ejercicio del poder que detentan sobre la economía a través de la violencia de la moneda (hiperinflación), y del disciplinamiento social que supone la vigencia de elevadas tasas de desocupación. El cuadro de violencia descrito, acompañado por el importante papel que cumpliera la corrupción como mecanismo capaz de cooptar a parte sustantiva de la dirigencia política y social, así como el retroceso generalizado que a nivel internacional y local tuvieron las concepciones sostenidas en estrategias emancipatorias y revolucionarias, permitió que el régimen de dominación lograra a comienzos de 1990 un razonable nivel de consolidación expresado en la vigencia hegemónica del discurso y las prácticas dominantes. Sin embargo, la crisis actual exhibe al orden dominante en la más absoluta incapacidad de reproducirse bajo condiciones elementales de consenso.

* Director del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Secretario de Estudios y Formación de la CTA.



■ El marco estructural de la crisis actual

La puesta en marcha de la estrategia neoliberal en nuestro país, que data de 1976, supuso el abandono del modelo de acumulación centrado en la sustitución de importaciones, fundado en el desarrollo industrial y cuyo destino principal era el abastecimiento del mercado interno. En su reemplazo se afirmó en la Argentina un nuevo régimen cuya característica principal es la valorización financiera y la transferencia de recursos al exterior. Dicho régimen supuso un cambio en la función que cumplía el endeudamiento (fundamentalmente externo) que se transformó en una opción para tomar fondos en el mercado internacional y relocalarlos, en términos financieros, en el mercado local obteniendo altos rendimientos y, consecuentemente, subordinando a esta lógica el conjunto de las actividades económicas. Por otra parte este predominio de la inversión financiera en detrimento de la productiva, en tanto se dio en un marco de apertura al ingreso de importados, indujo al extremo la destrucción del aparato productivo y consumió la desindustrialización con la consecuente expansión del desempleo y la reducción de los ingresos. Para dimensionar la magnitud de la crisis provocada por los efectos del ciclo largo de vigencia neoliberal en la Argentina, baste con señalar que este país tenía en 1975 unos 22 millones de habitantes y 2 millones de pobres, mientras que hoy con 37 millones de habitantes se cuentan 14 millones de pobres. Es decir, que

de los 15 millones que explican el incremento poblacional del último cuarto de siglo, 12 millones cayeron bajo la línea de la pobreza, dato que permite mensurar el carácter de la involución y regresividad social vigente.

Este planteamiento no estaría completo si no se destacaran, además, el papel que cumplió el estado y la diferencia que se opera en la década del noventa. Respecto a lo primero, el estado funcionó viabilizando esta lógica de valorización financiera, particularmente a través de tres tareas: a) estatizó la deuda privada de los grandes grupos empresarios que realizaban la valorización financiera; b) mantuvo un déficit que al reclamar financiamiento elevaba la tasa de interés local por sobre la internacional y viabilizaba las condiciones para la obtención de una renta extraordinaria; c) se endeudó para garantizar los dólares necesarios que permitieran el mantenimiento de un comportamiento de los grandes grupos empresarios caracterizado por sacar fuera del país más divisas que las que ingresaban. Por lo expuesto, el proceso de valorización financiera y transferencia de recursos al exterior sólo fue posible en tanto se sostuvo por una permanente apoyatura fiscal. Es más, al transcurrir dos décadas y media de este funcionamiento, lo que se observa es un estado casi absolutamente condicionado por los intereses y restricciones que esta lógica impuso.

6

Respecto a la diferencia que se observa en la década de los noventa, corresponde destacar la incorporación del desguace estatal (privatizaciones) como un mecanismo que acompañó al régimen de valorización financiera permitiéndole tanto al gran capital local como al externo avanzar sobre parcelas de la economía vigente obteniendo nuevas alternativas de valorización sostenidas en un proceso que trastocaba la otrora vigencia de determinados derechos de carácter público en un objeto más del proceso de acumulación de capital. Este hecho permitió nuevas condiciones de asociación entre las distintas fracciones del capital, garantizó el ingreso de importantes niveles de inversión extranje-



ra, y –acompañado por el cambio en las condiciones internacionales y el replanteo de la deuda en el marco del Brady– posibilitó la contención del proceso inflacionario, indujo el aumento en los niveles de actividad económica respecto a la absoluta caída que se observara en la década del '80, y permitió la obtención de nuevo endeudamiento externo. No obstante, la profundización de la apertura comercial y financiera, la desregulación y el proceso privatizador terminaron de consolidar un esquema que exhibe tres características básicas:

- Un nivel de regresividad distributiva de tal magnitud que ha terminado pulverizando el mercado interno de demanda masiva y que adopta una mayor relevancia en un contexto internacional recesivo. Recordemos que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos el 10% de la población más rico se apropia de, aproximadamente, un 39% del ingreso nacional, y que las estimaciones privadas que toman en cuenta la subdeclaración propia de los sectores de mayores ingresos llevan este porcentaje a un 48% del ingreso total.
- Una estructura de precios que determina altas ganancias en los sectores de los servicios públicos privatizados y en el financiero, en detrimento del sector productivo. Este, con la sola excepción de algunos contados casos asociados a la explotación de ciertos recursos naturales, vive un claro proceso de discriminación frente al valor de la producción importada.
- Una lógica de funcionamiento económico donde las posibilidades de crecimiento de la Argentina son *deuda-dependiente*. Esto se verifica en tanto el crecimiento implica una mayor compra de productos en el exterior en relación a la que se vende; una elevación sustancial de la transferencia de utilidades (dado el peso que tiene el capital extranjero); un aumento de los pagos en fletes y seguros; un incremento de la pérdida de divisas debido al gasto de turismo en el exterior y la multiplicación de los montos asociados a la fuga de capitales que, de manera sistemática, realizan los agentes más importantes de la economía local. Lo expuesto, que ni siquiera computa los dólares necesarios para afrontar el stock de deuda externa que ya tiene el país, sirve para indicar la abultada insuficiencia de dólares que exhibe la economía local.

Es fácil percibir que el desarrollo de este proceso no sólo profundizó la crisis social y la injusticia en términos distributivos sino que a su vez llevó al extremo las condiciones de fragilidad fiscal y de deterioro del país en términos de su balance externo (disponibilidad de divisas). No obstante, lo más importante a precisar es que durante todo este tiempo el endeudamiento público en la Argentina posibilitó

la realización de ganancias extraordinarias en moneda dura (dólares) por parte de la cúpula empresarial exitosa de este tiempo. Nos referimos a los principales grupos empresarios locales, a las empresas transnacionales, a los grandes bancos y (agregándose en la década del noventa) a los dueños de las empresas privatizadas.

En este sentido, cada vez que por razones externas-internas o la conjunción de ambas el acceso al crédito se interrumpe, el mencionado orden es puesto en crisis y la Argentina afronta momentos de ruptura o de colapso. Así ocurrió en 1982 (cambio en la situación internacional), en 1989 (por razones internas que se expresaron como quiebra fiscal e hiperinflación), en 1995 (por el denominado efecto Tequila), y vuelve a darse desde mediados de 1998 como efecto de la crisis mundial para agudizarse durante el año 2001 en el marco de un cuadro expreso de insolvencia externa (las divisas que el país genera no alcanzan para afrontar los compromisos existentes). Es decir, nuestro país se encuentra una vez más en una situación de agotamiento del régimen de valorización financiera y, en esta perspectiva, en un momento de ruptura similar (desde el punto de vista económico) a los que se dieron en los años que se mencionaron precedentemente.

■ La política del déficit cero

En el marco expuesto, el gobierno ha puesto en marcha un dispositivo de política económica que ha sido bautizado como déficit cero. Esta propuesta tiene como objetivo expreso mantener a la Argentina en un cuadro de hiper-recesión a la espera de obtener algún tipo de oxígeno financiero externo en el marco de un proceso de reprogramación de la deuda. El cuadro hiper-recesivo es el único capaz de compatibilizar la situación vigente con el respeto estricto de las condiciones de la política económica actual y el mantenimiento taxativo de las reformas estructurales realizadas que, como ya describiéramos, han conformado el carácter deuda-dependiente del esquema económico local.

Al reducir salarios y jubilaciones que dependen del estado nacional, esta política deprime aún más los ya magros niveles de demanda doméstica y profundiza la caída en los niveles de precios internos y consecuentemente en la actividad económica, lo que agudiza el desempleo y obliga a la rebaja salarial en el sector privado. Es una estrategia que supone un proceso de **recesión-deflación-caída salarial** promoviendo una **devaluación inversa**, es decir, que precios y salarios caigan respecto al nivel actual del dólar vigente.

A su vez, como lo expuesto provoca un descenso en la recaudación fiscal (asociada en los niveles de actividad), la estrategia se ve alimentada una y otra vez. Este cuadro, ade-

más de permitir el mencionado proceso de devaluación inversa, deprime al extremo los niveles de consumo importado y el volumen de excedentes a ser dolarizados por distintos conceptos (utilidades, fuga, etc.) permitiendo **la mejora de la balanza en cuenta corriente** a través de la **expansión del saldo comercial** y la obtención de dólares genuinos que reduzcan la necesidad de nuevo endeudamiento externo.



Por otra parte, al presionar una y otra vez hacia la rebaja del gasto público en razón de la caída en la recaudación, la propuesta de déficit cero induce la necesidad de pasar de reducciones transitorias (bajas salariales o de jubilaciones) hacia transformaciones estructurales que se consuman de hecho (desarticulación de organismos por desfinanciamiento, replanteo de la relación Nación-Provincias, supresión de contratos, despidos, privatización sanitaria y educativa).

Esta concepción se articula, de esta manera, con los intereses de los dueños de los bonos de la deuda pública argentina, de los grandes bancos y de los dueños de las empresas privatizadas, incluso en tanto toma un rumbo que hace mínimas eventuales pérdidas ante la posibilidad de una alteración cambiaria (devaluación). No obstante, corresponde observar que al mismo tiempo esta alternativa no logra asociar al conjunto del bloque dominante. Los cambios en términos de las relaciones monetarias en el mundo y las devaluaciones en Brasil han recortado la rentabilidad de los grupos empresarios con inserción exportadora al tiempo que la depresión del mercado interno, la ausencia de mercado asociado al gasto público y la recesión mundial definen un panorama poco alentador. Si bien la propuesta en curso pretende contener a estos sectores a través del proceso de devaluación inversa y por vía de la reducción del aparato del estado, lo cual supone la necesidad final de una menor

presión tributaria, este proceso es demasiado lento o es rápidamente absorbido por las devaluaciones que viven los países vecinos, y amenaza con dejar a algunos de los grupos empresarios en el camino.

Como último aspecto a señalar, debe destacarse el profundo impacto que en términos de conflictividad social tiene la política en curso. En este sentido, el proceso de deslegitimación del discurso oficial y del gobierno es sumamente importante, al punto que la implementación de la estrategia en vigencia ha obligado a un deliberado cierre del funcionamiento del estado de derecho por vía de un proceso de delegación de las principales facultades parlamentarias en el Poder Ejecutivo, del supino desconocimiento de aquellos fallos judiciales que pudieran afectar la continuidad de la política vigente, y de la detención y expreso procesamiento de aquellos dirigentes sociales que pretendan canalizar el descontento social. Debe consignarse también que en el contexto mencionado se ha operado un proceso significativo de movilización social en cuestionamiento al rumbo descrito que se ha expresado en todo el país y con niveles de adhesión sumamente significativos. En algún sentido, puede afirmarse que el tipo de conducción de la crisis económica que se adopta traslada la situación de colapso o ruptura que podría darse en los términos de la actual política económica al campo social e institucional.

“...corresponde enfatizar que la recesión no es una consecuencia no deseada ni un equívoco de la política en vigencia. Es el objetivo de la intervención en marcha.”

b. A diferencia de lo ocurrido en 1989, donde el agotamiento del régimen económico y las contradicciones que esto suponía se resolvieron en el marco de la contienda hiperinflacionaria, con la apertura de un nuevo contexto internacional que replanteó las condiciones y permitió la expansión del endeudamiento y con la posibilidad de la nueva oleada de negocios que expresara el proceso privatizador, hoy, la presente crisis pretende ser conducida por vía del sostenimiento de una estrategia hiper-recesiva. En este sentido, corresponde enfatizar que la recesión no es una consecuencia no deseada ni un equívoco de la política en vigencia. Es el objetivo de la intervención en marcha.

c. En tanto la característica del régimen de acumulación financiera consiste en permitir la realización de ganancias extraordinarias por parte de la cúpula empresarial, el agotamiento de este esquema supone en principio que no toda la cúpula podrá mantener la realización de las mencionadas ganancias extraordinarias. En este sentido, debe entenderse lo expuesto como la emergencia de una contradicción al interior del bloque dominante. Contradicción que no es resuelta por la vía de la aplicación de la política en vigencia (déficit cero) ya que son significativos los sectores empresariales (no nos referimos a los pequeños sino a los grandes) que exhiben situaciones de crisis en el presente contexto. A diferencia de la crisis del '89, donde también había una contradicción en el bloque dominante que oponía los intereses de los acreedores extranjeros con los de la cúpula empresarial local, hoy la fractura es más compleja y se evidencia al interior de los propios integrantes de la cúpula local (ésta se expresa en el lugar que ocupan hoy dentro de la misma los consorcios que controlan las áreas privatizadas y en la menor presencia que tienen hoy los grupos integrantes de la cúpula histórica de la Argentina en el sistema financiero). Asimismo, si bien los organismos internacionales y el propio tesoro norteamericano acompañan la experiencia del déficit cero, la situación externa revela modificaciones que diferencian seriamente el momento actual del vigente en 1989. Por un lado, al observarse un cuadro recesivo que afecta a los tres polos del mundo desarrollado (EE.UU., Unión Europea y Japón) puede presumirse que ingresamos en una etapa de mayor racionamiento crediticio. En este marco es que deben entenderse las definiciones del Tesoro Norteamericano señalando la importancia de asociar las asistencias financieras a los países emergentes con condiciones de verdadera sustentabilidad (las supuestas propuestas de reprogramación). Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de un mayor racionamiento crediticio asociado a

■ **El carácter de la crisis y la protesta social** **Las diferencias con la situación de 1989**

Retomamos lo expuesto en los puntos anteriores a efectos de caracterizar la particularidad que en términos políticos observa la crisis actual. Esta muestra:

a. Al igual que en 1982-1989 y 1995, el régimen de acumulación financiera implantado en 1976 se encuentra al borde del colapso o la ruptura. Como ya se explicara, el punto en común supone la imposibilidad de seguir financiando por medio de la expansión del endeudamiento, y puntualmente de la deuda pública, la realización de ganancias extraordinarias en moneda dura. Como es lógico, todo punto de ruptura supone la emergencia de conflictos al interior del bloque dominante cuyas características y formas de resolución pueden variar. Por cierto, estas formas (que determinan cuáles son los intereses que terminan primando al interior de los poderosos) no son neutrales respecto a su impacto en términos de mayor regresividad distributiva.

mayores condicionalidades (por ejemplo: ALCA) que además, dado el nuevo contexto bélico, seguramente incorporarán elementos de carácter político y no sólo económico.

d. A diferencia de lo que ocurría en 1989, se observa una crisis importante en el sistema político tradicional. No hay hoy una opción que aparezca recuperando legitimidad plena y concitando las expectativas y la movilización del conjunto de los sectores populares como en aquel momento ocurriera con el justicialismo. Lejos de ello se observa (y las recientes elecciones lo demostraron) la ya mencionada crisis de representación política. En este sentido la coyuntura exhibe los siguientes aspectos:

- Profunda ilegitimidad de las políticas económicas vigentes que se expresaron en el terreno electoral en la catastrófica performance oficial (la Alianza gobernante perdió 5.405.022 votos en sólo dos años).
- Crisis del sistema de representación que se expresa por un lado en la dificultad del principal partido de oposición (el justicialismo) para absorber la pérdida de votos del oficialismo quedando incluso por debajo de su performance en las últimas dos elecciones. Obtuvo 1.119.587 votos menos que en 1999, y 440.631 menos que en 1997.
- Crisis que se manifiesta a su vez en la sistemática expansión que desde 1989 en adelante se observa en la sumatoria de quienes dejan de votar (nuevos ausentes), quienes anulan su voto y quienes votan en blanco. Para el caso del comicio reciente, el total de nuevos votos ausentes (3.652.872), de voto nulo (2.358.291) y de votos en blanco (1.512.920), asciende a 7.524.083. Agregado éste que representa el principal a nivel nacional, mayor incluso que el obtenido por el partido triunfante en las elecciones (justicialismo).
- Crisis de representación que no habla de una participación escasa de la sociedad, ya que se da en un contexto de fuerte movilización social en repudio a las estrategias de ajuste vigentes. Debe destacarse que a diferencia de lo que ocurría a comienzos de 1990 cuando el paradigma neoliberal aparecía como incuestionable, hoy los criterios de bien y de verdad que socialmente lo sustentaron están puestos en crisis.
- Crisis de representación que se agudiza al observarse que incluso las estructuras políticas tradicionales (radicalismo y justicialismo) tienden a articular su discurso con los objetivos de las facciones del bloque dominante que resultan postergadas en el presente contexto. Cuestión que amerita y justifica el embate y la importancia que ha adoptado el discurso de aquellos sectores

mas ligados al proyecto actual sobre la necesidad de bajar el costo de la política y reformarla en profundidad.

e. A diferencia de lo que ocurría en 1989, la movilización social se expresa por vía de organizaciones que exhiben autonomía respecto a las estructuras políticas tradicionales y que adoptan formas novedosas y de mayor radicalidad. En este aspecto, merece destacarse especialmente la emergencia de fenómenos sociales en el Gran Buenos Aires (distrito decisivo para la gobernabilidad del presente régimen de dominación) que se canalizan claramente por fuera de las estructuras políticas tradicionales y particularmente del Partido Justicialista y la CGT afín al mismo. Diferencia central respecto al contexto del '89, donde el peronismo en su renovado accionar privatista y desregulador mantenía una elevada capacidad de control sobre el conflicto social. El fenómeno de los piquetes de trabajadores desocupados articulado con la resistencia de actores sindicales y sociales que expresan el



fenómeno de involución de las capas medias (docentes, estatales, estudiantes, profesores universitarios, pequeños y medianos empresarios, etc.) y que discuten nuevas formas orgánicas (una nueva Central de Trabajadores, nuevos modos de organización gremial y empresarial), así como la creación de nuevas experiencias de construcción política como las impulsadas por el denominado Frente Nacional Contra la Pobreza¹, son expresión de lo expuesto.

En suma, las contradicciones vigentes al interior de los sectores dominantes y la evidencia de una mayor capacidad de resistencia (aún sectorial y defensiva pero en autonomía) por parte de los sectores populares, configuran un cuadro (novedoso respecto a la crisis del '89) donde lo que se despliega es una crisis de hegemonía de los sectores dominantes. La conclusión que surge de los elementos considerados es que las condiciones que le permitieron a estos sectores el ejercicio hegemónico del poder sobre la sociedad argentina están agotadas (se usa aquí la noción de hegemonía remitiendo a la idea básica de *poder presentar como natural para el destino del conjunto el interés proyectado de unos pocos*).

Estas condiciones, que como ya se expresara, se afirmaran durante la primera mitad de los noventa, son las que han desaparecido. En este nuevo contexto y en un marco de hiper-recesión que potencia la conflictividad es que debe pensarse la situación y la perspectiva de la protesta social en la Argentina. Contexto que define, una vez más, que el ciclo largo de reestructuración política, social y económica abierto en 1976 no ha logrado consolidarse.

Los recientes resultados electorales están lejos de dar solución a esta circunstancia. Más aún, la primera conclusión a sacar es que la derrota estrepitosa del partido oficial y la manifiesta crisis de representación que las urnas evidenciaran, no hacen más que profundizar la crisis de los sectores dominantes. En primer lugar, por que ilegitiman el mantenimiento del rumbo actual. En segundo término, porque el partido de oposición triunfante revela notorias disfuncionalidades en su discurso y en sus prácticas respecto a las facciones que en el campo dominante conducen hoy el camino de salida. Lejos de ello, las posturas que enarbola se inscriben en el planteo que vienen efectuando desde hace algunos años los grupos exportadores integrantes de la cúpula histórica local. En tercer lugar, porque la fuerza política de la derecha que hasta la elección pasada había logrado ubicarse como tercera fuerza nacional, concentrando su caudal de votos detrás del actual Ministro Cavallo, se encuentra diezmada, dispersa y ha sido desplazada en términos institucionales de dicha posición.

En inverso sentido respecto a lo que los datos electorales suponen para el bloque dominante, la ilegitimación del rumbo oficial y el cuestionamiento por vía del ausentismo,

el voto nulo y el blanco, de prácticas políticas que han hecho una rutina del fenómeno del desconocimiento del mandato, abren un terreno de mayor potencialidad para la afirmación de nuevas estrategias políticas que pongan en debate el modelo vigente. No obstante, y del mismo modo que en el campo de la protesta social emerge como límite el carácter defensivo y sectorializado del cuestionamiento al régimen, en el terreno electoral se percibe un elevado nivel de fragmentación en las estrategias que cuestionan el rumbo actual y una evidente dificultad para poder encarnar prácticas nuevas de construcción capaces de conmovir y desplazar el efecto *desaliento* que la experiencia Alfonsinista-Peronista-Aliancista impone sobre la conciencia colectiva.

Por último, los signos manifiestos de ruptura en la hegemonía dominante determinan que cualquier intento de avanzar en el rumbo vigente sin incluir, por lo menos en parte, la demanda social, obligará a profundizar las restricciones ya existentes en el estado de derecho y a ilegalizar en mayor medida aún el conflicto social. Asimismo, dada la ausencia de consenso con eventuales salidas represivas, si la protesta social logra superar su carácter sectorial y defensivo para poder presentarse de manera conjunta y como estrategia colectiva, la crisis de hegemonía puede abrir paso a una crisis mayor del bloque dominante (orgánica) que permita alumbrar la afirmación de una nueva perspectiva en la Argentina.

■ **Notas**

1 El Frente Nacional Contra la Pobreza se presenta como un espacio de confluencia de organizaciones de diverso tipo (sociales, sindicales, de derechos humanos, partidarias, eclesiales, culturales, etc.) articuladas en torno a una propuesta que ubica como clave principal de la sociedad argentina la problemática de la desocupación y la pobreza. La confluencia en torno a una propuesta de resolución de la crisis que pone en el centro de la escena la problemática de la distribución justa del ingreso, que organiza de manera conjunta a sectores sociales y partidarios y que promueve para el próximo 13 de diciembre una consulta popular con el objeto de organizar a la sociedad en torno a dicho objetivo, es una de las características novedosas que esta experiencia plantea en el contexto actual.

El poder de lo irrealizado. El en Argentina y el potencial subversivo de la mundialización

Por Ana C. Dinerstein*

E

l conflicto social en Argentina ha sufrido, en los últimos diez años, una tremenda transformación cualitativa. Lo que comenzó siendo manifestaciones de protesta espaciadas, localizadas y muchas veces espontáneas frente a la injusticia de la reestructuración neoliberal a comienzos de los años '90, se convirtió, a fines de esa década, en una *nueva forma* de resistencia: el *corte de ruta* (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2001). Particularmente desde julio de 2001, la expansión y organización de los *cortes* a nivel nacional se ha desarrollado de forma inversamente proporcional a la crisis y decadencia del gobierno de de la Rúa. Nacido en el seno de las políticas de estabilización y de ajuste económico en el contexto de la mundialización, el *corte* se yergue contra la violencia que subyace a la lucha por la "estabilidad", cuestionando ya no la viabilidad de dichas políticas sino la de la sociedad Argentina. El *corte* comparte el significado político de las luchas antimundialización: la reinención de la política como lucha contra la desaparición virtual.

■ Reificación y Anarquía y la producción de formas de resistencia

El capitalismo no constituye un orden establecido sino un conjunto de relaciones sociales anárquicas relativamente organizadas. La anarquía del capitalismo se debe a su violencia fundante: la explotación de los humanos en pos de la reproducción del capital. La relativa organización coadyuva a negar esta violencia esencial y a reificar a un "sujeto ciego": el capital (Postone, 1996). La valorización del capital no es un proceso económico racional sino un circuito político de dominación (Cleaver, 1992) que implica una perma-



nente lucha por la subsunción real de la sociedad en el capital (Negri, 1989) y la desmaterialización (desensualización) de nuestra capacidad de actuar y crear en una sustancia homogénea llamada trabajo abstracto, que constituye la sustancia del valor. La producción de valor es mediada por formas sociales objetivas (políticas, económicas y sociales) y subjetivas. El estado, las formas del dinero, las leyes, así como las identidades, las organizaciones y estrategias de resistencia, son permanentemente renegociadas en el marco de la lucha por lograr cierto *orden* que organice la dinámica expansiva del capital. La producción de formas de la subjetividad social no debe considerarse como externa a la producción del capital, sino inherente a dicho proceso. La valorización del capital y sus transformaciones no "afectan" a las personas sino que *las constituyen en sujetos sociales*. Un ejemplo de esto es la creación social de los "desocupados" en Argentina en los '90, que constituyen un gran componente cualitativo del corte de ruta (c.f. Iñigo Carrera y Cotarelo, 2001).

Desde esta óptica, la *lucha de clases* no es simplemente una lucha del capital por explotar al trabajo a nivel de la

* Politóloga, UBA; Doctorado en Sociología, Warwick. Docente e investigadora en el Departamento de Ciencias y Políticas Sociales, Universidad de Bath, Inglaterra, e-mail: A.C.Dinerstein@bath.ac.uk

producción, o sobre la distribución de la riqueza social, sino *una lucha alrededor de la constitución de las formas de existencia y resistencia social*. Esta lucha es indirecta, mediada, y *aparece* bajo la forma de crisis de las mediaciones: de las identidades sociales, de la ideología, del estado, de la economía, de mercado, del poder sindical. Este es el problema político fundamental del capitalismo: las relaciones de explotación y la dominación son mediadas. Las transformaciones de las formas políticas, sociales, económicas y subjetivas que median la producción y expansión del capital se expresan a través de una multiplicidad de (de)reconstrucciones incapaces de ser resueltas por medio de políticas unidimensionales. Un conflicto social es el *lugar de conjunción* de estas múltiples dimensiones de la lucha por y contra determinadas formas de subjetividad social. Un conflicto social constituye la “puerta de acceso” (Seoane y Taddei, 2000: 61) a un *jeroglífico* que bien leído *permite* captar simultáneamente la dinámica del todo y cada una de las dimensiones que lo constituyen, para explorar la lógica que subyace a la organización precaria de la violencia capitalista, en determinado momento histórico.

■ De la desaparición física a la desaparición virtual: la violencia de la estabilidad

La novedosa arma del terrorismo de estado fue la *desaparición física*, utilizada para liberar al capital del peso y costo de las utopías revolucionarias latinoamericanas de los años '70. Esta forma directa de “desmaterializar” al oponente, facilitó la transformación del capital también en las formas más *abstractas* de todos los tiempos: la fuga de capitales, la destrucción de la capacidad productiva de la industria nacional, la creación de la deuda externa, la especulación financiera, la toma de crédito ilimitado. Así, la invisibilidad de los oponentes dio lugar a una ruptura fundamental hacia la era del abismo, de la *intensificación de las abstracciones*: liquidez, financiarización, déficit fiscal, riesgo país, desempleo encubierto. Dicho proceso de intensificación de los aspectos abstractos del capital fue sustentado por procesos concretos de explotación, regresión en la distribución del ingreso, traspaso de recursos económico-sociales a nuevos grupos económicos transnacionalizados, la consecuente generación de niveles de pobreza, precariedad y desempleo inusitados en Argentina.



La democracia posibilitó la materialización y visibilidad de la desaparición. La acción política de los movimientos sociales, sindicales y de derechos humanos, como el de las *Madres de Plaza de Mayo*, ayudó a la recuperación de la *concretez* de aquello que había sido forzado a sumergirse en un mundo de *abstracción* e irrealidad, es decir, la desaparición física, la represión y la pobreza oculta de miles. Sin embargo, la *transición* a la democracia desencadenó una multiplicidad de batallas por y contra la centralidad de la praxis frente a la del dinero que adquirió la forma político-discursivo-ideológica (mundialmente expandida) de *política versus mercado*. Los episodios hiperinflacionarios del '89 cristalizaron el punto culminante de la *otra* transición: del terrorismo de estado al terrorismo del dinero (Marazzi, 1996) y la paulatina legitimación y rutinización de este último bajo el curioso nombre de *la estabilidad*.

En los '90, en un contexto mundial ya disutópico, el Mememismo se constituyó en una nueva forma de organización de la violencia depredadora del capitalismo, esta vez *vía incertidumbre e inestabilidad*. El control de la hiperinflación en 1991, como requisito fundamental para generar previsibilidad y estabilidad ante las nuevas reglas del mundo globalizado, fue considerado un milagro. La *estabilidad* se impuso como metaexplicación basada en un mito: que el control del movimiento del dinero global y el capital nacional constituiría el punto de partida para el mejoramiento del presente con miras a planear el futuro. El plan de convertibilidad fue el alfiler de seguridad del ajuste salvaje basado en la privatización, descentralización, desregulación, liberalización, mercantilización, flexibilización, precarización. La lucha institucional por mantener la estabilidad devino parámetro de regulación de la vida social (Dinerstein, 2001a, 1997).

El poder político del corte de ruta

Como se sabe, los planes de ajuste y *estabilización* generaron irónicamente formas de inestabilidad, inseguridad e incertidumbre individual y social antes inimaginables en Argentina. El Menemismo legalizó dichas formas, endiosó al capital y celebró las ideas del fin de la política para dedicarse a administrar la miseria social inherente a su consolidación. La desaparición física de las personas fue reemplazada por procesos conducentes a su *desaparición virtual*.

El poder político del corte reside en conjurar y exorcizar cuatro de los mitos más importantes de la religión Menemista (y De la Ruista).

Primero, el corte muestra que la *estabilidad es inestable*, violenta, incierta, destructiva. La inestabilidad de la estabilidad no yace en las crisis económicas sino en la creación de un presente insoportable y un futuro impensable, por medio

de la recreación constante de la incertidumbre acerca de la realización material y espiritual concreta de nuestra propia vida. La imposibilidad potencial de realización no es un efecto "no deseado" de la estabilidad, sino su componente más importante (no olvidemos que la

anarquía es el paraíso del capital). Las nuevas formas de la resistencia nacidas en el seno de la estabilidad constituyen un límite a la violencia de la estabilidad basada en la desaparición virtual. El *corte* frena, bloquea, visualiza, materializa, limita la inseguridad y la incertidumbre.

Segundo, la forma física y directa del *corte* cuestiona la noción de consolidación de la democracia *con* exclusión social (Acuña, 1994). El fin de los golpes de estado en los '80 y '90 en América Latina ha sido logrado por medio de la legitimación del terrorismo del dinero. La democracia es ahora un conjunto de reglas que se mantienen *no aunque con* sino *gracias a* la exclusión social. El *corte* reinventa las formas de la política, y relocaliza la importancia de esta última en el seno de las infinitas abstracciones de la economía y las también infinitas conceptualizaciones de la sociología.

Tercero, el *corte* cuestiona la noción sociológica de *exclusión social*. El mundo de la subsunción real, donde "el capital ha devenido la fuerza dominante capaz de determinar la forma de la sociedad como un todo" (Marx: 1023) ya no permite externalidades: la producción de determinadas formas de existencia humana social *ha sido colocada ahora en el centro de producción del capital mismo*. La subjetividad es un aspecto integrado al capital (Aragues, 1995; Dinerstein, 2000). El *corte* es prueba fehaciente de que el capitalismo no se ha vuelto simplemente *excluyente*, sino que ésta es una metáfora desafortunada que describe nuevas formas de subjetividad social producidas *al interior* del capitalismo actual, como por ejemplo el desempleo, pero que se han vuelto *invisibles* para las ciencias sociales en general que padecen de tremendas dificultades teóricas y metodológicas para leer la importancia política de estas nuevas formas que conforman una crítica viviente al capitalismo actual en Argentina.

"El corte reinventa las formas de la política, y relocaliza la importancia de esta última en el seno de las infinitas abstracciones de la economía y las también infinitas conceptualizaciones de la sociología."



Finalmente, el *corte* nos permite cuestionar la distinción tradicional entre resistencia global y local. Una de las características fundamentales de las formas actuales de acumulación del capital a nivel mundial es la intensificación del desarrollo desparejo de diferentes regiones del mundo cuya demarcación no siempre coincide con los espacios nacionales. Esta fragmentación (Houtart, 2001) se combina con la creciente dificultad de los estados nacionales de implementar políticas regionales que homogeneicen dicho desarrollo desparejo. La importancia de las luchas diversas se debe a su *capacidad de síntesis de una dinámica mundial* que articula aspectos concretos y abstractos en una forma social. Este último punto es importante para ubicar al corte de ruta en Argentina como parte del movimiento de resistencia mundial.

■ **El corte y el movimiento de resistencia contra la mundialización: el poder de lo irrealizado**

Las políticas de estabilización y ajuste económico en Argentina forman parte de una reestructuración mundial caracterizada por la intensificación de los aspectos abstractos de las relaciones sociales capitalistas por sobre los concretos. En este sentido, el corte de ruta comparte algunos elementos con las luchas anti-mundialización.

El capitalismo articula aspectos concretos y abstractos de las relaciones sociales fundamentados en la existencia concreta y abstracta del trabajo. A partir de los años '70, ha habido un cambio *cualitativo* en el mundo capitalista: la *in-*

tensificación de la subsunción real de la sociedad mundial a la lógica autoexpansiva y anárquica del dinero global donde nadie está realmente en control.

Esta intensificación de los aspectos abstractos sobre los concretos es un proceso real que ha sido descrito como “hegemonía de la dimensión financiera” (Ferrer, 1999: 94), “creciente inmaterialidad, donde lo abstracto es más verdad que lo concreto” (Negri, 1992: 73), un mundo donde “la liquidez... ha producido un movimiento en espiral fuera de control” (Harvey, 1999: 163), un nuevo “imperio” expansivo donde la producción de valor es inmensurable (Hardt y Negri, 2000), etc.

Si bien la llamada financiarización del capital sólo puede sostenerse con la explotación de millones con miras a la obtención de plusvalía absoluta reproduciendo así la sociedad de clase, la globalización no puede ser comprendida solamente en términos de su concretez, es decir, como una “estrategia política poderosa” (Meiksins Wood, 2000: 112). El reconocimiento de la preeminencia de los aspectos abstractos del capital sobre los concretos resulta crucial a la hora de analizar los procesos políticos y económicos, y sobre todo las nuevas formas de la resistencia mundial (Dinerstein y Neary, 2001). Esta nueva forma del capital mundial ha tocado el nivel de la subjetividad. Se ha convertido en un imaginario social que articula el nivel subjetivo con el político de manera tal que el capital parece fluir, escapar, saltar al futuro *sin* el trabajo, y en donde se ha abierto un abismo entre los sujetos y las fuerzas “económicas”. Este imaginario real (repito *real*) tiene fundamento en relaciones socia-

les concretas y condiciona enormemente nuestra capacidad de resistencia. ¿Tiene sentido entonces seguir afirmando que el capitalismo siempre ha sido global, negando así la importancia de estas características novedosas en la constitución de la subjetividad social?

Lo que debemos destacar es, en cambio, la debilidad de la mundialización, es decir el potencial subversivo de la autoexpansión del capital en su forma más abstracta (deuda externa, crédito, déficit, desempleo). Dicho potencial subversivo no proviene de la generación de un ejército de excluidos que, según los argumentos de la derecha y la izquierda reaccionarias, constituyen la fuente potencial de reclutamiento de la subversión. El poder subversivo de la mundialización reside en el hecho de que la *intensificación de los aspectos abstractos del capital por sobre los concretos no significa ni inmaterialidad ni exclusión sino materialidad vital invisible no realizada*.

El elemento común presente tanto en Seattle como en Chiapas y General Mosconi, todas ellas luchas ruidosas, dramáticas, físicas, congregantes, es que, en tanto (de)reconstruyen subjetividad y atentan contra la expansión ilimitada del "sujeto ciego", abren la posibilidad para reinventarnos. Cada lucha *glocal* constituye una pieza importante en el movimiento de resistencia mundial contra la desaparición virtual de los humanos en un mundo cada vez más subordinado a los caprichos del dinero global: cada una de estas formas de protesta brindan la posibilidad de realizar, o al menos discutir, las posibilidades de realización de lo irrealizado.

Bibliografía

Acuña, Carlos 1994 "Politics and economics in the Argentina in the Nineties (Or Why the Future No Longer Is What It Used to Be)" en Smith, William *et al* (comps.) *Democracy, Markets, and Structural Reform in Latin America* (Miami: North-South Center, University of Miami).

Aragues, Juan Manuel 1995 "Tiempos de subsunción real. Implicaciones políticas y teóricas del capítulo VI inédito de El Capital, de Marx", en *Papeles de la FIM* (Madrid) N° 3, 2da época.

Cleaver, Harry 1992 "The Inversion of Class Perspective in Marxian Theory: From Valorisation to Selfvalorisation" en Bonefeld Wener *et al.* (comp.) *Open Marxism* (Londres: Pluto Press) Volume II.

Dinerstein, Ana Cecilia y Neary, Michael 2001 (comp.) *The Labour Debate: An Investigation into the Theory and Reality of Capitalist Work* (Aldershot, Inglaterra y Brookfield, EUA: Ashgate).

Dinerstein, Ana Cecilia 2001a "The Violence of Stability. The transformation of the Subjectivity of Labour in Argentina" (Coventry: Universidad de Warwick) Tesis doctoral sin publicar.

Dinerstein, Ana Cecilia 2001b "Roadblocks in Argentina" en *Capital & Class* (Londres: CSE) N° 74.

Dinerstein, Ana Cecilia 2000 "Sujeto y globalización: la experiencia de la abstracción" en *Doxa* (Buenos Aires) N° 20.



Dinerstein, Ana Cecilia 1997 “¿Desestabilizando la estabilidad? Conflicto laboral y la violencia del dinero en Argentina” en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IA-DE) N° 152.

Ferrer, Aldo 1999 “La Globalización, la crisis financiera y América Latina” en Boron, Atilio *et al* 1999 (comp.) *Tiempos Violentos. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO – EUDEBA).

Hardt, Michael y Negri, Antonio 2000 *Empire* (Cambridge, Massachusetts y London, England: Harvard University Press).

Harvey, D 1999 (1990) *The Condition of Postmodernity* (Oxford: Basil Blackwell).

Houtart, François 2001 “La mundialización de las resistencias y de las luchas contra el neoliberalismo” en Seoane, José y Taddei, Emilio (comp.) *Resistencias Mundiales. De Seattle a Porto Alegre* (Buenos Aires: CLACSO).

Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia 2001 “La protesta en Argentina (enero-abril de 2001)” en *OSAL* (Buenos Aires) N° 4, Junio.

Marazzi, Christian 1996 “Money in the World Crisis: The New Basis of Capitalist Power” en Bonefeld, Werner y Holloway, John (comp.) *Global capital, national state and the politics of money* (London: Macmillan).

Marx, Karl 1990 (1867) *Capital* (London: Penguin) Vol. 1.

Meiksins Wood, Ellen 2000 “Trabajo, clase y estado en el capitalismo global” en *OSAL* (Buenos Aires) N° 1, Junio.

Negri, Antonio 1992 “Interpretation of the Class Situation Today: Methodological Aspects” en Bonefeld Werner *et al* (comps.) *Open Marxism* (Londres: Pluto Press) Vol. II.

Negri, Antonio 1989 *The Politics of Subversion* (Cambridge: Polity Press).

Postone, Moishe 1996 *Time, labour and social domination. A reinterpretation of Marx's critical theory* (New York: Cambridge University Press).

Seoane, José y Taddei, Emilio 2000 “La conflictividad Social en América Latina” en *OSAL* (Buenos Aires) N° 2, Septiembre.



Protesta social en la Argentina de 2001: entre la normalidad y la ruptura

Por Adrián Scribano* y Federico L. Schuster**

■ ¿Qué protesta social?

La protesta social se ha convertido en este último tiempo en una referencia constante de la vida política argentina. Sin embargo, uno puede encontrar abundante protesta social a lo largo de todo el período democrático que se inicia en 1983 y, contra lo que a veces suele decirse, de modo creciente en los años '90. Varios estudios recientes¹ parecen mostrar que en ese período se halló una abundante movilización de recursos colectivos que contrasta con la opinión generalizada en el tema. Sin embargo, se halló un alto grado de fragmentación y escasa durabilidad en las protestas, lo que parece dar cuenta de la impresión de apoliticidad, escasa participación y disgregación de las demandas sociales, que habitualmente sostienen muchos estudios. La concentración del reclamo sindicalizado en los gremios de servicios y estatales, su ligazón estrecha con situaciones específicas de desguace del estado y su progresivo debilitamiento, mostraron como contrapartida un crecimiento de la protesta de matriz cívica, con un carácter marcadamente diversificado y con rasgos claros de localización y singularidad. Por ende, con alta fragmentación y escasas probabilidades de construir sujetos unificados de acción de cierta permanencia en el tiempo y extensión en el espacio. ¿Esto está cambiando? Consideremos muy brevemente, por mor del espacio disponible, cómo llegamos a la protesta actual.

Durante la década del '90 pueden observarse importantes transformaciones en la protesta social en Argentina². Especialmente en lo que se refiere a la mutación de identidades clásicas asociadas a la movilización social como el sin-



dicalismo y también –de manera más importante– la aparición de nuevas formas de lucha, nuevos actores y temas involucrados en esta forma particular de acción política.

Si se comparan las movilizaciones características de los años previos e inmediatamente posteriores a la democratización en Argentina con las protestas actuales, es sumamente difícil negar al menos una serie de características novedosas³: a. en primer lugar, han aumentado y se han diversificado las acciones de protesta en el país; b. se han multiplicado las organizaciones de protesta; c. se han modificado los temas y demandas que sostienen las organizaciones y las acciones de protesta; d. han aparecido nuevos formatos de protesta para soportar dichas acciones.

Si hasta comienzos de los años '90 los sindicatos eran para los gobiernos democráticos la referencia política de la lucha social, desde esa fecha surgieron en la escena argentina nuevos actores colectivos que desafiaron de modo creciente las políticas del estado.

* Profesor titular UNMV y USiglo21 Director del Proyecto *El Tracto - raza: Protesta y Acción Colectiva en el Sur Cordobés*. E-mail: ascriban@arnet.com.ar

** Profesor Titular UBA, Investigador Instituto Gino Germani (FCS-UBA), Director del Proyecto *Las transformaciones de la protesta social en la Argentina Contemporánea*. E-mail: schuster@mail.retina.ar.

Siempre ha habido transformaciones respecto de los actores de la protesta social en la Argentina. Pero, como regla general, los sindicatos han sido el centro de la protesta social desde principios del siglo XX. Es cierto que muchas veces como eje de formaciones más amplias (las masas populares del 17 de octubre de 1945, la resistencia peronista post '55, las movilizaciones populares en las principales ciudades argentinas de fines de los '60 y comienzos de los '70, como el Cordobazo, el Tucumanazo, etc.). En un menor nivel de acciones sistemáticas, y muchas veces acompañando a los sindicatos, los estudiantes han sido también sujetos de acción política de protesta en varios pasajes del último siglo.

Quizás una auténtica novedad, realmente diversa del resto de la historia de la protesta social en la Argentina, la constituyan los movimientos de derechos humanos, con las Madres de Plaza de Mayo a la cabeza, en los reclamos contra el genocidio de la dictadura militar iniciada en 1976. No cabe duda de que estos movimientos (y particularmente las Madres) han constituido una impresionante fuente simbólica para el desarrollo de los movimientos de protesta posteriores en la Argentina.

Pero, aun así, puede decirse que en el primer sexenio democrático de este último período post dictadura (1983–1989) los sindicatos constituyeron el eje de la protesta social y la aglutinaron, seguidos por los reclamos aún existentes de los movimientos de derechos humanos. Ya en aquel momento, y ligado a la restauración democrática después de un período de tan violenta represión y cercenamiento de los derechos civiles por parte de la dictadura más sangrienta que sufrió el pueblo argentino, el gobierno democrático desarrolló una política tolerante hacia la protesta, la que, salvo deshonrosas excepciones, pudo crecer como una forma de expresión de demandas relativamente normalizada y tolerada. El período culminó con una crisis hiperinflacionaria que llevó al presidente Alfonsín a adelantar la entrega del poder a su sucesor democráticamente electo, y con saqueos a varios supermercados⁴. Sus protagonistas constituyen la manifestación embrionaria de un actor social y político de nuestros días, los sectores más perjudicados de la Argentina neoliberal: los desafiliados⁵.

Los años '90 (la década del presidente Menem) continuaron y profundizaron la crisis. Una primavera económica producida por el dinero de las privatizaciones de empresas públicas ocultó parcialmente el enorme efecto de desocupación que se iba produciendo. Si bien varios sindicatos de

trabajadores del estado manifestaron fuertemente su oposición al modelo en los tempranos '90 y fueron sujetos activos de la protesta social durante la primera mitad de esa década, no pudieron poner en jaque a la política privatizadora y fueron vistos por amplios sectores de la opinión pública como protagonistas melancólicos de una Argentina del pasado. Sin embargo, no hizo falta mucho tiempo para que la crisis mostrara sus nuevos rostros: la altísima concentración de la riqueza y la desocupación. Los índices de esta última treparon a cifras inéditas para el país. Superaron los dos dígitos largamente y, hasta hoy, se mantuvieron siempre muy altos. Millones de argentinos sufrieron la precarización laboral y el empobrecimiento sistemático. Con ello, también la pérdida de la contención sindical que la situación laboral regular supone. Desafiliados de las redes sociales y políticas sistemáticas, de a poco fueron emergiendo como un actor de potencialidad política. Primero no tuvieron rostro, racionalidad ni capacidad intencional en la ficción de muchos políticos y analistas. Se habló del riesgo de un *estallido social*. Pero apenas promediaba la década cuando la protesta social de los desafiliados adquirió rostros y subjetividad. Lugar desde donde apareció con fuerza la problemática de la visibilidad social de los actores que emergía en relación con el de la constitución identitaria de los actores colectivos de las aludidas protestas. La lucha por la definición del sentido es una de las características de los cortes de ruta o, para ser precisos, existe en la constitución de dichas acciones colectivas el interés por la definición del sentido socialmente válido⁶. Rara vez aislada, en general apareció ligada a protestas de trabajadores ocupados (estatales, docentes, muchas veces). Desde el interior de la provincia del Neuquén (Cutral-Có, Plaza Huincul) alcanzó impacto regional y trascendencia nacional. Fue, ahora sí, duramente reprimida, y una mujer (Teresa Rodríguez) murió alcanzada por las balas. Pero la semilla prendió. Estatales y desocupados del norte argentino (Salta y Jujuy) se

irían sumando, siempre con la misma modalidad de acción: el corte de ruta. Bajo el modelo de los piquetes de huelga, muchos desocupados y estatales de diversas regiones de la Argentina impedían el paso de vehículos en las rutas. Ya no llevaban el nombre de ninguna rama industrial o de servicios. Eran las huellas trágicas de una Argentina inédita: con altísima desocupación y desigualdad social. Se llamaron *piqueteros* y *fogoneros*⁷ y constituirían una expresión central de la protesta social en la Argentina de la segunda mitad de los '90⁸.

“Eran las huellas trágicas de una Argentina inédita: con altísima desocupación y desigualdad social. Se llamaron piqueteros y fogoneros y constituirían una expresión central de la protesta social en la Argentina de la segunda mitad de los ‘90.”

tatales y desocupados del norte argentino (Salta y Jujuy) se irían sumando, siempre con la misma modalidad de acción: el corte de ruta. Bajo el modelo de los piquetes de huelga, muchos desocupados y estatales de diversas regiones de la Argentina impedían el paso de vehículos en las rutas. Ya no llevaban el nombre de ninguna rama industrial o de servicios. Eran las huellas trágicas de una Argentina inédita: con altísima desocupación y desigualdad social. Se llamaron *piqueteros* y *fogoneros*⁷ y constituirían una expresión central de la protesta social en la Argentina de la segunda mitad de los '90⁸.



■ ¿Cómo estamos hoy?

A nadie se le escapa que desde finales de 1999 hasta la fecha se han constatado varios fenómenos convergentes en relación con la protesta social en nuestro país. Entre los más sobresalientes se puede mencionar: a. existe un aumento progresivo y constante del número de protestas sociales; b. los actores que participaban en los cortes de ruta han constituido una organización nacional de piqueteros; c. se visualizan algunas convergencias tácticas de diversos grupos en movilizaciones y demandas comunes; d. se puede observar una línea de parcial convergencia discursiva entre los que protestan en Argentina, la acción colectiva global y sectores de la opinión pública respecto de la mundialización, el globalismo neoliberal como ideología planetarizada, y el rol de los organismos internacionales de crédito.

El *ciclo de protesta*⁹ que vive la Argentina actualmente es el más importante de todos los acontecidos desde 1983, por la cantidad de protestas, la expansión territorial de las mismas y la cantidad y variedad de sujetos involucrados. Asimismo, resulta de interés notar que quizás este ciclo marca una nueva etapa de las protestas en el país. En efecto, por primera vez aparecen dos factores que permiten avalar esta hipótesis:

a. Los sectores ligados a la desocupación, la subocupación, el trabajo precario, que surgieron como actores de la protesta hacia mediados de la década anterior, muestran por

primera vez formas de organización sistemática y consolidación como movimiento social.

b. Los sectores sindicales (fragmentados, es cierto) han recuperado su protagonismo en la protesta social.

Esto marca la apertura de una etapa cuyo desenvolvimiento es por ahora difícil de prever. Lo dicho no significa que haya un actor único homogéneo. Por el contrario, si analizamos la protesta actual, veremos una gran diversidad de actores con demandas heterogéneas: los desocupados con su desafiliación, los empleados públicos con sus ajustes en cierres (entre ellos, los docentes con sus especificidades), los trabajadores de empresas privatizadas con sus crisis abiertas (entre las que resalta el conflicto de Aerolíneas Argentinas), los pequeños propietarios urbanos y rurales con sus deudas e hipotecas. A ellos se suman diariamente otros sujetos con reclamos puntuales, quienes conforman las series de protestas continuas en las grandes ciudades argentinas, más allá de los ciclos de protesta mencionados. Esta diversidad es normal en toda protesta y se la puede reconocer incluso en grandes movimientos revolucionarios de la historia universal. De modo tal, que la diversidad no es necesariamente un obstáculo para la conformación de un movimiento. Como se dijo, la cuestión a determinar es el grado de articulación que alcancen las redes de protestas¹⁰ actualmente en curso.



Los fenómenos que estamos describiendo y caracterizando adquieren mayor sentido si se repara en la trama de redes de conflictos que ellos implican. Los conflictos alcanzan tanto a las esferas política y económica como a la social. Sólo para mencionar los más relevantes se pueden consignar los siguientes:

En lo político: a. disolución creciente de las mediaciones políticas institucionales que se apoyaban en los partidos tradicionales; b. pérdida de legitimidad discursiva del gobierno del presidente de la Rúa; c. crisis de la Alianza de gobierno; d. la fragmentación y disputa en la oposición, sea en el Justicialismo como en otros partidos; e. el aumento de la visibilidad pública de la corrupción evidenciada desde el arresto del ex Presidente Carlos Menem hasta las denuncias de la diputada oficialista disidente Elisa Carrió.

En lo económico: a. la persistencia y aumento del impacto de la recesión; b. incremento del desempleo; c. profundización de la precariedad laboral; d. disminución del consumo; e. desconfianza generalizada en la capacidad del gobierno de manejar los problemas económicos; f. una serie de fenómenos micro y macro, financieros y productivos desencadenados por los fracasos de las iniciativas del Ministerio de Economía, desde el blindaje hasta el plan de déficit cero¹¹.

En lo social: a. aumento de la inseguridad y la delincuencia; b. cambios en las redes informales de solidaridad que se habían tejido bajo la aplicación de las políticas sociales del gobierno anterior; c. profundización de la percepción respecto del aumento de la pobreza y procesos de empobrecimiento; d. deterioro progresivo de obras y servicios sociales; e. aparición de modos de auto-percepción social e individual que conducen a una “precariedad social” caracterizada por estar y no estar en la sociedad; es decir, ser ciudadano por un tiempo, pero no saber si eso continuará.



Luego de esta rápida visión del presente emerge una serie de preguntas obvias:

¿Cambiará algo en el escenario actual? ¿Se mantendrá el actual nivel de protestas (alto pero limitado en efectos)? ¿Las protestas conducirán a una salida? ¿Pueden convivir tanto conflicto y tan poco orden?

■ De síntomas, mensajes y ausencias

Como resulta obvio, no es posible contestar una a una las preguntas formuladas en el espacio del que disponemos, por lo que nos ocuparemos de forma general en la propuesta de algunas líneas de interpretación al respecto.

Las protestas como síntomas de los conflictos nos conducen a pensar en, al menos, las siguientes interpretaciones:

a. Se está consolidando una grieta en la estructuración social por donde se constata que la legitimación política procesual ya no puede metamorfosear lo que hay de intereses económicos en la política de los partidos.

b. Se percibe el afianzamiento de la disolución de los modos de representación social, gremial y corporativa.

c. Se ha vuelto cada vez más evidente que los planes de estabilización aplicados desde la política del ministro de la última dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, hasta la actual versión aliancista del ministro Domingo F. Cavallo¹², han generado la identificación por parte de la gente del neoliberalismo como ideología de la legitimación.

En tanto mensajes, las protestas permiten centrar la mirada en los siguientes puntos problemáticos, como formas que marcan los límites de compatibilidad sistémica:

a. Se han vuelto ineficientes los mecanismos institucionalizados de resolución de conflictos, dejando paso a la posibilidad de mayor violencia y represión social.

b. Existe un proceso prolongado de cambios en las reglas de inclusión social que generan nuevas y fugaces identidades sociales.

c. Se ha abierto y expandido la constitución de espacios públicos de encuentro que involucran cambios en la consideración social de la definición de la política.

Las protestas sociales también permiten identificar ausencias que señalan los momentos en los cuales el sistema no se sutura, donde no alcanza el cemento que ligaba hasta hoy a la sociedad:

a. En el marco de lo ya expuesto las protestas sociales indican la ausencia de un mecanismo de síntesis social que puede devenir en fragmentación y feudalización de la *polis*.

b. Del mismo modo, permiten advertir sobre la incapacidad de los grupos y/o alianzas de grupos de establecer un discurso hegemónico.

c. Por otro lado, las protestas dejan ver que los antagonistas, los centros de poder y los recursos por los cuales se entra en contienda se han multiplicado y traspasan el territorio nacional.

La protesta social es un fenómeno planetario, hay protestas sociales en casi todos los países del mundo. Esto se debe a que ningún sistema político agota en su representación todos los intereses sociales, los que, por otra parte, tampoco están dados de una vez y para siempre como un conjunto completo, sino que se construyen y amplían todo el tiempo. Así se ve incluso en sociedades opulentas (las europeas o la norteamericana), donde muchos suponen que no hay protestas, porque la mayoría de la población logra satisfacer sus necesidades básicas ampliamente.

Esto es, siempre hubo, hay y habrá intereses, necesidades y concepciones distintas y confrontadas respecto de la vida social entre miembros diversos de una sociedad. Dicho de otro modo, el mundo social no habrá de ser nunca un todo homogéneo, armónico y de suyo completo.

Pero resultará claro que cuando las necesidades básicas de amplios sectores sociales están puestas en cuestión, la desigualdad social aumenta a niveles inéditos, el sistema político se vuelve incapaz de dar respuestas mínimas a los reclamos sociales y, como sucede en nuestro medio, la protesta se intensifica. Esto se da particularmente en sociedades que han conocido un grado de desarrollo capitalista relativo y donde los sujetos han pasado de una condición obrera estable a una inmensa precarización laboral y social.

Al respecto, sin embargo, es interesante resaltar que la protesta no supone un sujeto único y homogéneo. Esto es, cuando en un momento en una sociedad (como hoy en la nuestra) se producen muchas protestas al mismo tiempo, ello no significa necesariamente que exista un gran movimiento social uniforme detrás de todas ellas. Más bien lo usual es que haya diversos movimientos de protesta alentados, cada uno de ellos, por el desarrollo de los demás. De allí a que esos movimientos se articulen, se pongan de

acuerdo, diseñen estrategias de acción conjunta hay un paso, y por cierto no pequeño. Cuando ello ocurre, cuando los múltiples movimientos de protesta se articulan y forman un gran movimiento, recién entonces conforman un desafío político de gran alcance.

Ahora bien, ¿qué significa todo lo afirmado hasta aquí en relación con el futuro de la sociedad argentina? ¿Puede esperarse algún cambio? ¿Acaso nada pasará? Creemos que estamos en presencia del desarrollo de importantes cambios. Para percibirlos como tales hay que desplazar la mirada más allá de lo meramente coyuntural, epifenoménico y superestructural.

Lo fundamental que señalan las protestas sociales es que cada vez más individuos y grupos sociales se percatan de que la

emancipación es una meta y que puede alcanzarse si se lucha por “ausentar ausencias”, esto es, por refundar los espacios políticos hoy rotos en una nueva construcción de subjetividad. Esta construcción es posible, en la medida en que los espacios de la protesta fortalezcan las redes de acción y produzcan en su interior la demanda de una nueva representatividad política.

La protesta social es un modo de ruptura del orden social regular, pero al mismo tiempo puede convertirse en un modo cuasi normal de la práctica política en los márgenes del sistema político. En esa cornisa entre la normalidad y la ruptura camina hoy la protesta social. En su propia aparición hay algo que cambia. ¿Cuánto de nuestra sociedad cambiará a partir de la protesta? El aumento de los mecanismos de control, a partir de la actual coyuntura internacional, puede ser un factor que aumente las condiciones para la represión de las protestas, sumado esto a la preocupación que cada tanto afecta a la clase dominante respecto del desarrollo creciente de la protesta. En estas condiciones, ¿prevalecerán los aspectos de normalidad de la protesta social o, por el contrario, su potencialidad de ruptura encaminará a la Argentina hacia un nuevo escenario social y/o político?

Sólo la historia futura, en su contingencia, nos permitirá conocer la respuesta a estas preguntas.

■ Bibliografía

Melucci, Alberto 1996 *Challenging Codes. Collective Action in the Information Age* (Cambridge: Cambridge University Press).

OSAL 2001a *Observatorio Social de América Latina* (Buenos Aires) N° 4, Junio.

“Existe un proceso prolongado de cambios en las reglas de inclusión social que generan nuevas y fugaces identidades sociales.”

OSAL 2001b *Observatorio Social de América Latina* (Buenos Aires) N° 3, Enero.

OSAL 2000a *Observatorio Social de América Latina* (Buenos Aires) N° 2, Septiembre.

OSAL 2000b *Observatorio Social de América Latina* (Buenos Aires) N° 1, Junio.

Pelacoff, Javier y Pereyra, Sebastián 1999 "Transformaciones en las formas de acción colectiva: protestas sociales y espacio público", ponencia presentada en IV Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación (San Salvador de Jujuy, Universidad Nacional de Jujuy, FHyCS).

PIMSA2000 *Documentos y Comunicaciones* (Buenos Aires: PIMSA).

PIMSA1999 *Documentos y Comunicaciones* (Buenos Aires: PIMSA).

PIMSA1998 *Documentos y Comunicaciones* (Buenos Aires: PIMSA).

PIMSA1997 *Documentos y Comunicaciones* (Buenos Aires: PIMSA).

Schuster, Federico L. y Pereyra, Sebastián 2001 "Las transformaciones de la protesta social en la Argentina democrática. Balance y perspectivas de una forma de acción política", en Giaracca, Norma y Bidaseca, Karina (editoras) *La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza Editorial).

Schuster, Federico L. 1999 "Social protest in Argentina today: is there anything new?", en Josep Muñoz, Jordi Riba (Editores) *Treball i Vida en una economia global* (Barcelona: Edicions Llibreria Universitaria).

Schuster, Federico L. 1997 "Protestas sociales y represión a la oposición política", en *Informe anual de la situación de los derechos humanos en la Argentina* (Buenos Aires: CELS).

Scribano, Adrián 2000 "Política, Protesta y Movimientos Sociales en la Argentina". Comunicación presentada en el Taller 'Movimientos Sociales y Representación Política'/IV Jornadas de Sociología, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Preparatorias del III Encuentro por un Nuevo Pensamiento de CTA; Instituto Gino Germani, Lunes 6 de Noviembre 2000.

Scribano, Adrián 1999 "Argentina cortada: 'cortes de ruta' y visibilidad social en el contexto del ajuste", en López Maya, M. (editora) *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América popular en los años del ajuste*. (Caracas: Nueva Visión).

Scribano, Adrián 1998 "De La Voz Al Espacio: Los Cortes de Ruta y Derechos Humanos", en *Red de Filosofía y Teoría Social, Cuarto Encuentro* (Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Catamarca).

Tarrow, Sydney 1997 *Poder en movimiento* (Madrid: Alianza).

■ **Notas**

1 Véase por ejemplo Scribano, 1999; Schuster, 1997, 1999; Schuster y Pereyra, 2001; PIMSA 1997, 1998, 1999 y 2000; OSAL, 2000a, 2000b, 2001a, 2001b.

2 Seguimos en esta caracterización a Schuster y Pereyra, 2001.

3 Si bien se reconoce alguna dificultad para la caracterización de "novedosas" de las prácticas a las que se aluden, el espacio del que se dispone impide una discusión adecuada de la temática.

4 Más allá de la posible discusión teórica si a los saqueos se los pueda considerar o no protestas.

5 Intentamos jugar aquí con la expresión político partidaria argentina de los que no pertenecen más, de los que no están más en padrón, aquellos que son puestos fuera.

6 Para la relación entre identidad personal e identidad colectiva véase Melucci 1996.

7 Los piqueteros sostienen el corte de ruta, los fogoneros la participación popular.

8 Sobre cortes de ruta véase Scribano 1998, 1999, 2000.

9 El concepto de ciclo de protesta remite a una modalidad que suele tener la protesta social, la que suele incluir períodos de creciente en el número e intensidad de las protestas y otros de bajante. Véase al respecto, Tarrow, 1997.

10 El concepto de *redes de protesta* indica una función que permite vincular acontecimientos de protesta diversos en virtud de sus parecidos de familia. Dicho vínculo se sitúa tanto en una dimensión sincrónica, en la medida en que pueda detectarse una confluencia significativa de acontecimientos, como en una diacrónica en virtud de la correspondencia entre distintas protestas situadas en un eje histórico. Al respecto véase Pelacoff, J. y Pereyra, S., 1999.

11 Desde comienzos del año 2001, y a través de la gestión de tres ministros de Economía sucesivos, el gobierno argentino desarrolló diversas estrategias financieras para intentar hacer frente a una crisis monumental. El blindaje fue un intento por garantizar la solvencia del Estado, a través de fondos de garantía otorgados por organismos internacionales. Más tarde se intentaría un canje de bonos de deuda a corto plazo por otros a más largo plazo (megacanje) y finalmente una política de recorte de gastos en el Estado (déficit cero).

12 El actual Ministro de Economía del gobierno de la Alianza fue también Ministro del anterior Presidente, el justicialista Carlos Menem, durante varios años y es el autor del Plan de Convertibilidad del Peso argentino con el Dólar americano, aún en vigencia.

Una aproximación al movimiento de desocupados en el marco de las transformaciones de la clase obrera en Argentina

Por Verónica Maceira* y Ricardo Spaltenberg**

En las últimas décadas hemos presenciado cambios importantes en las formas que asume la protesta social en la Argentina en correspondencia con las transformaciones que tuvieron lugar en las condiciones de estructuración de las clases subalternas.

En la historia de las luchas sociales en el país, fue el conflicto laboral el que desempeñó tradicionalmente un papel destacado. Recordemos que, a diferencia de la gran mayoría de los países de América Latina, el mercado de trabajo en la Argentina se caracterizó por sus bajas tasas de desempleo. Este fue sin duda uno de los factores estructurales decisivos para que se constituyera, durante la primera mitad del siglo pasado, un movimiento obrero con organizaciones poderosas que pudieron encontrar en la huelga un instrumento altamente eficaz a la hora de luchar por sus intereses. En correspondencia con la composición del actor colectivo que la instrumentaba, el conflicto laboral se localizaba así en forma dominante en las provincias del polo industrial tradicional, en el sector privado, y en particular en la industria.

En tales circunstancias, y a pesar de los sucesivos impedimentos, las organizaciones de la clase obrera se constituían una y otra vez como un factor político decisivo. A la eliminación de este “obstáculo” apuntó de manera casi explícita la última dictadura militar, cuya política hizo explotar este mecanismo a través de la desindustrialización, aunque ello no significó un aumento significativo e inmediato de la tasa de desocupación. Así, durante el gobierno consti-



tucional que siguió a la dictadura y ante la crisis interna del Partido Justicialista, el sindicalismo volvió a constituirse como un actor político relevante. Hasta fines de la década del ochenta los niveles de conflictividad laboral se mantuvieron relativamente altos con la utilización de la huelga, nuevamente, como el instrumento de lucha sustantivo (Palomino, 1987; McGuire, 1991).

Durante el primer tramo de la gestión menemista se producen dos marcas significativas en relación a los niveles de conflictividad laboral de la década anterior: si en el primer año se alcanza un pico que los supera ampliamente, entre 1991 y 1993 los registros se ubican sistemáticamente por debajo de aquellos. Al margen de los factores más coyunturales que pudieron contribuir a esta caída (tales como los episodios hiperinflacionarios de 1989 y 1990, o el impacto de las radicales políticas de reforma implementadas

* Socióloga. Miembro del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

**Sociólogo. Miembro del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

por el gobierno justicialista), la retracción del conflicto laboral expresó entonces transformaciones de más largo plazo, que a su vez configuraron los rasgos que asume el conflicto laboral hasta el presente (Spaltenberg, 1996).

Al respecto, es necesario apuntar algunos elementos. En primer lugar, como decantación del proceso de desindustrialización que se inicia durante la dictadura, se venía verificando ya una sostenida disminución del peso relativo de los conflictos sindicales de la industria en particular y del sector privado en general. En segundo lugar, la caída del nivel del conflicto laboral se relaciona estrictamente y en forma inversa con el aumento de la desocupación, cuya tasa ya duplicaba en ese entonces las tasas imperantes hasta la década del setenta. Por último, el cambio sectorial de los conflictos, sumado a la crisis de los estados provinciales, tuvo su correlato en el mayor protagonismo que fueron tomando los trabajadores estatales y en el consecuente desplazamiento de la mayor intensidad del conflicto hacia el interior del país.

Junto con los sujetos también se fueron transformando las formas de lucha. En efecto, a partir de 1991 y hasta el presente se evidencia un paulatino avance en la utilización de instrumentos de lucha demostrativos, ya sea acompañando a la huelga o con independencia de ella. Ante las crecientes restricciones para apelar a medidas de fuerza con interrupción del vínculo de trabajo, la expresión del conflicto tiende a salirse del ámbito laboral para realizarse en territorios más favorables.

El año 1994 significó un punto de inflexión en el proceso de las luchas sociales. Pero este ascenso no estuvo ligado exclusivamente al conflicto estrictamente laboral, que no volvió a alcanzar la intensidad característica de las décadas anteriores (Spaltenberg, 1996; Iñigo Carrera y Cotarelo, 2000; Iacona y Pérez, 1999-2002). En el marco de los niveles inéditos alcanzados por la desocupación abierta y la subocupación, el rasgo novedoso del período que se inicia es la incorporación de aquí en más de otro protagonista, los desocupados, utilizando centralmente el corte de ruta como forma de lucha. Ciertamente el corte de ruta no ha sido de uso exclusivo de los desocupados, pero la particularidad en este caso es que se trata de la única medida de fuerza a su disposición, y del instrumento de lucha que les permite instalarse en la escena nacional. La recurrencia de este tipo de protesta, en un inicio geográficamente acotada, estuvo sin duda en la base del desarrollo de programas de empleo. A

partir de entonces, las sucesivas protestas de los desocupados se extienden por todo el interior del país, vinculándose en términos generales a la demanda de continuidad o expansión de dichos planes.

En el último año observamos un nuevo hito en el plano del conflicto social: a través de la realización de dos asambleas y planes de acción de alcance nacional, el movimiento

de desocupados logra instalarse como un actor colectivo en ese plano. Y lo hace de la mano de la fuerte activación de la protesta en el conurbano bonaerense. En ese sentido, la maduración de las experiencias de organización y de lucha en esa región parecen haber signifi-

ficado un impulso político decisivo para la conformación del movimiento como actor nacional.

La protesta vuelve entonces a instalarse con fuerza también en el otrora centro productivo sin abandonar la periferia, hacia la que se había desplazado en los noventa. Pero ya no es a través de aquel movimiento obrero que tenía en los metalúrgicos su punta de lanza. Su imagen es ahora la de una multitud marchando desde los barrios más humildes del conurbano hacia la Capital Federal. Pero ¿qué es, socialmente, esta multitud?

■ Elementos para una caracterización social

Los medios masivos de comunicación los presentaron como los pobres y excluidos. Esta representación plana de la “exclusión” es alimentada no sólo en los medios sino también en parte de la producción académica local, especialmente en aquella que se ha centrado en el estudio focalizado de la pobreza, dejando de lado el carácter social de quienes la padecen y de quienes la producen. Nuestra hipótesis es que esta presentación de “la pobreza” deja en penumbras a las líneas de continuidad entre las experiencias de clase de quienes actualmente son presentados como marginales y el conjunto de los trabajadores del país, contribuyendo en esa dirección, a fortalecer una imagen de fragmentación creciente al interior de las clases subalternas.

Se torna así relevante conocer si los participantes del movimiento de desocupados y en general, los asistidos por planes gubernamentales de empleo, pueden ser caracterizados como población marginal o si, por el contrario, sus historias laborales personales y/o familiares permiten indicar su pertenencia a fracciones obreras anteriormente incorporadas

“...el corte de ruta no ha sido de uso exclusivo de los desocupados, pero la particularidad en este caso es que se trata de la única medida de fuerza a su disposición, y del instrumento de lucha que les permite instalarse en la escena nacional.”

a la producción. La importancia de un acercamiento de rigor a la caracterización del movimiento de desocupados no se funda sin embargo en un interés exclusivamente académico. Por el contrario, entendemos que la misma puede fortalecer a los actores directamente involucrados a la hora de la construcción y la reflexión sobre su acción corporativa y política.

Avanzaremos en algunas respuestas a estas preguntas a partir de los resultados preliminares de un estudio realizado específicamente en el partido de La Matanza¹.

En base a este trabajo podemos concluir que una parte importante de los varones participantes y beneficiarios de planes de empleo, en particular los mayores de treinta años², son trabajadores que han sido asalariados, y si bien no han estado ocupados en los sectores más dinámicos ni en puestos de altas calificaciones, no pueden ser considerados marginales. Por el contrario, muestran trayectorias laborales anteriores estables, con rasgos compartidos ampliamente por la clase obrera de la región. Asimismo, el conjunto presentaba, cuando ocupados, una alta tasa de sindicalización como tendencia firme a lo largo de sus vidas laborales, aunque mayormente sin participación gremial activa. Estos elementos, que también caracterizan la cultura sindical dominante, revelan en principio una experiencia previa que los predispondría a encuadrarse en organizaciones que representen sus intereses económicos inmediatos. Junto a ellos se encuentran jóvenes³ con escasa inserción estable anterior, mayormente sin experiencias significativas como trabajadores fabriles y sin tradición de encuadre sindical.

Entre los desocupados jefes de hogar encontramos predominantemente ex-obreros fabriles, y se hacen presentes, complementariamente, trabajadores de la limpieza no doméstica y algunos empleados del comercio de alimentos. No forman parte de este universo los trabajadores de cuello blanco. Los desocupados fabriles han estado empleados en

mayor medida en las ramas consideradas típicamente de la “primera sustitución” (intensivas en mano de obra y productoras de bienes “salario”, con preeminencia de alimentos y textiles) y ocuparon, en menor medida, puestos en la industria metalúrgica, del papel, del cuero y las telecomunicaciones, ramas que tuvieron su momento de expansión en períodos relativamente posteriores a las ya mencionadas. Estos hombres han desarrollado la mayor parte de su vida laboral en condiciones que suponían la experiencia de cooperación prolongada entre muchos trabajadores: las tres cuartas partes del universo han trabajado en establecimientos medianos y grandes. Asimismo, en sus ocupaciones anteriores la mayoría ha alcanzado como máximo un nivel de calificación operativa, mientras que una cuarta parte ha realizado, en lo sustantivo, tareas no calificadas.

Sin embargo, y éste es un elemento relevante, incluso entre los mayores de treinta años con trayectorias laborales estables, el lapso de tiempo que media desde el quiebre de sus trayectorias hasta el presente es relativamente prolongado. Podemos estimar que en casi la totalidad de los jefes de hogar, este punto de inflexión ha sido hace más de dos años, con un promedio de cuatro años y llegando hasta ocho y diez años en trabajadores de más edad. En esa dirección, cabe entonces la pregunta de qué significa esta extensión temporal, tanto en términos de sus trayectorias como, en otro nivel, en términos de la formación de la clase obrera.

En términos de las trayectorias laborales entendemos que, para los mayores de treinta años, esta extensión temporal es indicativa de que la discontinuidad de su inserción como ocupados estables tiende a asumir un carácter irreversible. Por lo menos para una parte de los menores de treinta años, esto significa que difícilmente compartan las experiencias de clase que, en generaciones anteriores, fueron constitutivas de la fracción social de la que ellos mismos proceden.



En términos de la formación de la clase, no podemos adelantar conclusiones que merecerían una investigación de mayor aliento. Sin embargo, en tanto la información contextual sobre el mercado de trabajo no señala otra cosa, los elementos apuntados son indicativos no sólo de cambios biográficos sino de la transformación histórica de los espacios sociales que estos hombres personificaban. Lo observado supone, en primer lugar, la destrucción del conjunto de relaciones sociales en que estos trabajadores estaban involucrados: relaciones de explotación de las que eran objeto por parte del capital y relaciones sociales de cooperación con otros trabajadores en la que entraban forzosamente como consecuencia de su relación con el capital. Esto significa la destrucción de fuerzas productivas y la transformación social de parte de una clase.

En este marco, cabe también preguntarse cómo ha operado este proceso en términos de la constitución subjetiva de este sector. No podemos avanzar aquí en forma conclusiva en esta compleja pregunta pero quisiéramos adelantar algunos elementos en estrecha vinculación con el orden de problemas ya planteados.

En primer lugar, podemos decir que nuestros entrevistados consideran que comparten su suerte con el resto de los desocupados y en ese sentido orientan su acción. No sólo más de dos tercios están organizados territorialmente, participan de las reuniones de desocupados aunque sea pocas veces, y reivindican el papel de las organizaciones de desocupados en la distribución de los planes de empleo, sino que un porcentaje aún mayor estaría de acuerdo con que se forme un sindicato de desocupados y se afiliaría al mismo, y el 100% participa de las acciones de lucha llevadas a cabo, en especial de los sucesivos cortes de ruta (contrastando con sus pobres niveles de participación gremial activa anteriores).

Se ha argumentado reiteradamente que los procesos de heterogeneización de los trabajadores suponen una diferenciación de sus intereses inmediatos con la consiguiente dificultad para estructurar actores colectivos que sostengan sus demandas tanto corporativamente como a través de la intervención plenamente política. Desde la perspectiva subjetiva de parte de los desocupados de La Matanza, las distintas relaciones en las que están involucrados comienzan a suponer también una diferenciación de intereses con respecto a los trabajadores ocupados. Sin embargo, y ésta es una observación que estimamos relevante en términos de la construcción de una organización

de los trabajadores, las posiciones actualmente distintas en el mundo del trabajo no parecen obstaculizar en principio, y para los desocupados, la construcción de solidaridades al interior del proletariado. Por el contrario, el 80% considera que su lucha cuenta con el apoyo de los trabajadores ocupados y se solidariza a su vez con los reclamos de los trabajadores ocupados en lucha.

■ Consideraciones finales

La clase obrera mantiene su lugar central en las luchas sociales del período, pero se trata ahora de una formación muy distinta a la de años atrás. Como puede apreciarse, nuestra perspectiva al abordar el ejercicio presentado ha sido la de considerar que las clases y las fracciones de clase no se definen solamente por su actualidad y coyuntura, sino también por su historicidad. A partir de ella hemos observado, por un lado, que muchos trabajadores desocupados son los mismos que compartieron con otros las experiencias que hacen a la estructuración inmediata de una clase obrera estable. Por otro lado, entendemos que la magnitud de los cambios ocurridos en las últimas décadas parece negar para parte de estos trabajadores la continuidad de dichas experiencias. Esto es especialmente inquietante, en perspectiva, para las nuevas generaciones que muestran trayectorias laborales tan tempranamente frustradas.

Son estos trabajadores quienes aparecen en el nuevo siglo como la imagen del proletariado, aquellos que no sólo han sido ya separados de sus condiciones materiales de vida sino que efectivamente no tienen nada que perder. Es de esta condición social de donde deriva su radicalidad, y no del haber asumido tal radicalidad como determinación política a partir del conocimiento de las causas del proceso que conlleva su aniquilamiento social.

Las relaciones de importantes sectores de la población con el ámbito de lo político se reducen crecientemente a su participación en las redes clientelísticas de los aparatos partidarios que buscan asegurar su voto. Esto a su vez puede anclarse en las condiciones estructurales a las que estos sectores son reducidos. Desplazados de su posición en el sistema productivo, sólo les resta demandar directamente al estado. Carentes de recursos mínimos a partir de los cuales asegurar su propia existencia, toda participación política que no conduzca a algún alivio a su situación carecería de sentido desde la perspectiva de estos sectores.

“Son estos trabajadores quienes aparecen en el nuevo siglo como la imagen del proletariado, aquellos que no sólo han sido ya separados de sus condiciones materiales de vida sino que efectivamente no tienen nada que perder.”



Es en este marco que las organizaciones de desocupados comenzaron a ensayar formas alternativas de distribución de los planes de empleo, forzando la lógica clientelar supuesta en la existencia misma de los planes de asistencia social. Estas formas involucran un primer intento de construcción de criterios de justicia más autónomos basados en relaciones de solidaridad entre iguales y en la valorización de la participación activa en la lucha común. En qué medida estas organizaciones llegarán a significar un punto de inflexión en la relación que estos sectores de la población mantienen con el ámbito de lo político es todavía un interrogante abierto.

De lo que no quedan dudas es del avance que supone su constitución como actor colectivo nacional. Y resulta significativo que este paso se haya dado simultáneamente con una fuerte determinación para romper el aislamiento social impuesto a los desocupados. Esta determinación se observó no sólo en el plano de la acción, en tanto su primer plan de lucha nacional involucró ya la articulación con otras fracciones sociales, sino también en el salto reivindicativo que supuso pasar de la demanda de planes de empleo a la lucha contra el ajuste y la política de déficit cero. En el mismo sentido, si bien no cuentan con la solidaridad activa del conjunto del movimiento obrero, han logrado multiplicar las relaciones interorganizacionales al interior del movimiento de desocupados como también con otras organizaciones de la clase obrera. Esto plantea nuevos desafíos y dilemas tanto para las organizaciones de desocupados como para el movimiento obrero en su conjunto.

Para las organizaciones de desocupados, estos dilemas se reflejan en un cambio del sentido de su instrumento central de lucha, el corte de ruta. De una parte, la necesidad de quebrar su aislamiento articulando sus planes de lucha con otras fracciones ha derivado en el hecho de que el corte de ruta vaya adquiriendo un carácter simbólico dejando de lado su utilización como medida de fuerza. Ello conlleva a su vez el peligro de reproducir, al interior del movimiento, el aislamiento hacia aquellas fracciones que se rehúsan a resignar el carácter de medida de fuerza de los cortes. Por otra parte, es innegable que capitalizar los efectos políticos de un corte de ruta como medida de fuerza a nivel nacional supondría una fuerza social que las organizaciones de desocupados difícilmente constituyan en forma aislada.

Para el movimiento obrero, el avance en la lucha de los desocupados significó un claro aporte de vitalidad. En ese sentido, la oportuna decisión de una parte de las organizaciones obreras de impulsar el desarrollo de la organización territorial fue un buen reflejo de una política que intenta formularse asumiendo las profundas transformaciones sufridas por la clase. Dicha atención de lo territorial no debería desplazar la importancia de la organización y la lucha en los lugares de trabajo. Si se dejase de lado la formulación de una política específicamente gremial que sepa hacer uso del poder social que se deriva de las posiciones que los trabajadores ocupan, la presencia sindical en los lugares de trabajo pasaría a ser meramente testimonial.

■ **Bibliografía**

Iacona, Juan y Pérez, Sandra 1999-2002 "Informe estadístico de conflictividad laboral", Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, (Buenos Aires) varios números.

Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia 2000 "La protesta social en los '90. Aproximación a una periodización" en *Documento de Trabajo* (Buenos Aires: PIMSA) N° 27.

Mcguire, James 1991 *Strikes in Argentina, 1983-89: a Research Note* (Middletown, Connecticut-USA: Wesleyan University).

Palomino, Héctor 1987 *Los conflictos laborales bajo el gobierno constitucional* (Buenos Aires: Fundación F. Ebert).

Spaltenberg, Ricardo 1996 *Conflictos laborales en Argentina: 1984-1994* (Buenos Aires: Instituto Gino Germani de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. UBA) inédito.

■ **Notas**

1 Se entrevistaron un total de veinticinco varones participantes de los programas de empleo, que cumplieren con el requisito de ser jefes de hogar (atributo este último que los beneficiarios comparten mayoritariamente) y, complementariamente, cinco entrevistados no jefes de hogar (de ambos sexos) como información contextual. En la realización del muestreo se

procedió en forma sucesiva, circunscribiendo primero el marco al segundo cordón del partido y seleccionando al azar y a partir de los registros de los planes de trabajo, un conjunto de proyectos y luego, dentro de los mismos, a los entrevistados.

2 En relación a las trayectorias de los diecinueve entrevistados mayores de treinta años, podemos sintetizar que: un total de trece entrevistados fueron trabajadores estables, desarrollando en una sola rama de actividad prácticamente toda su vida laboral adulta anterior a la caída en el desempleo prolongado. Diez de ellos, en un mismo lugar de trabajo (durante períodos que varían de ocho a treinta y cinco años según los casos y la edad del entrevistado) y otros tres en más de un establecimiento (por períodos que van de siete a doce años y sin desempleo prolongado intermedio). Por su parte, seis entrevistados presentan una mayor movilidad entre distintas ocupaciones, establecimientos y ramas de actividad, en tres casos, con períodos de permanencia en un solo puesto de más de ocho años. Tres de estos entrevistados habían tenido un desempleo de más de seis meses en otro tramo anterior de sus trayectorias.

3 Diferentes son las trayectorias de los seis jefes de hogar menores de treinta años: sólo dos han tenido empleos con una continuidad de tres años o más en su vida adulta, en ocupaciones no fabriles. Tres han tenido sólo inserciones efímeras. Sus trayectorias contrastan abiertamente con las que, a esa misma edad, tenían los jefes de hogar mayores ya analizados. Las trayectorias de estos jóvenes son, en términos generales, similares a las de aquellos beneficiarios no jefes de hogar entrevistados, quienes a su vez pertenecen a este grupo etario.



Un “Rosario” de conflictos. La conflictividad social en clave local

Por Gloria Beatriz Rodríguez*

*Raza de Abel, duerme, bebe y come;
Dios te sonríe complaciente.
Raza de Caín, en el fango
Arrástrate y muere miserablemente*
Abel y Caín, de Rebelión, Baudelaire¹

Las características de la protesta social actual expresan las profundas conmociones provocadas por la última reestructuración capitalista que –buscando la recomposición de la tasa de ganancia a través de la aplicación de políticas neoliberales– redefine las relaciones capital-trabajo. Estas transformaciones han sido acompañadas por cambios culturales sustentados en nuevos contenidos del sentido común, generando un “estilo” donde el mercado se *naturalizó* como *deus ex machina* de la vida cotidiana (Boron, 2000; Rodríguez, 2001). Si la sociedad fue bombardeada con la insistencia en los beneficios del respeto a la *naturaleza* de los mercados –los cuales tenderían a buscar su piso y punto de equilibrio– desde el poder no se reconocieron como *naturales* las respuestas sociales esgrimidas ante la ofensiva neoconservadora. Saqueos, huelgas, cortes de ruta y otras manifestaciones han sido consideradas acciones ‘extemporáneas’ y hasta declaradas ilegales. En otras palabras, el discurso y las acciones han querido ocultar que el *partido* tiene al menos dos grandes *equipos*, y que en el *campo de juego*² las fuerzas rivales intentan *desempatar*³.

Si el sistema capitalista se ha reestructurado para mantenerse en pie, es esperable que las masas desposeídas también lo intenten. Para eso ensayan nuevas formas de pelea, buscan nuevas formas de organización, pero también otorgan nuevos significados a viejas estructuras organizativas recuperando aquellas hebras del tejido aún vigorosas y componiendo una textura que permita resistir y cambiar la relación de fuerzas. En la medida en que el estado ha sido una pieza fundamental en el proceso de reestructuración ca-



pitalista, las luchas populares se han dirigido fundamentalmente contra él.

La protesta social en Rosario se vincula estrechamente con las crisis generales; sin embargo, guarda las particularidades propias de lo concreto, remitiendo a la peculiar combinación de la multiplicidad causal que se presenta en los fenómenos sociales. Para ello, tomando palabras de Marx (1985), “nos pareció mejor estudiar aquellos que fabrican sombreros, que [...] estudiar acerca de la forma de fabricar sombreros”.

Los casos que presentaremos manifiestan ánimo de composición y recomposición de tramas basadas en la participación activa y protagonismo en la toma de decisiones. Trabajadores mercantiles que buscan mantener su fuente de trabajo apoyándose en una comisión de acción gremial que se desarrolla y se sostiene no en oposición sino en el seno de un sindicato de tradición delegativa; estudiantes universitarios que generan una nueva instancia de organización independiente de los aparatos burocráticos, y “piqueteros” que desarrollan acciones centrífugas y centrípetas enfrentando al estado al mismo tiempo en que garantizan su sub-

* Antropóloga. Docente e Investigadora de la Universidad Nacional de Rosario. Coordinadora del Área de Antropología y Trabajo del Centro de Estudios de Historia Obrera.

sistencia inmediata. Los tres casos presentan “estilos” novedosos de protesta y organización, recuperan –en distinta medida– experiencias fértiles de sus tradiciones y dirigen sus demandas al estado, mostrando el carácter contradictorio y dialéctico de la historia.

Analizando el caso argentino, Eduardo Basualdo (2000) se plantea si la reestructuración capitalista y la revancha clasista que conlleva pueden actuar como un impedimento insalvable para el desarrollo y el crecimiento económico en el mediano plazo. En la misma línea –atendiendo la relación íntima, aunque no exclusiva, entre las transformaciones económicas y las sociopolíticas– nos preguntamos si será posible superar la situación en que se encuen-

capacidad de convocatoria no significa, sin embargo, participación acrítica ni incondicional, lo que induce a estas organizaciones a un reposicionamiento respecto de las confrontaciones que provoca el modelo emergente proponiendo alternativas que intentan constituirse en otro polo representacional, susceptible de alcanzar diferentes niveles de adhesión social.

■ Tomando el “pulso” local

Rosario es uno de los aglomerados más importantes de la Argentina. Hasta mediados de los ‘70 se desarrolló allí una intensa actividad industrial, comercial y portuaria albergando a una poderosa clase trabajadora protagonista de



tran la clase trabajadora y los sectores populares, ya sea por el debilitamiento o por la crisis de las organizaciones políticas y gremiales que otrora los contenían⁴. El sindicalismo argentino conservó durante un largo período la legitimidad que le otorgó la capacidad de negociación, confrontación y control sobre las políticas laborales.

Hoy, aún debilitado por los cambios estructurales y el desprestigio, es todavía el vehículo de resistencia de la mayoría del pueblo, como lo demuestra el poder de convocatoria que han tenido los llamamientos a las huelgas generales. Esa

importantes acciones colectivas. La “Resistencia” a la Revolución Libertadora en 1955; el “Rosariazo” en 1969 y el “Rosariazo del hambre” –nombre con el que denomina a los acontecimientos signados por los saqueos de 1989– representan mojones de la irrupción popular en la escena social que han cuestionado, hecho tambalear o desplazado a los gobiernos de turno. La fisonomía del cordón industrial del Gran Rosario acusó los golpes del proceso de desindustrialización iniciado durante el gobierno militar de 1976, mostrando el rostro del desempleo, el subempleo, la precarización y la marginalidad.

Actualmente, el escenario urbano presenta diferentes sectores en conflicto –trabajadores estatales y privados, estudiantes, jubilados, piqueteros, mujeres en lucha por la defensa de la vivienda única, etc.– jaqueados por la presión de un índice de desocupación del 20%.

Si bien la confianza, la representación y la participación son preocupaciones centrales de los sectores en lucha, casi todas las últimas huelgas generales convocadas por las centrales obreras⁵ han tenido la característica de paro activo, con movilización y protagonismo de los trabajadores. La existencia en el plano local de una Multisectorial que reúne a las centrales de trabajadores, junto con gremios independientes y otros sectores populares, permite la organización de acciones conjuntas que tienden a fortalecer las demandas⁶, independientemente de los alineamientos existentes a nivel nacional.

Tomaremos tres experiencias que muestran la complejidad de la conflictividad social local.

■ Trabajadores en lucha por sus puestos de trabajo: el “Proyecto Alternativo de Reactivación” de los trabajadores del ex Hipermercado El Tigre S.A.

En este caso, el conflicto se acelera con la convocatoria a concurso preventivo y posterior quiebra de la firma, precipitando la pérdida de los puestos de trabajo. Frente a esta situación, un importante local céntrico de la empresa fue ocupado por los empleados para impedir el vaciamiento de la misma. Luego de sostener la protesta con reclamos formales, manifestaciones y cortes de calles que acompañaron la ocupación, los trabajadores generaron la propuesta de constituir un Mercado Comunitario (Sociedad del Estado) administrado por un ente compuesto por representantes de los gobiernos provincial y municipal y que cuenta con el respaldo de amplios sectores sindicales, políticos, religiosos, corrientes universitarias, el Honorable Concejo Deliberante⁷ de la ciudad y, fundamentalmente, la simpatía de la población.

El predio ‘tomado’ había pertenecido a la cadena de supermercados de la Cooperativa El Hogar Obrero, desaparecida en 1990, cuando los trabajadores ocuparon el local durante meses, y en una lucha memorable sostuvieron el conflicto hasta lograr el traspaso empresarial y la conservación de los puestos de trabajo. Afirma Borges que al destino le agradan

las repeticiones, las variantes, las simetrías: diez años después, muchos de esos trabajadores vuelven a protagonizar la misma historia, y no como farsa, sino otra vez como tragedia.

Se ha desarrollado un comportamiento gremial que otorga centralidad a la recuperación de los puestos de trabajo generando estrategias que vehiculizan la unificación de las protestas con distintos sectores gremiales y sociales, y generan lazos de reciprocidad entre distintos sectores que garantizan la presencia constante en la “toma” y la permanencia del apoyo solidario. En este sentido se reactivó –por miembros de la comunidad universitaria– un Centro Cultural que existía en tiempos de El Hogar Obrero, y se estudia la posibilidad de instalar un comedor universitario en

“...comienza un proceso de protagonismo gremial de los empleados, que anteriormente delegaban sus demandas en el sindicato, iniciándose una “apropiación” de las experiencias y la resolución protagónica de las problemáticas gremiales.”

acuerdo con la Universidad Nacional de Rosario. La recuperación de los puestos simbolizaría un gol para la clase trabajadora y para quienes comienzan a indicar un sendero de cómo organizar democráticamente una lucha.

Las autoridades aún no se han definido. En tanto, el conflicto se desarrolla en un “tire y afloje” donde no está ausente la novedosa “criminalización de la protesta social”, citándose a declarar a varios trabajadores bajo el cargo de usurpación.

Una aspecto gravitante en esta experiencia es que parte de estos trabajadores venían participando en la constitución de una Comisión de Acción Gremial en el seno de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario⁸. Esta Comisión de activistas surge cuando los conflictos con los supermercados se sucedían ininterrumpidamente⁹ y se fue fraguando en la lucha por la vigencia de la Ley de Descanso Dominical. En ese transcurso comienza un proceso de protagonismo gremial de los empleados, que anteriormente delegaban sus demandas en las distintas oficinas del sindicato, iniciándose una “apropiación” de las experiencias y la resolución protagónica de las problemáticas gremiales.

La Comisión se ha desarrollado promoviendo la movilización, la difusión de sus demandas, llevando su solidaridad a otros sectores en lucha e incorporando cada vez más miembros en la discusión y decisión de las actividades¹⁰. Lo distintivo no es sólo su funcionamiento, participativo y democrático, sino que se constituye como un lugar de *encuentro* y *transmisión* de *experiencias* provenientes de *culturas* obreras diferentes, ya sea por proceder de distintos gremios o por pertenecer a franjas etarias distantes. Una herramienta de trabajo del grupo es la publicación *La hoja mercantil*, cuyo contenido se discute en las reuniones y cuya distribución se reali-

za mano en mano, garantizando un estrecho contacto con el conjunto del gremio¹¹. Esta publicación difunde los problemas de los trabajadores mercantiles, llama a la solidaridad con otros gremios en lucha y relata alguna anécdota cotidiana que remite a la apropiación de las experiencias. Es en la difusión de estas ‘anécdotas’ donde se revitalizan hebras de la experiencia social que no están totalmente destruidas, que demandan la atención de los críticos sociales y que muestran, como decía Santiago Wallace, que “en algún nivel se están gestando espacios posibles de resistencia.” (Wallace, 1997).

■ **Estudiantes universitarios: entre el rechazo a los ‘aparatos’ y el temor a la dispersión**

Aprobada en el mes de julio la Ley Déficit Cero, el ajuste cae principalmente sobre los jubilados y empleados estatales¹². Con un descuento inicial del 13% en sus salarios, los docentes universitarios inician un proceso de lucha que aún se extiende, en contra del ajuste presupuestario y por la defensa de la universidad pública.

Si bien se trata del más importante conflicto de alcance nacional, nos interesa tratar el surgimiento de las Coordinadoras de Lucha en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) por el carácter masivo de la participación y movilización –fundamentalmente estudiantil– y por el cuestionamiento furibundo hacia los aparatos burocráticos.

Con la determinación de generar espacios autónomos de deliberación para la defensa de la universidad pública y gratuita se forma La Coordinadora de Lucha Interclaustró en la Facultad de Humanidades y Artes, iniciándose un proceso de participación masiva que se hace extensivo a otras facultades. “Paremos el ajuste cambiando el sistema” es la consigna de una bandera gigante que cuelga en la entrada de la facultad, pintada por estudiantes que comenzaron a sentirse protagonistas de las asambleas, clases públicas, peñas, marchas, *batucadas* e incontables actividades, entre las que sobresalieron el abrazo al Monumento Nacional a la Bandera –con miles de personas repudiando la política gubernamental– y la creativa puesta en escena “UNR Liquida”¹³.

La característica sobresaliente de las Coordinadoras –ya en plural al propagarse la modalidad organizativa a otras facultades– fue el rechazo al burocratismo de los Centros de Estudiantes, pero extensivo a cualquier encuadramiento partidario o representación que subsumiera o redujera la dinámica colectiva del proceso. “Ni un partido político, ni una institución estatal podrían haber llevado a cabo esta experiencia. Quienes hicieron esto son aquellos que no llevan adentro la rutinaria militancia de la mesita y el panfleto; los que se dan el lujo de pensar la realidad de mil formas distin-

tas y eso no les impide hacer [...] Sin duda todo esto fija un antes y un después en el movimiento estudiantil.”, señala un estudiante en el Boletín de Las Coordinadoras.

Ciertamente, una constelación de heterogeneidades hermanadas bajo el común rechazo a las formas tradicionales de hacer política encuentra su lugar en las Coordinadoras. El arco iris va desde la resistencia a todo tipo de representación a la pretensión de conformarse como lista alternativa que dispute la conducción de los centros estudiantiles. Abrumados por la participación directa en innumerables tareas votadas en las asambleas y angustiados por la inexperiencia, los estudiantes reflexionan sobre la dinámica de sus propias prácticas repasando esta experiencia en donde asoman distintas proyecciones alternativas o superpuestas: la Coordinadora como *locus* de democracia directa; la Coordinadora como espacio efervescente desde donde se derraman la creatividad y la autodeterminación; la Coordinadora como lista para las próximas elecciones de centros estudiantiles.

La complejidad de los procesos sociales muestra que al tiempo de constituirse como el lugar de encuentro de las heterogeneidades anti-burocráticas, las Coordinadoras han sido también un espacio de organización y de poder incipientes. Se han organizado para protestar, para proponer nuevas formas de producción académica, para hacer banderas, afiches y volantes, para editar un boletín, para recaudar fondos, para manejar esos fondos, para solidarizarse con los



trabajadores que luchan, para aportar fondos a los trabajadores que luchan. Han mostrado su capacidad de convocatoria frente al oficialismo y, sin embargo, persiste un terrible temor a proponerse y reconocerse como lo que en los hechos son: una alternativa política, inexperta, débil, en formación, pero altamente saludable.

■ El movimiento piquetero local

Un conjunto de particularidades que se observan a nivel local respecto de los piqueteros, previene sobre el uso de categorías acabadas. Es decir, no queremos realizar definiciones que eviten la ‘fatiga de la investigación empírica’, la que siempre nos muestra y nos demuestra que los procesos sociales son dinámicos y no existen las formas puras. En ese sentido, nos referiremos por el momento y provisoriamente, a los piqueteros en la ciudad de Rosario.

No es poco frecuente que se los considere como nuevos sujetos sociales colectivos que desarrollan actividades de resistencia. Pero el término *piqueteros* alude a conjuntos que se sostienen históricamente y locativamente en formas diferentes. No son lo mismo los trabajadores de la General Motors que con un piquete en día de huelga impiden el ingreso a la fábrica, o los que cortan la ruta demandando la reincorporación de despedidos, que los piquetes barriales cortando rutas o calles en demanda de planes de trabajo, o los que se realizan en las puertas de los supermercados pidiendo alimentos, etc.

Todos son, sin embargo, un modo de protesta que se ha generalizado al ritmo de la presión del desempleo.

El movimiento de piqueteros en Rosario está coordinado por Federación de Tierra y Vivienda (FTV) de la que participan la rama Barrios de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y comunidades eclesiales. Se organizan a través de Centros Comunitarios, desde donde dirigen sus demandas al estado.

La Federación de Tierra y Vivienda se afirma en Rosario durante el año 2000 con la Marcha Grande, y el Seguro de Empleo y Formación. Nació alrededor del problema de los asentamientos irregulares, pero actualmente “mantener, sostener y conseguir los planes de empleo”¹⁴ constituye el motor fundamental de todas las peleas y el punto de encuentro de todos los sectores que conforman la Federación.

No se trata de un nucleamiento homogéneo: la composición de los grupos varía en virtud de las tradiciones que portan. En los barrios donde la mayoría de la población es estructuralmente pobre, salir a pedir comida para la olla del Centro Comunitario es una actitud *natural*, pero en aquellos otros que están habitados por trabajadores –activos o desocu-



pados– con tradiciones de clase, el orgullo y la vergüenza delegan la demanda en manos de las mujeres, quienes salen a la calle a resolver la inmediatez del problema del alimento¹⁵.

Se organizan en reuniones abiertas donde participan representantes de distintos barrios, siendo más numerosas aquellas en que se discute la obtención de planes de empleo. En su demanda, se han realizado movilizaciones conjuntas de todos los sectores de la Federación a través de marchas, cortes e instalaciones de carpas.

Los centros comunitarios y la participación crecen cuantitativamente, y al reclamo de planes de empleo se suman demandas de bolsones de comida en supermercados o en organizaciones gremiales dispuestas a distribuirlos. El encuentro diario para comer se fue dando naturalmente, encaminándose como espacio de contención. “...para nosotros es bueno, porque de hecho la gente no come en sus casas..., aunque ese no sea nuestro objetivo final”, señala un dirigente.

Si el problema fundamental es el seguro del alimento, esto sería un indicador de que se trata de una lucha de *consumidores* que plantea expectativas diferenciales respecto de su dinámica política. El tipo de reclamo cita a los saqueos producidos en la ciudad de Rosario en 1989, donde –en medio de una crisis inflacionaria sin precedentes– una marea humana se volcó a los supermercados en procura de alimen-

tos. Para entonces, el cordón industrial de Rosario y Gran Rosario estaba profundamente afectado por el proceso de desindustrialización, y los índices de desocupación ascendían al 14%.

Actualmente el cordón industrial es un lejano recuerdo, y la ciudad ocupa el segundo lugar nacional en número de desocupados, llegando los guarismos al 20%. “Las autoridades no toman conciencia de que el estallido que se viene es mucho peor que el del ‘89”, afirmó el padre Joaquín Núñez. “Mientras que en aquel momento había una situación política especial que dio marco a los saqueos, ahora la gente sólo pide comida (...), la sociedad está paralizada y existe una gran alarma por el futuro que se viene”, declara en el marco del Primer Encuentro de Capellanes Hospitalarios del Cono Sur¹⁶.

¿Por qué no se han producido revueltas al estilo del ‘89? La situación objetiva se presenta como un escenario propicio, y el tema de los saqueos es constante en los barrios, donde ya resultan insuficientes las políticas asistencialistas que el estado implementó a partir de los sucesos de 1989.

Un aspecto a estudiar –entre otros– es el encauce que ofrecen las organizaciones como la FTV, que sin la intención de actuar como elemento de contención “(canalizan) la cosa por el lado de la organización. En el ‘89 no había organizaciones de este tipo en los barrios...”, “si no hacemos los piquetes, vienen los saqueos. No hay una instancia más intermedia”¹⁷.

■ Poder saber, saber hacer...

Atendiendo los profundos procesos de cambio social, es necesario más que nunca investigar los contenidos cualitativos de las acciones que permitan establecer regularidades explicativas. La discusión es crucial y puede progresar dentro de los contextos donde se producen los conflictos. Quedan muchos interrogantes a trabajar. Entre ellos, cuál es el contenido y el límite político de estas demandas dirigidas principalmente al estado.

Ya se ha planteado el problema de la fragmentación de las protestas como un rasgo característico de los movimientos sociales que obstaculiza la unidad (Vakaloulis, 2000). No se trata de una cuestión menor, ya que “Si se consigue aislar a la gente lo suficiente, no importa en realidad lo que piense” (Chomsky, 1995) La experiencia local muestra el desarrollo de comportamientos que intentan superar el ais-

lamiento y desarrollar la participación, pero aún son insuficientes. Rosario es una constelación de conflictos que apa-

recen como manchones en la geografía local. Docentes universitarios, docentes provinciales, trabajadores del estado, de la industria láctea, de la carne, automotrices, portuarios, mercantiles, estudiantes, piqueteros, mujeres en defensa de la vivienda única, gays, jubila-

dos, relampaguean alternativamente. En ocasiones, la potencia de algunos de estos sectores ilumina suficientemente el panorama y convoca a la unidad, pero aún no llegan a desencadenar la tormenta.

■ Bibliografía

Azpiazu, D. y Nochteff, H. 1995 *El desarrollo ausente. Restricciones al desarrollo, neoconservadurismo y elite económica en la Argentina. Ensayos de Economía Política* (Buenos Aires: Flasco –Tesis/Norma).

Basualdo, Eduardo 2000 *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa* (Buenos Aires: UNQuilmes, Flasco, Idep.).

Boron, Atilio 2000 *Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).

Bourdieu, Pierre 1995 *Respuestas. Por una antropología reflexiva* (México: Grijalbo).

Chomsky, Noam 1995 *Política y cultura a finales del Siglo XX* (Barcelona: Ariel).

Marx, K. y Engels, F. 1985 (1932) *La ideología alemana* (Buenos Aires: Pueblos Unidos).

Rodríguez, Gloria 2001 “Notas para pensar el ordenamiento natural de la economía y la naturaleza de las respuestas sociales. La ley natural de la oferta y la demanda, reserva de mercados y privatizaciones en la Argentina”, en *Revista de la Escuela de Antropología* N° V, en prensa.

Vakaloulis, Michel 2000 “Antagonismo social y acción colectiva” en *OSAL* (Buenos Aires) N° 2, Septiembre.

Wallace, Santiago 1997 “Trabajo y subjetividad. Las transformaciones en la significación del trabajo”. *Actas de las Jornadas de Antropología de la Cuenca del Plata* (Rosario: Escuela de Antropología-UNR).

“...En el ‘89 no había organizaciones de este tipo en los barrios..., (hoy) si no hacemos los piquetes, vienen los saqueos. No hay una instancia más intermedia.”

■ Notas

1 Baudelaire reconoce en Caín, desde su comprensión libre de los desheredados, al fundador de la raza proletaria.

2 También para P. Bourdieu (1995) los sistemas de clasificación constituyen la *postura de luchas* que oponen “a los individuos y los grupos en las interacciones rutinarias de la vida cotidiana, lo mismo que en las contiendas individuales y colectivas que se verifican en los campos de la política y de la producción cultural”. Un campo es un *espacio de conflictos y competición*, donde se busca imponer un tipo específico de autoridad, de manera de poder decretar jerarquías y “tasas de conversión” entre las diversas autoridades del campo.

3 Azpiazu y Nochteff (1995) sostienen que durante la etapa de la industrialización sustitutiva de importaciones lideradas por empresas transnacionales (ISIET) se asistió a un *empate social* que acotó el comportamiento de la élite en el marco de un proceso industrial relativamente dinámico.

4 Planteamos el término ‘contención’ en el doble sentido de inclusión morigeradora de asimetrías y de sofreno de comportamientos explosivos.

5 Confederación General del Trabajo (CGT); CGT Rebelde, ambas en proceso de unificación y Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

6 La Multisectorial está integrada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), gremios independientes, organis-

mos de derechos humanos, Federación Universitaria de Rosario (FUR), Federación Agraria, Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME) y partidos políticos.

7 “El Honorable Concejo Municipal expresa su respaldo a las gestiones que llevan adelante los trabajadores del Supermercado Tigre (Tucumán 1349) con el objetivo de sostener sus puestos de trabajo y concretar un emprendimiento económico que dé respuesta a sus necesidades. Antesalas, 24 de septiembre del 2001”.

8 Un dato de importancia cuantitativa y cualitativa es que la Asociación Empleados de Comercio es la entidad sindical numéricamente más importante de la ciudad, agrupando alrededor de 26.000 afiliados activos.

9 Ver “Los constructores de estrategias sindicales. La estructuración de la experiencia social de trabajadores en situación de conflicto en la ciudad de Rosario a fin de milenio”, ponencia presentada por Julián Gindin, Gloria B. Rodríguez y Julia Soul, en la III Reunión de Antropología del Mercosur (RAM)-Misiones, noviembre de 1999.

10 Estas actividades consisten en actos; movilizaciones convocando a todos los sectores gremiales y populares; charlas sobre salud y legislación laboral; cine-debate; cursos sobre historia de movimiento obrero argentino; convocatorias a la participación de intelectuales y profesionales; participación solidaria en los conflictos de otros gremios o sectores populares; participación en las convocatorias realizadas desde instituciones académicas de la universidad o agrupaciones universitarias. El tipo



de funcionamiento recuerda las modalidades y conductas de los inicios del movimiento obrero. A los cursos asisten los trabajadores, pero con la difusión previa de la bibliografía, de manera que la participación es sumamente activa, lo que les permite reflexionar fértilmente sobre sus propios procesos. Un hecho significativo es la conmemoración del 1 de mayo, donde anualmente se entona La Internacional y las palabras del Secretario General insisten en que se trata de un día de lucha, conquistado con la sangre obrera.

11 El sindicato, por su parte, edita el periódico Unión desde hace varias décadas.

12 La Ley de Déficit Cero implica una reducción del déficit fiscal que afecta el salario de los trabajadores estatales y los haberes jubilatorios. Como el gasto del estado depende directamente de la evolución de los ingresos públicos, que como consecuencia de la caída del consumo que provoca el ajuste se ven mermados, la crisis se retroalimenta permanentemente.

13 Refiere a una instalación urbana que, al modo de supermercado callejero, entre otras cosas, ofrecía el “Shampoo Ideal”, con dogma incluido, que “protege tu cabeza contra la realidad social, dejándolo dócil y fácil de manejar”, o títulos inéditos como “Más allá del arancel” o “Lo que el FMI se llevó”. En la carpa de la Federación Universitaria de Rosario (FUR) “se montó el ‘Despelotero’, donde el

juego era ‘tirarse la pelota entre sí y no hacerse cargo’...”
Boletín de la Coordinadora, septiembre/octubre.

14 Palabras de un dirigente de la CTA Barrios. Entrevista 11-9-01.

15 En una entrevista reciente un dirigente de la CTA Barrios, plantea que “son diferentes las realidades de los barrios y las distintas culturas que hay en los distintos barrios. Hay barrios donde son pobres estructurales, años de vivir en la villa, y que tienen una forma de rebusque ya... Digamos: pasa un carrito y viene uno de los muchachos que sale con el carrito a las cinco de la mañana, llega a eso de las once del mediodía y tiene pollo, carne, y lo cambia con el que fue a manguear al mercado verdura o lo vende por un peso, y con ese peso él se compra otras cosas (...) y en otros barrios como el mío, donde la mayoría eran laburantes hasta hace seis o siete años atrás, del frigorífico, talleres, eran obreros calificados y que se quedaron sin trabajo. Entonces ahí no está armado el tema de salir a bancar el sustento diario con este tipo de cosas y donde hay una cuestión de... no de orgullo ¡bah!, es de orgullo, también, de decir: no voy a pedir. Y hay que rearmar todo eso porque la realidad te muestra que si no pedís no comés”.

16 Diario El Ciudadano, Rosario, 11 de septiembre de 2001.

17 Dirigente de la FTV, entrevista 17-10-01.



Documentos del Conflicto

PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES, TERRITORIALES Y DE DESOCUPADOS

El 24 de julio de 2001 se realiza la Primera Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados en el galpón de la parroquia del Sagrado Corazón, perteneciente a una congregación salesiana, en el partido de La Matanza, Pcia. de Buenos Aires. Este encuentro, que tuvo lugar a casi dos semanas del anuncio gubernamental del paquete de medidas bautizado “Déficit Cero”, constituyó, por primera vez, un espacio de coordinación a nivel nacional, de las organizaciones y colectivos de trabajadores desocupados que en el pasado habían protagonizado intensas protestas, pero de carácter local.

Impulsada por la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, de la Central de Trabajadores Argentinos (FTV-CTA), el Movimiento de Desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Polo Obrero, entre otras organizaciones, la asamblea convocó la participación de representantes de grupos de trabajadores desocupados de casi todo el país, así como también de desalojados del Bajo Flores, encargados de comedores escolares, jubilados, docentes bonaerenses, de la Universidad de Buenos Aires y vecinos autoconvocados.

A continuación presentamos el plan de lucha surgido de la misma.

RESOLUCIONES DE LA PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES, TERRITORIALES Y DE DESOCUPADOS

37

- Realizar cortes progresivos en las principales 50 rutas del país a partir del martes próximo, 31 de agosto y de 48 y 72 horas para los martes siguientes.
- Reclamar la liberación de los presos sociales.
- Rechazar el plan de ajuste del gobierno nacional, adoptado para lograr el déficit cero.
- La conservación de todos los planes “Trabajar”, y la adjudicación de nuevos planes para los jefes y jefas de familia desocupados.

*La Matanza (Pcia. de Buenos Aires)
24 de julio de 2001*

SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES, TERRITORIALES Y DE DESOCUPADOS

El martes 4 de septiembre se realiza la Segunda Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados convocada por las principales organizaciones de desocupados, nuevamente en las instalaciones de la parroquia del Sagrado Corazón, en el Partido de La Matanza, Pcia. de Buenos Aires.

En la misma estuvieron presentes más de 2000 personas integrantes de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV-CTA), del Movimiento de Desocupados (CCC), del Polo Obrero, del Movimiento Territorial Liberación (MTL), del Movimiento "Teresa vive", del Movimiento Teresa Rodríguez, organizaciones de General Mosconi (Pcia. de Salta), de La Quiaca (Pcia. de Jujuy), de Río Cuarto y Cruz del Eje (Pcia. de Córdoba), de Catamarca, de Chaco -entre otras-, así como representantes de distintos movimientos de desocupados de diferentes regiones y localidades del país.

A continuación presentamos las resoluciones adoptadas en esta asamblea.

RESOLUCIONES DE LA SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES, TERRITORIALES Y DE DESOCUPADOS

Los trabajadores aquí reunidos planteamos como objetivos inmediatos de nuestra lucha:

- ✓ Los reclamos de nuestro plan de lucha, que están hoy más vigentes que nunca: la derogación del ajuste expuesto en la ley del déficit cero y la libertad y el desprocesamiento de los luchadores.
- ✓ El retiro del proyecto de presupuesto que consagra la profundización de la masacre social de nuestras familias y nuestros hijos.
- ✓ La defensa y la extensión de los planes de empleo y comida a cada trabajador desocupado mayor de 16 años, estableciendo el reempadronamiento masivo bajo el control de las organizaciones de esta Asamblea nacional, rechazando la disminución de las asignaciones y el pago en bonos.
- ✓ Cien pesos por hectárea para los pequeños y medianos chacareros para poder sembrar.
- ✓ Prohibición de despidos y suspensiones.
- ✓ Retiro inmediato de la Gendarmería de General Mosconi.

Convocamos, como continuidad de nuestro plan de lucha, a:

- 1) Cortes de ruta a lo largo y ancho de todo el país por 24 horas, desde las 12 hs. del jueves 6 de septiembre hasta las 12 hs. del día siguiente, con cortes de acceso a las plantas industriales, por puestos genuinos de trabajo, confluyendo el viernes 7 con el paro nacional y movilización de los trabajadores estatales.
- 2) Asambleas piqueteras en cada provincia, municipio o distrito para unirnos con todo el movimiento obrero y popular en lucha o enfrentado al régimen, y deliberar juntos para actuar por nuestras reivindicaciones y plantear una salida nuestra frente a la crisis, desde ahora mismo.
- 3) Corte de ruta por 36 hs., desde las 12 hs. del jueves 20 hasta el día siguiente, para confluir en la Plaza de Mayo y en las plazas de cada provincia y localidad, en una gran tribuna

de lucha por la derogación del ajuste, del presupuesto del hambre y por la libertad y desproceso de los luchadores.

4) Convocar a una tercera Asamblea Nacional abierta a todas las organizaciones de trabajadores en el mes de octubre, con el método planteado aquí de un representante cada 20 compañeros organizados, ocupados o no, para resolver la continuidad de nuestro plan de lucha y un programa de salida a la crisis. Para este programa, esta Asamblea enarbola cinco ideas fundamentales:

- No al pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta.
- Reestatización de las AFJP¹.
- Renacionalización de los bancos y empresas estratégicas.
- Condonación de la deuda usuraria a los chacareros pequeños y precio sostén en origen para ellos.
- Fuera el régimen hambreador; no al gobierno de salvación nacional, que es sólo un recambio en las propias filas de los ajustadores.

5) Reclamar y organizar un paro activo nacional de 36 horas y la huelga general.

6) Constituir en esta misma Asamblea una Mesa de coordinación nacional. De su seno surgirá una Mesa de Enlace con las centrales de trabajadores. La primera tarea de esta Mesa será, con la mejor disposición posible, buscar puntos de coordinación con las iniciativas elaboradas y puestas en marcha por la Central de Trabajadores Argentinos.

*La Matanza (Pcia. de Buenos Aires)
4 de septiembre de 2001*

¹ Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.



FRAGMENTOS DE ENTREVISTAS A LUIS D'ELÍA (FTV-CTA) Y JUAN CARLOS ALDERETE (CCC)

Apartir de mediados del año 2000 comienzan a realizarse los primeros cortes masivos de la ruta nacional N° 3, en el populoso partido de La Matanza, en el conurbano de la Pcia. de Buenos Aires. Protagonizados por trabajadores desocupados de la zona en reclamo de “planes Trabajar”, partidas alimentarias, puestos sanitarios –entre otras demandas–, los mismos fueron organizados conjuntamente por la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y por el Movimiento de Desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

La experiencia de este movimiento en La Matanza –que protagonizó, en los primeros meses de 2001, dos importantes movilizaciones a la Ciudad de Buenos Aires y realizó en mayo un extendido corte de ruta de diecisiete días– jugó un papel significativo en la convocatoria y organización de las asambleas nacionales de desocupados, cuyas resoluciones presentamos anteriormente.

Durante los actos y asambleas que se suceden en los piquetes, los dirigentes de estas dos organizaciones, Luis D'Elía (FTV-CTA) y Juan Carlos Alderete (CCC), realizan sus discursos “a dúo”, compartiendo de a fragmentos el hilo expositivo. La significación de esta novedosa práctica los ha llevado incluso a adoptarla en algunos actos en la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires.

Intentando reflejar este espíritu, presentamos a continuación fragmentos de las declaraciones que realizaron Juan Carlos Alderete –ante medios periodísticos el 21 de junio de 2001– y Luis D'Elía –extraídas de un comunicado de prensa de la CTA de la primera semana de agosto del presente año.

Juan Carlos Alderete (21 de junio de 2001):

“Nos venimos organizando desde hace 3 años. Tenemos 16 barrios unidos que funcionamos en asambleas, con delegados con mandato revocable. En el día de hoy salimos a cortar la ruta para asegurar que sea un paro total, para repudiar el terrible ajuste que está sufriendo el pueblo y en particular nuestro reclamo es mayor presupuesto para todos, los planes sociales, por los Planes Trabajar, por los Planes Bonaerenses y también por un subsidio para todos los desocupados del país.”

“Tratamos de confluir con los compañeros obreros que están activos, en la práctica. Entendemos que hoy los gremios le hacen tener miedo, nosotros confluimos en la práctica cuando se cierra alguna fábrica o se quiere echar. Lo venimos haciendo con los pequeños comerciantes, acá en La Matanza, los martes con los comerciantes de Isidro Casanova y eso ha hecho que no puedan poner el Supermercado Coto. A nivel nacional, tenemos que ir a un gran movimiento de todos los desocupados que hoy son más de 2.500.000 y 2 millones de subocupados. Debemos dejar atrás los intereses sectoriales y sectarios para poder confluir con este movimiento.”

“Nosotros somos conscientes de que el movimiento de desocupados es transitorio, para insertarnos nuevamente en el mercado laboral. La única manera que los desocupados vuelvan a las fábricas es cambiando esta política, porque es la misma aplicada desde la dictadura que hizo desaparecer 30.000 personas, la siguió Menem y ahora la sigue de la Rúa. Sabemos que si sigue esta política y este gobierno, van a seguir estos planes. Pero nosotros tenemos que comer salteado, los Planes Trabajar nos sirven para ir paleando la difícil situación que tenemos, pero también para ir organizándonos, porque muchas veces se habla de dignidad pero la dignidad comienza en si uno tiene para comer o no.”

Luis D'Elía (6 de agosto de 2001):

“Hay algo que sabemos: grandes sectores de la clase obrera ahora están en los barrios: son los desocupados. Una de las trampas de este gobierno es pretender que las organizaciones barriales sean “espontáneas”. No. No lo son. No se podrían organizar cortes el mismo día y al mismo tiempo en todo el país, tal como lo venimos haciendo, de manera espontánea. Estamos organizados”.

“Y esta organización tiene muchos esfuerzos, muchos años de construcción. Cuando comenzamos hace más de una década, el problema fundamental de la gente era la vivienda, era tener la tierra para construir su casa y ponerse al amparo de las vicisitudes: era la época de la toma de tierras... ése era el problema fundamental. Ahora es peor, ahora es la falta de trabajo. Se produce durante el menemismo y se acelera con este gobierno: es lo que dije al principio, la fábrica está en el barrio, ya que la mayoría de las fábricas han bajado sus puertas. Es entonces cuando aquellas organizaciones barriales, provinciales, comienzan con los piquetes, los pedidos de trabajo. Quiero decir, existe una sincronía entre las fábricas vacías y los piqueteros. Es hacia donde los gobiernos nos vienen empujando: ellos están para defender sólo a los grandes grupos económicos, a las ganancias de estos grupos –y en esto no se equivocan nunca– siempre contra la gente, siempre contra los trabajadores, contra los niños, contra los ancianos”.

“Hay que entender que, con estos cortes, no sólo pedimos trabajo, sino que estamos cuestionando, por perverso, este modelo económico social. Por eso, no sólo estamos luchando por lo inmediato, como son los planes Trabajar, estamos luchando por cambiar este modelo, porque haya trabajo y vida digna para todos los argentinos. A ver si somos claros: nadie se conforma con un plan de 120 pesos. No lo despreciamos pero no es eso. Repito, los millones de desocupados no están pidiendo miserias, están luchando por una sociedad digna”.

“Por eso este martes lanzamos un plan de lucha a nivel nacional de 48 horas de corte de ruta y el miércoles marcharemos acoplándonos a la huelga general propuesta por nuestra central. Es una lucha dura y lo seguirá siendo mientras no logremos con fuerza propia, torcer este destino de hambre, de sin futuro, al que nos vienen sometiendo estos desdichados gobernantes que tenemos”.



MOVIMIENTO POR LA CONSULTA POPULAR FRENTE NACIONAL CONTRA LA POBREZA

El 14 de julio de 2001, con la participación de más de 70 organizaciones de todo el país y más de 400 delegados, sesionó en el local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Ciudad de Buenos Aires, la Primera Asamblea Nacional de Juntas Promotoras por la Consulta Popular bajo el lema “Ningún hogar pobre en la Argentina”. La misma fue coordinada por el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Víctor De Gennaro, y contó con la presencia de representantes de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME), de la Federación Agraria Argentina, de la Federación Universitaria Argentina, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, del Centro de Estudios Legales y Sociales y algunos diputados nacionales, entre otras organizaciones.

La iniciativa de la Consulta Popular y del llamado Frente Nacional Contra la Pobreza es resultante de un largo proceso que tiene entre sus hitos iniciales el lanzamiento, en mayo de 2000, de una campaña para recolectar un millón de firmas con el fin de que el Parlamento –en el marco del derecho a Consulta Popular establecido en la reforma constitucional de 1994 y aún no reglamentado– resolviera la convocatoria a la misma para decidir sobre la propuesta de un Seguro Universal de Empleo y Formación para jefes y jefas de familia desocupados de \$ 380, entre otras cuestiones. Estos objetivos inspiraron la denominada Marcha Grande que, impulsada por la CTA, unió a pie la ciudad de Rosario (Santa Fe) con la Ciudad de Buenos Aires, a través de 15 días y más de 300 km. de caminata. En el acto de cierre de la misma, el 9 de agosto de 2001, se presentaron ante el Parlamento las firmas recolectadas para avalar la Iniciativa Legislativa.

42

A lo largo de 2001, la propuesta de Consulta Popular se consolidó como un objetivo a realizar por el propio movimiento y se conformaron más de 60 Juntas Promotoras en todo el país, con el sentido de organizarla hacia fines de año. Estas Juntas confluyeron en la Primera Asamblea de Juntas Promotoras, cuyas resoluciones publicamos en el presente número del OSAL.

En esa oportunidad, Víctor De Gennaro resumió dicha iniciativa, afirmando: “Ante la propuesta del Gobierno de convocar a la unidad nacional a favor del ajuste, nosotros proponemos desde aquí la construcción de un **Frente Nacional Contra la Pobreza**, con tres consignas principales: **frenar el ajuste, recuperar la democracia y generar las condiciones para una distribución del ingreso** que obedezca a las verdaderas necesidades de nuestro pueblo” (el resaltado es del autor).

A continuación presentamos fragmentos de las resoluciones adoptadas por la asamblea y de uno de los documentos base constitutivo del Movimiento por la Consulta Popular.

FRAGMENTO DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR
LA ASAMBLEA NACIONAL DE JUNTAS PROMOTORAS
POR LA CONSULTA POPULAR

Cronograma de actividades resueltas por la Asamblea:

• **Paro y movilización de ATE.** Se convoca a todas las organizaciones integrantes del Frente Nacional Contra la Pobreza para participar activamente el miércoles 18 de julio en el Paro Nacional con movilizaciones, decretado por la Asociación Trabajadores del Estado.

• **Encuentro en La Matanza.** Se adhiere al Encuentro Nacional de Organizaciones de Desocupados y Piqueteros que tendrá lugar el 24 de julio en el Santuario Sagrado Corazón de Jesús de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. La idea de este cónclave es lograr establecer los mecanismos de coordinación de las luchas territoriales.

• **Clases para cambiar la realidad.** La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) abrirá las escuelas el sábado 25 de agosto, con la finalidad de trasladar y debatir con toda la comunidad educativa, los alcances de la propuesta del Frente Nacional Contra la Pobreza.

• **Marcha por la Argentina.** El 11 de septiembre partirá desde el Congreso de la Nación, hacia el interior del país, una marcha que a través de 7 columnas recorrerá durante 10 días las ciudades más importantes de la República. Transitará por todas las provincias argentinas para concluir en Puerto Iguazú (Misiones), Clorinda (Formosa), San Miguel de Tucumán, La Quiaca (Jujuy), Mendoza, Neuquén y Ushuaia (Tierra del Fuego).

• **Consulta Popular.** El 10 de diciembre se desarrollará la Consulta Popular por un Seguro de Empleo y Formación de \$ 380 para todos los jefes o jefas de hogar desocupados y una Asignación Universal por Hijo de 0 a 10 años de \$ 60 para todos los trabajadores¹.

• Mientras tanto, se continuará con la conformación de nuevas juntas promotoras en toda la Argentina, se avanzará en los aspectos organizativos de la herramienta política y se incrementará la tarea de difusión de la iniciativa.

*Ciudad de Buenos Aires
14 de julio del 2001*

¹ La Consulta Popular fue convocada, finalmente, para el 13, 14 y 15 de diciembre de 2001.

FRAGMENTO DEL DOCUMENTO BASE
CONSTITUTIVO DEL MOVIMIENTO
POR LA CONSULTA POPULAR

Democracia por nosotros mismos

Luego de más de treinta y cinco meses de recesión ininterrumpida, que han puesto en situación de colapso el cuadro social de nuestro país y en un contexto donde el endeudamiento externo pone al borde de la cesación de pagos a la economía nacional, resulta por demás evidente el fracaso del modelo neoliberal en la tarea de organizar nuestra sociedad.

Las consecuencias de este proceso de crisis quedan a la luz: 14 millones de pobres, 7 millones de personas con problemas de empleo, desindustrialización y quiebra de decenas de miles de pequeñas y medianas empresas, urbanas y rurales y la parálisis expresa del mercado interno de demanda masiva.

Frente a este cuadro de situación, de creciente concentración de la riqueza, se plantea como prioritario una redistribución progresiva del ingreso. En este sentido el Movimiento por la Consulta Popular propone la instrumentación de un **Seguro de Empleo y Formación de 380 pesos para jefes y jefas de familia desocupados y el establecimiento de una asignación universal de 60 pesos por hijo**, que garantice que ningún hogar argentino viva en condiciones de pobreza.

• *¿Por qué la Consulta Popular?*

En el último tiempo se han puesto de manifiesto el rápido deterioro del gobierno actual y el cuadro de vaciamiento político expresado en la incapacidad de las denominadas instituciones públicas para asumir y resolver la situación social imperante, hecho que no hace más que agravar los efectos de la sostenida crisis económica y social.

En este contexto que ratifica como dilema central de la Argentina la opción entre democracia o ajuste, el Movimiento por la Consulta Popular sostiene que la condición para hacer factible un proceso de redistribución más justo de los ingresos y la riqueza es la permanente democratización de la sociedad.

En esta dirección, y con el objeto de ponerle límites a las prácticas de los sectores dominantes que han desencadenado el proceso de deterioro y degradación social que atravesamos, creemos indispensable garantizar la manifestación autónoma, expresa y organizada de la propia comunidad. Este es el camino que propone recorrer la **Consulta Popular**.

• *¿Qué es la consulta popular?*

La consulta popular es la estrategia que hemos optado para que los argentinos podamos resolver la crisis de una manera diferente de la que nos quieren imponer como única alternativa los sectores de poder. Proponemos el ejercicio masivo de la democracia directa garantizando la manifestación autónoma y organizada de la propia comunidad a través de la realización de una consulta popular a nivel nacional.

Sólo profundizando el proceso de democratización es que podremos poner límite a las prácticas de los sectores dominantes.

Marzo de 2001

Mayo – agosto 2001

Neoliberalismo, crisis y resistencias sociales en América Latina: las configuraciones de la protesta¹



Por José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati

■ El crecimiento de la protesta social



A lo largo del segundo cuatrimestre de 2001 las acciones de conflicto se multiplican y crecen significativamente en la región latinoamericana. En términos cuantitativos los registros de protesta contabilizados por el OSAL para dieciocho países latinoamericanos se incrementan en un 64% en relación con los primeros cuatro meses del año, pasando de 1.221 hechos a 2.003. Este proceso adopta un carácter general verificándose, en distintas proporciones, en la amplia mayoría de los casos nacionales considerados. En este sentido, vale señalar que sólo dos países (Venezuela y Puerto Rico) muestran registros menores a los del período anterior (enero-mayo). El incremento de las movilizaciones, huelgas y bloqueos de rutas impulsadas por distintos colectivos y organizaciones se manifiestan –como ya lo habíamos señalado en el número pasado– en un contexto regional signado por la expansión y agravamiento de la crisis económica. En respuesta al deterioro social que ésta implica y a los intentos, por parte de la mayoría de los gobiernos de la región, de responder a esta situación con políticas de corte neoliberal –particularmente de reducción del gasto fiscal–, el aumento de la conflictividad social muestra características particulares. Sus configuraciones dan cuenta tanto del complejo mapa de relaciones de fuerza entre los distintos

agrupamientos sociales en el orden nacional como de las intensidades y formas que adopta la disputa sobre las consecuencias, la gestión y las alternativas a la crisis del modelo neoliberal. Es el propósito de este artículo no sólo introducir a la lectura de las cronologías del conflicto social para el período mayo-agosto de 2001, que se acompañan a continuación², sino también reseñar algunas reflexiones sobre las características destacadas que presenta el aumento de las acciones de protesta.

Como una primera aproximación a esta cuestión vale señalar que, en términos de su distribución territorial, este incremento general de las luchas resulta proporcionalmente más significativo para el Cono Sur, Centroamérica y México. Esto se expresa, en cierto sentido, también en los actores colectivos que protagonizan los enfrentamientos. Si bien el movimiento campesino guarda una presencia importante –representa un 8,4% de todos los hechos consignados– son las acciones impulsadas por los asalariados, los estudiantes y los pequeños productores las que se intensifican significativamente en este período. Abarcando más de un tercio de los hechos de lucha, las protestas encabezadas por las organizaciones de trabajadores crecieron en un 80%, siendo que aquellas realizadas por los empleados del sector público se duplicaron en relación al primer cuatrimestre del año. En similar proporción –un 88%– se incrementaron las protestas de estudiantes y pequeños productores –particularmente agrarios– aunque su peso en el

conjunto de protestas es sensiblemente menor (8% y 9% respectivamente).

La mayoría de estas luchas responden al cuestionamiento de las políticas de ajuste fiscal y del regresivo impacto social resultado de la aplicación del modelo neoliberal en la región. Del conjunto se destacan, entre otras, la larga serie de cortes de ruta y huelgas impulsados por las organizaciones sindicales –fundamentalmente del sector público– y el movimiento de desocupados contra las políticas de ajuste en Argentina, las distintas huelgas del sector público en Brasil, el extendido conflicto docente y los bloqueos de caminos realizados por el movimiento campesino indígena del altiplano en Bolivia, las acciones de los estudiantes y del movimiento mapuche en Chile, la cadena de protestas agrarias en México y Colombia, y el ciclo de movilizaciones multisectoriales en Guatemala contra el incremento del IVA. Sin embargo, a diferencia de cuatrimestres anteriores, la conflictividad del período que analizamos –la más significativa en términos de los registros contabilizados por el OSAL desde mayo de 2000– parece presentar una configuración extendida –en series prolongadas de un mismo conflicto o en diversidad de protestas particulares–, articuladas muchas veces en forma de redes y con puntos de condensación de las protestas a nivel nacional significativos pero que parecen no alcanzar el grado de impacto y cuestionamiento político de otros procesos referidos en los cuatrimestres pasados.

Finalmente, en relación a las formas predominantes que adopta, es válido destacar la relativa importancia que asumen modalidades como los bloqueos de carreteras, las marchas prolongadas y los paros extendidos –aún en su forma de huelga por tiempo indeterminado. Intentaremos a continuación presentar un análisis más detenido de estas características.

■ Las políticas de ajuste ante la crisis y las protestas sociales

En el marco de la propagación del ciclo de crisis financieras abierto hacia fines de 1997 en el sudeste asiático, su impacto en los países centrales y su transformación en crisis económica (Chesnais, 2001), las economías

latinoamericanas inspiradas en el recetario neoliberal enfrentan hoy tanto la desaceleración del crecimiento o lisa y llanamente la recesión prolongada como en el caso de la Argentina, como amplias restricciones en el acceso al crédito internacional, que en el pasado alimentó, entre otras cosas, el incremento de la abultada deuda externa de la región. En este contexto el agotamiento del modelo neoliberal se ha expresado crecientemente, en términos del pensamiento dominante, como crisis de las finanzas públicas. Acorde con las recetas impulsadas por los organismos internacionales de crédito, esta situación se tradujo en reiterados intentos de profundización de las políticas de desmantelamiento, privatización y reducción del sector público, en algunos casos acompañadas con propuestas de reformas impositivas dirigidas a aumentar los tributos sobre el consumo. Estas políticas desencadenaron y enfrentaron prolongados e intensos conflictos encabezados por los asalariados del sector estatal. Señalábamos ya el crecimiento que, respecto al primer cuatrimestre del año, muestran las acciones protagonizadas por estos colectivos de trabajadores. Su significación, en términos de la conflictividad general del período, queda de manifiesto en tanto éstos representan casi el 23% de los hechos relevados y explican el 70% de las protestas de los asalariados ocupados. Este nuevo ciclo de protestas de los trabajadores públicos reactualiza, en cierto sentido, con una radicalidad e intensidad superior, aquel que signó el último cuatrimestre del año 2000 cifrado fundamentalmente alrededor de la disputa sobre la confección y aprobación de los presupuestos públicos del presente año.

En su amplitud y particularidad vale resaltar las luchas –en Bolivia y Colombia– contra la aprobación de proyectos legislativos que, bajo diferentes formas, sancionan la descentralización educativa y sanitaria; la larga serie de protestas en demanda de recomposiciones salariales en Brasil –protagonizadas por los funcionarios públicos federales, los profesores universitarios y distintos cuerpos de las fuerzas policiales; las movilizaciones contra la reducción presupuestaria, salarios y condiciones de trabajo, y contra la privatización de los institutos de seguridad social en Centroamérica; el prolongado conflicto educativo en México por aumento salarial, las manifestaciones de cuestionamiento a la privatización de empresas pú-

blicas (Ecuador, Paraguay, Brasil, Argentina) y la intensa y prolongada cadena de paros, concentraciones y cortes de ruta en Argentina –a nivel nacional y provincial– contra la aplicación de la Ley del Déficit Cero. Para apreciar su significación en el conjunto de los hechos registrados en los diferentes países puede consultarse el cuadro N° 1.

Discriminadas por su pertenencia sectorial puede decirse que un 34% de las acciones son desarrolladas por maestros y profesores mientras que los empleados administrativos encabezan un tercio de las mismas. En muchos casos las formas de la protesta adoptan la modalidad de paros prolongados –incluso por tiempo indeterminado– y se articulan tanto en la forma de huelga nacional convocada por las centrales sindicales (Colombia 7/6, Argentina 19/7) como con procesos de movilización –locales y nacionales– en los que participan distintos actores, particularmente en el sector educativo con la presencia de estudiantes y padres. Estas articulaciones multisectoriales están presentes, desde el inicio, en las protestas contra las reformas impositivas, especialmente en Guatemala en el ciclo de manifestaciones en cuestionamiento al alza del IVA (Cuenca Saravia y Páez Montalbán, 2001).

■ Trabajadores ocupados y desocupados: las dos caras del desempleo

Si consideramos a la región en su conjunto, la protesta social que involucra a los asalariados del sector privado ha experimentado también un crecimiento importante (43%), aunque menor respecto de los colectivos reseñados anteriormente, representando un tercio de las acciones llevadas adelante por los trabajadores ocupados. La distribución por país de estas luchas es desigual, apareciendo en general bajo formas localizadas y, en muchos casos, inscritas en situaciones defensivas (cierre de los establecimientos, despidos, rebajas salariales, etc.). Estas características son tanto expresión en el sector privado de la crisis económica anteriormente señalada –que adopta diferentes intensidades en cada país– como resultado de una particularmente desfavorable relación de fuerzas que cristalizó, entre otras consideraciones, con la implementación de políticas de precarización

laboral acompañadas, en muchos casos, por altos índices de desocupación. De este conjunto se destacan, en el sector industrial, el conflicto de la construcción civil en Perú en demanda de la rehabilitación del convenio colectivo, la huelga de trabajadores de la industria pesquera que se extiende a varias regiones de Chile en reclamo de un alza salarial y mejores condiciones de trabajo, así como el paro de los trabajadores de Volkswagen en México por aumento salarial. En el mismo sentido, también pueden citarse los diversos conflictos en distintas “maquilas” de la región centroamericana ante despidos y persecución sindical. En el caso de los trabajadores del sector servicios puede mencionarse la prolongada lucha de los empleados de Aerolíneas Argentinas –que aunque con participación del estado argentino, tiene como accionista mayoritario al estado español a través de la entidad SEPI– frente a los despidos y ante la amenaza de la disminución salarial, empeoramiento de sus condiciones laborales y quiebra de la empresa.

Por otra parte las acciones promovidas por trabajadores desocupados casi se duplican en el presente período representando el 4% de la conflictividad general y el 11% del conjunto de las acciones impulsadas por los trabajadores con o sin empleo. Sus protestas aparecen, con cierta intensidad, en otros países (especialmente en Chile, Uruguay y Panamá) además de en Argentina que, como ya lo habíamos reseñado en el número anterior, concentra más de la mitad de los conflictos protagonizados por estos colectivos registrados para la región. En este caso el movimiento de trabajadores desocupados, bautizado localmente como “piquetero” en relación al uso del corte de ruta como medida de lucha, constituyó, en el período que estudiamos, un espacio de coordinación nacional –la Asamblea de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados– y jugó un rol significativo en la articulación del conjunto de la protesta contra el ajuste a partir del plan de lucha de cortes de ruta progresivos aprobado en la primera asamblea. Diferentes análisis sobre esta experiencia son reflejados en el dossier central del presente número y nos eximen de extendernos aquí sobre la cuestión. Vale sí resaltar la afirmación de movimientos similares en otros países latinoamericanos. En Panamá las luchas del movimiento de desocupados de la ciudad de Colón; en Chile algunos cortes de

ruta aislados que se continúan en la marcha de desocupados –de Temuco hasta Santiago– promovida por la CUT en reclamo a las comunas y al gobierno nacional de planes especiales para cesantes; y, por último, en Uruguay distintos movimientos de desocupados constituyen, luego de dos días de convención, la Unión de Trabajadores Desocupados que, junto con la Federación Unificadora de Cooperativas de Viviendas (FUCVAM), impulsa la manifestación del 10/8 en Montevideo en reclamo de subsidios estatales, empleo a partir de obras públicas y exoneración del pago de impuestos al agua y la energía eléctrica a los desocupados.

■ Las luchas contra los efectos del modelo agrario neoliberal

Durante el período analizado, el sector agrario es una vez más un destacado escenario de diversas protestas que señalan la importancia del mismo como “espacio” y “territorio” del conflicto social en la región. Si bien los conflictos de origen campesino-indígena se sitúan por debajo de los registros del período precedente (8,4% contra 12,12% respectivamente), el significativo aumento de los contenciosos protagonizados por los pequeños productores agrícolas sitúa al conjunto de la conflictividad rural (sumados estos dos sectores) en un 11,04% del total de los registros del período. Es preciso también señalar la existencia –al igual que para enero-abril de 2001– de algunas protestas de carácter multisectorial contra las políticas de ajuste protagonizadas por sectores campesinos que, en algunos países, convocan la participación de otros actores urbanos o bien en las cuales los primeros confluyen junto a sindicatos, movimientos estudiantiles, etc.

Los paros nacionales agrarios de Bolivia y Colombia (a finales de julio) y los cortes de rutas protagonizados por diferentes organizaciones campesinas del Paraguay contra la política económica y en demanda de créditos constituyen algunos de los conflictos más destacados del sector. Asimismo la lucha por la tierra de las comunidades indígenas en Chile, de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil y las protestas de diferentes comunidades indígenas mexicanas (particularmente en Chiapas) con-

tra la aprobación de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena ocupan un lugar preponderante en el escenario de los conflictos del período. A estos deben sumarse una multiplicidad de luchas protagonizadas por pequeños productores agrarios (México, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, Guatemala, etc.) vinculados a la caída de los precios de numerosos productos agrícolas, el impacto de las importaciones facilitadas por los procesos de apertura comercial en la región, la falta de créditos accesibles en este sector, entre otras cuestiones.

Durante el mes de junio el altiplano norte boliviano (Los Yungas) fue nuevamente el escenario de numerosos cortes de ruta contra la militarización de esta región impuesta por el gobierno para continuar con la delimitación del cordón legal de las zonas de cultivo de coca. Las acciones se intensifican y extienden regionalmente (bloqueos de caminos contemplados en el Plan Pulga) en el mes de julio luego de la muerte de dos campesinos, desembocando en un Paro Nacional Agropecuario con el objetivo de derogar la Ley IN-RA, obtener créditos para el desarrollo de la economía campesina, solicitar al gobierno el cese de las importaciones de productos que puedan producirse en el país y la condonación de las deudas bancarias.

En Brasil, Paraguay, El Salvador y Chile se suceden diversas protestas por la ocupación de tierras. En el país andino el conflicto mapuche se caracteriza por una brutal represión de dichas comunidades, la criminalización y el procesamiento de los líderes indígenas y la ausencia de canales de diálogo para la resolución del conflicto (de la Cuadra, 2001). En diferentes estados de México (Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, etc.) se producen diversas manifestaciones indígenas contra la aprobación por parte de los parlamentos locales de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena en las que participan amplios sectores sociales (AA.VV. “El zapatismo y los derechos de los pueblos indígenas”, 2001).

Durante quince días (finales de julio hasta el 10 de agosto) se desarrolló en Ecuador la primera Marcha por la Vida rumbo a la ciudad de Quito en la que participaron indígenas y campesinos junto a otras organizaciones sociales para manifestar el rechazo a la política económica. Esta marcha fue

acompañada por movilizaciones locales en distintas ciudades del país.

El significativo aumento de los conflictos protagonizados por pequeños productores agrarios y sectores campesinos parece resultar de una profundización del impacto recesivo del “modelo agrario neoliberal” en la región. La combinación de una rápida apertura comercial, las desventajosas condiciones de acceso y de pago de crédito son reivindicaciones que, de forma recurrente, recorren el conjunto de este tipo de protestas en países con un importante componente agrario de sus economías. En este contexto, la caída de precios internacionales de numerosos productos agrícolas, sumada a las fuertes sequías en algunos países centroamericanos y a la crisis económica, vienen a agravar las dificultades estructurales del agro generadas por las políticas para el sector.

El Paro Nacional Agrario por tiempo indeterminado en Colombia contra la política neoliberal del gobierno y sus consecuencias en el campo, convocado por la Asociación Nacional de Salvación Agropecuaria a finales de julio, es una de las protestas más destacadas de este tipo. Entre las reivindicaciones más significativas cabe señalar el pedido de condonación de deudas de los productores y el cese de facilidades a las importaciones de productos agrícolas. La represión del conflicto, que se hizo sentir de manera particular entre los cafetaleros de Huila, dejó un saldo de dos campesinos muertos y varios heridos. Al cabo de más de quince días de bloqueos multitudinarios de rutas, las organizaciones de agricultores y campesinas –con el apoyo de diversas centrales sindicales– obtuvieron algunas de las reivindicaciones más significativas.

Asimismo, México presenta numerosas protestas de campesinos y pequeños productores en diferentes estados de la Unión: viticultores, productores de piña y de caña, maiceros, productores de trigo, etc. Un análisis detallado de las principales demandas permite observar el vínculo entre éstas y las consecuencias del TLCAN en la agricultura mexicana: venta de energía eléctrica, diesel, insumos agrícolas y fertilizantes a precios similares a los de Estados Unidos, y revisión de los capítulos agropecuarios y forestal del TLCAN. A inicios de agosto se conforma el Frente Nacional de Defensa de la Agricultura Mexicana que, al igual

que en el paro agrario colombiano, rechaza el ALCA, y el 8 del mismo mes tienen lugar en la Ciudad de México y en otras ciudades del país manifestaciones para exigir un cambio en la política agropecuaria nacional. En la capital del país los manifestantes, con el apoyo de representantes de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), reclaman por una agricultura fuera de la Organización Mundial de Comercio, más presupuesto para el agro, la expulsión de las multinacionales que cultivan transgénicos, que las sociedades mercantiles no tengan el derecho de acceder a la tierra, elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, revisar los acuerdos comerciales sobre biodiversidad y que se discuta un acuerdo nacional para el campo mexicano además de rechazar la Ley Indígena y el neoliberalismo.

A los casos señalados se suman las protestas con cortes de caminos de los productores lecheros de Chile en contra de la reducción del precio de la leche y su importación; el paro por tiempo indeterminado de la Asociación de Bananeros del Ecuador en rechazo del incumplimiento del pago del precio oficial de la caja de banano por parte de los exportadores y comerciantes de fruta; los reclamos de un fondo específico para el sector de los caficultores hondureños y las protestas de los productores de arveja en Guatemala en repudio a los precios que ofrecen las empresas exportadoras, entre otras.

Es preciso señalar la aparición cada vez más recurrente de conflictos vinculados a la ocupación/expropiación de tierras de comunidades indígenas y campesinas con el objetivo de una explotación intensiva de recursos naturales y energéticos por parte de grandes empresas transnacionales.

Por último cabe consignar el registro de protestas campesinas en Bolivia y Colombia ligadas a los desplazamientos de poblaciones agrarias resultantes de la política de fumigaciones de las plantaciones de coca impulsada por los Estados Unidos en la región. Estos hechos, consecuencia de la intensificación del Plan Colombia (Zuluaga Nieto, 2001), muestran, junto a los primeros registros de campamentos de la guerrilla colombiana en plena selva ecuatoriana y los desplazamientos señalados, los efectos desestabilizadores

de la creciente presencia norteamericana en la cuenca andino-amazónica.

En el plano económico-comercial el nuevo acuerdo alcanzado entre El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Costa Rica y Panamá sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) que regiría a partir del año 2002, parece ratificar un cierto fortalecimiento de la política de desregulación comercial en la región sostenida por el gobierno norteamericano. En este sentido también es preciso señalar la declaración conjunta firmada a mediados de junio por representantes de los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá en la que lanzan oficialmente la consigna de ejecutar de inmediato el Plan Puebla Panamá (Alvarez Béjar, 2001) –PPP, acordado por Vicente Fox y George Bush– en la que se destacan la interconexión energética, la integración de los servicios de telecomunicación y la creación de un corredor vial, así como fomentar la constitución del TLC en la región.

En los albores de 1994 el surgimiento del movimiento zapatista simbolizaba la aparición del primer movimiento social de envergadura opuesto al TLCAN y sus consecuencias. Las tensiones sociales producidas por los efectos de la liberalización comercial en el agro latinoamericano nos inducen a pensar que los conflictos analizados pueden comenzar a desplegarse de forma más regular y duradera en el tiempo. La lucha contra el modelo de libre comercio (TLCAN, ALCA, etc.) impulsado por los Estados Unidos y los gobiernos neoliberales de la región y contra sus efectos sobre la vida cotidiana de millones de personas podría así constituirse en un punto de confluencia y articulación de un amplio arco social opuesto a la política comercial y geoestratégica de los Estados Unidos en Latinoamérica.

■ El movimiento estudiantil y los movimientos urbanos

Como mencionáramos en la presentación de este artículo los conflictos del sector estudiantil presentan (en términos absolutos) un significativo incremento en relación al período anterior. Así, el conjunto de las protestas estudiantiles representan el 9,07%

del total de los conflictos (contra el 8,4% del cuatrimestre anterior).

En un contexto de profundización de las políticas de ajuste y de creciente mercantilización de la educación pública, en diversos países se registran conflictos contra los recortes en la educación, por aumento de presupuesto y en defensa de la enseñanza pública, gratuita y de calidad. En Brasil la UNE (União Nacional de Estudantes – universitarios) y la UBES (União Brasileira de Estudantes Secundaristas) protestan contra la iniciativa del Ministro de Educación tendiente a quebrar el monopolio que tienen estas organizaciones en la emisión de tarjetas estudiantiles. Del mismo modo, las protestas estudiantiles más significativas se suceden en Chile, Nicaragua y Guatemala.

Durante los meses de mayo y junio los estudiantes universitarios chilenos se movilizan en rechazo a la privatización del sistema de crédito universitario. A mediados de mayo la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) organiza una marcha en la ciudad de Santiago en la que participan entre cinco y ocho mil estudiantes, acompañada por tomas de facultades y manifestaciones en varios puntos del país. A finales del mismo mes la CONFECH organizó tres jornadas de protesta exigiendo la designación de 3 mil millones de pesos para el crédito universitario, y más de 30 mil estudiantes de siete universidades ubicadas al sur del país inician un paro indefinido acompañado de tomas, huelgas de hambre y manifestaciones que, en numerosos casos, son reprimidas.

El alza en las tarifas de los transportes urbanos en Nicaragua fue el detonante de un proceso de protestas y movilizaciones encabezado, en los meses de mayo y junio, por diferentes organizaciones estudiantiles de todo el país. En el marco del “Plan de Protesta para Evitar el Alza” otras organizaciones sociales como el Movimiento Comunal, la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD), la Coordinadora de Asentamientos Humanos Espontáneos y Mercados (CAHEM), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), realizaron llamamientos a los trabajadores para no pagar el aumento de tarifas y confluyeron con las protestas estudiantiles reclamando al gobierno que subsidie el alza del transporte.

Por último, en Guatemala, los estudiantes, en confluencia con maestros y sindicalistas, reclamaron contra el incremento del IVA.

Al igual que los conflictos estudiantiles, las luchas de los movimientos urbanos se acentúan en estos meses. Así, en Chile dichas protestas responden esencialmente a demandas por vivienda y al rechazo, manifestado a través de cortes de ruta, de la instalación de un vertedero de basura en Rancagua (Sexta Región). En República Dominicana, donde los conflictos urbanos representan el sector con mayor número de registros en este cuatrimestre, la dinámica de la protesta se articula en torno al rechazo de aumentos de las tarifas en el servicio eléctrico. En Guatemala importantes protestas de vecinos ocurren como consecuencia del incremento del IVA y para cuestionar la aprobación del paquete de medidas fiscales, mientras que en Panamá se registran protestas urbanas contra el aumento del transporte y en demanda de agua potable.

■ A modo de conclusión

Hemos presentado en las líneas precedentes las configuraciones que han asumido los principales hechos de protesta acontecidos a lo largo del segundo cuatrimestre del presente año. A los efectos del análisis general han quedado fuera de nuestra consideración las especificidades que signan y distinguen algunas experiencias nacionales, tales como, por ejemplo, los conflictos en el marco de la transición política en el Perú o el caso venezolano, por citar dos solamente. Por el contrario, en esta oportunidad, hemos querido dar cuenta de las características que muestra el aumento de la conflictividad social en la región. La misma es expresión, en cierta medida, de una doble crisis. Esta nos remite, por un lado, a la profunda deslegitimación que cuestiona a las políticas neoliberales; y por otro lado, a la progresiva instalación de un contexto de crisis económica, que ha significado —para una gran parte de nuestros países aunque con intensidades diferentes— tanto el agravamiento de las regresivas consecuencias sociales que estas políticas implicaron como los intentos de profundización del rumbo de la ortodoxia fiscalista. Ante esta situación, las luchas que hemos descrito recorran el mapa de las resistencias sociales —con

sus puntos de fuerza y sus ausencias y debilidades— y señalan la capacidad social de cuestionar las políticas dominantes y de disputar, aún en sus inscripciones particulares y defensivas, la constitución de los caminos de salida a la doble crisis que mencionamos.

En este sentido, es distintivo el crecimiento de las formas de lucha que asumen un carácter más radical. Los bloqueos de caminos que ya se habían manifestado en las series de protestas en Argentina, Ecuador y Bolivia; se extienden como modalidad a otros países. Las huelgas, particularmente en los asalariados del sector público, tienden a asumir un carácter prolongado. Estos elementos parecen señalar una relativa declinación de las medidas “demostrativas”. Asimismo pueden indicar la constitución o fortalecimiento de las redes organizacionales indispensables al sostenimiento de estas formas de lucha. Por otra parte las caravanas o marchas prolongadas —a veces a pie— vuelven a aparecer en diferentes experiencias nacionales. El conjunto de estas modalidades puede ser interpretado también como prácticas de resocialización (reapropiación) de lo público privatizado bajo los efectos concentradores de la riqueza y el poder que caracteriza al modelo neoliberal. En esta dirección el cuestionamiento al carácter excluyente del modelo, y a éste mismo, se proyecta también al régimen político.

Frente a estas protestas la amenaza de la fuerza, la intimidación y la represión —que ya habíamos señalado en números anteriores— parece presentar ahora un carácter sistemático. A esta situación se suma, en este período, el asesinato de dirigentes sindicales y sociales, particularmente en Colombia, que despiertan nuestra más enérgica condena. La denuncia de estos hechos y la exigencia de castigo a los responsables es un compromiso ineludible.

Si bien todavía es difícil mensurar, en toda su amplitud, el impacto que tendrá sobre América Latina el nuevo contexto internacional abierto tras los atentados en EE.UU. y la intervención militar anglo norteamericana en Afganistán, la contraposición entre ajuste y democracia —que habíamos ya caracterizado para el período pasado— y las presiones diplomáticas y comerciales del gobierno norteamericano, se han profundizado acentuando la urgencia de los desafíos planteados.

Cuadro N° 1

	Cantidad de registros* de conflictos en el sector público (I)	Relación de (I) con el total de los conflictos de asalariados ocupados	Relación de (I) con el total de los conflictos del período
Argentina	76	60%	26,67%
Bolivia	22	73%	21,15%
Brasil	30	79%	35,29%
Chile	12	32%	6,38%
Colombia	18	82%	9,33%
Ecuador	26	96%	50,98%
El Salvador	11	69%	18,97%
Guatemala	4	66%	4,40%
Honduras	47	92%	55,95%
México	63	85%	32,64%
Nicaragua	11	69%	14,29%
Panamá	15	53%	12,40%
Paraguay	21	95%	28,77%
Perú	31	53%	22,79%
Puerto Rico	6	97%	23,08%
Rep. Dominicana	11	78%	17,46%
Uruguay	24	56%	31,58%
Venezuela	35	78%	35,35%
TOTAL	463	70%	23,12%

* Se consideran únicamente las protestas protagonizadas por los asalariados del sector público y no aquellas en las que éstos participan junto a otros sectores.

■ Bibliografía

AA.VV. 2001 “El zapatismo y los derechos de los pueblos indígenas” en *OSAL* (Buenos Aires) N° 4, Junio.

Alvarez Béjar, Alejandro 2001 “El Plan Puebla Panamá: ¿desarrollo regional o enclave transnacional? en *OSAL* (Buenos Aires) N° 4, Junio.

Cuenca Saravia, Breny y Páez Montalbán, Rodrigo 2001 “Las luchas sociales en Centroamérica, mayo-agosto de 2001” en *OSAL* (Buenos Aires) N° 5, Septiembre.

Chesnais, François 2001 “Prólogo a la edición argentina” en *La mundialización financiera, génesis, costos y desafíos* (Buenos Aires: Losada).

de la Cuadra, Fernando 2001 “Conflicto Mapuche: génesis, actores y perspectivas” en *OSAL* (Buenos Aires) N° 5, Septiembre.

Zuluaga Nieto, Jaime 2001 “Colombia: conflicto social, guerra prolongada, negociación de paz incierta” en *OSAL* (Buenos Aires) N° 5, Septiembre.

■ Notas

1 Agradecemos especialmente la colaboración de Ivana Brighenti y de todo el equipo del *OSAL*.

2 Por las limitaciones propias del espacio disponible en la revista, las cronologías publicadas sólo consideran los principales hechos de protesta social del período. En base a las versiones completas de las mismas, se elaboran los índices utilizados en esta nota para el análisis de la conflictividad general.



Conflicto Mapuche: génesis, actores y perspec

Por Fernando Marcelo de la Cuadra*

■ Presentación

Desde el advenimiento de la democracia en Chile, los sucesivos gobiernos de la Concertación de partidos han señalado su disposición de mejorar sustancialmente las condiciones de vida y abrir el espectro de oportunidades para las naciones originarias que poblaron el país (Mapuches, Aymaras, Rapa-Nui¹). Por otra parte, las autoridades también se comprometieron a colaborar con éstas en la resolución de aquellos conflictos históricos que han mantenido con el estado chileno, o por lo menos ayudar a atenuar los efectos negativos de la usurpación permanente que han enfrentado tales comunidades, lo cual tiene una clara expresión en las precarias condiciones de vida en las que se encuentra actualmente la mayor parte de la población indígena de nuestro país. Sin embargo, después de pasada una década de gobiernos democráticos, los conflictos entre estos pueblos y los emprendimientos del sector privado no han cesado, y más aún, los respectivos gobiernos han demostrado su incapacidad para arbitrar con ecuanimidad en torno a ellos.

En función de este vacío dejado por las instituciones, las comunidades Mapuches decidieron enfrentar tanto a las empresas privadas como a las autoridades o representantes del estado, proclamando que dejarán ingobernables aquellas regiones en donde se asienta el mayor porcentaje de la población Mapuche del país, es decir, la novena región del país y parte de la octava.

En la primera parte del trabajo abordaremos los principales factores que dan base al conflicto o que se encuentran en su origen, con especial énfasis en la trayectoria histórica de la relación estado/Mapuches. En la segunda parte se estudiarán los más importantes conflictos ambientales en los que se han visto involucradas comunidades Mapuches en los últimos años, destacando dos casos emblemáticos: uno es el conflicto suscitado entre las comunidades indígenas y la Empresa Nacional de Energía S.A. (ENDESA) por la construcción de la central hidroeléctrica de Ralco en el Alto Bío-Bío. El otro es el conflicto suscitado entre diversas comunidades indígenas y las empresas forestales (Mininco, Arauco, Millaletu, etc.). Finalmente se presenta una síntesis del conflicto, esbozando las perspectivas futuras que puede tener éste.

* Sociólogo de la Universidad de Chile. Profesor Titular de la Universidad Jesuita Alberto Hurtado. Miembro del Grupo de Ecología Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).



■ La génesis del conflicto Mapuche

Como señalamos en la introducción, los principales conflictos que se vienen produciendo entre las comunidades Mapuches en contra de las autoridades (nacionales, regionales y locales) y de los intereses de la empresa privada, continúan siendo dos. Por una parte, el que enfrenta a estas comunidades con la empresa española (ENDESA) dedicada a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco ubicada en el Alto Bío-Bío, y por otra parte, los graves altercados entre grupos indígenas y las empresas forestales que explotan los bosques, principalmente en la novena región.

Si bien es cierto que un aspecto importante de estos conflictos se debe a una cuestión que se plantea en torno a la propiedad de la tierra, dicha demanda no excluye la presencia de una constelación de otras reivindicaciones que constituyen la denominada “causa” de los pueblos originarios y que puede ser entendida como una expresión o modalidad de ecologismo popular². Al momento de abordar la génesis del conflicto Mapuche, muchos políticos y periodistas han colocado los aspectos económicos en el centro del análisis, señalando que la extrema pobreza de las comunidades y la escasez de tierras es el detonante del descontento de este pueblo. Sin embargo existen motivos más profundos que deben ser buscados en la historia. En efecto, hay que buscar las bases de esos conflictos en la yuxtaposición de una serie de factores, donde los económicos desempeñan un rol importante pero no exclusivo. Entre esta diversidad de fuentes se puede destacar las siguientes como aquellas que tienen más significación.

a. Deuda histórica: uno de ellos es el vínculo que ha construido el estado chileno con respecto a las comunidades indígenas ya desde los orígenes de la república. Junto con la formación del Estado-Nación se supuso que todos los individuos que habitaban un determinado territorio regido por el estado chileno se transformaban automáticamente en miembros de este país. Siendo así, la totalidad de los pueblos originarios que habitaban el territorio chileno se transformaron automáticamente en ciudadanos, teniendo en el plano jurídico-normativo los mismos derechos y deberes que el resto de la población. Por el contrario, en un plano positivo la historia nacional nos ha demostrado que los pueblos indígenas han sufrido la permanente discriminación por parte de las autoridades del estado y de la población, lo cual se ha venido manifestando casi desde el comienzo de nuestra vida independiente³, en la pérdida de su autonomía político-territorial y en la marginación de su cultura, religión e idioma del proceso formador de nuestra identidad nacional⁴.

b. Proceso de colonización agrícola: en el contexto anteriormente señalado, a fines del siglo XIX se promulga una ley cuyo objetivo central consistirá en radicar a los pueblos indígenas en territorios delimitados (reducciones) para poder disponer de la mayor parte del territorio y llevar a cabo la colonización de las tierras del sur por parte de población chilena y extranjera (alemanes, italianos, croatas, holandeses). Bajo esta política, que duró hasta mediados del siglo pasado, los pueblos indígenas perdieron 9,5 millones de hectáreas de tierra, lo cual ha hecho de los Mapuches (gente de la tierra) una nación de minifundistas o de asalariados rurales en permanente migración por diversas zonas agropecuarias.

c. Empobrecimiento de los Mapuches: los procesos de expropiación de tierras y de desplazamiento de las comunidades hacia zonas de frontera agrícola cada vez más frías e inhóspitas provocaron la destrucción de las bases productivas de las unidades Mapuches, provocando una creciente agudización de la pobreza de dichas comunidades.

d. Fragmentación y dispersión de las comunidades: la conjunción de la pérdida de las bases materiales de sustento y la profundización de la pobreza en las unidades de

minifundio Mapuches causaron una fuerte emigración de su población hacia zonas urbanas, la cual se viene instalando en la periferia de la capital o de otras ciudades intermedias, engrosando las filas de los pobres urbanos⁵.

e. Pérdida de espacio para manifestaciones culturales y de identidad Mapuche: una de las consecuencias de la instalación de la población Mapuche en las grandes y medianas ciudades ha sido la carencia de espacios donde puedan realizar las expresiones propias de su cultura, como la subordinación de sus tradiciones, lengua y religión en un medio urbano agresivo, dominante y excluyente. Ello se expresa finalmente en la agudización de un proceso de aculturación en el que se van perdiendo los rasgos de identidad cultural de dichas comunidades.

f. Persistencia de acciones de despojo: en cuanto a la población que sigue habitando en las zonas de reducción, en el último período debieron enfrentar nuevas situaciones de desplazamiento o usurpación solapada de sus tierras por parte de empresas privadas nacionales o extranjeras. Esto último se ha constituido en una especie de catalizador de los aspectos antes señalados, detonando el conflicto entre los miembros de las comunidades afectadas por las diversas formas de despojo de sus tierras y las empresas instaladas en sus territorios.

■ Los actores y el contexto de los conflictos

Como elemento de contexto, se puede sostener que las acciones desplegadas por las comunidades Mapuches en torno a la defensa de su tierra y sus recursos forestales se enmarcan dentro de los llamados Conflictos Ambientales Locales (CAL), una dimensión que podría considerarse expresión del ecologismo popular. La emergencia de tales conflictos se produciría, en primer lugar, debido a los variados destinos que le asignan los diversos actores al uso del suelo, los cuales se sustentan en el sistema de valores culturales que una determinada sociedad ha elaborado en torno al recurso *tierra* y las diversas modalidades socioeconómicas enfrentadas entre sí. En segundo lugar, estos conflictos surgen como una contestación a la aplicación de reformas neoliberales orientadas al mercado, lo cual plantea el desafío por un lado de rebelarse a tales reformas, y simultáneamente de ser capaces de elaborar alternativas a sus efectos perversos por medio de la lucha por el establecimiento y la consolidación de relaciones más simétricas entre el estado, las empresas y la sociedad. Por último, estos conflictos se ven estimulados y potenciados por las transformaciones democratizadoras ocurridas en el escenario político del conjunto de la región, permitiendo la manifestación de grupos más activos de la sociedad civil, que se encontraban en estado latente durante la fase autoritaria.

Con todo, la emergencia de conflictos no se restringe únicamente a los últimos años de aplicación del modelo económico. A lo largo de la historia nacional se encuentra bastante evidencia de enfrentamientos entre estas comunidades y el estado, donde los primeros han luchado por la defensa del patrimonio territorial y natural del que vienen siendo despojados. Para circunscribir tales conflictos en el marco del proceso de redemocratización del país y con posterioridad a la promulgación de la Ley Indígena 19.523⁶, el proyecto de la central Hidroeléctrica Ralco surgió, con inusitada resonancia, como una de las últimas arremetidas del estado chileno en contra de los derechos del pueblo Mapuche. Ya sea por el debate que suscitó entre diversos especialistas, o por la amplia cobertura que tuvo en la prensa nacional, Ralco constituye, sin lugar a dudas, un caso emblemático de la lucha de los Mapuches (Pehuenches) por su tierra y por la preservación de sus formas de vida.

Se podría decir que las irregularidades del Proyecto Ralco por parte de la Empresa Nacional de Electricidad comenzaron desde la aprobación del convenio para formular la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Hidroeléctrico ubicado en el Alto Bío-Bío, el 1 de



septiembre de 1995. En esa oportunidad se señaló que el referido estudio no se apegaba a la ley, ya que fue aprobado antes de que se dictara el respectivo Reglamento de la Ley de Medio Ambiente. Posteriormente, el 29 de marzo de 1996, ENDESA presentó los resultados de dicho estudio a la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), siendo inmediatamente objetado por una serie de servicios públicos, consultores externos y organizaciones ciudadanas. Poco tiempo después la propia CONAMA, a través de su Comité Revisor, recomienda el rechazo del proyecto. El documento de esta institución sostiene que el estudio es insuficiente, entre otras razones debido a que: a. no describe adecuadamente el proyecto; b. su línea de base es insuficiente para evaluar posteriormente los impactos; c. incurre en errores metodológicos en la evaluación que hace de los mismos; d. no presenta un plan claro de relocalización de la población afectada que pudiera ser objeto de evaluación por parte de los especialistas.

Una segunda institución gubernamental comprometida en el conflicto, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), mostró hasta comienzos de 1999 una postura de rechazo al Proyecto Ralco, tanto en su versión original como en los posteriores *Adendum* presentados por ENDESA, aduciendo en sus diversos relatorios que el proyecto no solamente comprometía normativas de la legislación ambiental, sino también disposiciones de la Ley Indígena, concluyendo que el estado chileno no podía comprometerse en un proyecto de esa naturaleza. El resultado directo de esta declaración fue la remoción inmediata del Director Nacional de CONADI. Sin embargo, a pesar de las presiones ejercidas por las autoridades centrales para aprobar finalmente el proyecto, una resolución favorable de CONAMA deja explícito que la autorización ambiental es independiente de la cuestión de las permutas de tierras en las que viven las comunidades pehuenches, asunto que debió ser resuelto por la CONADI como único órgano competente. La opinión de dos consejeros nombrados por el gobierno, como la del nuevo Director, fue oponerse a las permutas, situación que determinó nuevamente la remoción de sus cargos⁷. Finalmente, durante los primeros meses de 1999, la CONADI llevó a término la aprobación de la mayoría de las solicitudes de permuta, lo cual se hizo solamente con los votos de representantes del gobierno y la exclusión de los Consejeros Nacionales Indígenas. Si bien es cierto que en la actualidad únicamente siete familias no han aceptado la permuta de sus tierras (entre ellas las familias de Berta y Nincolasa Quintremán), los enfrentamientos y acciones en contra de la central Ralco siguen sucediéndose con fuerza⁸.

Por su parte, el conflicto entre las comunidades Mapuches y las empresas forestales tiene su acta de nacimiento a fines de 1997 (1 de diciembre), fecha en la cual fueron incendiados tres camiones cargados con madera que salían de un terreno en litigio entre una empresa forestal (Forestal Arauco) y las comunidades Mapuches de la zona de Lumaco, Novena Región. Las comunidades Mapuches de ese sector señalaban su pretensión de recuperar los terrenos en manos de la forestal alegando sus derechos ancestrales. En dicha ocasión, la Intendencia de la Región de la Araucanía entró con un requerimiento en la Corte de Apelaciones de Temuco para que se aplicara la Ley de Seguridad Interior del Estado contra todos aquellos que resultasen culpables del hecho. Desde entonces, el gobierno viene advirtiendo que hará acatar el estado de derecho, y algunos de sus funcionarios realizaron fuertes denuncias en contra de las acciones ocurridas a partir del día 1 de diciembre⁹. A pesar de la campaña de difamación de que ha sido objeto la movilización Mapuche en contra de las empresas forestales, desde ese día se produjeron innumerables brotes de protesta y acciones de descontento en diversas localidades de la novena región, algunas de las cuales adquirieron inusitada violencia por parte de los grupos en conflicto: por un lado, las comunidades Mapuches, grupos ecologistas e indigenistas, y por otro los agentes de seguridad de las empresas y las fuerzas del orden del estado. En consecuencia, dado que la estrategia coercitiva aplicada por el gobierno no trajo buenos resultados, las autoridades decidieron negociar la compra de algunas tierras en disputa. Sin embargo, esta práctica de entregar un par de fundos a algunas comunidades no ha tenido los efectos que el gobierno esperaba, manteniéndose las tomas de terreno hasta nuestros días¹⁰.

■ Síntesis y conclusiones

Una primera constatación que surge del análisis de los enfrentamientos expuestos es que nos encontramos ante un conflicto de legitimidades, y desde esa perspectiva no parece que la resolución de éste vaya a tener un final favorable a corto o mediano plazo. Como sosteníamos, estamos en presencia de una deuda histórica que contrajo el estado chileno para con las naciones originarias, especialmente con el pueblo Mapuche, a la cual se agrega una constelación de otros factores, entre los cuales se puede destacar la ausencia total de una política efectiva de apoyo a las comunidades Mapuches más afectadas por las profundas transformaciones socioeconómicas experimentadas por el país en los últimos años. Para algunos, tanto el conflicto Mapuche/ENDESA como el Mapuche/forestal resultan ser la expresión de la incapacidad del estado para privilegiar e imponer el bien común por sobre los intereses de las empresas privadas, que a través de *lobbies* y diversas formas de presión han llegado a arrinconar a las autoridades, legisladores y jueces, inclinando la balanza a su favor. El caso Ralco y los conflictos con las empresas forestales han llevado a las organizaciones Mapuches a cuestionar la política seguida por la Concertación y, en este contexto, la mayor parte de los líderes de las organizaciones Mapuches sostienen que la solución a sus problemas pasa por el reconocimiento del pueblo Mapuche como una entidad étnico-política, esto es, como un pueblo política y territorialmente autónomo, aunque no necesariamente independiente del estado chileno (Lavanchy, 1999a: 16).

En ese sentido, las diversas organizaciones Mapuches han venido elaborando propuestas de autonomía en algunas de las cuales se ha manifestado la intención de constituir una República Indígena en la que el “pueblo de Arauco se pueda autogobernar y en donde su cultura y progreso sea creado por él mismo”. La demanda de estos sectores no significa solamente resolver la cuestión de la tierra, sino encarar la solución del problema indígena a través de su “territorialidad”, lo cual supone el reconocimiento de los Mapuches como un pueblo y una nación¹¹. Así, para quienes apoyan la causa Mapuche, los “actos de violencia” perpetrados en contra de las empresas representan una forma legítima de hacer escuchar su voz, tras una justa reivindicación, no sólo de las tierras que les fueron usurpadas, sino también de la autonomía a que tienen derecho como etno-nación.

Por su parte, la argumentación reiterada por los representantes de las empresas es difícil de despreciar por su apelo a las bases institucionales del estado chileno. Esgrimiendo razones que se apoyan en la legitimidad de la propiedad privada y en su defensa irrestricta, el recurso más utilizado por los voceros de estas empresas es que las acciones emprendidas por las comunidades y grupos de agitadores externos representan una clara e inaceptable trasgresión de la institucionalidad vigente, donde al gobierno no le cabe más que acatar lo que se encuentra consagrado en la constitución y las leyes¹².

Una segunda constatación a realizar es que tales conflictos pueden considerarse como un caso ejemplar de los problemas de sustentabilidad que posee el actual modelo de desarrollo aplicado en el país. La inequidad se expresa no solamente en la desigual distribución del uso del territorio y de los recursos naturales (suelo y bosques) que poseen los Mapuches, sino también por el disímil acceso a los medios de comunicación y al poder político que deja a las comunidades indígenas con canales institucionales muy restringidos para expresar sus demandas. Estas limitaciones se dan además en un marco donde la democracia se perfila con un pronunciado sesgo hacia el encapsulamiento de la “cuestión” política dentro de un ámbito estrictamente técnico y, por lo tanto, competencia exclusiva de los agentes del poder público (sociedad política y *policy makers*) como aquellos profesionales idóneos para identificar, formular y decidir las políticas públicas.

Por lo mismo, es necesario enfrentar el conflicto y sus posibles soluciones como un problema complejo y multidimensional, en el que se encuentran en oposición diferentes



culturas, objetivos, necesidades y distintas percepciones del medio ambiente. Es un conflicto que enfrenta por lo tanto disímiles visiones de mundo (cosmogonías) y de formas de vida, las que van mucho más allá de una simple repartición o devolución de tierras. Como esbozamos, ello implica una dimensión territorial, que incorpora elementos de autonomía, autodeterminación y respeto a la dignidad e identidad de un pueblo. Si los diversos actores involucrados en el conflicto no consideran esta complejidad a la hora de proponer soluciones, lo más probable es que solamente consigan perpetuar una confrontación de largo aliento, que puede asumir nuevas formas de una guerra entre colonizados y colonizadores.

■ Bibliografía

Bengoa, José 1985 *Historia del Pueblo Mapuche* (Santiago: Ediciones Sur).

Guha, Ramachandra 1994 “El ecologismo de los pobres”, en *Revista de Ecología Política* (Barcelona: Icaria) N° 8.

Lavanchy, Javier 1999[a] “Conflicto y propuestas de autonomía mapuche”, en página web de Rehue Foundation, Holanda.

Lavanchy, Javier 1999[b] “Perspectivas para la comprensión del conflicto mapuche”, en Página web de Rehue Foundation, Holanda.

Martínez Alier, Joan 1995 *De la economía ecológica al ecologismo popular* (Montevideo: Nordam-Comunidad).

Marimán, José A. 2001 “Políticas de estado frente a la cuestión nacional mapuche”, en *Revista Rocinante* (Santiago) N° 35, Septiembre, 4-7.

Namuncura, Domingo 1999 *Ralco ¿Represa o pobreza?* (Santiago: Ediciones LOM).

Sabatini, Francisco 1997 “Chile: conflictos ambientales locales y profundización democrática”, en *Revista de Ecología Política* (Barcelona: Icaria) N° 13, 51-69.

Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS) 2000 *El Escándalo Ralco*, Departamento de Derechos Humanos y Estudios Indígenas, Santiago, inédito.

■ Notas

1 Otras etnias reconocidas por el estado chileno son la Atacameña, Quechua, Colla, Alacalufe y Yámana o Yagán.

2 El ecologismo popular según la concepción de Guha o Martínez Alier representa un desmentido de la noción más convencional, que ve al ecologismo como un movimiento propio de sociedades prósperas en su etapa post-materialista. Por el contrario, el ecologismo popular es un movimiento en defensa del medio ambiente que surge básicamente entre las poblaciones pobres de los países, especialmente de aquellos ubicados en el Hemisferio Sur (Guha, 1994: 137-151; Martínez Alier, 1995).

3 Como está extensamente documentado, a partir del advenimiento de la República el pueblo Mapuche fue enaltecido como un conjunto de valerosos luchadores en contra del dominio español. Las imágenes que aluden al indio bravío no sólo llenaron las páginas de algunos escritores de tiempos de la colonia, sino que fueron recuperadas por intelectuales y literatos patriotas, quienes crearon una imagen romántica de estos “nobles salvajes”. Así fue como “el mito del mapuche como padre de la patria y el espíritu liberal de la época requerían que el indígena desapareciese, integrándolo o incorporándolo a la nascente entidad socio-política”. En pocas palabras, a través de este argumento, el Mapuche es transformado en ciudadano de la emergente nación cívica.

Sin embargo, a partir de la “Pacificación de la Araucanía” –que implicó concretamente la ocupación de las tierras al sur del río Malleco– los Mapuches pasan a ser considerados enemigos del estado y del proyecto modernizador. Por tanto, la otrora figura de patriotas sufre un rápido proceso de transformación y se revierte a la de seres al borde de la bestialidad (Lavanchy, 1999[a]: 11-12; Bengoa, 1985: 142-145).

4 A diferencia de otros países de la región (Paraguay, México, Perú o Bolivia) las comunidades indígenas de Chile han sido excluidas del proceso de formación de la identidad nacional, siendo su idioma relegado a un plano muy secundario, lográndose sólo a mediados del siglo pasado que su lengua fuera impartida en escuelas y liceos localizados en las proximidades de los asentamientos indígenas.

5 Se calcula que de los casi 1,5 millones de indígenas que existen en el país, más del 70% vive en poblaciones pobres de los centros urbanos, de los cuales más de medio millón corresponde a Mapuches que habitan en diversas comunas del Gran Santiago.

6 El artículo primero de dicha Ley reconoce la pluriétnicidad existente en el territorio chileno cuando se afirma que “El estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a la Mapuche, Aymara, Rapa Nui y las comunidades Atacameñas, Quechuas, Collas, Alacalufe y Yámana o Yagán.” (Artículo 1º, Diario Oficial, 5/10/93).

7 Estos hechos se encuentran ampliamente documentados por el segundo Director Nacional de CONADI al que se le solicitó la renuncia, Domingo Namuncura, en su libro denuncia titulado “Ralco ¿Represa o pobreza?”.

8 En los momentos en que escribo estas líneas, la prensa informa sobre la acción cometida por “algunos vándalos” en contra de las instalaciones de ENDESA en Ralco, quemando dos camiones tolva y una retroexcavadora (El Mercurio, 1/10/01).

9 La prensa de derecha, e incluso el propio Ministro del Interior, llegaron a sostener pocos días después, y sin ninguna prueba fidedigna, que estos hechos constituían los indicios de un rebrote guerrillero en la zona Sur, en la cual participarían activamente grupos de ultra-izquierda como el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y el Ejército Guerrillero Popular (EGP) (El Mercurio, 4/12/1997, La Tercera, 6/12/1997).

10 Una cronología pormenorizada de estas ocupaciones y de otro tipo de manifestaciones (huelgas de hambre, marchas, tomas de caminos, tala de bosques, etc.) se encuentra en los anteriores números y en la presente edición de esta misma revista.

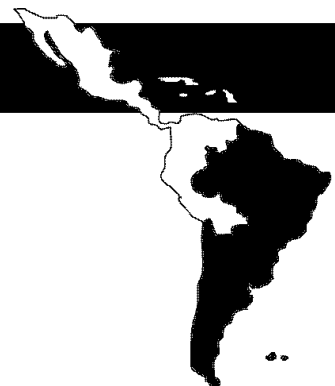
11 En palabras de José Huenchunao, uno de los líderes de la Coordinadora Arauco-Malleco: “En la actualidad tenemos más conciencia que el problema de fondo es la territorialidad de las comunidades mapuches. Aquí hay que reconocer que nosotros seguimos siendo un pueblo y una cultura diferente, que seguimos teniendo en nuestra memoria colectiva la conciencia de que éramos y somos una nación originaria” (La Segunda, 18/3/1999).

12 A pesar de que en términos formales este argumento está amparado en la legitimidad otorgada por el respeto a la propiedad, no excluye que desde una perspectiva histórica y jurídica se pueda hacer un cuestionamiento sobre las formas en que se fue constituyendo tal propiedad, las que sí podrían ser motivo para su deslegitimación.



Argentina

REGION
SUR



MAYO

Martes 1 • Se realizan diferentes actos en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores convocados por distintas organizaciones sindicales y partidos de izquierda.

Lunes 7 • Unos 3 mil trabajadores desocupados de La Matanza nucleados en la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y en el Movimiento de Desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) cortan la ruta nacional 3 a la altura de la localidad de Isidro Casanova (Pcia. de Buenos Aires) en rechazo a los recortes que el gobierno nacional aplicó en la asignación de los planes Trabajar. Exigen también, entre otras cuestiones, la entrega de medicamentos, herramientas y la realización de obras públicas.

Martes 8 • En Jujuy, unas 2 mil personas, entre desocupados, aborígenes y campesinos de La Quiaca, cortan el puente internacional con Bolivia en reclamo de 300 planes de empleo subsidiados por el gobierno nacional.

• Trabajadores de la empresa Cerámica Zanón, en Neuquén, cortan la ruta nacional 22, a la altura de los puentes que unen esa ciudad con Cipolletti, en reclamo del pago de los sueldos de los últimos dos meses.

Miércoles 9 • Trabajadores de Aerolíneas Argentinas (AA) realizan un abrazo simbólico al edificio de la empresa ubicado en la Ciudad de Bs. As. en protesta por la demora en el pago de salarios. Por la noche instalan un campamento en el hall del Aeroparque Jorge Newbery donde realizan ollas populares.

• Trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba inician una serie de protestas con paro y cortes de calles en rechazo a la privatización de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). Más de 200 empleados quedan detenidos, por orden de la justicia, que investiga un presunto sabotaje que ocasionó el corte del servicio eléctrico por más de cinco horas.

Jueves 10 • Cerca de 100 trabajadores de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) cortan la autopista Ricchieri bloqueando el acceso al Aeropuerto de Ezeiza y se movilizan desde los hangares hasta el espigón internacional.

Lunes 14 • Cerca de 200 productores de frutas de Cipolletti, Cinco Saltos y otras ciudades de la provincia de Río Negro cortan la ruta 151 para reclamar al gobierno nacional un precio sostén, subsidios para el sector y beneficios impositivos.

Martes 15 • Más de 400 personas del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP) inician una marcha a la Plaza de Mayo en demanda de planes de empleo, ayuda social, un nuevo plan económico y la liberación de Emilio Alí.

Miércoles 16 • Trabajadores desocupados de la FTV de la CTA cortan los puentes Alsina, Pueyrredón y Uriburu (tres accesos a la Ciudad de Bs. As.) exigiendo una respuesta al reclamo formulado por los "piqueteros" que mantienen cortada la ruta 3 en La Matanza.

- Viernes 18** • La marcha organizada por el MIJP llega a la Plaza de Mayo. El gobierno se compromete a reiniciar los planes de empleo suspendidos.
- Lunes 21** • Las principales rutas de las zonas frutícolas de las provincias de Neuquén y Río Negro fueron cortadas por piquetes de productores de peras y manzanas que reclaman al gobierno nacional, entre otras cuestiones, un precio sostén para la fruta.
- Martes 22** • Trabajadores desocupados de distintos puntos de la Pcia. y de la Ciudad de Bs. As., organizados por la CTA y la CCC, realizan cortes de ruta en solidaridad con los “piqueteros” que mantienen cortada la ruta 3 en La Matanza.
- La Marcha por la Vida organizada por el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo iniciada el 7 de mayo en La Quiaca (Jujuy) llega a la Plaza de Mayo de la Ciudad de Bs. As (luego de recorrer San Salvador de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario, entre otros) donde realizan un acto con diferentes organizaciones.
- Miércoles 23** • Los trabajadores desocupados de La Matanza levantan el corte de la ruta 3 que realizaban desde hace más de dos semanas luego de acordar con la ministra de Trabajo y el vicegobernador de la Pcia. de Bs. As. la entrega de 7.500 planes Trabajar, 6.200 beneficios adeudados y el compromiso de las autoridades de la provincia de mejorar las condiciones de detención de Emilio Alí.
- Jueves 24** • Trabajadores de APARodean con una bandera argentina un *jumbo* de la empresa española Iberia en el Aeroparque Jorge Newbery para exigir el pago de los salarios del mes de abril.
- Sábado 26** • Los ministros de Economía y Trabajo y el titular de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) viajan a Madrid para negociar el respaldo financiero del gobierno español para la empresa aérea.
- Martes 29** • Luego de conocerse el fracaso de las negociaciones entre el gobierno y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) –accionista mayoritaria de AA– en España, 300 trabajadores de la empresa realizan un piquete en la pista de despegue del Aeroparque Jorge Newbery. Empleados nucleados en APA toman la sede empresaria en la Ciudad de Bs. As. En Ezeiza, trabajadores de AA cubren los mostradores de Iberia impidiendo el registro de pasajeros.
- Alrededor de mil trabajadores desocupados cortan rutas en diferentes lugares del conurbano bonaerense y la ciudad de La Plata (Pcia. de Buenos Aires) en reclamo de planes Trabajar.
- Miércoles 30** • En General Mosconi (Pcia. de Salta), trabajadores que intervienen en la construcción del nuevo hospital cortan la ruta nacional 34 en protesta por no obtener respuesta al pedido de un básico salarial de 2,50 pesos la hora, entre otras cuestiones.
- Alrededor de mil desocupados nucleados en la CCC acampan frente al edificio de la Gerencia de Empleo Nacional en la Pcia. de Jujuy, en reclamo de 3 mil planes Trabajar y ayuda social.
- Jueves 31** • La Confederación General del Trabajo (CGT) disidente realiza una marcha y un acto en la Plaza de Mayo en la Ciudad de Bs. As. en la que participan 100 mil personas, según fuentes sindicales, en rechazo a las políticas económicas del gobierno.

JUNIO

Lunes 4 • Los productores de yerba mate de la provincia de Misiones cortan la ruta nacional 12 que une Posadas con Iguazú para denunciar la caída generalizada del precio de la yerba, y cuestionan la legalidad de marcas que se comercializan a menor costo, entre otras cuestiones.

Viernes 8 • La CGT disidente, la CTA y la CCC realizan la quinta huelga general contra la política económica y social del gobierno nacional. El paro tuvo alto acatamiento en los sectores estatales y del transporte. Se realizaron manifestaciones en varios puntos del país y cortes de rutas en La Matanza y La Plata en la Pcia. de Buenos Aires, Rosario en Santa Fe y Mendoza, entre otras.

Martes 12 • Trabajadores de APA impiden por más de 4 hs. el despegue de aviones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para protestar contra la decisión de la SEPI de suspender los vuelos a Madrid, última ruta a Europa que le quedaba a la compañía. Las protestas son reprimidas por 250 efectivos de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN). Por su parte, APTA realiza un festival gratuito en el Luna Park, al que asisten 8 mil personas.

Domingo 17 • Los trabajadores que se encuentran cortando la ruta nacional 34 en el acceso a General Mosconi son desalojados con balas de plomo, goma y gases lacrimógenos por 400 gendarmes, tras la orden efectuada por el juez federal Abel Cornejo. La represión deja un saldo de 2 muertos, 50 heridos y varios detenidos.

Lunes 18 • Continúa durante todo el día la represión a los piqueteros de General Mosconi. Llegan al lugar más de 500 gendarmes. La CGT disidente, la CTA, la CCC, organismos de defensa de los derechos humanos y partidos políticos condenan la represión.

Miércoles 20 • Por la noche, la Gendarmería detiene a 18 pobladores de General Mosconi. Más tarde, una movilización, en la que participan unas 1.000 personas, obliga a los efectivos a retirarse hacia la ruta 34.

Jueves 21 • Más de 7 mil personas convocadas por la CTA, la CGT disidente y la CCC, junto a organismos de derechos humanos, estudiantiles y partidos políticos de izquierda, marchan desde La Matanza hasta la Plaza de Mayo donde realizan un acto para repudiar la brutal represión desatada días atrás en Salta.

Viernes 22 • La empresa AAconcreta su pedido de apertura del concurso preventivo de quiebra.

Sábado 23 • Los productores de yerba mate que hace dos semanas acamparon frente a la Casa de Gobierno en Misiones con más de 200 tractores, levantan la protesta al acordar con el gobierno y los industriales un precio sostén de 13 centavos por kilo de hoja verde.

Jueves 28 • La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) realiza un paro nacional y una marcha desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo en la Ciudad de Bs. As. para exigir el pago del incentivo docente y repudiar el congelamiento de la inversión educativa.

JULIO

Miércoles 11 • El ministro de Economía Domingo Cavallo anuncia un paquete de medidas mediante el cual se intentará llevar a cero el déficit de las cuentas públicas. Estas medidas inclu-

yen la reducción del gasto público y, particularmente, de los salarios de los empleados públicos, jubilaciones, pensiones y bienes y servicios del estado nacional que variará cada mes dependiendo de los ingresos tributarios.

- La CGT disidente, la CTA y la CCC condenan las medidas económicas y se declaran en estado de alerta y movilización. El Fondo Monetario Internacional (FMI) respalda al gobierno argentino frente a los rumores de default (cesación de pagos).

Jueves 12

- Unos 4 mil trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) marchan por el centro de la ciudad de La Plata hasta la gobernación de la Provincia de Buenos Aires para manifestar su oposición a la propuesta del pago de salarios con bonos provinciales, entre otros reclamos.

Viernes 13

- El presidente Fernando de la Rúa recibe el apoyo de su par norteamericano George W. Bush a las medidas económicas anunciadas por el gobierno para alcanzar el déficit cero. Asimismo diferentes asociaciones empresarias apoyan también el plan gubernamental.

Sábado 14

- Unos 200 trabajadores de AA bloquean la salida de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, donde se casa la hija del ministro de Economía, con consignas en defensa de la empresa.

Domingo 15

- El presidente Fernando de la Rúa anuncia por cadena nacional la confirmación del piso de 300 pesos para el descuento del 13% en jubilaciones y sueldos de los empleados públicos, con la posibilidad de elevarse a 500 pesos si el Congreso aprueba esta semana tres leyes complementarias. Los gobernadores de la Alianza firman un documento llamado "Compromiso por la Independencia" de apoyo a las últimas medidas económicas.

- La CGT oficial, la disidente y la CTA convocan para el jueves próximo un paro nacional de 24 hs. en rechazo al ajuste.

Lunes 16

- Unos 3 mil desocupados de la FTV, de la CTA y del Movimiento de Desocupados de la CCC cortan la ruta 3 para repudiar el ajuste económico impulsado por el gobierno y pedir la liberación de los presos políticos Raúl Castells, Emilio Alí y José Barraza.

Martes 17

- Los gobernadores del Partido Justicialista (PJ) firman el Pacto por la Independencia con el gobierno nacional a través del cual se comprometen a adoptar el principio presupuestario de déficit cero, reservándose la forma en que lo implementarán, entre otros puntos.

- El gobernador de la Pcia. de Bs. As., Carlos Ruckauf, declara el estado de emergencia económica financiera y decreta medidas de ajuste para cumplir con la reducción del déficit fiscal. Establece una rebaja salarial progresiva para empleados y funcionarios de los tres poderes que perciban sueldos superiores a 1.000 pesos brutos, a excepción de jueces y fiscales, y el pago con bonos –llamados Patacones– de los sueldos mayores a 700 pesos, entre otras medidas.

- Miles de desocupados de La Plata, Lanús, Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown y Mar del Plata, agrupados en el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), cortan el acceso a la autopista Bs. As.–La Plata en la rotonda de Alpargatas en rechazo al ajuste económico, entre otras cuestiones.

Miércoles 18

- ATE realiza un paro nacional y marcha a Plaza de Mayo en los que participan más de 10 mil personas, según los manifestantes, en contra de las medidas de ajuste. Organismos de derechos humanos, centros de estudiantes y partidos políticos de izquierda, entre otros, participan de la movilización.

• El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) realizan un paro en la Pcia. de Bs. As. en rechazo al ajuste anunciado por Carlos Ruckauf.

• Los docentes universitarios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realizan una huelga nacional en repudio al recorte del 13% en el presupuesto del sector.

Jueves 19

• La CGT oficial, la disidente, la CTA y la CCC realizan un paro nacional por 24 hs. contra el plan de ajuste implementado por el gobierno. Se realizan cortes de ruta en numerosas localidades de la Provincia de Buenos Aires (Mar del Plata, La Plata, La Matanza, Florencio Varela, entre otras) y en las provincias de Chaco, Tucumán, Jujuy, Santa Fe, Mendoza y Catamarca. Partidos políticos de izquierda realizan escraches frente a la quinta presidencial de Olivos, entre otros lugares.

Martes 24

• Se realiza la I° Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados impulsada por la FTV de la CTA, el Movimiento de Desocupados de la CCC y otras organizaciones, en la que participan más de 2 mil personas en la iglesia del Sagrado Corazón, en San Justo (Pcia. de Buenos Aires). Allí se aprueba un plan de lucha que empezará el martes próximo con cortes de ruta progresivos escalonados en tres semanas (24 hs., 48 hs. y 72 hs.) en las 50 ciudades más importantes del país, exigiendo la derogación del decreto de ajuste fiscal, garantías de que los planes Trabajar no serán recortados, y la libertad y desprocesamiento de todos los detenidos sociales.

Miércoles 25

• ATE realiza un paro y una movilización hacia el Congreso en rechazo al recorte a las jubilaciones y salarios del sector público. Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) marcha hasta la casa de gobierno de la Pcia. de Bs. As. en La Plata en contra del pago con Patacones decidido por el gobierno provincial.

Viernes 27

• En Misiones, alrededor de 1.500 personas marchan hacia el Palacio Legislativo para repudiar la aprobación del ajuste en la provincia. La protesta es reprimida por la policía dejando como saldo 20 heridos y 15 detenidos.

Domingo 29

• El Senado convierte en ley el proyecto gubernamental llamado de déficit cero sobre las cuentas del estado, el cual establece un ajuste de 2.500 millones de pesos que contempla un recorte del 13% en los salarios, jubilaciones, etc. mayores de 500 pesos. Asimismo, prevé que cuando los recursos no fueran suficientes, se continuará reduciendo los créditos del sector público hasta el equilibrio entre gastos y recursos.

Martes 31

• La Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados realiza la primer jornada nacional de cortes de ruta en la que participan, según los manifestantes, más de 100 mil personas en más de 200 protestas. Adhieren a la medida la CTA y la CCC. En Bs. As. se realizan 23 piquetes, particularmente en el conurbano, Bahía Blanca, Mar del Plata, Mercedes y San Nicolás. En la Ciudad de Bs. As. se registran 20 cortes y marchas. Las provincias donde se manifiesta con más fuerza son Misiones, Neuquén y Tucumán. También hay piquetes en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, La Rioja, Chubut, Catamarca, Chaco, Río Negro, Tierra del Fuego y Santiago del Estero.

AGOSTO

Jueves 2

• Más de 6 mil manifestantes –convocados por ATE, UPCN, Unión de Docentes de Misiones, entre otras organizaciones– se concentran en el centro de la ciudad de Posadas (Pcia. de Misiones) para protestar contra los descuentos salariales en el sector público decididos por el gobierno provincial. En la ciudad de Formosa (Pcia. de Formosa) 2 mil trabajadores estatales realizan una marcha a la sede del gobierno provincial para rechazar los proyectos de reducción de los salarios de los empleados públicos.

Viernes 3

• Más de 200 desocupados del MTR toman por cinco horas la sede del Ministerio de Trabajo de la Pcia. de Buenos Aires, en La Plata, en reclamo del pago de 180 planes “Barrios Bonaerenses”. Al desalojar las instalaciones oficiales, los manifestantes son reprimidos con balas de goma y bastonazos por la Policía, dejando un saldo de 60 detenidos y algunos heridos.

• Trabajadores de ATE y UPCN retienen sus tareas, realizan asambleas, tomas pacíficas y cortes de calles en las dependencias de la administración pública de la Pcia. de Buenos Aires en rechazo al ajuste provincial.

Lunes 6

• SUTEBA, SADOP, FEB y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) realizan un paro por 24 hs. en todos los colegios de la Pcia. de Bs. As. en rechazo al recorte decidido por el gobierno de la provincia.

• La CONADU comienza un paro activo que se extenderá durante toda la semana, con clases públicas, asambleas y movilizaciones multisectoriales en todas las universidades nacionales del país en rechazo de la Ley de Déficit Cero.

Martes 7

• Comienzan las 48 hs. de piquetes en todo el país organizadas por la Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados, donde participan más de 150 mil personas en 300 protestas, según los manifestantes. Se registran cortes de rutas, calles, asambleas, tomas de edificios públicos, clases públicas y movilizaciones, organizadas por la CTA, CCC, ATE, CTERA, MIJP, MTR, organismos de derechos humanos, estudiantes y partidos políticos de izquierda, entre otros, en la Ciudad y Pcia. de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Salta, Río Negro, Tierra del Fuego, Corrientes, Jujuy y Entre Ríos.

Miércoles 8

• El segundo día de cortes de ruta culmina con una movilización multisectorial, con la presencia de la CTA y la CCC, hacia la Plaza de Mayo, en la que participan 50 mil personas, según los manifestantes. Se registran cortes, actos y movilizaciones en las principales ciudades del país.

Jueves 9

• Cerca de 20 mil personas, según los manifestantes, se movilizan por el centro de la ciudad de Córdoba en protesta por los recortes salariales que afectan a docentes y no docentes universitarios. La marcha culmina con un acto en la plaza San Martín.

Lunes 13

• SUTEBA inicia un paro por tiempo indeterminado en todas las escuelas públicas de la Pcia. de Buenos Aires en contra del recorte de salarios y del pago en Patacones. La FEB adhiere a la medida.

Martes 14

• Comienzan las 72 hs. de piquetes organizados por la Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados en contra del ajuste. Se realizan más de 300 cortes, según los manifestantes, en Bs. As., Chaco, Misiones, Jujuy, Cata-

marca, Tucumán, Santa Cruz, Entre Ríos, San Luis, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Mendoza y Córdoba. ATE lanza un paro nacional de 72 hs. en el marco de las jornadas de protesta. En La Plata, más de 10 mil docentes, judiciales, estatales, desocupados y estudiantes se concentran frente a la gobernación para rechazar el ajuste.

Miércoles 15 • Se realizan cortes de rutas en todo el país en el segundo día de protestas. La CONADU comienza un paro activo con clases públicas por 48 hs. en diferentes universidades nacionales.

Jueves 16 • Más de 20 mil –según los manifestantes– piqueteros, maestros, estatales, estudiantes, entre otros, culminan las 72 hs. de piquetes con una multitudinaria marcha hasta la Plaza de Mayo donde realizan un acto en contra del ajuste y se exige la libertad de todos los presos políticos.

Domingo 19 • Al finalizar el XVI Encuentro Nacional de Mujeres, en La Plata, más de 2 mil mujeres de todo el país marchan por las calles de la ciudad en rechazo al ajuste y reclaman los derechos de la mujer.

Martes 21 • CONADU comienza un paro por 48 hs. en protesta por el recorte del 13% al presupuesto universitario. Se realizan clases públicas en las que participan más de 20 mil estudiantes en todo el país.

Miércoles 22 • CTERA realiza un paro nacional en contra del ajuste. Además, convoca conjuntamente con la CONADU, CONADU Histórica (CONADUH), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y diferentes organizaciones de la comunidad educativa a una movilización hacia la Plaza de Mayo, en la que participan más de 40 mil personas, según los manifestantes.

• En la Pcia. de Salta se inicia el ejercicio militar Cabañas 2001 donde participan efectivos de las fuerzas armadas de EE.UU., Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Jueves 23 • En La Plata, 40 mil docentes, médicos, judiciales y estatales, entre otros –estimados por medios periodísticos– se movilizan hacia la gobernación en rechazo al recorte de los sueldos y el pago en Patacones. Por otra parte se realizan diferentes protestas en todo el país en contra del ajuste.

• La Unión Tranviarios del Automotor (UTA) realiza una concentración en Plaza de Mayo para cuestionar la falta de control de los colectivos ilegales. La protesta de los colectiveros es reprimida por la Policía y la organización declara un paro sorpresivo en contra de la represión.

Viernes 24 • Unos 5 mil estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de La Plata realizan una marcha de antorchas por las calles céntricas de esa ciudad en rechazo al ajuste aplicado por el gobierno en las casas de altos estudios.

Lunes 27 • La FEB levanta la huelga tras firmar un acuerdo que establece que no serán descontados los días de paro; habrá una evaluación consensuada de las propuestas para completar los 180 días de clase en el ciclo lectivo y queda un compromiso oficial de cumplimiento a término en el pago de sueldos.

Martes 28 • En la ciudad de Córdoba (Pcia. de Córdoba) se realiza una marcha convocada por el Sindicato de Luz y Fuerza, donde participan 10 mil personas en oposición a la privati-

zación de EPEC, contra los recortes al presupuesto de las universidades públicas y la reducción salarial de los empleados públicos de la administración nacional.

Miércoles 29

- La CGT oficial y la disidente convocan a una movilización hacia Plaza de Mayo en la que participan alrededor de 40 mil personas, según fuentes periodísticas, en contra de la política económica del gobierno.

- SUTEBA levanta el paro tras firmar un acuerdo con el gobierno de la provincia que establece el no descuento de los días sin clases, el pago de haberes en tiempo y forma, el respeto al estatuto del sector y la creación de una comisión encargada de analizar una alternativa al recorte en los haberes superiores a los 1.200 pesos.

Jueves 30

- Más de 5 mil estudiantes, docentes y no-docentes participan de la Marcha y Abrazo Histórico al Monumento a la Bandera, en la ciudad de Rosario (Pcia. de Santa Fe), en defensa de la educación pública y rechazando los recortes presupuestarios al sector.

- En la ciudad de La Quiaca (Pcia. de Jujuy) más de 1.000 personas, lideradas por el cura Jesús Olmedo, inician la “marcha de los pobres y excluidos” en demanda de políticas de asistencia y desarrollo para la región.

Viernes 31

- Trabajadores de APA rodean con una bandera argentina un *jet* de Iberia, que debió salir con más de una hora de atraso, a 100 días del primer “banderazo” contra un vuelo de esa compañía, en protesta por la suspensión de las rutas internacionales de AA.

- El ministro de Economía difunde la carta de intención firmada con el FMI y sostiene que la principal meta por cumplir es el déficit cero. El acuerdo contempla el compromiso del gobierno de sancionar una nueva ley de coparticipación federal antes de fin de año y la reestructuración de la deuda pública, que alcanza los 128 mil millones de dólares, entre otros puntos.

■ Glosario de siglas

AA	Aerolíneas Argentinas	FTV	Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat
AMET	Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica	FUA	Federación Universitaria Argentina
APA	Asociación del Personal Aeronáutico	MIJP	Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados
APTA	Asociación del Personal Técnico Aeronáutico	MTR	Movimiento Teresa Rodríguez
ATE	Asociación de Trabajadores del Estado	PAN	Policía Aeronáutica Nacional
CCC	Corriente Clasista y Combativa	PJ	Partido Justicialista
CGT	Confederación General del Trabajo	SADOP	Sindicato Argentino de Docentes Particulares
CONADU	Confederación Nacional de Docentes Universitarios	SEPI	Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
CONADUH	Confederación Nacional de Docentes Universitarios Histórica	SUTEBA	Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires
CTA	Central de los Trabajadores Argentinos	UPCN	Unión del Personal Civil de la Nación
CTERA	Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina	UTA	Unión Tranviarios del Automotor
EPEC	Empresa Provincial de Energía de Córdoba		
FEB	Federación de Educadores Bonaerenses		
FMI	Fondo Monetario Internacional		

Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA– Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina) y el Observatorio Social de América Latina (OSAL) –relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch y Florencia Ayala.

Fuentes: diarios Página 12, Clarín, Crónica y La Nación.

Brasil

REGION
SUR



MAIO

3a Feira 01

• Manifestações reuniram cerca de vinte e duas mil pessoas em Belo Horizonte (MG) contra a privatização de Furnas Centrais Elétricas. O protesto foi contra o governo federal. O governador do Estado foi representado pelo presidente da Assembléia Legislativa.

• A comemoração do Dia Internacional do Trabalhador, organizada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) em São Paulo (SP), tornou-se um ato a favor da instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Corrupção do Congresso Nacional para pedir a cassação dos Senadores Antônio Carlos Magalhães –Partido da Frente Liberal (PFL) do Bahia (BA)– e José Roberto Arruda –sem partido do Distrito Federal (DF)– acusados de violar a votação secreta do Senado. O ato teve o apoio de partidos de oposição. Segundo a Polícia Militar (PM), havia cerca de vinte mil pessoas; segundo a CUT eram sessenta mil.

5a Feira 03

• Aproximadamente dois mil agentes penitenciários do Departamento do Sistema Penitenciário (DESIPE) entraram em greve. Eles são responsáveis por dezessete mil presos do Estado do Rio de Janeiro (RJ). Pediam um aumento de 16,12% no salário-base e melhorias nas condições de trabalho. A greve é contra o governo do Estado.

6a Feira 04

• Cerca de dois mil trabalhadores rurais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAGUI) ocuparam uma ferrovia da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) no Estado do Pará (PA), interrompendo o transporte de cem mil toneladas diárias de minério. Eles reivindicavam o aumento das verbas para reforma agrária e para infra-estrutura nos assentamentos.

• Princípio de motim em 14 presídios do RJ devido à greve dos agentes penitenciários (desde 03/05), que suspendeu as visitas aos presos. Durante o dia, funcionários do DESIPE realizaram piquetes na porta dos presídios e a PM foi chamada. Como resultado, oito agentes foram feridos e dois foram presos. O Secretário de Justiça anunciou o corte de ponto dos grevistas. Em assembléia, a categoria decidiu suspender a greve. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça, a categoria vai esperar o prazo de dez dias para que o governo dê uma resposta à reivindicação de reajuste salarial.

2a Feira 07

• Paralisação de 48 horas dos servidores públicos nas principais cidades brasileiras. Tratava-se de campanha salarial da categoria. O funcionalismo quer pressionar o governo a iniciar as negociações sobre a reivindicação de 75,48% de aumento.

6a Feira 11

• Passeata que reuniu cerca de três mil pessoas em Salvador (BA) terminou em confronto com a PM, que reprimiu o ato com violência. Os manifestantes pediam a cassação do mandato do Senador Antônio Carlos Magalhães, por conta de seu envolvimento na violação do painel do Senado. O movimento foi organizado por universitários e teve a adesão de sindicalistas e parlamentares de oposição.

- 3a Feira 15** • A Força Sindical e a CUT promoveram várias manifestações que reuniram cerca de vinte e cinco mil metalúrgicos de trinta e quatro empresas para protestar contra o racionamento de energia. Os protestos ocorreram na zona sul e no centro da capital de SP. A Força Sindical reivindica ainda uma audiência com o presidente Fernando Henrique para conhecer o plano de geração de energia do governo em 2002.
- 5a Feira 17** • Mais um dia de confrontos entre a PM e os estudantes em Salvador (BA). O motivo da ação repressora da tropa de choque da PM foi a manifestação de aproximadamente oito mil estudantes universitários e secundaristas que pediam a cassação do senador Antônio Carlos Magalhães. O evento foi promovido pelas entidades estudantis, com o apoio dos partidos de oposição, dos sindicatos ligados à CUT e do MST.
- Domingo 20** • Greve da PM em Tocantins (TO). Dois mil policiais militares armados dominam todos os batalhões do Estado, juntamente com mulheres e filhos. Os grevistas reivindicam reajuste salarial de 47%, diminuição da jornada de trabalho para 40 horas semanais, gratificação por risco de vida e plano de saúde. A greve tem o apoio de partidos de oposição no Estado.
- 6a Feira 25** • Cerca de 17 mil médicos residentes do Sistema Único de Saúde (SUS) realizaram protestos em dez cidades brasileiras, reivindicando aumento de 75% no valor das bolsas, além do cumprimento da lei em subsidiar alimentação e moradia. Os residentes conseguiram agendar uma reunião com o governo federal para o final do mês.
- 4a Feira 30** • Fim da greve da PM em TO. Resultados: acordo intermediado por membros da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados estabelece a não punição dos grevistas; a concessão de Habeas-corpus para os líderes do movimento e a criação de uma comissão que tratará da questão salarial.

JUNHO

- Domingo 03** • Trabalhadores rurais promoveram onda de invasões em Mato Grosso do Sul (MS). Além de terem sido expulsos, quatro sem-terra ficaram feridos a tiros e outros doze foram espancados.
- 4a Feira 13** • A sede do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) foi ocupada por algumas horas por integrantes do MST, que protestam contra a falta de agilidade nas vistorias de áreas improdutivas, no andamento dos processos e na liberação de recursos para os assentamentos. A PM acompanhou os manifestantes mas não houve confronto.
- Marcha contra o racionamento de energia elétrica organizada por partidos políticos e centrais sindicais reuniu cerca de trinta e cinco mil pessoas no centro do RJ. O motivo da manifestação era fazer críticas ao governo federal e protestar contra as medidas de racionamento.
- 5a Feira 14** • Cerca de mil famílias do MST invadiram a fazenda do presidente do Senado, Jader Barbalho do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) do PA. O MST justificou a nova invasão pelos últimos escândalos envolvendo o presidente do Senado, referindo-se à suspeita de venda de títulos da dívida agrária. Além disso, o movimento alegou que o INCRA não cumpriu o que prometeu na época em que a fazenda foi ocupada pela primeira vez.

- 4a Feira 27** • Membros do MST que haviam invadido a fazenda do atual presidente do Senado em 14/06 decidiram deixar a propriedade para evitar confrontos com a PM.

JULHO

- 5a Feira 05** • Integrantes da PM (BA) entram em greve por tempo indeterminado. O movimento eclodiu após o fracasso das negociações por reajuste salarial, a prisão dos líderes do movimento grevista e a exoneração de 68 soldados e oficiais. Os grevistas reivindicam aumento de 100% e reintegração dos Policiais excluídos e a libertação dos líderes do movimento.

- Sábado 14** • Greve da PM (BA): Continua a greve e aumenta a violência no estado com saques, assaltos e assassinatos. Foi realizada uma reunião para negociação do fim da greve entre o governador, deputados e o presidente da Associação Nacional de Cabos, Soldados e oficiais da PM.

- 3a Feira 17** • Trabalhadores do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) iniciam paralisação de 3 dias para pressionar o Ministério de Previdência a discutir o plano de carreira da categoria. A paralisação obteve a adesão de servidores nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia, além do DF.

- 4a Feira 18** • Os policiais civis e militares de Alagoas entraram em greve, reivindicando reajuste salarial.

- Greve da PM (BA) chega ao fim, após o comando de greve aceitar a proposta de 21% de reajuste, oferecida pelo governo baiano.

- 2a Feira 23** • Greve de policiais civis e militares de Alagoas chega ao fim após os grevistas aceitarem reajuste salarial proposto pelo governo, que também inclui o plano de cargos e carreiras, uma antiga reivindicação.

- 4a Feira 25** • Manifestações pelo Dia Nacional de Luta pela Terra, organizado pela Conferência Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG). Militantes da CONTAG ocuparam 77 propriedades improdutivas por cerca de 5.000 famílias em dez Estados. O MST, a CONTAG, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) promoveram manifestações, ainda, em Alagoas, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí e Bahia, da qual participaram, aproximadamente, 25 mil pessoas. Os manifestantes exigiam aceleração das desapropriações rurais, créditos agrícolas e políticas de combate à seca, além de reivindicações locais.

- 5a Feira 26** • A polícia civil do Pará também entrou em greve reivindicando reposição de 30% e aumento das gratificações de 25% para 100%.

AGOSTO

- 4a Feira 01** • Categorias de servidores públicos federais iniciaram paralisação de 48 horas. O funcionalismo reivindica reajuste salarial de 75,48% referente às perdas acumuladas

nos últimos sete anos, com base em cálculos feitos pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), incorporação de gratificações e a garantia de que não haverá medidas que reduzam os salários dos inativos. Os protestos aumentaram depois que o reajuste linear para o funcionalismo não foi aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT) apoiaram a reivindicação. O conflito está em andamento.

- Os policiais civis do Rio Grande do Norte, entraram em greve. O dia foi marcado por duas rodadas de negociações entre representantes dos grevistas e do governo. Nenhum acordo foi feito e a paralisação segue.

4a Feira 08

- Os funcionários dos postos do INSS iniciaram greve por tempo indeterminado. Cerca de 38 mil servidores do órgão, em todo o país, reivindicam não só apenas o reajuste de 75%, como também, a manutenção de um reajuste de 47,11% concedido em 1987 a título de antecipação do plano de carreira, que o governo decidiu suspender, alegando estar cumprindo uma decisão judicial. Os grevistas aguardam resposta do Ministério do Planejamento.

- Trabalhadores rurais sem-terra bloquearam rodovias federais em, pelo menos, nove Estados. Segundo a direção do MST, cerca de doze mil pessoas participaram para reivindicar mais verbas para o custeio de agricultura familiar e protestar, preventivamente, contra o suposto corte 56% dos recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Pediam também a proibição do plantio e da comercialização de transgênicos e o perdão das dívidas contraídas por eles em empréstimos anteriores. As ações foram organizadas pelo MST, MPA, Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e por federações de trabalhadores rurais. Segundo o superintendente do INCRA em Recife, José Geraldo Eugênio, o suposto corte não deverá acontecer.

6a Feira 17

- Trabalhadores representantes de vinte categorias, entre elas metalúrgicos, bancários, petroleiros e servidores federais, fizeram campanha com manifestações e passeata no antigo centro bancário de SP. Cerca de 12 milhões de assalariados reivindicam basicamente emprego e reajuste salarial. As duas principais centrais sindicais do país, CUT e Força Sindical promoveram a campanha.

4a Feira 22

- Servidores públicos federais fizeram greve geral para reivindicar reajuste salarial de 75,4%. A adesão foi parcial, marcada principalmente, pela entrada de funcionários e professores das universidades federais do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Os líderes sindicalistas atribuíram a baixa adesão ao reajuste de 3,5% a 35% anunciada pelo governo na véspera do protesto. Partidos de oposição vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra o reajuste linear de 3,5%.

■ Siglas

BA	Bahia
CONTAG	Conferência Nacional dos Trabalhadores da Agricultura
CPI	Comissão Parlamentar de Inquérito
CPT	Comissão Pastoral da Terra
CUT	Central Única dos Trabalhadores
CVRD	Companhia da Vale do Rio Doce
DESIPE	Departamento do Sistema Penitenciário
DIEESE	Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
DF	Distrito Federal
FETAGUI	Federação dos Trabalhadores na Agricultura
INCRA	Instituto de Colonização e Reforma Agrária
INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social
MAB	Movimento dos Atingidos por Barragens
MG	Minas Gerais
MPA	Movimento dos Pequenos Agricultores
MS	Mato Grosso do Sul
MST	Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra
PA	Pará
PDT	Partido Democrático Trabalhista
PFL	Partido da Frente Liberal
PM	Polícia Militar
PMDB	Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PRONAF	Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
PT	Partido dos Trabalhadores
RJ	Rio de Janeiro
SP	São Paulo
SUS	Sistema Único de Saúde
TO	Tocantins

Equipe Responsável: Coordenação: Prof. Dr. Emir Sader (LPP); Prof^a. Dr^a. Silene de Moraes Freire PROEALC).

Coleta de Dados, Redação e Sistematização da Cronologia: Ms. Adjovanes Thadeu Silva de Almeida (Apoio Técnico/FAPERJ/LPP), Fernanda Ribeiro Rohen (Graduação /FSS /PROEALC), Maria das Graças Garcia e Souza (Graduação/FSS /PROEALC), Janaína Bilate Martins (Mestranda/PPGSS/PROEALC), Mariana Oliveira Setúbal (Graduação/FSS/LPP), Paloma Navarro Lobato (Graduação/FEDUC/LPP).

Fontes: Jornal O Globo, Jornal Folha de São Paulo, Jornal O Estado de São Paulo, Jornal Extra, Jornal Diário de Pernambuco, web-site da Agência Nacional de Notícias da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Chile

REGION
SUR



MAYO

- Martes 1** • En conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores se organizan distintos actos. En Santiago 20 mil personas se concentran convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); también en Valparaíso, Concepción y Temuco.
- Lunes 7** • Ciento doce trabajadores de la fábrica de bicicletas Fabisa-Bianchi bloquean sus instalaciones en el marco de una huelga iniciada el 30 de abril exigiendo mejoras salariales. El directorio de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET) rechaza la medida.
- Martes 8** • Un centenar de desocupados de la ciudad de Angol bloquean una de sus rutas de acceso y marchan por las calles exigiendo trabajo frente al municipio local y a la gobernación de Malleco. Carabineros detiene a cinco manifestantes.
- Miércoles 9** • Cerca de 30 mapuches encapuchados ocupan el fundo Santa Margarita, ubicado en Vilcún, exigiendo la entrega de sus tierras. Un centenar de carabineros desaloja el predio y detienen a seis indígenas.
- Jueves 10** • Cerca de 2.500 estudiantes de las universidades de Valparaíso, Playa Ancha, Católica de Valparaíso y Federico Santa María realizan una protesta frente al Congreso en rechazo a la reforma del sistema de crédito fiscal (Fondo Solidario), que implica la creación de una agencia encargada de administrarlo que incluirá al sector privado.
- Viernes 11** • El Sindicato Nacional Telefónico (SINATE) y el Frente Unitario de Trabajadores Telefónicos de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile (CTC) toman las dependencias de la empresa exigiendo que no se aplique un plan de reducción de costos que implicaría mil despidos.
- Sábado 12** • En Rancagua, habitantes de Paine y San Francisco toman la Ruta 5 Sur en protesta contra la instalación de un vertedero de basura de la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos (EMERES) en la zona. La medida es disuelta por carabineros tras lo cual más de 150 manifestantes se movilizan hacia el control de peaje de Angostura.
- Lunes 14** • En la provincia de Valdivia, nueve comunidades huiliches de la comuna de Panguipulli ocupan dos predios particulares y una porción del Parque Nacional Villarrica exigiendo a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y al Ministerio de Bienes Nacionales la entrega de 7.500 hectáreas pertenecientes a estos terrenos.
- Martes 15** • Un grupo de pehuenches del Alto BíoBío, apoyados por el Consejo de Loncos, toma la ruta de acceso al sector en forma indefinida exigiendo diálogo con el gobierno. En Tirúa, cuatro mapuches son heridos de bala por carabineros al cumplir una orden judicial de arresto.

Miércoles 16

• La Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) organiza una jornada de protesta nacional contra las reformas al Fondo Solidario. En Santiago, cerca de 8 mil estudiantes marchan hacia los ministerios de Educación y del Interior, donde carabineros detienen a 51 manifestantes, y 2 mil más se dirigen a la Plaza de Armas. También marchan en Arica, Temuco, Iquique y Valdivia. Estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Chile (UCH) toman su facultad por 24 horas. Se paralizan las universidades de Concepción, BíoBío, Católica de la Santísima Concepción y una sede de la Federico Santa María. En Temuco marchan 1.500 estudiantes.

Jueves 17

• Alrededor de 1.500 estudiantes secundarios marchan junto a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) hacia el Ministerio de Educación exigiendo la gratuidad del pase escolar y el fin de la tarjeta magnética. Allí son dispersados por carabineros.

• Un centenar de desocupados y jefas de hogar marchan en Talcahuano exigiendo trabajo a la municipalidad y al gobierno.

Viernes 18

• La ACES, la Secretaría Regional Ministerial de Educación y el Consejo Superior de Transporte Terrestre (CSTT) acuerdan la entrega de 81 mil pases escolares gratuitos para quienes recibieron los del año pasado después del 1° de agosto. La Secretaría se compromete a conseguir otros 30 mil.

Domingo 20

• Trabajadores portuarios, de la salud, aparcadores, de la construcción y comerciantes se movilizan hacia la gobernación de San Antonio exigiendo medidas contra el desempleo.

Lunes 21

• Cerca de 250 habitantes de Angostura, San Francisco de Mostazal y Paine, bloquean la Ruta 5 Sur en protesta contra la instalación de un vertedero de basura en la zona, y son reprimidos por carabineros. Mientras, unos 200 habitantes de la comuna de Tiltil bloquean la Ruta 5 Norte por el mismo motivo.

Miércoles 23

• En Viña del Mar, unos mil estudiantes secundarios marchan hacia la Secretaría Regional Ministerial de Educación exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados sobre el pase escolar. 31 manifestantes son detenidos tras la represión policial.

Jueves 24

• Miembros de las comunidades mapuches de Panguipulli toman la ruta que comunica a la localidad con San Martín de los Andes, Argentina, exigiendo la entrega de tierras.

• Trabajadores de Fabisa-Bianchi exigen la intervención del presidente en el conflicto que mantienen desde el 7 de mayo.

• En Viña del Mar, el Parlamento Juvenil y la Federación de Estudiantes Secundarios local marchan junto a 3 mil estudiantes en reclamo sobre los acuerdos del pase escolar.

• Convocadas por la CONFECH, diversas manifestaciones se realizan contra la privatización del Fondo Solidario. Alrededor de 400 alumnos de la Universidad de Tarapacá cortan calles y marchan hacia la Plaza Colón. Cerca de 300 estudiantes de la Universidad de Atacama bloquean en Copiapó la Ruta 5 Norte, tras lo que son reprimidos por carabineros. Un centenar de alumnos de las universidades de Playa Ancha y Valparaíso toman la Bolsa de Valores, ubicada en el puerto, tras lo que son desalojados por carabineros. Estudiantes de la Universidad de La Frontera toman las dependencias del campus Arturo Prat, ubicado en el centro de Temuco. Integrantes de la Universidad Arturo Prat marchan en Iquique junto al sindicato de estibadores. Cerca de 150 estudiantes de la Universidad de La Serena cortan la Ruta 5 Norte.

Martes 29

• Comienza la jornada de medidas escalonadas por regiones convocada por la CONFECH por un período de tres días, exigiendo la designación de 3 mil millones de pesos para el crédito universitario. Más de 30 mil estudiantes de 7 de las 11 universidades del Consejo de Rectores, ubicadas al sur del país, inician un paro indefinido acompañado de tomas. Cerca de 500 alumnos de la Universidad de Federico Santa María de Talcahuano ocupan las calles centrales del puerto. La casa de estudios del Biobío, ubicada en Concepción, y la de Los Lagos, de Osorno, son tomadas por sus estudiantes. Los de Temuco se movilizan en su universidad. En Valdivia, más de 600 estudiantes de la Universidad Austral marchan y cortan calles.

• Cinco mil estudiantes secundarios de Viña del Mar, Valparaíso, Concón y Quilpué realizan una marcha hacia la intendencia de la V Región, donde se reúnen con el gobernador y otras autoridades para exigirle una rebaja del precio del transporte y mayor amplitud horaria del pase escolar. La jornada finaliza con 118 manifestantes detenidos.

Miércoles 30

• Los universitarios del norte del país se pliegan a las movilizaciones contra las reformas al Fondo Solidario. Estudiantes de la Universidad de Atacama, ubicada en Copiapó, ocupan la Ruta 5 Sur tras lo cual son reprimidos por carabineros, quienes detienen a 6 manifestantes. Cerca de mil estudiantes de La Serena marchan por la ciudad y cortan una ruta de acceso. Los estudiantes del sur continúan con las medidas: más de 600 de la Universidad Austral marchan y cortan calles en Valdivia; los de Los Lagos toman su casa de estudios, al igual que los de la De La Frontera. Los alumnos de la Federico Santa María marchan por el centro de Talcahuano. La Universidad Católica de la Santísima Concepción, la de Tarapacá y la Católica del Norte inician un paro. Los de la segunda cortan calles aledañas al plantel.

Jueves 31

• En Valparaíso, 2 mil estudiantes secundarios y universitarios confluyen en una marcha desde la Intendencia hacia el Congreso reclamando una solución para el problema del pase escolar y el déficit del Fondo Solidario. La manifestación es reprimida por carabineros, finalizando con 251 detenidos.

75

JUNIO

Lunes 4

• Alrededor de 1.200 empleados de CTC protestan frente a las instalaciones de la empresa en Santiago en contra del plan de reestructuración realizado por la gerencia, el cual implicaría cerca de mil despidos.

Miércoles 6

• Junto al Frente Único de Trabajadores (FUT), la mitad de los trabajadores de CTC realiza un paro por 3 horas. Carabineros detiene a 4 dirigentes gremiales antes de la medida. La gerencia de la empresa anuncia el despido de más de 1.600 empleados.

Miércoles 13

• Trabajadores del SINATE se manifiestan frente al edificio institucional de la empresa en rechazo de los 1.639 despidos que ésta efectuó la empresa la semana pasada.

Lunes 18

• Presos de los penales de Temuco, Concepción y Arica comienzan una huelga de hambre exigiendo que se amplíe la retroactividad del proyecto de ley que permite rebajar las condenas en dos meses por año.

Miércoles 20

• Los penales de Antofagasta, Colina, Curicó, Rancagua, Talca, Coronel y Yumbel se pliegan a la huelga de hambre.

- Jueves 21** • Llegan a 15 penales e involucran alrededor de 30 mil personas las manifestaciones de los reclusos: Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Colina II, San Miguel, Rancagua, Curicó, Talca, Concepción, Coronel, Yumbel, Los Ángeles, Temuco y Puerto Montt.
- Circa 500 desocupados, trabajadores portuarios y empleados de Correos de Chile, convocados por el Consejo Pro Defensa de Valparaíso, marchan desde el puerto al Congreso por mejoras en el comercio y los servicios y contra el desempleo de la V Región. La Central Autónoma de Trabajadores (CAT) se solidariza con los reclamos.
- Viernes 22** • Los internos de la ex-Penitenciaría, los de la cárcel de Puente Alto y los del Centro de Orientación Femenina se suman a la medida junto a los de Iquique, Acha, Valdivia y La Unión. Los presos de El Manzano, en Concepción, y los de Copiapó, deponen las medidas mientras se inicia el diálogo.
- Sábado 23** • El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia invita al dirigente de la Confraternidad de Amigos y Familiares de Presos Comunes (CONFRAPECO) a exponer en el parlamento la postura de los huelguistas.
- Domingo 24** • Los internos de las cárceles de Iquique, Concepción, Coronel, Chillán, Los Ángeles, La Unión y Puerto Montt deponen la huelga de hambre. Gendarmería expresa su disposición a participar en la elaboración de un proyecto de ley destinado a reducir las penas de quienes no estén condenados a cadena perpetua y muestren muy buena conducta.
- Viernes 29** • 400 estibadores de Antofagasta, junto al Sindicato de Trabajadores Marítimos de la región y el Consejo Marítimo Portuario, paralizan indefinidamente las actividades del puerto local exigiendo a las 10 empresas navieras de la ciudad un aumento salarial de 17 mil pesos diarios.

JULIO

- Lunes 2** • Un centenar de pobladores de Lonquén y Calera del Tango protestan a un costado de la Ruta 5 contra la instalación de un relleno sanitario en Santa Marta, resuelta el domingo por la EMERES. Un contingente de carabineros custodia a los manifestantes.
- Miércoles 4** • La CUT se manifiesta frente al Congreso en el marco de los debates en torno a la reforma laboral e irrumpe en la sesión en protesta por la oposición de algunos senadores a considerar en dicha ley la reincorporación de los trabajadores despedidos por lo que se dió en llamar “prácticas antisindicales”.
- Viernes 6** • Los portuarios de Antofagasta aceptan en asamblea la oferta empresarial consistente en aumentar los salarios diarios hasta un tope de 19.500 pesos.
- Sábado 7** • Con el apoyo del alcalde de Maipú y de parlamentarios de diversas bancadas, 3 mil personas se manifiestan en la plaza mayor de la comuna contra la instalación del relleno sanitario en La Rinconada.
- Lunes 9** • La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sobresee temporalmente por razones de salud al ex-dictador Pinochet en la causa en que se lo acusa de encubridor de homicidios y desapariciones durante la Caravana de la Muerte.

- Miércoles 11** • El Ministerio de Transporte resuelve implementar un aumento de 10 pesos en el pasaje adulto de los buses de Santiago.
- Jueves 12** • Un grupo de pehuenches se manifiesta frente al consulado de España ubicado en Temuco exigiendo la intermediación del gobierno español ante la compañía eléctrica Endesa para que detenga la construcción de la central hidroeléctrica Ralco.
- Viernes 13** • El Consorcio Agrícola del Sur (CAS) y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) convocan a un acto en San Carlos, junto a la Asociación de Agricultura local, al que acuden cerca de 30 mil agricultores, comerciantes y transportistas de organizaciones gremiales de la VI, VII, VIII, IX y X regiones. Los manifestantes exigen al gobierno la defensa de las bandas de precios, que la Fiscalía Nacional Económica garantice una compensación frente a los productos agrícolas extranjeros subvencionados, que se hagan efectivos los mecanismos de renegociación de las deudas y de financiamiento agrícola, como así también la participación en las negociaciones sobre un acuerdo comercial con la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, entre otros.
- Dirigentes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) toman la embajada de España con el objetivo de denunciar ante la comunidad internacional que en Chile no existen condiciones para juzgar a Pinochet.
- Jueves 19** • Es publicada en el Diario Oficial la Ley Sobre Indulto General con motivo del Jubileo del año 2000, que permitirá la reducción de penas y la liberación de 600 presos.
- Viernes 20** • Carabineros allanan la sede del Consejo de Todas las Tierras en Temuco, tras una orden dictada por dos fiscales que investigan las ilegalidades ocurridas durante la ocupación del fundo El Ulmo, perteneciente a la Forestal Mininco.
- Sábado 21** • Trabajadores portuarios de Arica intentan tomar el puerto exigiendo al subsecretario de Transportes la implementación de una red de protección social con pensiones y cursos de especialización. Carabineros impiden la toma y detienen a 10 personas. Los estibadores contratados realizan un paro en solidaridad. El gobierno exige a la empresa Cornapesca la reconstrucción de 800 trabajadores para otorgar nuevas cuotas de captura de jurel.
- Lunes 23** • Cerca de 6 mil presos de Arica, Antofagasta, Calama, Colina II, San Miguel, Curicó, Talca, Concepción, Coronel, Yumbel y Puerto Montt inician una huelga de hambre exigiendo la implementación de un programa de rehabilitación que les permita mejorar sus condiciones de vida, y que los reincidentes sean incluidos dentro de los beneficiarios de la Ley del Jubileo.
- Los más de 500 funcionarios del Servicio Médico Legal (SML) inician un paro exigiendo al Ministerio de Justicia la sanción de una Ley de Planta que mejore sus condiciones laborales.
- Martes 24** • Alrededor de 3 mil estibadores de Valparaíso y San Antonio inician un paro convocado por la Coordinadora Nacional Marítimo Portuaria exigiendo al gobierno el cumplimiento de acuerdos suscritos en 1999. Los manifestantes amenazan con una huelga nacional y por tiempo indefinido.
- Miércoles 25** • El Consejo de Todas las Tierras convoca a una marcha hacia la Intendencia de la IX Región, ubicada en Temuco, en la que participan mil personas en protesta por el allanamiento de su sede y por el mal trato policial. En la Plaza de Armas, carabineros reprimen la manifestación y detienen a 126 personas.

Jueves 26

• A 14 mil llegan los internos en huelga de hambre tras sumarse a la medida los presos de la ex-Penitenciaría, Rancagua, Chillán, Los Ángeles, Temuco, Arauco, Lebu, Angol, Valdivia y Osorno. La CONFRAPECO oficia de vocera de los manifestantes.

• Un millar de mapuches corta la Ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Victoria, IX Región, en protesta por las detenciones sucedidas el miércoles.

Sábado 28

• La defensoría pública de Temuco deja en libertad con medidas cautelares a los 6 mapuches detenidos el miércoles.

• Pescadores artesanales de la comuna de Coronel, Región del BíoBío, se manifiestan contra la ley de pesca y exigen una ampliación en las cuotas de extracción del jurel repartiéndolo gratis.

Martes 31

• El Senado aprueba un Tratado de Libre Comercio con Costa Rica.

AGOSTO

Viernes 3

• Los 3.500 presos de la ex Penitenciaría deponen la huelga de hambre tras haberles dado a conocer la CONFRAPECO los avances en el proyecto de ley que rebaja condenas por buena conducta.

Sábado 4

• Los presos de El Manzano y Coronel deponen la huelga de hambre.

Lunes 6

• Un grupo de 50 mapuches de la comunidad Chihaiqura, apoyado por la Coordinadora Arauco-Malleco, toma el fundo El Porvenir, ubicado en la localidad de Chol Chol, exigiendo la entrega de 657 hectáreas de tierras entre las que se encuentra el predio ocupado.

• El gobierno, las empresas pesqueras y los trabajadores del sector de Antofagasta y Tarapacá acuerdan la realización de una etapa de pesca de investigación del jurel con una cuota máxima de 80 mil toneladas.

Martes 7

• Los mapuches de la Coordinadora Arauco-Malleco se enfrentan con carabineros en el acceso del fundo tomado. Los indígenas expresan que no abandonarán el lugar.

Jueves 9

• Los funcionarios hospitalarios no médicos, convocados por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS), realizan un paro de dos horas en nueve regiones del país exigiendo mejoras salariales.

Lunes 13

• Centenares de productores de leche de Osorno se manifiestan frente a la planta de la Sociedad Productora de Leche (SOPROLE) en Santiago afirmando que la empresa importa leche de otros países por la que abona un precio mayor del que impone al mercado local.

Miércoles 15

• Comienza en Osorno una marcha escalonada de cesantes convocada por la CUT. Parten desde la ciudad 400 personas hacia Santiago, donde se encontrarán con la caravana de desempleados proveniente de Copiapó, en el norte del país. Al arribar a Valdivia, 500 personas se suman a la caravana.

- Jueves 16** • Cinco mil personas marchan en Santiago junto a la CUT, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), pescadores de Talcahuano, trabajadores de CTC y otros gremios rechazando las reformas laborales discutidas en el Congreso, entre otras reivindicaciones.
- Martes 21** • La marcha de desocupados del sur arriba a Concepción donde es recibida por más de 500 integrantes de organizaciones gremiales, sociales y de estudiantes.
- La Cámara de Diputados aplaza hasta el 4 de septiembre la votación de la ley de reforma laboral. Se incluirán tres puntos: un aumento de 500 fiscalizadores en la Dirección de Trabajo, la modificación del artículo 160 referido a los despidos por injurias y una nueva disposición sobre las destituciones de empleados por necesidades de la empresa.
- Jueves 23** • La Federación Nacional de Productores de Leche (FEDELECHE) se hace parte en el requerimiento interpuesto en junio de 1997 por la Fiscalía Nacional Económica en contra de las empresas Nestlé, Parmalat, Loncoleche y SOPROLE por conductas reñidas con la libre competencia en el proceso de comercialización de leche en el país.
- Domingo 26** • La marcha de cesantes proveniente del sur del país llega a San Fernando Rancagua.
- Lunes 27** • La Asociación de Industrias Lácteas (ASILAC) decide romper el diálogo con los productores hasta tanto se interrumpa la acusación presentada ante la Fiscalía Nacional Económica.
- Cerca de 50 desocupados provenientes del norte del país realizan un acto en el municipio de Quilicura, Santiago, junto a la secretaria general del Partido Comunista (PC).
- Martes 28** • Se reúnen en Santiago 2.500 personas durante el acto de finalización de la caravana de desocupados impulsada por la CUT.
- Miércoles 29** • Dirigentes de la CUT se reúnen con el presidente del Senado para exigirle medidas contra el desempleo, entre las que se encuentra el desarrollo de infraestructura inmobiliaria con los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
- El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) rechaza el proyecto de reforma laboral tratado en el congreso argumentando que originará rigidez en las relaciones laborales, excesiva intervención de la autoridad, aumento de la conflictividad laboral y la proliferación de juicios laborales.
- Jueves 30** • El presidente de la CUT pide la pronta aprobación del proyecto de ley de reforma laboral.
- El presidente Lagos exhorta a productores y empresas lecheras a retomar el diálogo. FEDELECHE pide apoyo al gobierno para desarrollar una libre competencia interna y externa.
- Viernes 31** • En el centro de Santiago marchan 4.500 funcionarios de consultorios de todo el país convocados por la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CON-FUSAM) en reclamo de un 25% de aumento salarial.

■ Glosario de siglas

ACES	Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios
AFEP	Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos
AFP	Administradora de Fondos de Pensiones
ANEF	Asociación Nacional de Empleados Fiscales
ASILAC	Asociación de Industrias Lácteas
ASIMET	Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas
CAS	Consorcio Agrícola del Sur
CAT	Central Autónoma de Trabajadores
CONADI	Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
CONFECH	Confederación de Estudiantes de Chile
CONFRAPECO	Confraternidad de Amigos y Familiares de Presos Comunes
CONFUSAM	Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada
CPC	Confederación de la Producción y el Comercio
CSTT	Consejo Superior del Transporte Terrestre
CTC	Compañía de Telecomunicaciones de Chile
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
EMERES	Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos
FEDELECHE	Federación Nacional de Productores de Leche
FENATS	Federación Nacional de Trabajadores de la Salud
FUT	Frente Único de Trabajadores
PC	Partido Comunista
SML	Servicio Médico Legal
SNA	Sociedad Nacional de Agricultura
SINATE	Sindicato Nacional Telefónico
UCH	Universidad de Chile
SOPROLE	Sociedad Productora de Leche

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández y Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Tercera Digital y El Mercurio.*

Paraguay

REGION
SUR



MAYO

Jueves 3

• Integrantes de la Coordinadora de Asentamiento centran frente a la Junta Municipal de esa localidad para solicitar la legalización de la adquisición de las tierras que ocupan.

Viernes 11

• 500 familias “sin techos” son desalojadas de una finca de 20 hectáreas, en Alto Paraná, propiedad del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI). La policía destruye sus viviendas y detiene a sus tres dirigentes.

Sábado 12

• Más de 100 obreros de la empresa Ingenio Santa María, de Santa María de Santa Fe, departamento de Misiones, cierran el acceso al distrito por la ruta de empalme a San Ignacio, para pedir al gobierno acciones concretas que reactiven la industria azucarera.

Lunes 21

• 43 jornaleros de la comuna capitalina, agremiados en el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad (SITRAMA), que no cobran sus salarios desde hace 5 meses, comienzan una huelga de hambre frente al Palacete Municipal.

Jueves 24

• El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) presenta ante la Cámara de Diputados de la Nación un pedido de juicio político contra el presidente González Macchi, acusado de desvío de dinero.

Miércoles 30

• Los campesinos de todo el país, agrupados en la Federación Nacional Campesina (FNC), cortan las principales carreteras nacionales hasta que el gobierno refinance el crédito por tres años y congele los intereses aplicados al sector. Exigen también que el 15% del algodón producido sea destinado a la industria local. Cuentan con el apoyo de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP).

JUNIO

Miércoles 6

• La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) se suma al frente de protesta campesina, instalando un piquete en Concepción. El FNC mantiene las concentraciones en San Pedro, Concepción, Caaguazú, San Patricio-Misiones, Coronel Bogado-Itapúa, Itaguá-Central y Caazapá.

Jueves 7

• La FNC llega a un preacuerdo con el gobierno, tras consensuar cinco puntos básicos que dan respuesta a las exigencias presentadas por los campesinos, mientras estos acuerdan desactivar el bloqueo de rutas por ocho días.

Miércoles 13

• Alrededor de 7 mil personas cierran la ruta III, a la altura de Santa Rosa del Aguaray, en San Pedro, para reclamar el asfaltado de un tramo de casi 100 kilómetros de la ruta XI que une las localidades de Antequera y Juana María de Lara.

Viernes 15 • La FNC resuelve en una plenaria detener los piquetes y aceptar la propuesta de las autoridades de congelar los intereses de créditos obtenidos por los campesinos en bancas estatales y de adjudicar unas 10 mil hectáreas de tierras en los distritos de Caazapá, Caaguazú y Misiones.

Jueves 21 • Los ministros de Relaciones Exteriores de los países integrantes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) se congregan en Asunción para la XX reunión del Consejo Económico del MERCOSUR.

Miércoles 27 • La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados rechaza el pedido de juicio político al Presidente de la República aduciendo que el mismo no fue imputado judicialmente en ninguna de las causas de supuesta comisión de delitos.

• Integrantes de la Coordinadora de los Sintechos-CONOP(Consejo Nacional de Organizaciones Populares) bloquean en forma intermitente tres puntos clave de acceso a Asunción, para reclamar al gobierno la adquisición de unos 15 asentamientos, la construcción de 10 mil viviendas obreras y la creación de una secretaría general para la regularización de asentamientos de sintechos.

JULIO

Jueves 5 • Más de 3 mil estudiantes secundarios y universitarios realizan la marcha juvenil “por un país mejor”, recorriendo las principales calles de Ciudad del Este en rechazo a la corrupción y la impunidad gubernamental.

• Docentes de todo el país convocados por la OTEP marchan por las calles capitalinas hasta el Palacio de Gobierno pidiendo la promulgación del Estatuto Docente tal cual fue aprobado por el Parlamento.

Viernes 6 • El Poder Ejecutivo veta parcialmente el Estatuto Docente, pese al pedido explícito de los educadores de su promulgación completa. El estatuto pasa nuevamente a la Cámara de Diputados.

Martes 10 • Representantes de la CONOP llegan a un acuerdo con representantes del gobierno por el cual éstos se comprometen a que el Ejecutivo promulgue una ley que proteja a los sin techo, compre las tierras donde se hallan 15 asentamientos del departamento central y alrededores de la capital, y construya 10 mil viviendas económicas.

Miércoles 11 • Los trabajadores de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO) comienzan una huelga de 72 hs. convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Telecomunicaciones (SINATTEL) para protestar por la intervención de la empresa telefónica, en el marco del proceso de privatización. Exigen el reintegro de 374 funcionarios despedidos y el pago de indemnizaciones de acuerdo al contrato colectivo, entre otras reivindicaciones.

• El gobierno promulga un decreto por el cual se aplica un impuesto del 10% sobre el valor de las importaciones a 332 productos.

Viernes 13

• Los funcionarios de ANTELCO ponen fin a la huelga iniciada el miércoles 11, con la promesa de que el Presidente dirigirá de manera directa el proceso de privatización de la empresa y solucionará en un plazo máximo de 30 días los problemas planteados por el sector obrero.

Martes 17

• Alrededor de 400 vendedores ambulantes de la zona primaria de la aduana de Ciudad del Este bloquean el Puente de la Amistad para protestar contra el operativo anticontrabando iniciado por el Ministerio de Hacienda, a raíz del cual están impedidos de ingresar a sus lugares habituales de trabajo. Son desalojados por la policía.

• Los alrededor de 1.500 trabajadores paraguayos de la central hidroeléctrica binacional de Itaipú, nucleados en el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Itaipú Binacional (STEIBI), comienzan un paro escalonado que se hará en lapsos de tres días por semana hasta cumplir 15 jornadas, en protesta por el incumplimiento del contrato colectivo y en reclamo por iguales condiciones laborales a las de sus pares brasileños.

Jueves 19

• Los paseros (transportadores de mercaderías a través de la frontera) de la Aduana de Ciudad del Este se suman a los vendedores ambulantes de la zona en el intento de bloquear el Puente de la Amistad dado que, de ahora en más, deberán declarar todas las mercaderías que ingresen a territorio paraguayo.

Viernes 27

• La Cámara de Diputados desaprueba la ampliación presupuestaria para el proceso de reforma de ANTELCO, por lo que la privatización de la empresa telefónica queda paralizada.

Martes 31

• Los trabajadores de Itaipú comienzan la segunda jornada del paro escalonado de 72 hs. iniciado 2 semanas atrás y parten con una caravana de aproximadamente 500 vehículos desde Ciudad del Este hasta Asunción.

83

AGOSTO

Miércoles 1

• El gobierno aumenta el precio del gasoil un 12% y resuelve incrementar automáticamente el precio del carburante cada tres meses si existe una variación del dólar de más/menos 5%.

Viernes 3

• Alrededor de 8 mil estudiantes de 50 colegios secundarios nacionales y privados de Asunción, convocados por el Movimiento por la Obtención del Boleto Estudiantil (MOBE), marchan hasta el Ministerio de Educación, Obras Públicas y el Congreso para exigir aumento del presupuesto, congelamiento del precio del pasaje y cumplimiento del boleto estudiantil.

Lunes 6

• Los docentes de la OTEPy de la Unión Nacional de Educadores (UNE) realizan una concentración frente al Congreso y comienzan una huelga por tiempo indefinido hasta que el Senado trate la ley del Estatuto Profesional, vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo.

• Los funcionarios de la Corporación de Obras Sanitarias (CORPOSANA), agremiados en el Sindicato de Trabajadores de CORPOSANA (SITRACORP), inician una huelga de 15 días para frenar los despidos que se están llevando a cabo en el marco del proceso de privatización de la empresa, donde reclaman ser integrados, y para reclamar por el incumplimiento del Contrato Colectivo de trabajo.

Lunes 13

• La OTEP y la UNE convocan a una marcha de maestros frente al Congreso para que los legisladores aprueben el Estatuto Profesional con las modificaciones realizadas por Diputados. También realizan numerosos cortes de ruta en Edelira, General Bogado, Cruce Liberación, Mbytyy, Horqueta, Caaguazú y Mallorquín.

• Alrededor de 800 campesinos de Cordillera pertenecientes al Frente Social y Ciudadano (FSC) llegan hasta Asunción, instalando un campamento frente a la Catedral, para reclamar la renuncia del Presidente y del Vicepresidente de la Nación y proponer la instalación de un gobierno de emergencia con todos los sectores. Los trabajadores de CORPOSANA se suman a la marcha, exigiendo su participación en la reforma del ente y respeto a las leyes laborales.

Martes 14

• Los empresarios del transporte público agremiados en la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana y Asunción (UCETRAMA) decretan un paro indefinido y ordenan a sus conductores el bloqueo de los principales accesos a Asunción, hasta tanto el gobierno acceda a autorizar un aumento del 25% en el precio del pasaje.

• Cientos de comerciantes adheridos a la Confederación de Comercio, Servicios y Finanzas cierran sus locales durante dos horas por la mañana para repudiar la situación económica y social del país. En tanto, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) se moviliza con cientos de personas por las calles del microcentro, para exigir acciones que eviten el cierre de empresas.

• El Senado aprueba el Estatuto Docente con los apartados pretendidos por los maestros. La OTEP y la UNE ponen fin a la huelga que mantenían desde el 6 de agosto.

Jueves 16

• Los empresarios del transporte público nucleados en la UCETRAMA levantan el paro que mantenían desde el martes, aceptando no subir la tarifa del transporte.

Domingo 19

• Unos 3 mil habitantes de Coronel Oviedo, organizados por la iglesia local, marchan por las principales calles de la ciudad hasta la Catedral, reclamando la renuncia del Presidente y del Vicepresidente de la República.

Viernes 24

• Campesinos y sindicalistas pertenecientes al FSC realizan una marcha desde el Parlamento hasta el Palacio de Justicia para repudiar la corrupción gubernamental.

Martes 28

• Miles de campesinos de la MCNOC realizan bloqueos relámpago de rutas en los departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú, Guairá, Misiones, Alto Paraná, Itapúa, Caazapá, Paraguari, Cordillera y Caaguazú para oponerse a la política económica llevada adelante por el gobierno y reclamar fondos presupuestarios que saquen adelante al sector rural. Tras la promesa gubernamental de estudiar el estatuto agrario y de comprar tierras, los manifestantes levantan la medida.

Jueves 30

• Los funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) comienzan un paro en reclamo de una ampliación presupuestaria doble a la que autorizó el Senado.

• Cientos de estudiantes que integran la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUNA), docentes y funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) cortan la avenida Mariscal López y la ruta II Mariscal Estigarribia a la altura del km. 11, para oponerse al recorte presupuestario previsto para el año 2002.

■ Glosario de siglas

ANTELCO	Administración Nacional de Telecomunicaciones
BCP	Banco Central del Paraguay
CNT	Central Nacional de Trabajadores
CONAVI	Consejo Nacional de la Vivienda
CONOP	Consejo Nacional de Organizaciones Populares
CORPOSANA	Corporación de Obras Sanitarias
FEUNA	Federación de Estudiantes Universitarios
FNC	Federación Nacional Campesina
FSC	Frente Social y Ciudadano
MCNOC	Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MOBE	Movimiento por la Obtención del Boleto Estudiantil
OTEP	Organización de Trabajadores de la Educación
PLRA	Partido Liberal Radical Auténtico
SINATTEL	Sindicato Nacional de Trabajadores de las Telecomunicaciones
SITRACORP	Sindicato de Trabajadores de CORPOSANA
SITRAMA	Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad
STEIBI	Sindicato de Trabajadores y Empleados de Itaipú Binacional
UCETRAMA	Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana y Asunción
UNA	Universidad Nacional de Asunción
UNE	Unión Nacional de Educadores
UIP	Unión Industrial Paraguaya

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
 Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert y Mariana Fassi.
 Fuentes: diarios Última Hora y Noticias On Line.*

Uruguay

REGION
SUR



MAYO

Martes 1

• Miles de personas, encabezadas por Propuesta Ii Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), marchan hasta la Plaza Mártires de Chicago en Montevideo para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. En casi todo el país se realizan distintos actos.

Martes 8

• La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) y el Sindicato Autónomo de Tabacaleros (SAT) realizan un paro de 24 hs. a nivel nacional en rechazo a la propuesta gubernamental de eliminar el Impuesto Específico Interno (IMESI), medida que llevaría al cierre de varias empresas.

Sábado 12

• Los más de 500 trabajadores de la fábrica textil Sudamtex de Colonia del Sacramento, agrupados como Asociación del Personal de Sudamtex (APSU), se movilizan hasta la Intendencia, contra el cierre de la empresa.

Jueves 17

• Los agremiados a la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) paran durante la jornada y marchan por Montevideo para reclamar que se les presten servicios de asistencia integral a ellos y sus familiares.

Domingo 20

• Integrantes de distintas organizaciones de desocupados del país se reúnen en Fray Bentos, donde deciden crear la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD).

• Alrededor de 70 mil personas marchan hasta la plaza Libertad, en Montevideo, en reclamo de justicia por los detenidos y desaparecidos durante la última dictadura militar (1973-1985).

Miércoles 23

• Los transportistas del sector urbano, agremiados en la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT), paran sus actividades desde las 8:30 y realizan una asamblea para discutir un plan de movilizaciones en rechazo de las reestructuras unilaterales que intenta llevar a cabo la empresa de transporte interdepartamental Copsa.

Lunes 28

• Más de 50 obreros de la fábrica Cerámicas del Sur, en San José, ocupan por turnos las instalaciones de la empresa, tras vencerse el seguro de desempleo en el que se encontraba casi todo el personal y como forma de presionar al poder político para transformar la empresa en cooperativa.

Miércoles 30

• Los trabajadores nucleados en el Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) paran durante la jornada para reunirse en asamblea. Se declaran en solidaridad con los 15 visitantes médicos del laboratorio Andrómaco, que desde hace 69 días están en huelga de hambre reclamando el reintegro de sus compañeros despedidos.

JUNIO

Miércoles 6

• Los trabajadores nucleados en el Comité de Fábrica de El Trigal S.A. se concentran frente a la planta industrial, en Montevideo, para reclamar el reintegro de 5 sindicalistas que fueron enviados al seguro de paro, como forma de represión sindical.

Jueves 7

• Los profesores nucleados en la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) paran por 24 hs. ante la irregularidad en el pago de sus sueldos.

Viernes 8

• Los empleados de las instituciones financieras públicas y privadas dejan más temprano sus lugares de trabajo para concurrir al acto organizado por la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) frente al Banco de Brasil, en Montevideo, con el fin de repudiar el retiro sorpresivo del país de esta entidad bancaria.

• Más de 100 personas, integrantes de la Comisión de Desocupados de Malvín Norte, realizan un piquete en el Camino Carrasco a la altura de Roberto Berro, en Montevideo, reclamando trabajo y en rechazo a la orden de desalojo de 400 familias del Complejo Habitacional Euskal Erría 92.

Martes 19

• Los vecinos de barrios y asentamientos cercanos al Centro de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP) de Jardines del Hipódromo se concentran frente al centro asistencial para protestar contra el cierre del Servicio de Emergencia.

Martes 26

• Alrededor de 100 funcionarios municipales de Rocha, acompañados por una delegación de la Federación Nacional de Municipales (FNM), cortan la carretera de acceso a la capital departamental, en el cruce de las rutas 9 y 15, en reclamo del pago de sueldos atrasados, vacaciones y aguinaldos.

Miércoles 27

• Los docentes y funcionarios de secundaria y de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) –nucleados en la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) y la Asociación de Funcionarios de la UTU (AFUTU)– paran durante la jornada para rechazar la política económica de ajuste del gobierno. Exigen, también, más recursos para educación y mejoras en las condiciones de trabajo, entre otros puntos.

• Más de 10 mil personas, convocadas por hijos de detenidos y desaparecidos (HIJOS) y la Plenaria de Memoria y Justicia, marchan hasta el Palacio Legislativo, en Montevideo, reclamando conocer lo acontecido durante la última dictadura y enjuiciar a los culpables de las violaciones a los derechos humanos.

• Unos 250 funcionarios no médicos de la Cooperativa Médica de la Asociación de Empleados Civiles (COMAEC) ocupan la sede de la institución en Montevideo, en defensa de sus fuentes de trabajo, pago de salario del mes de mayo y aguinaldo, entre otros puntos.

JULIO

Viernes 6

• Los funcionarios y médicos de la Mutualista Israelita del Uruguay (MIDU) se atrincheran dentro de la mutual, impidiendo el retiro de los pacientes y –junto con personal de COMAEC y numerosos socios de ambos centros médicos– cortan las avenidas 8 de Octubre y Garibaldi, en Montevideo, para repudiar la sorpresiva decisión del MSP de clausurar estas instituciones.

Sábado 7

• Los médicos y anestelistas de COMAEC y MIDU, agremiados en el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Sociedad Anestésico Quirúrgica (SAQ), comienzan un paro de 72 hs. para oponerse a la resolución de clausura y liquidación de ambas mutualistas decretada por el MSP.

Martes 10

• La Federación Uruguaya de Salud (FUS) acata un paro de 24 hs. con ocupación de todas las instituciones de asistencia colectiva, para oponerse al cierre de las mutualistas COMAEC y MIDU, reivindicar el respeto a los convenios colectivos y repudiar la comercialización de la asistencia médica. Delegados de esta Federación, del SMU y de la SAQ se reúnen con funcionarios del MSP, con quienes llegan a un acuerdo por el cual se mantendrá la estabilidad del sistema y se conservarán todos los puestos de trabajo, entre otras cuestiones.

• La Federación de Transportistas de la Bebida (FETRABE) deja de distribuir, por tiempo indeterminado, productos de Coca Cola en todo Montevideo, debido a que la embotelladora Refrescos S.A. contrató un nuevo distribuidor, violando la exclusividad que mantenía con las 61 empresas que cumplían esas tareas.

Miércoles 11

• Los empleados de todos los bancos del país paran durante la jornada para realizar una Asamblea General de la AEBU en el Palacio Peñarol de Montevideo, en la que participan unas 6.700 personas. Aprueban un amplio plan de medidas en defensa de la Caja Bancaria, del sistema solidario y de las empresas públicas.

Martes 17

• Los funcionarios municipales de Rocha paran durante la jornada y cortan el tránsito en la intersección de las rutas 9 y 15, reclamando por sus salarios impagos desde hace tres meses.

Miércoles 18

• Cientos de productores del agro nucleados en la Federación Rural Uruguaya (FRU) realizan concentraciones en más de 40 sitios en todo el país para repartir volantes y sensibilizar a la población sobre la situación del agro.

Martes 24

• Los docentes de la ADES del centro y sur de la capital paran durante la jornada, para rechazar la reforma educativa y en demanda de mejoras salariales.

Miércoles 25

• El PIT-CNT organiza un paro general de 24 hs. para exigir al gobierno cambios en la política económica y soluciones a la crisis del país. 5 mil personas se concentran en la Plaza Mártires de Chicago, frente al Palacio Legislativo, exigiendo la rectificación de la política económica. Asimismo, en el interior, los trabajadores realizan actos en Paysandú, Maldonado, Canelones y San José.

Martes 31

• Los docentes, nucleados en la ADES, realizan un paro de actividades en todos los liceos públicos de la zona este y noreste de Montevideo, en demanda de mejoras salariales y en rechazo a la reforma educativa.

AGOSTO

- Miércoles 1** • El Congreso del Sindicato de Trabajadores de Coca Cola (STCC) se declara en conflicto, ante el envío a seguro de paro de 27 trabajadores, entre los que se encuentran el presidente de esta organización y el secretario general de la FOEB.
- Martes 7** • Los docentes de secundaria realizan un paro en el oeste y noroeste de Montevideo, en demanda de mejoras salariales y en rechazo a la reforma educativa.
- Viernes 10** • Convocados por la UTD y la Federación Unificadora de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM), más de 2 mil desocupados de Montevideo y del interior se concentran en la plaza 1° de Mayo para marchar hacia la Casa de Gobierno en reclamo de un subsidio estatal para desocupados mayores de 16 años, entre otros puntos.
- Jueves 16** • El personal de las organizaciones que integran la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSC) paraliza sus actividades en rechazo a las privatizaciones que llevará adelante el gobierno en las empresas del estado.
- Jueves 23** • El personal de la Banca Oficial de Montevideo y de la banca privada de Ciudad Vieja y Centro realiza un paro parcial y se concentra frente al Sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE) en oposición a la reforma de la cartera de accidentes de trabajo, que es atendida en forma especializada por la Central de Servicios Médicos del BSE.
- Viernes 31** • Los trabajadores nucleados en la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) paran a nivel nacional y se manifiestan frente a organismos públicos y organizaciones de productores, denunciando que la empresa viola el convenio firmado y homologado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), debido a que la dirección de Conaprole anunció la postergación del pago del sueldo correspondiente a agosto.
- Once funcionarios del Banco Surinvest S.A. afiliados a la AEBU toman el local de la empresa en la Ciudad Vieja de Montevideo, luego de que 40 de los 100 empleados de la entidad bancaria son informados de su despido por carta, tras culminar el horario de trabajo.

■ Glosario de siglas

ADES	Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria
AEBU	Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay
AFUTU	Asociación de Funcionarios de la UTU
AOEC	Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole
APSU	Asociación del Personal de Sudamtex
BSE	Banco de Seguros del Estado
COMAEC	Cooperativa Médica de la Asociación de Empleados Civiles
FENAPES	Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria
FETRABE	Federación de Transportistas de la Bebida
FFSP	Federación de Funcionarios de Salud Pública
FNM	Federación Nacional de Municipales
FOEB	Federación de Obreros y Empleados de la Bebida
FRU	Federación Rural Uruguaya
FUCVAM	Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua
FUS	Federación Uruguaya de Salud
HIJOS	Hijos de detenidos y desaparecidos
IMESI	Impuesto Específico Interno
MIDU	Mutualista Israelita del Uruguay
MSC	Mesa Sindical Coordinadora de Entes
MSP	Ministerio de Salud Pública
MTSS	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
PIT-CNT	Propuesta Intersindical de Trabajadores – Central Nacional de Trabajadores
SAQ	Sociedad Anestésico Quirúrgica
SAT	Sindicato Autónomo de Tabacaleros
SIMA	Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines
SMU	Sindicato Médico del Uruguay
STCC	Sindicato de Trabajadores de Coca Cola
UNOTT	Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte
UTD	Unión de Trabajadores Desocupados
UTU	Universidad del Trabajo del Uruguay



Colombia: Conflicto social, guerra prolongada, negociación de paz incierta

Por Jaime Zuluaga Nieto*

■ Introducción

En julio de 2001 se cumplieron diez años de promulgada la Constitución Política vigente en Colombia. Concebida como un acuerdo de paz e instrumento para la relegitimación del estado, el nuevo estatuto está lejos de serlo: la guerra interna ha alcanzado niveles hasta ahora desconocidos, la sociedad se encuentra atrapada en una red de violencia multiforme y se vive un acelerado proceso de deslegitimación de las instituciones del estado. Sin embargo, la Constitución marcó un horizonte democratizador que queda como un objetivo por alcanzar: la construcción del Estado Social de Derecho, la democracia participativa, y la promoción y el respeto integral de los derechos humanos.

La historia reciente se encuentra marcada por dos tensiones fundamentales no resueltas. En primer lugar la tensión entre el modelo de apertura económica, de orientación neoliberal, que propende por la desregulación y reducción del estado y la Constitución que consagró el Estado Social de Derecho y demanda más estado e intervención para garantizar condiciones de bienestar al conjunto de la población. En segundo lugar, entre la democracia participativa y la ciudadanía de un lado, y la lógica de la guerra, las múltiples formas de violencia y la desinstitucionalización del estado y de la sociedad del otro lado. De la forma como se resuelvan estas dos tensiones depende, en buena medida, el curso de la historia inmediata.

■ Modelo de desarrollo vs. Constitución política

La colombiana es una sociedad en transición económica y política. En las dos últimas décadas del siglo XX cambió el modelo de desarrollo económico al pasar del modelo proteccionista, altamente regulado, a un modelo abierto de corte neoliberal, con bajos niveles de regulación estatal. Fue la respuesta a la crisis de crecimiento asociada al agotamiento del modelo sustitutivo de exportaciones, y a las nuevas exigencias de la economía mundo y de las autoridades monetarias internacionales. La transición económica siguió en lo fundamental los patrones ya adoptados en otras sociedades latinoamericanas, pero presenta algunas especificidades: la velocidad con la que se produjo y el contexto nacional; un país en guerra interna, con la sociedad y economía atravesada por los intereses de las organizaciones internacionales del narcotráfico y en transición hacia un nuevo régimen político como consecuencia del proceso constituyente de 1991.

* Abogado. Investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia.



La velocidad con que se aplicó la llamada “apertura económica” produjo impactos negativos en diversos sectores de la industria y de la agricultura: quiebras de empresas en algunas ramas de la producción, especialmente en la mediana industria, y la caída de la producción agrícola, sobre todo alimentos, ante la imposibilidad de competir con importaciones de productos subsidiados en sus economías de origen. Situación que coincidió con la crisis de la economía cafetera subsiguiente a la supresión del Pacto Cafetero y a la caída de los precios en los mercados mundiales. Todos estos factores contribuyeron de manera significativa a la desaceleración de la economía, al aumento del desempleo urbano y rural y al agravamiento de las tensiones sociales.

En estas condiciones se ha generado un clima de persistente agitación social que toca a muy diversos sectores: trabajadores industriales y del estado, pequeños productores, campesinos, etc. Lo interesante de este proceso es que estos sectores, sin abandonar sus reivindicaciones específicas, han terminado por cuestionar las políticas públicas que obran en contravía de los postulados de la Constitución de 1991. Por ejemplo, a comienzos de 1999 se produjeron masivas movilizaciones urbanas de trabajadores, empleados, maestros y estudiantes contra el Plan de Desarrollo por considerarlo atentatorio contra la provisión de bienes públicos por parte del estado y negación de los objetivos de bienestar social propios del Estado Social de Derecho. Más recientemente se han producido movilizaciones contra las políticas para el sector agrario, la salud y la educación.

■ Las movilizaciones campesinas

El reciente paro agrario impulsado por la Asociación Nacional de Salvación Agropecuaria es el segundo paro de esta índole que se produce en el último año. Miles de campesinos recurrieron al bloqueo de carreteras en diversos sitios de la geografía nacional para exigir la suspensión de importaciones de alimentos que se producen en el país, el establecimiento de precios de sustentación para algunos productos agrícolas, el restablecimiento del control de precios, la condonación de deudas de agricultores pobres, y rechazar la incorporación al Acuerdo de Libre Comercio para América Latina (ALCA). Exigencias que van en dirección opuesta a la del modelo de desarrollo y de las tendencias a la desregulación estatal, y evidencian los límites para un “desarrollo con equidad” del sector rural bajo las condiciones imperantes.

El problema de los productores agrícolas ha puesto de manifiesto que la cuestión rural no se puede seguir enfocando sectorialmente, que no se trata solamente de la economía agrícola sino de construcción de territorio, como lo plantea Rafael Echeverri, ex director de la Misión Rural, del cual se derivan dimensiones no económicas como la tradición, la cultura, el tejido institucional y la formación histórica. Como construcción de territorio es que convoca a las comunidades campesinas e indígenas en defensa de lo que pudiéramos llamar la competitividad social, lo que representa un enorme potencial para el desarrollo de la nación. En última instancia, de lo que se trata es de hacer lo que oportunamente hicieron los países europeos: no olvidar la importancia de lo rural para alcanzar un desarrollo equilibrado y subsidiar sus economías rurales. Esta no es simplemente cuestión de países pobres como se ha pretendido mostrar, sino de la necesidad de construir como alternativa, en un mundo globalizado, un escenario de equidad global.

■ La defensa de las transferencias, una lucha por la equidad y las autonomías territoriales

La Constitución de 1991 adoptó principios descentralizadores, planteó el reconocimiento de las regiones y el reordenamiento territorial, y previó la transferencia de recursos a las admi-

nistraciones territoriales con destino a educación y salud. Poco de lo establecido se ha alcanzado, salvo las transferencias de recursos desde el gobierno central. Pero ante el crecimiento del déficit fiscal y las exigencias del FMI para reducirlo, éstas se convirtieron en el “chivo expiatorio”. Frenar el crecimiento de las transferencias previsto por la Constitución se convirtió en una de las estrategias centrales para reducir el déficit, en lugar de atacar las verdaderas causas de éste: la corrupción, el desbordamiento del gasto central a discreción del Ejecutivo, y un régimen tributario inequitativo y regresivo que ha hecho posible que el recaudo crezca apenas el 3,3% entre 1991 y 2000, en tanto que el gasto público se ha incrementado en 8 puntos del PIB. Reducir las transferencias a los entes territoriales para aliviar el déficit fiscal equivale a producir enfermos y menos gente educada. Hacia esa meta se orientó la reforma constitucional mediante el Acto Legislativo 012, que provocó la resistencia de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), estudiantes, padres de familia y trabajadores de la salud.

Aunque nadie desconoce que tras el paro de FECODE estaba la defensa de los ingresos salariales del magisterio, lo cierto es que esta movilización defendió, de hecho, la provisión de bienes y servicios públicos por parte del estado, ya que la reducción de las transferencias agrava la crisis en el sector salud que en los últimos años, y al impulso de las privatizaciones, ha visto cerrar, uno a uno, los principales hospitales públicos, y a la educación, definida como sector estratégico para el desarrollo de la competitividad en el mundo globalizado. Finalmente la tecnocracia internacional y el gobierno le ganaron la pelea a dos paros estatales nacionales y a la prolongada huelga del magisterio, y los criterios del “buen gobierno” primaron sobre los objetivos de equidad y justicia social.

■ Un programa de lucha: hacer realidad la Constitución del ‘91

Los dos casos citados a manera de ejemplo ilustran nuestro aserto inicial sobre la existencia de una tensión no resuelta entre el modelo de desarrollo de inspiración neoliberal que propende por la desregulación y reducción del estado y la Constitución que, teniendo como objetivo el logro del bienestar para los pobladores, plantea la necesidad de fortalecer la capacidad reguladora del estado para alcanzar, entre otros, los objetivos de equidad.

Las luchas que se han librado y se siguen librando constituyen un ejercicio de construcción de ciudadanía y espacio de disputa de participación ciudadana en la definición de las políticas públicas. Denotan, además de las crecientes tensiones sociales, la mayor capacidad de la población para salir en defensa de sus intereses, amparada en los elementos más positivos de la Constitución de 1991 que, a pesar de sus falencias y de las dificultades para su aplicación, se ha convertido en un programa de lucha que orienta la acción de diferentes sectores sociales. Pero contra esta movilización ciudadana conspiran las múltiples formas de violencia, la lógica de la guerra interna y el acentuado proceso de desinstitucionalización.

■ Violencias, guerra y negociaciones de paz

La violencia no es ajena a la historia de Colombia, como no lo es a la de todas las sociedades. Pero si algo le confiere especificidad a la situación colombiana, es la persistencia e intensidad de la violencia y, en las últimas décadas, su multiplicidad. En su geografía coexisten diversas formas de violencia que se diferencian por sus orígenes, modalidades, espacios y objetivos. Pero más allá de esta diversidad es indispensable diferenciar entre las formas que podemos agrupar bajo la denominación genérica de común, y la política, que gravita en torno a la cuestión del poder.

Al final del siglo XX se intensificaron y extendieron estas dos formas de violencia, pero en las dos últimas décadas adquirió mayor relevancia la política. Durante ellas el antiguo con-



flicto armado interno, cuyos orígenes se ubican en los años sesenta, devino en lo que algunos no vacilamos en considerar una verdadera guerra interna. Es también una época de consolidación y expansión de la economía del narcotráfico y de sus organizaciones criminales internacionales, que atraviesa a las diversas modalidades de violencia y que ha servido como catalizador para el crecimiento de la criminalidad. Uno de los efectos más graves de este crecimiento de la criminalidad ha sido el incremento de los homicidios. En el 2000 la tasa de homicidios fue de 63 por cada 100 mil habitantes, casi tres veces más que la del Brasil.

La prolongada coexistencia entre las violencias común y política, y las interacciones que se han dado, han terminado por debilitar en muchos casos la frontera entre el delito político y el común, como ocurre con el secuestro, que es hoy una fuente de financiamiento importante reconocida por las guerrillas, pero también una práctica extendida de la delincuencia común. Baste recordar que Colombia es el país en que se realizan casi la mitad de los secuestros del mundo, y que a su vez aproximadamente la mitad de éstos son ejecutados por las guerrillas.

AÑOS	SECUESTROS
1998	2.609
1999	2.991
2000	3.706

Fuente: Policía Nacional

■ **Guerra y negociaciones de paz**

La guerra se ha intensificado, se ha extendido por la geografía nacional, y ha modificado su naturaleza. Desde mediados de los ochenta las guerrillas, en particular las FARC-EP y el ELN, entraron en una dinámica de crecimiento que no ha cesado, a pesar, incluso, de la desmovilización de cuatro grupos guerrilleros entre 1989 y 1994. En la última década los grupos paramilitares han experimentado también un crecimiento acelerado, a la sombra de la complicidad o de la pasividad de las fuerzas militares. Su crecimiento ha significado lo que pudiéramos llamar una “privatización” de la guerra, como quiera que son bandas armadas privadas al servicio de intereses privados, a pesar de que desde 1997 se han dotado de un discurso político, han establecido una coordinación nacional –las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)– y han reclamado reconocimiento como actor político-militar del conflicto. Privatización de la guerra y lucha por el control de territorios son dos de las características que recientemente ha adquirido la guerra interna.

Simplificando, podemos decir que es una guerra interna librada entre tres, ubicados en dos lados opuestos: las guerrillas en un lado, y en el otro las fuerzas armadas del estado y los paramilitares. La presencia paramilitar ha acelerado el proceso de degradación de la guerra, como quiera que son los mayores responsables de las violaciones a los derechos humanos. De las 236 masacres ocurridas en el año 2000, los paramilitares son responsables de cerca de la mitad de ellas. Y de las violaciones al derecho a la vida –homicidios, desapariciones forzadas, “limpieza social”– lo son del 51%, en tanto que las guerrillas lo son del 13%.

■ **La guerra y los derechos de las comunidades indígenas**

La Constitución de 1991 reconoció el carácter multicultural y pluriétnico de Colombia, los territorios y autoridades de las comunidades indígenas. Pero la disputa territorial y las tendencias homogeneizantes impuestas por la guerra les niegan estos derechos. Guerrillas –especialmente las FARC-EP–, paramilitares y fuerzas militares desconocen estos derechos, sobre todo en zonas de importancia estratégica para la guerra. Por eso la Organiza-

ción Indígena de Colombia –ONIC– lideró movilizaciones de indígenas y bloqueos de carreteras en el sur del país, y le exigió al gobierno que les garantizara los derechos y la inviolabilidad de sus territorios, ante las agresiones de todos los actores armados. Curiosa sociedad ésta que afirma identidades y se reconoce en su pluralidad étnica a través de la violencia. Pero no solamente los actores armados vulneran estos derechos, también lo hacen los megaproyectos de desarrollo y las multinacionales del petróleo.

■ El incierto y complejo camino de la solución negociada

Desde 1998 se inició un intento más de poner fin a la guerra interna mediante negociaciones de paz. Durante estos tres años, el proceso de conversaciones entre el gobierno nacional y las FARC-EP, que se desarrolla en la “zona de despeje”, un territorio desmilitarizado de 42.000 kilómetros ubicado en el sur del país, ha estado marcado por frecuentes interrupciones. En febrero se superó una de éstas. Había sido provocada por las exigencias de la guerrilla al gobierno de una más efectiva lucha contra el paramilitarismo. El reinicio de las conversaciones se logró mediante el Acuerdo de los Pozos, en el que se convino acelerar las negociaciones sobre los temas de la agenda y se designó una Comisión de Personalidades con el encargo de formular recomendaciones para reducir la intensidad del conflicto y desarrollar la lucha contra el paramilitarismo. Entre tanto, la guerra ganó en intensidad.

■ El Plan Colombia y la acción contrainsurgente

A comienzos del año comenzaron a verse los resultados del Plan Colombia, a través del cual se desarrolla un ambicioso programa de cooperación norteamericana centrado en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas para la lucha contra el narcotráfico en el sur y centro del país. En ejecución del mismo entraron en acción batallones antinarcóticos, y se desarrollaron fumigaciones de cultivos ilícitos que provocaron la resistencia de campesinos, indígenas y de los gobernadores del sur del país –Cauca, Caquetá, Nariño, Huila y Tolima–, que demandaron del gobierno la suspensión de éstas y el respeto a los pactos establecidos con las comunidades para la erradicación manual de los cultivos. Pese a estas resistencias, la acción de los batallones y las fumigaciones continuaron.

El plan de ayuda a las Fuerzas Armadas ha producido resultados en la lucha antinarcóticos y, sobre todo, en la lucha contrainsurgente. El Ejército ha recuperado la iniciativa militar y mejorado su capacidad para enfrentar a la guerrilla. Pero su acción también ha aumentado las tensiones en las fronteras del sur, acelerado el desplazamiento forzado de pobladores hacia el Ecuador, y contribuido al desbordamiento del conflicto. Para hacer frente a estas tensiones es que la administración del presidente Bush ha diseñado la Iniciativa Regional Andina (IRA), programa destinado a “fortalecer las democracias frágiles, luchar contra la pobreza y mejorar la cooperación regional contra el tráfico de drogas”, según los Estados Unidos. Plan Colombia e IRA se articulan en torno a la cooperación militar y son los ejes de la nueva estrategia de intervención de los Estados Unidos en la región para controlar la expansión insurgente y el tráfico de drogas.

■ La crisis del proceso de paz con las FARC-EP

En este complejo contexto, el proceso de paz con las FARC-EP acaba de superar su más grave crisis. A pocos días de expirar el decreto que estableció la “zona de despeje” convergieron tres hechos que alentaron la oposición nacional a su prórroga:

- (i) el secuestro por parte de las FARC-EP de tres cooperantes alemanes que desarrollaban programas con comunidades rurales en el Cauca. Alemania forma parte de los



“países amigos del proceso de paz”. Su colaboración en el proceso, y la de los otros países europeos, ha sido amenazada con este secuestro.

(ii) el haber impedido el acceso a la “zona de despeje” al candidato liberal a la presidencia, Horacio Serpa, y a sus seguidores. Tiros de fusil y de mortero, así como campos minados, acompañaron al comando guerrillero que interceptó la marcha.

(iii) el secuestro y muerte de la ex ministra de la Cultura, Consuelo Araujo Noguera, por un frente de las FARC-EP. Nunca antes el escepticismo y la falta de credibilidad en la viabilidad de este proceso habían sido tan altas.

En esta difícil coyuntura el presidente decidió prorrogar la “zona” por tres meses, plazo durante el cual se espera llegar a acuerdos sobre tregua y cese de hostilidades, propuestos por diversos sectores de la sociedad civil y recomendados por la Comisión de Personalidades designada en febrero. Además las FARC-EP ofrecieron cesar las llamadas “pescas milagrosas”, nombre dado a los secuestros colectivos en las carreteras del país. Con esta decisión se sostienen las negociaciones y se mantiene la zona con condicionamientos necesarios pero probablemente insuficientes para dinamizar el proceso de paz.

■ Con el ELN: ni conversaciones, ni “zona de encuentro”

Mientras estas incidencias marcan el descreído proceso con las FARC-EP, las conversaciones con el ELN se suspendieron desde febrero, y el gobierno no ha decretado la “zona de encuentro” convenida con este grupo en los Acuerdos de la Habana de diciembre de 2000 para el desarrollo de negociaciones de paz. Los esfuerzos de la Comisión Facilitadora del Proceso y de los Países Amigos se han estrellado contra un muro de desencuentros y prevenciones entre el gobierno y el ELN, y contra la obstinada oposición de los paramilitares a la “zona de encuentro”.

■ La guerra gana espacios y limita la participación ciudadana

Entre la guerra y la paz, amplios sectores de la sociedad, víctimas de esta confrontación, levantan las banderas de paz, proclaman la muerte del modelo de negociación en medio del conflicto, y reclaman su derecho a decidir sobre sus destinos más allá de los intereses estratégicos de los actores en armas. Es masiva, y proviene de todos los sectores, la condena a la barbarie paramilitar y a las atrocidades de la guerrilla, así como a los vínculos entre sectores de las fuerzas armadas y el paramilitarismo. Lo cierto es que la guerra ha acotado el espacio de lo público y extendido el espacio de lo privado al arrebatar parcialmente las calles de las ciudades y las carreteras a la población civil. Y ha estimulado la polarización de una sociedad que en forma creciente se alinea en torno a las opciones de la guerra o de la paz, con la ilusión de poner término, en breve plazo, a una situación que ha alterado su cotidianeidad de manera dramática.

La lógica de la guerra subsume las posibilidades de participación ciudadana y alimenta la militarización de la vida nacional, como ocurre con la reciente Ley de Seguridad Nacional, que una vez más otorga facultades judiciales a las fuerzas militares y protege el desprestigiado fuero militar. La explosión de violencias acentúa la desinstitucionalización del estado y de la sociedad. La irregularidad cobra la vigencia de lo normal. Ante ello, sólo la resistencia y la capacidad de acción de quienes entienden que una guerra de raíces socio-políticas sólo se supera con un nuevo pacto político fundacional, cuyo contenido sean reformas estructurales económicas, sociales y políticas que permitan alcanzar las metas de equidad y justicia social, aparece como horizonte seguro de paz en medio de las certidumbres de la guerra y el incierto camino de las negociaciones.

Bolivia

REGION
ANDINA



MAYO

Miércoles 2

• La Central Obrera Boliviana (COB) comienza la "Rescate de la Patria" —desde Caracollo, cerca de Oruro, hacia La Paz— para exigir al gobierno que revise el decreto 21.060 —donde se excluye a esta Central en la negociación salarial— y la ley 1.008 que contempla la erradicación de los cultivos de coca excedentes, y retire la municipalización de los servicios básicos, la eliminación de la flexibilización laboral y la restitución de las empresas capitalizadas al estado, entre otras cuestiones.

• Docentes urbanos y rurales, representados por la Confederación de Maestros, comienzan una huelga general por tiempo indeterminado en apoyo a la convocatoria lanzada por la COB y en demanda de un incremento del 50% en el salario básico, entre otros reclamos.

• Suman cerca de 2 mil los jubilados y rentistas de las ciudades de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, entre otras, apoyados por la Confederación Nacional de Rentistas y Jubilados, que se encuentran haciendo una huelga de hambre, en reclamo de un incremento en su renta.

• La Coordinadora de Movilizaciones Única Nacional (COMUNAL), liderada por el diputado y dirigente cocalero Evo Morales, firma un convenio con el Poder Ejecutivo en el que se establece el levantamiento de los bloqueos y la retirada de las tropas policiales y militares de las carreteras del país.

Jueves 3

• La Central Obrera Departamental (COD) decide integrarse a la marcha que realizan varios trabajadores hacia la ciudad de La Paz y proseguir con las movilizaciones programadas por la COB.

Domingo 6

• Centenares de campesinos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), liderada por Felipe Quispe, conocido como el Malku, se suman a la "Marcha por la Dignidad Laboral y el Rescate a la Patria", que lleva adelante la COB.

Lunes 7

• La marcha organizada por la COB llega a la localidad de Ayo Ayo con 3 mil campesinos. Exigen respuestas positivas al pliego de peticiones presentado al gobierno.

• Más de mil personas en Villazón cortan el puente que une a esta ciudad con La Quiaca, Argentina, en reclamo de trabajo y ayudas estatales para quienes no tienen medios de subsistencia.

Martes 8

• El gobierno y representantes de la COB se reúnen para negociar las demandas de los trabajadores que están realizando una marcha hacia La Paz. Básicamente, el gobierno acepta la institucionalización de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), se compromete a dejar sin efecto el anunciado remate de los bienes del ex Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS), otorga máximas garantías al fuero sindical, devolverá los aportes realizados por el magisterio, y no ejecutará la municipalización de los recursos humanos de los servicios de educación y salud, entre otras cuestiones. La COB solicita un cuarto intermedio para analizar las propuestas gubernamentales.

- La Confederación de Choferes de Bolivia y el gobierno firman un convenio en el que éste se compromete a mejorar el mantenimiento de caminos, entre otras cuestiones.

Jueves 10

- La marcha de la COB llega a La Paz con 6 mil personas. Los maestros urbanos agremiados en la COB se suman a la marcha y realizan un paro de 24 horas.

- Los jubilados y rentistas levantan la huelga de hambre que llevaban adelante, luego de que el presidente promulga la Ley 2.197 que establece como renta mínima para los jubilados y rentistas un monto de 850 bolivianos.

Domingo 20

- Un escuadrón armado dispara contra un asentamiento de campesinos sin tierra, en Los Sotos, a 50 kilómetros de Yacuiba, provincia Gran Chaco, Tarija.

Martes 22

- Alcaldes de 314 municipios del país se declaran en resistencia civil en rechazo al proyecto de Ley del Diálogo Nacional que pretende aprobar el gobierno para distribuir 1.500 millones de dólares provenientes de la deuda externa y transferir los servicios de salud y educación a los municipios.

Martes 29

- Miles de personas, convocadas por la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida y organizaciones sindicales afiliadas a la COD, realizan un paro de 24 horas con marchas y bloqueos en las provincias y en la ciudad de Cochabamba, en rechazo a la municipalización de la educación y la salud.

JUNIO

98**Miércoles 6**

- Más de 3 mil mineros cooperativistas, convocados por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), comienzan una marcha desde Oruro hacia La Paz para exigir al gobierno la reactivación del sector.

Jueves 7

- Transportistas y empresarios del transporte pesado de tráfico internacional y nacional, liderados por la Cámara Boliviana de Transporte (CBT), realizan un paro nacional por tiempo indeterminado, con bloqueos de las principales rutas de frontera, en demanda de la aplicación de la Ley de Carga, entre otros reclamos.

- Cerca de 10 mil mineros cooperativistas, en el marco de la marcha que vienen realizando desde Oruro, llegan a La Paz y toman la sede de gobierno para exigir la aprobación de un fondo de reactivación de 100 millones de dólares para el sector.

Sábado 9

- Transportistas de carga pesada de todo el país, que continúan bloqueando rutas en distintos puntos de Bolivia, se enfrentan con la policía cuando ésta intenta desalojarlos.

Domingo 10

- Los transportistas deciden suspender el bloqueo de carreteras en todo el país, para evitar enfrentamientos con la policía, pero continúan con el paro del transporte de carga nacional e internacional, hasta que el gobierno no dé respuestas a sus demandas.

Lunes 11

- Los mineros cooperativistas levantan las medidas de protesta que venían realizando, luego de acordar con el ministro de Desarrollo Económico la creación de un fondo de emergencia para impulsar la reactivación del sector.

Martes 12

- Maestros –agremiados en la Confederación Nacional de Maestros Urbanos y Rurales– y trabajadores de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, apoyados por la COD, comienzan una huelga de hambre en rechazo a la inclusión de la municipalización de la salud y la educación en la Ley de Diálogo Nacional.

- Más de 5 mil trabajadores fabriles y empresarios, junto con la Confederación de Fabriles de Bolivia, realizan una marcha en La Paz para reclamar al gobierno la aplicación de la ley del Fondo Especial de Reactivación Económica (FERE), como así también la reactivación de la industria nacional.

- Cerca de 100 mil alteños, junto con el líder aymara Victor Machaca, realizan una marcha en la ciudad de La Paz, cercando la plaza Murillo, para exigir al gobierno la creación de una universidad autónoma para su ciudad.

- Miles de estudiantes, profesores, integrantes de juntas educativas, padres de familia y trabajadores de distintas instituciones marchan en Sucre en protesta por la municipalización de la educación.

Miércoles 13

- Los transportistas de carga nacional e internacional suspenden el paro luego de acordar con el ministro de Desarrollo Económico y los ejecutivos de la CBT la revisión de los contratos del cobro del peaje y el cumplimiento de la Ley de Cargas, entre otras cosas.

- Los trabajadores de la salud, organizados por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, más de 350 de ellos en huelga de hambre, declaran la huelga general indefinida para exigir que se excluya del texto de la Ley del Diálogo Nacional la municipalización de la salud y la educación.

- Cerca de 3 mil campesinos, la mayoría cocaleros de la región de Los Yungas, organizados por la CSUTCB, la Asociación de Productores de Coca de Los Yungas (ADEP-COCA) y el Consejo de Zonas Productoras de Hojas de Coca, bloquean carreteras y se enfrentan con más de 800 efectivos militares que se apostan en algunas poblaciones para evitar la militarización de la zona.

Viernes 15

- Miles de cocaleros y campesinos se enfrentan con centenares de efectivos del Ejército en la región de Los Yungas debido a la presión militar para iniciar la erradicación de los cultivos de coca ilegales en la zona. Más de 200 efectivos militares se van del lugar luego de los enfrentamientos. Posteriormente, campesinos, que se declaran en paro por 24 hs., se apoderan de algunos poblados, como Chulumani, y de la subprefectura, tomando de rehén a uno de los secretarios de la misma. Los cocaleros exigen la desmilitarización de la zona para negociar con el gobierno.

Domingo 17

- Los cocaleros de la zona de Los Yungas, reunidos en asamblea general, deciden cercar el cuartel de Chulumani, reclamar la derogación del Decreto Supremo 26.203 que aprueba el mapa cartográfico de la zona referido a las plantaciones tradicionales y excedentarias en transición de cultivos de coca, y exigir la salida inmediata de las tropas militares.

Lunes 18

- Los médicos dependientes del Ministerio de Salud, agremiados a la Confederación Sindical de Trabajadores de Salud de Bolivia (CSTSB), realizan un paro de 24 horas en contra de la municipalización de la salud y la educación planteada en la Ley de Diálogo. Cerca de 300 docentes y trabajadores de la salud continúan en huelga de hambre.

- Cerca de 50 trabajadores de la empresa Ferrari Ghezzi, afiliados al Sindicato de Trabajadores de Ferrari Ghezzi, llegan a Sucre, en representación de los 700 obreros de la misma, para protestar contra el posible cierre de esa empresa orureña.

Martes 19

- Las instituciones que forman parte del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (CODEINCA), la Federación de Juntas Vecinales (FEDJUVE), el Consejo de Vigilancia y los maestros rurales, entre otras, realizan un paro de 24 horas y marchan en Chuquisaca, en rechazo a la municipalización de la salud y la educación.

- Los ministros de Gobierno y Defensa ordenan el repliegue de las tropas del Ejército y la suspensión indefinida de la erradicación de coca en la región de Los Yungas en el marco de un encuentro realizado en Chulumani con jefes militares y policiales y cerca de 5 mil coccaleros. Los coccaleros levantan las medidas de protesta.

Miércoles 20

- El gobierno y los partidos de oposición, con mediación de la Iglesia Católica, firman en Cochabamba el Acuerdo Político por la Gobernabilidad, con el que se busca hacer reformas políticas, económicas y sociales.

- Docentes de 4 departamentos, La Paz y Cochabamba entre otros, realizan un paro de 24 horas con movilización, y se encuentran en huelga de hambre junto a los trabajadores de la salud, que continúan en huelga indefinida, en rechazo a la propuesta de transferencia de los servicios de salud y educación a las alcaldías. Luego, el presidente Hugo Banzer ordena la eliminación del artículo 7 del proyecto de Ley del Diálogo Nacional que estipula la municipalización de los servicios de salud y educación, quedando la misma como opción voluntaria.

Jueves 21

- Los trabajadores de la salud, apoyados por la CSTSB, realizan una huelga general para exigir al Poder Ejecutivo que firme un convenio que establezca la exclusión de la municipalización de la salud y la educación en el proyecto de la Ley del Diálogo Nacional.

Viernes 22

- Trabajadores municipales, afiliados a la COD, realizan una marcha en Sucre en rechazo a la municipalización de la salud y la educación. Paralelamente, maestros, estudiantes y padres de familia, apoyados por la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES), la FEDJUVE y la Junta Escolar, entre otras organizaciones, realizan una marcha en dicha ciudad para exigir la no municipalización de la salud y la educación. La policía reprime con gases lacrimógenos y se producen enfrentamientos con los manifestantes.

- Campesinos afiliados en la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca (FSUTCCH) bloquean, con piedras y escombros, los caminos de la ciudad y la carretera a Copacabana, en demanda de un seguro social campesino y por la derogatoria de la Ley 1.008 y del Decreto Supremo 21.060, entre otras cuestiones. Efectivos militares reprimen la medida y logran el desalojo del lugar.

Domingo 24

- Autoridades municipales, dirigentes del magisterio y la salud, junto con organizaciones vecinales, realizan mitines en varias ciudades. Exigen la supresión total del artículo 7 de la Ley del Diálogo Nacional y reclaman que se excluya la posibilidad de municipalizar los servicios de salud y educación de forma voluntaria. En Sucre, la policía reprime con gases lacrimógenos. Posteriormente, los médicos estatales se declaran en huelga general por tiempo indefinido.

Lunes 25

- Campesinos pertenecientes a la FSUTCCH bloquean las rutas de La Paz-Copacabana y Huarina-Achacachi como lo establece el Plan Pulga diseñado por El Malku, en el marco del bloqueo nacional de caminos declarado por esta central sindical.

Martes 26

- Maestros, campesinos y trabajadores de la salud, afiliados en la COD y apoyados por la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida, realizan una movilización general con bloqueo de caminos, calles y puentes en los alrededores de la ciudad de Cochabamba, en rechazo a la municipalización de la educación y la salud, entre otras reivindicaciones.

Miércoles 27

- Campesinos y efectivos militares se enfrentan en el altiplano paceño, dejando un saldo de un campesino muerto.

JULIO

Lunes 2

• Campesinos bloquean las carreteras de Huarina, Guaqui y Achacachi para exigir al gobierno respuestas al pliego petitorio presentado por Felipe Quispe con 37 nuevas reivindicaciones, entre las que se contempla la derogación del decreto 21.060, la anulación de la ley 1.008, 500 millones de dólares para créditos agropecuarios y el desarrollo de la economía campesina.

• Cerca de 300 pequeños prestatarios, agrupados en la Asociación de Deudores, toman la Superintendencia de Bancos, en La Paz, luego de 95 días de protestas a lo largo de la ciudad, para exigir al sistema bancario que les condone sus deudas. Los manifestantes portan bombas molotov y dinamita y mantienen a casi 100 trabajadores de esa institución como rehenes.

• Cerca de 800 presos de Palmasola, en Santa Cruz, realizan una huelga de hambre en demanda de la aprobación por parte del Congreso Nacional de la Ley de Ejecución de Penas y el extramuro irrestricto, entre otras cuestiones.

Viernes 6

• Presos de 5 centros de Cochabamba y de Tarija se suman a la huelga de hambre que vienen realizando los reclusos de Santa Cruz.

• Ocho tanques de guerra del Ejército Nacional se asientan en la zona de los bloqueos campesinos.

Lunes 9

• Cerca de 2 mil dirigentes campesinos reunidos en La Paz, convocados por El Malku, resuelven reforzar el bloqueo de caminos en Huaracani, Río Abajo, Chuquiaguillo y en inmediaciones de Laja, además de continuar con los bloqueos en la ruta Río Seco-Copacabana a fin de desabastecer de alimentos a la capital.

• Los presos de la cárcel de Chonchocoro y las reclusas de los Centros de Orientación Femenina de Obrajes y Miraflores, en La Paz, se suman a la huelga de hambre que vienen realizando presos de distintas cárceles del país.

Miércoles 11

• Más de 5 mil obreros fabriles agremiados en la Confederación de Fabriles de Bolivia, junto con algunos empresarios, realizan una marcha de teas en La Paz, para exigir la reactivación económica, entre otras cuestiones.

Viernes 13

• Los reclusos en huelga de hambre levantan la medida luego de firmar un convenio con el gobierno en el que éste se compromete a impulsar con prioridad la Ley de Ejecución de penas y establecer que la libertad por extramuro beneficiará a los presos que tengan sentencias de hasta 16 años.

Domingo 15

• Campesinos y militares se enfrentan en la localidad de Hankhoamaya, en el altiplano paceño, dejando un saldo de 8 heridos de bala. El gobierno pretende el desbloqueo total de caminos y no un retiro momentáneo, como proponen los campesinos. Las negociaciones continúan.

Lunes 16

• Centenares de campesinos, apoyados por estudiantes de la Universidad de El Alto, bloquean las principales vías de acceso a la hoyada paceña continuando con el Plan Pulga. La policía reprime con gases lacrimógenos y detiene a 5 manifestantes.

Martes 17 • Oscar Olivera, dirigente de la COMUNAL y Evo Morales, líder de los cocaleros del Chapare, realizan un pacto de unidad con el dirigente de los campesinos, El Malku, y deciden realizar un bloqueo paulatino y nacional de caminos a partir de la próxima semana. Los maestros rurales de La Paz se declaran en huelga en apoyo al movimiento campesino.

Domingo 22 • Miles de cocaleros, campesinos, maestros, estudiantes y vecinos –convocados por las seis federaciones del trópico cochabambino, la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida y la COD– realizan una marcha y toman el Concejo Municipal y el Palacio de Justicia de La Paz, para clamar por la unidad y protestar contra el desafuero del diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. La policía reprime con palos, gases lacrimógenos, etc., dejando un saldo de cerca de 5 heridos y 12 detenidos.

Lunes 30 • Dirigentes campesinos de la CSUTCB de las 20 provincias del departamento de La Paz declaran una tregua de 10 días durante los que prepararán una contrapropuesta al gobierno.

Martes 31 • Campesinos, convocados por la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, comienzan un Paro Nacional Agropecuario con bloqueos en las principales carreteras del país, ubicadas en zonas como Tolima, Saldaña, Fresno y Huila, para exigir al gobierno que cesen las importaciones de productos que puedan producirse en el país y la condonación de las deudas bancarias, entre otros reclamos.

AGOSTO

Jueves 2 • Campesinos que vienen realizando el Paro Nacional Agropecuario desde el martes pasado, acuerdan con el gobierno abrir el diálogo y ceder en la intensidad de algunos bloqueos.

Lunes 6 • El presidente Hugo Banzer renuncia a la presidencia dejando al mando de la misma a Jorge Tuto Quiroga, hasta entonces vicepresidente de la República.

Miércoles 8 • Campesinos, cocaleros, trabajadores de la salud y la educación reunidos en un ampliado de las 20 provincias de La Paz, establecen un nuevo pliego petitorio que apunta básicamente al desarrollo agrario con la electrificación del área rural, reclamo de la CSUTCB, y que se deje sin efecto la flexibilización laboral, se fomente la industria nacional y se suspenda la política neoliberal en su conjunto para aceptar la tregua propuesta por el nuevo presidente, entre otros reclamos impuestos por la COB y la Confederación Sindical de Trabajadores Fabriles.

Lunes 13 • Los ministros de Salud y de Trabajo y el secretario de la CSTSB acuerdan una tregua para resolver las demandas del sector por la vía del diálogo, hasta fin de año.

Lunes 20 • La CSUTCB sostiene que para comenzar a dialogar con el gobierno éste debe contemplar el 100% de los pedidos de los campesinos. Posteriormente, el gobierno sostiene que contemplará punto por punto de dicho pliego.

• Cerca de 200 obreros mineros de la empresa Arisur Andacaba, ubicada en Potosí, integrantes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), ocupan las instalaciones de la mina en protesta por el inminente cierre de ese centro productivo.

Jueves 23

• El gobierno y los campesinos de la CSUTCB firman un acuerdo de 70 puntos que contempla la puesta en marcha de un programa de desarrollo rural con créditos y asistencia técnica por 70 millones de dólares, la realización de un estudio a cargo del Ministerio de Educación para analizar la creación de una universidad agraria, la erradicación de coca en forma voluntaria, la implementación del Seguro Social Campesino de salud indígena y la indemnización con 50 mil bolivianos de los familiares de los 87 indígenas fallecidos en los conflictos que tuvieron lugar durante el gobierno de Banzer, entre otras cosas. Los campesinos levantan las medidas de protesta.

■ Glosario de siglas

ADEPCOCA	Asociaciones de Productores de Coca
CBT	Cámara Boliviana de Transporte
COB	Central Obrera Boliviana
COD	Central Obrera Departamental
CODEINCA	Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca
COFECAY	Consejo de Federaciones Campesinas de Los Yungas
COMUNAL	Coordinadora de Movilizaciones Única Nacional
CSTSB	Confederación Sindical de Trabajadores de Salud de Bolivia
CSUTCB	Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
ECOBOL	Empresa de Correos de Bolivia
FEDJUVE	Federación de Juntas Vecinales
FENCOMIN	Federación Nacional de Cooperativas Mineras
FERE	Fondo Especial de Reactivación Económica
FES	Federación de Estudiantes de Secundaria
FONVIS	Fondo Nacional de Vivienda Social
FSTMB	Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
FSUTCCH	Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca
MAS	Movimiento al Socialismo

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera y María Chaves.

Fuentes: diarios Los Tiempos, El Diario, Correo del Sur, La Prensa y La Razón.

Colombia

REGION
ANDINA



MAYO

Martes 1

• Cerca de 80 mil trabajadores, convocados por (CUT), la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD), la Unión de Trabajadores del Atlántico (UTRAL), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación de Pensionados de Colombia, entre otras organizaciones, realizan marchas por distintas calles de la ciudad de Bogotá, confluyendo todas en la Plaza Bolívar, en el marco del Día Internacional del Trabajador, para exigir que se respete la vida de los sindicalistas colombianos y protestar contra la reforma pensional, tributaria, el desmantelamiento de la salud pública, la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos del país y la inminente privatización del Servicio Nacional de Aprendizaje, entre otras cuestiones.

Domingo 6

• Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) realizan operaciones armadas cerca de la ciudad caribeña de Valledupar, 850 kilómetros al norte de la capital. Además, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército combaten en la localidad de Potosí (600 kilómetros al suroeste de Nariño).

Miércoles 9

• Maestros, convocados por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), y trabajadores del sector salud, nucleados en la Asociación de Trabajadores de Hospitales y Clínicas (ANTHOC), realizan un paro nacional de 48 horas en rechazo a la propuesta de ley –acto legislativo– N° 012, que modifica el sistema de transferencia de recursos desde el estado nacional a los municipios y departamentos destinado al sistema educativo y de salud pública.

Sábado 12

• Miembros de las FARC y del Ejército se enfrentan en una zona montañosa del municipio de Sucre, en el nororiental departamento de Santander, en el marco de la oficial operación “Huracán”. Por otra parte, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Ejército combaten en las afueras del municipio de Falán, en el departamento central del Tolima.

Lunes 14

• Cerca de 15 mil habitantes del Cauca y del Valle, en particular representantes de las comunidades negras e indígenas, apoyados por el gobernador del Cauca, comienzan en Santander de Quilichao la Gran Minga por la Vida y contra la Violencia, para llamar la atención del gobierno y los grupos armados sobre las masacres y asesinatos selectivos que se han llevado adelante en la región en lo que va del año y hacer un llamado a la paz en toda Colombia.

Martes 15

• Los trabajadores de la salud y la educación del país, convocados por FECODE, la Asociación de Docentes Distritales de Barranquilla (ADEBA), la Asociación Sindical de Educadores de Medellín (ASDEM) y ANTHOC, entre otras organizaciones, inician un paro por tiempo indeterminado en protesta por la presentación, por parte del gobierno nacional al Congreso, del proyecto de ley –acto legislativo– N° 012.

Jueves 17

• Un grupo armado, presuntamente las AUC, realiza un atentado con un carro bomba en el Parque Lleras de El Poblado, en la ciudad de Medellín, dejando un saldo de 8 muertos y 150 heridos.

Viernes 18

- Cerca de 32 mil indígenas, campesinos y representantes de comunidades negras terminan la Gran Minga por la Vida que vienen realizando desde hace días, participando de una audiencia pública que se lleva adelante en el parque San Francisco, frente a la gobernación del Valle.

- Estudiantes de cerca de 45 centros educativos distritales de Bogotá realizan distintos actos de protesta en rechazo al proyecto legislativo N° 012. La policía reprime, produciéndose enfrentamientos y dejando un saldo de 50 menores detenidos.

Lunes 21

- Campesinos, comerciantes y docentes de los municipios de San Pablo y Cantagallo, zona sur del departamento de Bolívar, apoyados por la Asociación Civil por la Paz (ASOCIPAZ) y el Movimiento No al Despeje, comienzan un paro cívico de 48 horas en rechazo a la decisión del gobierno de desmilitarizar esa región para llevar adelante negociaciones con el ELN. Los manifestantes exigen que el gobierno cumpla con la inversión social y la concertación prometidas antes de tomar decisiones con respecto a la zona de despeje.

Martes 22

- Cientos de camioneros, apoyados por la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), realizan un bloqueo con camiones en los accesos al terminal marítimo de Buenaventura en repudio al asesinato de un compañero en el día de hoy y para exigir mayor seguridad y la devolución del manejo del parqueadero a la Sociedad Portuaria Regional Buenaventura (SPRB), que se encuentra actualmente en manos de la Confederación Colombiana de Transportadores de Carga (COLFECAR).

Miércoles 23

- Tropas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada penetran en una zona selvática del departamento de Nariño, zona fronteriza con Ecuador, y se enfrentan con las FARC en el marco de la Operación "Tsunami".

Jueves 24

- Miles de estudiantes, docentes, padres de familia y trabajadores de la salud, convocados por FECODE y ANTHOC, realizan marchas en Bogotá, Medellín, Cartagena, Cúcuta, Soacha y la vía Panamericana, en rechazo al proyecto legislativo N° 012.

Viernes 25

- Se producen dos ataques con bombas en Bogotá, ambos cerca de la Universidad Nacional, dejando un saldo de cerca de 8 muertos y varios heridos.

- El gobierno y las FARC se reúnen para tratar el tema de un intercambio humanitario de guerrilleros presos por soldados y policías.

Domingo 27

- Las AUC realizan operaciones armadas en el puerto fluvial de Barrancabermeja y en el municipio de Chiriguana, departamento del César.

Se producen nuevos atentados urbanos, esta vez en la ciudad de Cali, frente a las sedes de la policía ambiental y del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC).

Martes 29

- Efectivos de la policía desalojan por la fuerza a los transportistas que bloquean desde el pasado martes las vías de acceso al puerto de Buenaventura.

Jueves 31

- Las FARC realizan un atentado contra la red férrea, en el departamento de Magdalena, que utiliza la multinacional Drummond Ltda. para transportar carbón.

- La Federación de Ganaderos de Córdoba, el Fondo Ganadero, la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), junto con la Cámara del Comercio y otras organizaciones, realizan un paro en la ciudad de Montería en rechazo a la vinculación que la Fiscalía General de la Nación y el gobierno nacional hacen entre los pobladores de esa región y los paramilitares, y a los allanamientos realizados recientemente.

JUNIO

Sábado 2 • El gobierno y las FARC firman un acuerdo humanitario para liberar a 42 soldados y policías enfermos en poder de las mismas y a 15 miembros de éstas que se encuentran en la cárcel. Además, las FARC se comprometen a liberar a 100 uniformados más.

Lunes 4 • Paramilitares ordenan a las comunidades afro del departamento del Chocó, ubicadas en la zona del Alto Baudó, desalojar corregimientos y veredas en un plazo de 24 horas para llevar adelante en la zona operaciones de rastillaje.

Martes 5 • Miles de estudiantes, docentes y padres de familia de distintas regiones del país –apoyados por la FECODE– y en el marco de la convocatoria a una protesta nacional del magisterio, marchan en Bogotá en rechazo al proyecto legislativo N° 012, que consideran un paso en la privatización de la educación pública. Asimismo, profesores y estudiantes realizan protestas con bloqueos de vías y puentes en Antioquia, Nariño, Putumayo, La Guajira y Magdalena.

Miércoles 6 • Cerca de 3 mil habitantes de Tierralta, en Córdoba, marchan por las principales calles de esa población para condenar los últimos hechos de violencia, el bloqueo impuesto por las FARC y la respuesta armada de las AUC. La comunidad indígena Embera-Katio se declara en estado de emergencia por la presencia de esos grupos en la región.

Jueves 7 • Las centrales obreras CUT, CTC y CGTD, la FECODE, la ANTHOC, la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE), entre otras organizaciones, realizan un paro nacional de 24 horas con movilización en distintos puntos del país, en rechazo al proyecto legislativo N° 012 y en oposición a la política socioeconómica del gobierno. En Bogotá los manifestantes realizan cerca de 12 marchas que desembocan en la Plaza Bolívar, produciéndose enfrentamientos entre los trabajadores del Hospital San Juan de Dios y la policía. En Antioquia, Medellín, Barranquilla, Sucre, Ibagué, Pasto, Bucamaranga, Pereira, entre otras zonas, miles de estudiantes, docentes y otros trabajadores estatales bloquean vías y realizan marchas. La policía intenta desalojar el bloqueo de la carretera que comunica Bucamaranga con la Costa Atlántica dejando un saldo de un policía y tres manifestantes heridos.

• Cientos de cultivadores de coca marchan desde zonas rurales hacia el municipio de Tibú, norte de Santander, en rechazo a la fumigación con herbicidas de las plantaciones ilegales, dejando un saldo de dos heridos y varios daños materiales.

Viernes 8 • Las FARC y las AUC se enfrentan a 20 kilómetros de San José de Guaviare, capital del departamento de Guaviare, suroriente de Colombia.

Lunes 11 • Cientos de trabajadores del Hospital La Samaritana bloquean por dos horas la carretera Octava Sur, en Bogotá, para exigir el pago de cuatro meses de salarios adeudados y el abastecimiento de insumos para el hospital y en rechazo al proyecto de acto legislativo N° 012.

• Suman ya cerca de 5 mil los campesinos, entre desplazados y raspachines de coca, del norte de Santander que se trasladan desde zonas rurales al municipio de Tibú, en reclamo por la suspensión de las fumigaciones de los cultivos ilícitos de coca. Posteriormente, se reúnen con la Alcaldía y acuerdan una tregua que contempla que los cocalleros no volverán a atentar contra el comercio a cambio de que los microempresarios les den alimentos.

Miércoles 13

- Cerca de 16 comunidades indígenas Embera Katio comienzan una marcha desde el Nudo de Paramillo, en el departamento de Córdoba, hacia Montería, en rechazo a los ataques de paramilitares y de la guerrilla, a los desplazamientos forzados, asesinatos y desapariciones, entre otras cuestiones.

- Dirigentes raizales y habitantes de San Andrés, junto con el Movimiento para la Autodeterminación del Archipiélago, realizan un paro en San Andrés y bloquean la entrada a la planta de combustible TEXACO y al muelle departamental en reclamo del cumplimiento de los pactos firmados con el gobierno hace dos años que contemplan la sanción del estatuto Raizal y el fortalecimiento de la Oficina de Control a la Circulación y Residencia (OCCRE), entre otros reclamos.

Jueves 14

- Trabajadores estatales comienzan un paro de 48 horas, convocados por la FENALTRASE y apoyados por más de 13 sindicatos, en solidaridad con los trabajadores de la salud y la educación, en rechazo al proyecto legislativo N° 012. Se realizan marchas y protestas en numerosas ciudades del país.

- Los más de 4 mil cocaleros desplazados que estaban asentados en Tibú regresan a sus zonas de origen sin lograr ningún acuerdo respecto de las fumigaciones.

- Las FARC y el gobierno nacional firman un acuerdo humanitario por el cual serán canjeados más de 40 soldados y policías por cerca de 20 miembros de las FARC.

Viernes 15

- Cerca de 500 integrantes de las FARC realizan un ataque armado a la base antinarcóticos de Miraflores, en Guaviare. Miembros de las FARC realizan ataques contra el tren de carbón de la multinacional Drummond, en Magdalena.

Miércoles 20

- El Congreso aprueba el proyecto legislativo N° 012. El ministro de Educación sostiene que no se pagarán los días de paro. Además, el poder legislativo aprueba una norma que faculta al jefe de estado a crear zonas económicas especiales donde se podrá aplicar un régimen especial de flexibilización laboral que elimina, entre otras cuestiones, las cargas salariales por horario nocturno, dominical y por cesantía.

Jueves 21

- La FECODE y la ANTHOC declaran el levantamiento del paro que venían realizando desde mediados de mayo y anuncian que interpondrán una demanda de inconstitucionalidad contra la ley N° 012 y propondrán un referéndum para derogarla. En muchos establecimientos educativos del país, alumnos, padres y madres bloquean el acceso a los salones por estar en desacuerdo con el levantamiento de la protesta.

Viernes 22

- Cientos de integrantes de las FARC atacan la base militar de Coreguaje, cerca de Puerto Leguizamón, en Putumayo, y se enfrentan con tropas del Ejército en un intento por tomar Puerto Leguizamón y las bases militares vecinas.

Lunes 25

- Miembros de las AUC y tropas del Ejército Nacional combaten en el sur del departamento de Santander dejando un saldo de cerca de 10 paramilitares muertos.

Jueves 28

- 300 uniformados que estaban en poder de las FARC son liberados en el campo de Parada de Boyacá, en el marco del acuerdo humanitario realizado con el gobierno días atrás.

JULIO

Lunes 2 • Miembros de las AUC combaten con las FARC en Antioquia y el sur de Bolívar, dejando un saldo de cerca de 50 muertos. Además, tropas del Ejército se enfrentan con las FARC en Caquetá y La Guajira, provocando la muerte de más de 20 combatientes.

Miércoles 4 • Cientos de trabajadores del sector salud y de otras dependencias municipales de Cali realizan un paro y bloquean la sede de la alcaldía en esa ciudad, en protesta por el atraso en el pago de los salarios correspondientes a los dos últimos meses.

Viernes 6 • Los trabajadores municipales de Cali que estaban en paro levantan la medida luego de acordar con la alcaldía el pago de salarios el próximo miércoles y prorrogar la convención colectiva sin modificaciones.

• Las AUC realizan ataques armados en la vereda Cañaveral, jurisdicción del municipio de Remedios, dejando un saldo de cerca de 15 campesinos muertos.

Sábado 7 • Las FARC emiten un comunicado en el que sostienen que no harán más gestos unilaterales de paz, como la reciente liberación de policías y soldados, hasta que el gobierno haga lo propio, y exigen al estado emitir una ley que permita canjear a los prisioneros.

Viernes 13 • Quince alcaldes de Cauca y Nariño expresan su rechazo al programa de fumigación de cultivos ilícitos, mediante una carta dirigida al presidente de la república, y anuncian acciones concretas para impedir que éste se lleve adelante.

• El presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Departamento del Atlántico (SINTRAGRICOLAS) es asesinado.

Domingo 15 • El dirigente sindical del Valle del Cauca, James Orlando Morales, es asesinado por supuestos miembros de las AUC.

• El gobierno presenta a las FARC el nuevo esquema de negociaciones de paz con esa organización, que establece que no habrá negociadores sino asesores o consultores expertos para cada tema de la Agenda Única.

• Cerca de 35 mil personas, entre ellos indígenas paeces y guambianos, comunidades negras y campesinos de la cordillera, comienzan una marcha hacia Popayán para exigir que se termine con las fumigaciones de cultivos.

Lunes 16 • El presidente Pastrana, luego de reunirse con los gobernadores del Cauca, Nariño, Putumayo, Tolima, Huila y Caquetá, sostiene que continuará con las fumigaciones de cultivos ilícitos en el país pero anuncia que revisará su política en el caso de los sembradíos de menos de tres hectáreas.

• Alrededor de 100 mil personas con pancartas, banderas y velas participan de la Marcha Blanca, que se realiza por las principales calles de Manizales, para exigir que no haya más secuestros en Colombia.

Martes 17 • Supuestos miembros de las FARC y del ELN atacan desde tierra a dos aeronaves que realizan desde hace cinco días las labores de control de cultivos ilícitos en la zona.

- Habitantes del sur de Barranquilla bloquean y queman llantas en la Circunvalar, la prolongación de Murillo y el municipio de Puerto Colombia, en rechazo a la decisión de Electrocaribe de cortar la luz en tres circuitos por conexión ilegal y morosidad de los usuarios.

Miércoles 18

- Cientos de habitantes de Jardín, Andes, Yali y Salgar marchan en esos municipios de Antioquia, declarándose en desobediencia civil, para protestar contra el incremento en las tarifas de los servicios públicos y la política del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Jueves 19

- Las empresas Electrocaribe y Electrocosta se comprometen a restablecer el servicio de energía en los sectores donde se había cortado.

Lunes 23

- Tropas de la Brigada XIV combaten con integrantes del ELN cerca del casco urbano de Segovia en disputa por el control de las dos centrales eléctricas de la empresa Frontino Gold Mines, tomada por el ELN desde el pasado viernes.

Martes 24

- El Alto Comisionado para la Paz se reúne en Venezuela con dos voceros del ELN para tratar de desbloquear los diálogos con esa organización armada.

Miércoles 25

- Los trabajadores sindicalizados de Barranquilla, respaldados por los jubilados de las antiguas empresas públicas y varios representantes de las centrales obreras, la CUT entre otras, realizan una jornada de protesta frente a la alcaldía de ese distrito para protestar por el proceso de reestructuración que contempla el despido de varios empleados.

Viernes 27

- Miles de campesinos, convocados por la Unidad Cafetera Nacional entre otras organizaciones, inician una huelga por tiempo indeterminado, con bloqueo de carreteras, exigiendo la condonación de deudas y la suspensión de la importación de productos agrícolas, entre otras cuestiones.

Sábado 28

- Miembros del Bloque Sur de las FARC realizan ataques armados en los municipios de Belén de los Andaquíes y San José de Fragua, en el departamento de Caquetá.

Domingo 29

- Las AUC realizan ataques armados en el corregimiento El Paraíso, en el sur de Bolívar, provocando el desplazamiento de los 280 pobladores que aún vivían en dicho corregimiento.

Lunes 30

- Las Fuerzas de Despliegue Rápido del Ejército inician la Operación Arawac combatiendo con las FARC y el ELN para tratar de recuperar el departamento de Arauca, controlado por estos grupos armados.

Martes 31

- Miles de cafetaleros, maiceros, algodóneros, arroceros, bananeros, ganaderos, entre otros, agremiados en la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, comienzan un paro nacional agrario por tiempo indeterminado con bloqueos multitudinarios de vías en varias zonas del país, en rechazo al modelo neoliberal que implementa el gobierno colombiano y sus consecuencias en el campo. Exigen también condonación de las deudas, precios sostenibles para la producción, créditos suficientes y baratos, restricción a las importaciones de productos agrícolas, no ingreso de Colombia al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), entre otras cuestiones.

- Tropas de la XI Brigada del Ejército y miembros del Frente 13 de las FARC combaten en una zona ubicada entre los municipios de Montelíbano y Juan José, dejando un saldo de varios combatientes muertos.

AGOSTO**Miércoles 1**

- Campesinos que se encuentran en paro agrario desbloquean algunas de las vías principales del país, acatando en algunos casos el llamado de la policía de liberar las vías y en otros estableciendo acuerdos entre los líderes de la protesta y los gobernadores locales. En las vías de Boyacá, Huila y Antioquia, entre otras, la policía realiza operativos represivos con tanquetas y gases lacrimógenos para levantar los bloqueos, dejando un saldo de cerca de 20 heridos y 6 dirigentes campesinos detenidos. Los manifestantes mantienen todavía bloqueadas más de 10 vías. La CGTD, CUT, CTC, la Confederación de Pensionados de Colombia y la FECODE manifiestan su apoyo al paro agrario. El gobierno ofrece dialogar a los dirigentes campesinos con la condición de que despejen las vías.

- Más de 10 mil habitantes de Neiva apoyados por gremios, ONGs y los gobiernos departamental y municipal realizan la marcha “Por la Paz y por la Vida”, en esa ciudad, para exigir la liberación de 9 lugareños secuestrados el pasado jueves por presuntos miembros de las FARC y una solución negociada al conflicto armado, entre otras cuestiones.

- La alcaldía de Bogotá anuncia que a partir del lunes próximo comenzará a regir el Decreto 621, conocido como “Pico y Placa”, que restringe la circulación de buses, taxis y colectivos del servicio público, en función del número de matrícula. Posteriormente, cerca de 50 conductores de taxis bloquean algunos carriles del sistema de transporte Transmilenio, en rechazo a esta medida.

Viernes 3

- Transportistas de colectivos, buses y taxis paralizan sus actividades, marchan y bloquean calles en Bogotá, apoyados por el Sindicato Nacional de Choferes, para exigir la suspensión del recientemente aprobado decreto de “Pico y Placa”.

- Campesinos que bloquean desde el pasado lunes importantes vías del país, en el marco del paro agrario convocado por la Asociación Nacional de Salvación Agropecuaria, se enfrentan con la Policía Nacional en la vía Tunja-Bucamaranga y en Huila, entre otros lugares, dejando un saldo de dos campesinos muertos y varios heridos. Hasta hoy se cuentan un total de más de 120 heridos por enfrentamientos con la policía. En el departamento del Cauca y Tolima, entre otros lugares, los manifestantes levantan los bloqueos pero no retornan a sus parcelas.

Lunes 6

- Los transportistas de buses, taxis y colectivos de Bogotá reinician el paro y se declaran en desobediencia civil en protesta por la puesta en marcha de la medida de “Pico y Placa”.

- Los campesinos que venían realizando el paro nacional agrario con bloqueos en varias carreteras del país levantan la medida luego de acordar con el gobierno una reunión para el próximo miércoles con la gobernación de Boyacá y delegados de los ministerios de Agricultura, Comercio Exterior y Hacienda, para discutir el nuevo pliego petitorio de los manifestantes que contempla la suspensión de las importaciones de papa, la compra por parte del gobierno de la cartera morosa que tienen con el Banco Agrario, el control a los precios de los insumos, capacitación para la tecnificación del campo y fomento a la exportación de productos agrícolas, entre otros reclamos.

Martes 7

- Cerca de 4 mil agricultores del sector cafetalero, de hortalizas y jornaleros de los cultivos de caña panelera de Huila reactivan los bloqueos en las carreteras de ese departamento, Palermo-La Marmolera y Tello-Bucará, entre otras, para exigir al gobierno nacional que envíe una comisión para dialogar con ellos.

Miércoles 8

- El gobierno y el ELN suspenden las negociaciones por discrepancias en el establecimiento de la zona de encuentro y respecto de la seguridad externa en la región delimitada para los diálogos.
- El alcalde bogotano y los representantes de los transportistas afectados por el decreto de “Pico y Placa” acuerdan el levantamiento temporal del paro del transporte estableciendo un lapso de 15 días para que el alcalde haga una nueva propuesta al sector.

Jueves 9

- La cúpula de las Fuerzas Militares ordena el traslado de tropas al sur de Bolívar, entre ellas la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), con el fin de contrarrestar la presencia del ELN y el avance de las AUC y las FARC en la región.

Viernes 10

- Decenas de miles de trabajadores de la zona bananera de Urabá y Magdalena, apoyados por la Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA), organizaciones comunitarias, gremios, partidos políticos, ganaderos, campesinos, estudiantes, religiosos, entre otros, realizan un paro en protesta por el bloqueo desde hace más de tres meses de la principal vía de comunicación a Urabá por parte de las FARC en la parte inicial y de las AUC al final de la misma y para protestar por la falta de protección ante esta situación.
- El ELN pierde su status político luego de la oficialización gubernamental de la ruptura de las negociaciones de paz. Además, sus comandantes quedan sin garantías de no ser capturados.

Lunes 13

- Cerca de 3 mil mujeres, entre las que se cuentan representantes de distintas organizaciones de 17 países, la Organización Femenina Popular (OFP) y Ruta Pacífica de Colombia, comienzan la Movilización Internacional de Mujeres Contra la Guerra que confluye en Barrancabermeja en rechazo a la guerra y a las violaciones de derechos humanos de las mujeres amenazadas por el conflicto armado.

- Cerca de 5 mil campesinos bloquean importantes vías del departamento de Huila en protesta por el abandono estatal hacia el sector agrario y para exigir la condonación de las deudas ante las entidades financieras, mayor atención al sector cafetalero, comercialización de sus productos y el cese de las importaciones, entre otros.

- El ELN bloquea la Autopista Medellín-Bogotá y Pailitas-Pelaya, en el César.

Martes 14

- El ELN instala un retén armado en la vía que del corregimiento de San Roque conduce a Curumaní. Por otra parte, paramilitares realizan ataques armados en dos caseríos rurales de la localidad de Amalfi, a 147 km. al nordeste de Medellín, en los que mueren 9 campesinos.

Miércoles 15

- El presidente colombiano promulga la Ley de Seguridad y Defensa Nacional, que otorga facultades de policía judicial a las fuerzas militares, le da herramientas al presidente para expedir un Estatuto Antiterrorista y reglamenta los denominados “teatros de operaciones”, entre otros aspectos.
- Cerca de 5 mil araucanos, convocados por la Diócesis de Arauca, el Consejo Departamental para la Paz y 22 parroquias de la región, realizan una marcha en ese departamento para exigirle al estado protección en esa región y a los actores armados que excluyan a la sociedad civil y a la infraestructura del lugar del conflicto y los ataques armados.

Viernes 17

- Paramilitares realizan incursiones armadas en cuatro veredas de Yolombó, en Antioquia, dejando un saldo de 6 muertos y varias casas destruidas.

- Sábado 18** • Los campesinos de Huila levantan el bloqueo y dan por finalizado el paro agrario luego de acordar con el gobierno nacional la compra por parte de éste de la cartera de Fonsa-Huila, acceso a líneas especiales de crédito, apoyo del ministerio de Agricultura para la creación del centro de acopio y aportes de la gobernación por 1.000 millones de dólares para desarrollar proyectos de reforestación o sustitución de cultivos.
- Lunes 20** • Las AUC realizan ataques armados en la vereda de El Comino, del corregimiento de Villanueva.
- Martes 21** • El ELN declara oficialmente la ruptura del proceso de diálogo con el gobierno y sostiene que no hay ninguna posibilidad de que se reanuden las negociaciones.
- Tropas del Ejército mantienen cercada, en el marco de la Operación 7 de Agosto, una columna de las FARC de cerca de 2.300 miembros en el sur del país, zona de los departamentos del Meta y Guavire.
- Jueves 23** • El alcalde de Bogotá, representantes de los transportistas, congresistas y concejales acuerdan aplicar el “Pico y Placa” para el transporte público un día a la semana por cada vehículo, de lunes a viernes, y un sábado cada 5 semanas. Luego de un mes se revisará el acuerdo.
- Lunes 27** • El Ejército destruye dos campamentos de las FARC, los cuales funcionaban como hospital, en el Meta, este del país, en el marco de la denominada Operación 7 de Agosto.
- Viernes 31** • Trabajadores del hospital San José de Popayán, apoyados por ANTHOC, realizan un paro y bloquean ese centro asistencial en reclamo del pago de 8 meses de salarios atrasados, mejores condiciones laborales y en rechazo a la reclasificación de la planta.
- Las AUC y las FARC combaten en una zona rural del norte de Itango. Además, el ELN realiza ataques con dinamita contra un polducto, en la vía de Santander que va de Barrancabermeja a Bucaramanga. Por otra parte, tropas de la Cuarta Brigada ocupan el corregimiento de Santa Ana, de Granda, área considerada por los militares como el principal bastión del ELN en el oriente de Antioquia, en el marco de la denominada Operación Audaz.

■ Glosario de siglas

ACC	Asociación Colombiana de Camioneros	FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
ADEBA	Asociación de Docentes Distritales de Barranquilla	FECODE	Federación Colombiana de Educadores
ALCA	Area de Libre Comercio de las Américas	FENALCO	Federación Nacional de Comerciantes
ANTHOC	Asociación de Trabajadores de Hospitales y Clínicas	FENALTRASE	Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado
ASDEM	Asociación Sindical de Educadores de Medellín	FMI	Fondo Monetario Internacional
ASOCIPAZ	Asociación Civil por la Paz	FUDRA	Fuerza de Despliegue Rápido
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia	INPEC	Instituto Nacional Penitenciario
AUGURA	Asociación de Bananeros de Colombia	OCCRE	Oficina de Control a la Circulación y Residencia
CGTD	Confederación General de Trabajadores Democráticos	OFP	Organización Femenina Popular
COLFECAR	Confederación Colombiana de Transportadores de Carga	SINTRAGRICOLAS	Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Departamento del Atlántico
CTC	Confederación de Trabajadores de Colombia	SPRB	Sociedad Portuaria Regional Buenaventura
CUT	Central Unitaria de Trabajadores	UTRAL	Unión de Trabajadores del Atlántico
ELN	Ejército de Liberación Nacional		

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera y María Chaves.

Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano, El Espectador y El Heraldo.

Ecuador

REGION
ANDINA



MAYO

Martes 1 • Alrededor de 3 mil funcionarios de la Federación (FENAJE) marchan por las calles de Quito hacia el Tribunal Constitucional (TC) para exigir la entrega de recursos para ese poder del estado.

Viernes 4 • El Congreso Nacional aumenta el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 14%, requisito exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener la ayuda financiera al país.

Viernes 11 • Los trabajadores de FENAJE levantan el paro luego de conocer el compromiso del gobierno de conformar comisiones encargadas de solucionar los problemas referentes al presupuesto del sector.

Martes 15 • La Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) presenta ante la Defensoría del Pueblo una demanda de inconstitucionalidad del aumento del IVA del 12 al 14%.

JUNIO

Jueves 28 • Unas 3 mil personas marchan hacia el Palacio de Carondelet en Quito en reclamo de un incremento para el área social del 20 al 25% en el presupuesto estatal del próximo año.

JULIO

Martes 2 • Unos 500 trabajadores del sector eléctrico se concentran en las afueras del Consejo Nacional de Modernización (CONAM) para iniciar una campaña contra la privatización del sector. La medida es apoyada por la CMS.

• La Federación Médica del Ecuador (FME) inicia un paro nacional por tiempo indeterminado en reclamo de un aumento salarial del 100%.

Miércoles 4 • La Confederación de Profesionales de la Salud que agrupa a ocho gremios del sector, entre ellos, odontólogos, enfermeras y bioquímicos, se suma al paro de los médicos.

Martes 10 • A la protesta de los médicos se suman los miembros provinciales del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública (SUNTRAMSP) y la Federación de Profesionales de la Salud Rural.

Jueves 12 • Ciudadanos de Sucumbíos toman los terrenos en donde se ha previsto la construcción del nuevo Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y obligan a retirar la maquinaria que se había instalado recientemente para rechazar la construcción del OCP, que provocará la contaminación del aire por la quema del crudo.

- Martes 17** • La Confederación Nacional de Servidores Públicos (CONASEP), los empleados del Registro Civil y los del sector eléctrico, en total 41 mil trabajadores, paralizan sus actividades y realizan diferentes movilizaciones en todo el país en reclamo de mejoras salariales.
- Lunes 23** • Los trabajadores de la Empresa Metropolitana de Aseo (EMASEO) inician un paro de actividades por tiempo indefinido en la ciudad de Quito para reclamar la revisión del cuarto contrato colectivo y manifestar su rechazo al proyecto de privatización del servicio de recolección de basura.
- Martes 24** • Organizaciones indígenas, sociales y sindicales inician desde diferentes puntos del país “la marcha por la vida” rumbo a la ciudad de Quito en rechazo a la política económica del gobierno.
- Jueves 26** • Más de 3 mil médicos de la FME son reprimidos por la Policía cuando intentan iniciar una marcha por las calles de Quito en demanda de un incremento salarial y mayor presupuesto para la salud.
- Lunes 30** • El Frente por la Dignidad y Derechos de los Jubilados realiza movilizaciones en Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Chimborazo para demandar al gobierno mejores pensiones y jubilaciones.
- Martes 31** • Trabajadores de EMASEO levantan el paro luego de llegar a un acuerdo con el alcalde de Quito y autoridades de la empresa que contempla un incremento salarial de 15 dólares y el compromiso de negociar el contrato colectivo.

AGOSTO

- Miércoles 1** • La Confederación de Profesionales de la Salud realiza movilizaciones en Quito, Guayaquil y otros puntos del país para exigir la vigencia de la Ley de Escalafón de Profesionales, un incremento del presupuesto para la salud y un aumento salarial, entre otros.
- La Unión Nacional de Periodistas (UNP) realiza una marcha en Quito hacia el Palacio de Gobierno en rechazo al juicio contra el periodista Jorge Vivanco y en reivindicación del periodismo nacional.
- Jueves 2** • Los trabajadores de la Empresa Eléctrica del Ecuador (EMELEC) protestan en las instalaciones de la firma para exigirle al gobierno que se respeten sus derechos en el proceso de licitación de la concesión del servicio eléctrico para Guayaquil.
- Viernes 3** • La FME levanta el paro luego de aceptar el acta propuesta por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) en la que el gobierno se compromete a incrementar el presupuesto para la salud. La Confederación de Profesionales de la Salud informa que continuará con el paro hasta que el gobierno le brinde una solución salarial.
- Domingo 5** • El SUNTRAMSP anuncia que continuará con el paro e implementará una posible huelga de hambre nacional si el gobierno no atiende sus demandas salariales, entre otras.

Martes 7 • Trabajadores de CONASEP de seis ministerios inician –con la toma de las instalaciones– un paro por tiempo indeterminado en demanda de incrementos salariales.

• La Unión Nacional de Educadores (UNE) inicia un paro preventivo por 48 hs. con movilizaciones en Cotopaxi, Cimbronazo, Azuay y Guayas en demanda de un incremento en el presupuesto 2002 para el sector y en rechazo a una posible privatización de la educación.

Miércoles 8 • El TC declara inconstitucional el último incremento del IVA del 12 al 14%.

Jueves 9 • Los trabajadores de CONASEP levantan el paro tras firmar un acuerdo con el gobierno que contempla un aumento de entre 50 y 80 dólares de una bonificación mensual.

Martes 14 • Afiliados a la Confederación de Profesionales de la Salud realizan una asamblea para planificar una estrategia para conseguir el escalafón unificado y el bono igualitario.

Miércoles 15 • Trabajadores de SUNTRAMSP levantan el paro tras llegar a un acuerdo con el gobierno que contempla un aumento en el comisariato y adquisición de víveres, el alza del presupuesto para la salud en el 2002 y la puesta en marcha de un nuevo contrato colectivo de trabajo. La Confederación de Profesionales de la Salud anuncia que continuará con las medidas hasta que el gobierno atienda sus demandas.

Jueves 16 • La Asociación Nacional de Bananeros de la provincia de El Oro inicia un paro por tiempo indeterminado con cortes de vías en rechazo al incumplimiento del pago del precio oficial de la caja de banano, por parte de los exportadores y comerciantes de la fruta.

Lunes 20 • La Asociación Nacional de Bananeros extiende el paro a las provincias del Guayas, Los Ríos y Cotopaxi en demanda del cumplimiento del precio oficial de la caja de la fruta.

Lunes 27 • Los productores de la Asociación Nacional de Bananeros levantan el paro luego de que el presidente de la República decretara la creación del Fideicomiso Bananero con el propósito de controlar el pago del precio mínimo de sustentación por parte de los exportadores a los productores de banano.

Miércoles 29 • Ciudadanos de Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela crean en Quito el Tribunal Moral Internacional y redactan la llamada Acta de Quito donde solicitan a los jefes de estado latinoamericanos que detengan las privatizaciones por constituir crímenes de lesa humanidad.

Jueves 30 • Unas diez mujeres de Acción Ecológica ocupan las instalaciones de la empresa OCP Ecuador, del consorcio liderado por Repsol-YPF, en rechazo a la construcción del oleoducto que dañará el ecosistema. Los efectivos de seguridad del lugar intentan desalojarlas agrediendo a las manifestantes y periodistas que cubrían el hecho.

■ Glosario de siglas

CEE	Conferencia Episcopal Ecuatoriana
CMS	Coordinadora de Movimientos Sociales
CONAM	Consejo Nacional de Modernización
CONASEP	Confederación Nacional de Servidores Públicos
EMASEO	Empresa Metropolitana de Aseo
EMELEC	Empresa Eléctrica del Ecuador
FENAJE	Federación Nacional de Servidores Judiciales
FME	Federación Médica del Ecuador
FMI	Fondo Monetario Internacional
IVA	Impuesto al Valor Agregado
OCP	Oleoducto de Crudos Pesados
SUNTRAMSP	Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública
TC	Tribunal Constitucional
UNE	Unión Nacional de Educadores
UNP	Unión Nacional de Periodistas

Perú

REGION ANDINA



MAYO

- Martes 1** • La Federación Departamental de Trabajadores de nario mitin unitario por el Día Internacional de los Trabajadores en la plaza de armas del Cusco, a la que asisten delegaciones de las provincias de Calca, Paruro, Anta y Urubamba.
- Miércoles 2** • Decenas de jubilados, organizados en la Asociación de Pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (APENFAPONA), marchan hasta el Ministerio de Defensa en Lima para exigir el reconocimiento de sus derechos laborales y las pensiones que les corresponden.
- Jueves 3** • Los 380 mineros de la Refinería de Zinc de Cajamarquilla S.A., ubicada al noroeste de Lima, quienes se encuentran en huelga indefinida desde hace 4 meses, marchan hasta la sede del Ministerio de Trabajo para exigir la inmediata solución a su pliego de reclamos, que incluye aumento salarial y la plena restitución de sus derechos laborales.
- Sábado 5** • Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Pucalá S.A., de Chiclayo, Lambayeque, son atacados a tiros y con gases lacrimógenos por 400 policías que toman posesión de la empresa para cumplir una resolución judicial, por la que el directorio rechazado por los obreros –que es parte del grupo Cromwell Assets S.A.– puede retomar sus funciones.
- Lunes 7** • Alrededor de 20 mil campesinos cocaleros de la Provincia Padre Abad, en Ucayali, comienzan una huelga de hambre para que el gobierno deje sin efecto la erradicación forzosa de cultivos de coca en las localidades de Irazona y Curimaná.
- Jueves 10** • Los dirigentes de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FAR-TAC) encabezan una masiva movilización por las principales calles y avenidas de Cusco, contra la política económica neoliberal y la descentralización y regionalización del país.
- Cerca de 350 jubilados realizan una protesta en la municipalidad provincial de Chiclayo para que se les cancelen sus pensiones atrasadas desde el mes de abril.
- Lunes 14** • Un grupo de trabajadores de la empresa Pucalá S.A. protesta frente a las instalaciones del Poder Judicial de Lambayeque para solicitar a las autoridades el apartamiento del directorio de parte del grupo Cromwell Assets S.A. y el inmediato retiro de los efectivos policiales, que permanecen en la planta desde el 5 de mayo pasado.
- Alrededor de 20 mil campesinos cocaleros de la Provincia Padre Abad, en Ucayali, bloquean varios tramos de la carretera Federico Basadre, incomunicando las ciudades de Pucallpa, Tingo María y Aguaytía, en rechazo a la erradicación forzosa de cultivos.
- Martes 15** • Los productores de hoja de coca de Pucallpa, Aguaytía y Tingo María levantan la huelga de hambre que sostenían desde 9 días atrás y se comprometen a desbloquear la carretera Federico Basadre, tras una reunión con el ministro de Agricultura y el secretario de Contradrogas, en la que los funcionarios ratifican la vigencia de una mesa de diálogo con estas organizaciones.

- Miércoles 16** • Los pobladores de 12 provincias del departamento de Ancash –convocados por los alcaldes provinciales, distritales y dirigentes de la Coordinadora Nacional de Comunidades Campesinas (CONACAMI)– inician un paro regional, en protesta por la contaminación ambiental generada por la compañía minera Antamina. Cerca de 3 mil habitantes de Bolognesi bloquean la carretera Panamericana Norte y son reprimidos por la Policía Nacional.
- Jueves 17** • Unas 500 familias campesinas sin tierra de los valles de Santa y Lacramarca ocupan terrenos del proyecto de irrigación Chínecas, vendidos a la empresa agroindustrial San Jacinto, en las zonas de Chimbote, Nepeña, Casma y Sechín, alegando que los requisitos impuestos para las subastas de las tierras son inaccesibles para ellos.
- Domingo 20** • Integrantes de la Confederación Campesina del Perú, de diversas organizaciones de familiares de las víctimas de la violencia y de instituciones defensoras de derechos humanos, realizan un acto frente a la Catedral de Lima para demandar al presidente Paniagua la ley que permita instalar la Comisión de la Verdad, por la cual se investigue las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país desde 1980.
- Martes 22** • Miles de agricultores afiliados a la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP) bloquean las principales carreteras de todo el interior del país y comienzan un paro agrario de brazos caídos, para que, entre otras cosas, el gobierno derogue el decreto que establece derechos arancelarios para algunos productos agrícolas, cuya importación propició la grave crisis que atraviesa el campesinado.
- Miércoles 23** • La JNUDRP acepta las propuestas del Ministerio de Agricultura y levanta el paro nacional agrario que era acatado masivamente en todo el país. Se dejará en suspenso el Decreto y en su lugar se crea una Comisión Intersectorial encargada de corregir los errores cometidos en dicho dispositivo. Además, el Ministerio de Agricultura se compromete a aplicar el Rescate Financiero Agrario (RFA) y a suspender las acciones judiciales contra los campesinos, entre otras cosas.
- Jueves 24** • Los gremios de las cuatro centrales sindicales que integran el Consejo Nacional del Trabajo –Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP)– y los maestros del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP) marchan en forma conjunta hasta el Congreso de la República para que los legisladores aprueben el proyecto de ley que señala que el despido arbitrario debe ser indemnizado con 36 remuneraciones. Sin embargo, el pleno del Congreso no aprueba el proyecto.
- Viernes 25** • Los trabajadores del sector público de Lambayeque despedidos por el gobierno de Alberto Fujimori marchan por las principales calles de Chiclayo para que se deroguen las leyes que generaron despidos colectivos durante dicho régimen.
- Miércoles 30** • Cerca de 3 mil pequeños y medianos empresarios pertenecientes a la Cámara de Calzado, Cueros y Afines del Perú (CCCAP) realizan marchas con los pies descalzos en Lima, Trujillo, Huancayo, Arequipa y otras ciudades del país para pedir que el estado detenga el ingreso desmedido de calzado extranjero.

Junio

- Viernes 1** • Los trabajadores de Pucalá SA, en Pátapo, se enfrentan a la policía, al intentar impedir que funcionarios de la empresa trasladen la maquinaria. Dos personas mueren asesinadas a tiros.
- Domingo 3** • Más de 14 millones de peruanos deciden en segunda vuelta electoral quién será Presidente de la República. Gana Alejandro Toledo, líder de Perú Posible, con el 53,08% de los votos, frente a Alan García, candidato de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), quien queda en segundo lugar con el 46,92% de los votos.
- Martes 5** • Los 203 alcaldes de los centros poblados del departamento de Puno llegan a Lima para solicitar al gobierno de transición el 20% del presupuesto del sector público para los más de 1.500 pueblos y comunidades del altiplano que durante el régimen de Fujimori no recibieron recursos para su desarrollo.
- Viernes 8** • El Colectivo Sociedad Civil, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) realizan en la Plaza Mayor de Lima un acto para solicitar al gobierno de transición la creación de la Comisión de la Verdad.
- Sábado 9** • Los trabajadores de la Refinería de Zinc de Cajamarquilla S.A. levantan la huelga que mantenían desde cinco meses atrás, tras las promesas de la empresa y del Ministerio de Trabajo de hacerles ofertas atractivas respecto de aumento salarial y la restitución de sus derechos laborales.
- Martes 12** • Miles de médicos afiliados a la Federación Médica Peruana (FMP) paran durante la jornada en todos los hospitales del país y marchan hasta el Palacio de Gobierno en Lima, en defensa de la salud pública y la seguridad social y por el respeto a los derechos laborales de los médicos.
- Miércoles 13** • Unos 20 mil trabajadores municipales de todo el país realizan manifestaciones a nivel local y los ediles de la capital marchan desde la Plaza Manco Cápac hasta el Congreso y el Palacio de Gobierno para exigir la promulgación de la ley sobre los ceses colectivos en el sector público y gobiernos locales.
- Viernes 15** • Decenas de ex-trabajadores municipales pertenecientes al Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAMUN), que fueron despedidos durante el régimen fujimorista, se manifiestan frente al Palacio de Gobierno para demandar la creación de una Comisión Negociadora Multisectorial que intente reponerlos en sus cargos.
- Martes 19** • Pobladores de Huarmey, Casma, Bolognesi y Huari bloquean los tramos 291 y 298 de la Panamericana Norte como parte de un paro regional de 48 hs. contra la empresa minera Antamina por el daño ambiental que la compañía produce en la región.
- Jueves 21** • Más de 400 trabajadores de la Refinería de Zinc de Cajamarquilla S.A. inician una huelga general indefinida en demanda de aumento salarial y la plena restitución de sus derechos laborales, puesto que la empresa no cumple las promesas hechas, por las cuales los obreros abandonaron el 9 de junio la huelga que sostenían desde 5 meses atrás.

Martes 26 • Pescadores artesanales locales y delegaciones de diversos puertos del litoral, nucleados en la Federación de Trabajadores de Consumo Humano Artesanal del Perú (FECHAP), marchan en Lima hasta el Congreso y Palacio de Gobierno para exigir los 20 millones de dólares adeudados para el fondo de jubilados, entre otros reclamos.

Miércoles 27 • Al menos 5 mil obreros de la construcción civil marchan por las calles de Lima desde el Palacio de Gobierno hasta las inmediaciones del Palacio de Justicia, solicitando cadena perpetua para el ex jefe de los servicios secretos y el hoy prófugo ex presidente Alberto Fujimori, por el asesinato de su máximo dirigente Pedro Huilca, y exigen la restitución de la negociación colectiva.

Jueves 28 • Alrededor de 1.000 ex trabajadores del Ministerio de Transportes realizan un plantón frente al Ministerio de Trabajo. Exigen la reposición de 8 mil trabajadores del ministerio despedidos durante el fujimorismo.

JULIO

Martes 3 • Cientos de trabajadores de Pescaperú marchan hasta el Congreso para exigir su reubicación en otras empresas del estado, luego de 9 años de haber sido despedidos a causa de la privatización que se realizó en 1992. Exigen que el gobierno investigue la privatización de Pescaperú.

Miércoles 4 • Los maestros afiliados a la SUTEP de la ciudad de Cusco realizan un paro de 24 hs. en rechazo al decreto que dispone la nivelación de los salarios de todos los docentes del Perú, medida que supondrá la disminución de sus sueldos.

Martes 10 • Los habitantes de Barranca, organizados en el Frente de Defensa de los Intereses de Barranca, paran por 24 hs. y bloquean tres tramos de la carretera Panamericana Norte a la altura de los kms. 198, 213 y 217, demandando, entre otras cosas, la defensa de los derechos de los trabajadores del campo beneficiados por la Reforma Agraria y la reposición de los trabajadores despedidos de Pescaperú y de la papelera Paramonga.

Jueves 12 • Más de 200 alumnos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) –que mantienen tomada la ciudad universitaria en Lambayeque desde el 26 de junio– desisten de la medida de fuerza, tras aprobarse el nuevo Reglamento Universitario, que permite mayor participación estudiantil en la toma de decisiones.

Jueves 19 • Los trabajadores de la Construcción Civil realizan un paro nacional y marchan en la capital junto a la CGTP; allí se reúnen con una comisión parlamentaria, a la que solicitan mediación para sus demandas de restitución del convenio colectivo de trabajo.

• Ex-trabajadores de las empresas privatizadas y entidades públicas, agrupados nuevamente en la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE), desactivada con la política de despidos de Fujimori, marchan hasta el Palacio de Gobierno, exigiendo respeto a las leyes que crean las comisiones revisoras de los ceses colectivos ocurridos desde 1992 hasta 2000.

• Los transportistas urbanos de Lima agrupados en la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Público (AMATUR) realizan un paro de 24 hs. y bloquean las vías troncales de la ciudad, para oponerse a un anteproyecto de ley que retiraría de circulación los autobuses con más de 20 años de antigüedad.

• Más de un centenar de trabajadores de la empresa peruana Aero Continente se trasladan hasta la embajada de Chile, para protestar por la sorpresiva decisión del gobierno chileno de liquidar las operaciones comerciales de la compañía aérea en ese país.

Lunes 23

• Pobladores de Chiclayo, miembros del Frente de Defensa de Lambayeque (FEDEL) y de los frentes de Pátapo y Pucalá, profesores de la SUTEP, comerciantes y trabajadores de Tumán y Pomalca, marchan por las calles de Chiclayo exigiendo sanciones a los autores de la muerte de 13 trabajadores de la empresa Pucalá S.A. y el cese de desalojos a los trabajadores ambulantes.

• Los pobladores de Piura realizan una multitudinaria marcha por las calles de la ciudad para reclamar al presidente electo Alejandro Toledo que se identifique con sus problemáticas. Reivindican sus derechos a rechazar la explotación minera en Tambogrande y a exigir la ejecución del Proyecto Hidroenergético del Alto Piura.

• Miles de peruanos, convocados por la asociación civil La Resistencia, marchan hasta la embajada de Japón para reclamar al gobierno nipón que entregue a Alberto Fujimori.

• Unos 18 mil trabajadores del departamento de Puno comienzan un paro indefinido para que el gobierno inicie un proceso de reorganización y reestructuración de la Dirección Regional de Educación.

Jueves 26

• El gremio de la construcción civil realiza una manifestación para pedir la restitución de la negociación colectiva.

• 264 trabajadores de EsSalud –entidad prestadora de servicios de salud– que vienen manifestándose para ser reintegrados en la empresa luego de ser despedidos injustamente durante 1999, se reincorporarán a sus puestos de trabajo de acuerdo a una resolución emitida por la presidencia ejecutiva de la entidad.

Martes 31

• Los miembros de la Coordinadora de Trabajadores Contratados del sector de la salud de Lima Este marchan hasta el Congreso de la República para pedir al nuevo gobierno el nombramiento del personal contratado.

AGOSTO

Lunes 6

• Los transportistas de diversos gremios salen a las calles de Lima y el Callao a protestar para exigir facilidades de pago para las multas de tránsito, debido a las intensas redadas emprendidas por las brigadas policiales para sacar de circulación a 523 mil vehículos, cuyos choferes incumplieron el pago de multas.

Lunes 13

• Faltando pocos minutos para el inicio de un anunciado paro de transportistas, la Federación de Choferes del Perú (FECHOP), la Confederación General de Transporte (CGT) y la Confederación Nacional de Transportistas deciden levantar la medida de fuerza, tras llegar a un acuerdo para conformar una Comisión de Trabajo que solucione el problema.

Viernes 24

• Alrededor de 300 pobladores de Ica, nucleados en el Frente de Defensa y Desarrollo de los Pueblos Jóvenes y Organizaciones Populares de Ica, inician una marcha a la capital para pedir al gobierno que incremente el presupuesto destinado a la reconstrucción del departamento, castigado por la inundación de 1998 y afectado por el terremoto de junio último.

Domingo 26

• Más de 700 delegados de todo el país participan del XI Congreso Ordinario de la CGTP, donde acuerdan continuar con la lucha por la recuperación de los derechos laborales arrebatados por la dictadura fujimorista, la no privatización de las empresas públicas y la generación de empleo, entre otros puntos.

• Militantes del partido Perú Posible realizan una multitudinaria marcha por las calles de Huaraz, exigiendo al gobierno central el inmediato cambio de funcionarios fujimontesinistas de las instituciones públicas locales.

Lunes 27

• Centenares de jubilados de la Ley 19.990, la cual establece pensiones inferiores a otras leyes jubilatorias, nucleados en la Central Nacional de Jubilados, marchan hasta el Palacio de Gobierno para pedir celeridad de normas que mejoren sus remuneraciones. Participan delegaciones de Huancayo, Pativilca, Huancavelica, Ica, Trujillo y Cerro de Pasco.

• Los 300 pobladores que el viernes 24 partieron de Ica, llegan hasta el Palacio de Gobierno para solicitar ayuda para su departamento, junto con Arequipa, Moquegua y Tacna, en el plan de reconstrucción del sur.

Miércoles 29

• Unas 200 mujeres ingresan a la municipalidad de Rioja, tomando como rehenes al alcalde y a sus seguidores, para exigir la renuncia del alcalde, acusado de irregularidades. Reclaman, también, la realización de obras de envergadura.

Jueves 30

• Más de 80 mujeres que habían tomado el local del concejo provincial de Rioja son desalojadas por la policía.

■ Glosario de siglas

AMATUR	Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Público
APENFAPONA	Asociación de Pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional
APRA	Alianza Popular Revolucionaria Americana
APRODEH	Asociación Pro Derechos Humanos
CATP	Central Autónoma de Trabajadores del Perú
CCCAP	Cámara de Calzado, Cueros y Afines del Perú
CGT	Confederación General de Transporte
CGTP	Confederación General de Trabajadores del Perú
CITE	Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales
CONACAMI	Coordinadora Nacional de Comunidades Campesinas
CTP	Confederación de Trabajadores del Perú
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
FARTAC	Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco
FDTC	Federación Departamental de Trabajadores de Cusco
FECHAP	Federación de Trabajadores de Consumo Humano Artesanal del Perú
FECHOP	Federación de Choferes del Perú
FEDEL	Frente de Defensa de Lambayeque
FMP	Federación Médica Peruana
JNUDRP	Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú
RFA	Rescate Financiero Agrario
SITRAMUN	Sindicato de Trabajadores Municipales
SUTEP	Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana
UNPRG	Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert y Mariana Fassi.

Fuentes: diarios La República y La Industria.

Venezuela

REGION
ANDINA



MAYO

Martes 1

- La Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Federación de Trabajadores de la Banca (FTB) realizan dos actos por el Día Internacional de los Trabajadores. La CTV y la FTB marchan en Caracas junto a casi 10 mil y 7 mil personas, respectivamente.

- Los 6 mil trabajadores de la Siderúrgica de Orinoco (SIDOR) continúan la huelga indefinida iniciada el lunes por el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares (SUTISS) y bloquean los accesos de la planta exigiendo la firma del contrato colectivo.

Miércoles 2

- Los tomistas, el fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor general de la república acuerdan el levantamiento de la toma de la Universidad Central de Venezuela (UCV), iniciada el 28 de marzo pasado. Dicho acuerdo establece que el Consejo Universitario haga viable la transformación de la UCV, que no se apliquen sanciones contra los involucrados en las medidas de fuerza, y que se garantice su integridad física.

- La Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela (FENATEV) y la Federación Venezolana de Maestros (FVM) realizan un paro nacional con 90% de acatamiento, exigiendo al Ministerio de Educación el cumplimiento del convenio colectivo.

Jueves 3

- El presidente Chávez interviene en el conflicto de SIDOR para lograr un acuerdo entre las partes. La mediación presidencial no da resultado.

- Finaliza la toma de la UCV tras la instalación de las mesas de diálogo.

- Los maestros en huelga rechazan la oferta del ministro de Educación de elevar entre un 4 y un 6% el salario mínimo docente.

Viernes 4

- Más de 300 desempleados del sector petrolero se manifiestan frente a la sede regional de gobierno ubicada en Maracaibo exigiendo que el Ministerio de Trabajo acuerde las cuotas de empleo con ellos y no con los sindicatos tradicionales.

- El presidente de la FENATEV rechaza el aumento salarial del 15% anunciado por Chávez y reclama uno del 37%.

- La Asociación de Profesores de la Universidad de Zulia (APUZ) inicia un paro indefinido exigiendo el pago de los intereses de las prestaciones sociales tras la realización de una asamblea extraordinaria.

Martes 8

- Las federaciones magisteriales instalan una comisión negociadora con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que será integrada por tres miembros de cada parte. Los 4 mil docentes de la Alcaldía Mayor inician una huelga indefinida junto al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (SITRAENSEÑANZA) exigiendo el pago del aumento salarial del 20% decretado por el gobierno el año pasado, entre otros beneficios laborales.

• El SUTISS marcha con el apoyo de los trabajadores de las empresas ferromineras Orinoco, Edelca, Alcasa, Carbonorca y de otros de educación y salud hacia el palacio de justicia de Puerto Ordaz, en reclamo de una solución al conflicto en SIDOR.

Viernes 11

• SUTISS realiza una asamblea en la que se ratifica la exigencia de un incremento salarial de 10% y el pago de un bono adicional de 3 millones de bolívares a cambio de prorrogar el contrato colectivo.

Sábado 12

• Los maestros metropolitanos acuerdan con la Alcaldía Mayor el reconocimiento de la estabilidad laboral, bonos y beneficios sociales, el pago del incremento del 20% adeudado por el Ministerio de Finanzas, y la discusión del contrato colectivo en enero próximo.

Martes 15

• Cerca de 4 mil estudiantes, profesores y autoridades universitarias marchan junto al rector de la UCV hacia la plaza El Venezolano en reclamo de que el proceso de reforma universitaria incluya en la discusión a los distintos actores de la comunidad académica.

• Alrededor de 1.500 trabajadores de SIDOR se manifiestan frente a la sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), mientras se llevan a cabo las negociaciones.

Miércoles 16

• El Sindicato Único de Trabajadores del Aluminio paraliza las plantas de Guayana en solidaridad con los reclamos de los empleados de SIDOR.

• Los maestros deciden, en la asamblea realizada en Caracas, continuar con el paro indefinido.

124**Jueves 17**

• En una reunión de la Comisión de Alto Nivel, integrada por la empresa, el sindicato y el gobierno, SIDOR ofrece un bono de 1,2 millones de bolívares. La dirigencia de SUTISS expresa que la exigencia de uno de 3 millones es innegociable.

Viernes 18

• El SUTISS, la CTV y la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela convocan a una cumbre sindical para el martes próximo.

Lunes 21

• Alrededor de 8 mil bachilleres del Instituto Universitario Tecnológico de Táchira se manifiestan exigiendo al ministro de Educación, Cultura y Deportes la democratización de la entidad, cuyas autoridades fueron impuestas por el Ministerio hace 15 meses para poner fin a presuntas irregularidades administrativas.

Martes 22

• Los trabajadores siderúrgicos finalizan las medidas de fuerza tras acordar el SUTISS, en la Comisión de Alto Nivel, el pago de un bono de 2,1 millones de bolívares, un año de inamovilidad laboral y la prórroga del contrato colectivo hasta enero de 2002.

• El Sindicato Unico Organizado Nacional de Trabajadores Tribunalicios (SUON-TRAT) inicia asambleas permanentes exigiendo al Ejecutivo la aprobación de un crédito de 357 millardos de bolívares además de la discusión del contrato colectivo.

Viernes 25

• Estudiantes de la Universidad Experimental Simón Rodríguez se manifiestan frente al Ministerio de Educación exigiendo al gobierno que respete la autonomía universitaria.

Sábado 26

• Cerca de 150 familias procedentes de La Vega, Carapita, Vargas y Los Teques toman terrenos que separan a la primera ciudad con Coche, pertenecientes a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Miércoles 30

- Los 1.600 propietarios de estaciones de servicio del país, nucleados en la Federación Nacional de Expendedores de Gasolina (FENEGAS), suspenden la compra de combustible exigiendo que el gobierno autorice un aumento de 4 bolívares por litro. La medida finaliza al comprometerse el ministro de Energía y Minas a atender sus peticiones.

JUNIO**Viernes 1**

- Trabajadores de Petroquímica de Venezuela S.A. (PEQUIVEN), filial de PDVSA, realizan –junto a la FBT– un paro en El Tablazo exigiendo un aumento de 6 mil bolívares diarios.

Sábado 2

- Funcionarios del Ministerio de Trabajo acuerdan con dirigentes de la FBT y de otros tres sindicatos petroquímicos el otorgamiento de un aumento salarial de 5.940 bolívares diarios, el compromiso de dos posteriores de 10% cada uno y la entrega de un bono de 2 millones de bolívares.

Jueves 7

- 1.200 trabajadores de la petroquímica El Tablazo inician un paro en desacuerdo con el convenio firmado el sábado y afirmando su exigencia original.

Domingo 10

- En una asamblea en la que participa el Sindicato de Trabajadores de PEQUIVEN (SINTRAPEQ), un grupo de trabajadores de la planta petroquímica desconoce los acuerdos del sábado 2 argumentando que la base laboral no fue consultada. Los obreros y empleados resuelven continuar con las huelgas.

Lunes 11

- Cerca de 560 obreros de los complejos de PEQUIVEN de Morón y José, ubicados en Carabobo y Anzoátegui, se pliegan a la huelga.

Martes 12

- La viceministra de Trabajo califica de ilegal la huelga de PEQUIVEN.

Viernes 15

- Trabajadores de las instalaciones de PEQUIVEN de El Milagro inician una huelga y una toma, tras lo que son desalojados por la Guardia Nacional.

Sábado 16

- Los trabajadores de PEQUIVEN continúan con las medidas de fuerza exigiendo un bono de 3 millones de bolívares, a pesar de que la empresa y cuatro de los cinco sindicatos de PDVSA firman el contrato colectivo en la sede del Ministerio de Trabajo. El convenio contempla un aumento salarial de un 24% este año y dos más de un 10% en 2002 y 2003 respectivamente, entre otras cosas.

Lunes 18

- Los más de 1.000 trabajadores del Hospital de Niños J. M. de los Ríos, adscritos a la Alcaldía Metropolitana, inician junto al Sindicato de Trabajadores Asistenciales (SITA) un paro con asambleas permanentes exigiendo que el Ministerio de Finanzas acredite los recursos necesarios para el pago de salarios y cestatickets adeudados.

Miércoles 20

- Los trabajadores del centro de salud Periférico de Coche se pliegan a las medidas del Hospital de Niños J.M. de los Ríos con idénticas demandas. Representantes de la Alcaldía Mayor y dirigentes sindicales se reúnen en el hospital en huelga desde el lunes, donde se acuerda el pago del aumento del 10% decretado por el presidente.

• PEQUIVEN se compromete a no tomar represalias, dejar sin efecto calificaciones de despido y no descontar los días de paro a cambio de la deposición de la medida de fuerza. Un centenar de trabajadores bloquea la ruta hacia El Tablazo, tras lo que son desalojados por la Guardia Nacional.

Jueves 21 • Los cerca de 1.600 trabajadores en huelga de PEQUIVEN deciden en respectivas asambleas en El Tablazo y Morón el levantamiento del paro.

• Los trabajadores y profesores de todas las universidades públicas del país realizan un paro por 24 hs. y marchan en Puerto La Cruz y Maracaibo exigiendo al Poder Ejecutivo la aplicación de las normas de homologación salarial de 1998 y 1999 además del cumplimiento de los compromisos adquiridos en 2000.

Viernes 22 • Tras una negativa de la empresa queda en suspenso la firma del acuerdo entre PEQUIVEN y los trabajadores para garantizar la estabilidad laboral.

Lunes 25 • Los empleados y médicos de la Alcaldía Mayor resuelven en asamblea general paralizar indefinidamente sus actividades exigiendo al Ministerio de Finanzas la entrega de recursos para el pago de cestatickets y el aumento del 10% entre otras cosas. El Sindicato de Hospitales y Clínicas acompaña la manifestación.

Martes 26 • La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) realiza un paro nacional y marcha en la ciudad de Maracay hacia la gobernación del estado de Aragua exigiendo el pago de salarios y otros beneficios atrasados.

Viernes 29 • Los dirigentes negociadores de los trabajadores de la salud deciden levantar la medida de fuerza en una reunión con la Alcaldía Metropolitana en la que el Ministro de Finanzas se compromete a asegurar el pago de los cestatickets adeudados correspondientes a 1999 y 2000. El Gobierno capitalino se hará cargo de un bono de 400 mil bolívares y de otro de 600 mil.

JULIO

Lunes 9 • En el acto de relanzamiento del Banco del Pueblo, el presidente Chávez decreta un incremento de 10% en el salario mínimo. La CTV se muestra inconforme y expresa que en la práctica el aumento será de un 6,8%.

Martes 10 • Ancianos provenientes de distintas regiones del país se manifiestan en Caracas, junto a la Fundación Amigos de la Tercera Edad, exigiendo a la Asamblea Nacional la aprobación de la Ley de Protección Social.

Miércoles 11 • Los conductores de 8 líneas de transporte de Baruta realizan un paro exigiendo al alcalde que autorice el aumento de transporte aprobado por el Consejo Municipal. Tras acordar una tarifa de 200 pesos, el edil ordena el despeje del bloqueo iniciado frente a la alcaldía. La policía cumple la orden tras un enfrentamiento.

Jueves 12 • Los cuatro mil profesores de la Universidad de Zulia cumplen con el paro convocado por la FAPUV exigiendo al Ejecutivo el pago de la deuda que mantiene con diferentes instituciones académicas nacionales

Jueves 19

- 4.500 trabajadores del Metro de Caracas inician un paro indefinido exigiendo a la empresa el pago de un bono de 2 millones de bolívares, tal como se estableció en el contrato colectivo, entre otros reclamos.

Viernes 20

- En una reunión con la empresa y el Ejecutivo nacional, los trabajadores del metro de Caracas acuerdan el pago de un bono antes del 26 de julio además de mantener sin sanciones a los participantes en las medidas.

Martes 31

- Cerca de 1.000 desempleados protestan en Puerto Ordaz, Bolívar, exigiendo que el estado condene a los guardaespaldas de un dirigente sindical, quienes asesinaron a un compañero cuando protestaba frente al gremio de cesantes local.
- Los 5.150 trabajadores de la empresa con participación mayoritaria privada Sincrudos de Oriente (SINCOR) paralizan sus labores exigiendo la reincorporación de un delegado sindical. Ambas partes se reúnen en el Ministerio de Trabajo, donde acuerdan la reincorporación del mismo.
- El SUONTRAT comienza una huelga indefinida nacional en reclamo por la firma del contrato colectivo, entre otras cosas. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) califica a la huelga de ilegal.

AGOSTO

Jueves 2

- Desocupados de Anzoátegui toman 18 autobuses en El Tigre e impiden con un bloqueo el funcionamiento de Petrolera Ameriven, operadora de PDVSA, exigiendo puestos de trabajo y protestando por la contratación de personal extranjero.

Jueves 9

- Tras finalizar sin acuerdos una reunión con la ministra de Trabajo, los dirigentes sindicales tribunalicios convocan a una asamblea general para definir las medidas a adoptar a partir del lunes. Los trabajadores marchan hacia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Sábado 11

- En Zulia, las listas de la FBTse imponen en las elecciones sindicales, quedando la organización con la mayor parte de las direcciones del Sindicato de Trabajadores de la empresa de aseo urbano Sabenpe y del de Trabajadores de Hidrocarburos y Derivados. La federación gana la conducción del Sindicato Unitario de Empleados Públicos del Estado de Aragua.
- En Zulia, más de 200 campesinos toman la sede del Instituto Agrario Nacional (IAN) exigiendo la entrega de títulos de tierras, entre otros reclamos.

Martes 14

- Los empleados tribunalicios levantan el paro luego de que la DEM y el SUONTRAT acuerdan en el Ministerio de Trabajo las bases para el inicio de las discusiones de la convención colectiva a partir del 22 de agosto. La Magistratura se compromete a cumplir un cronograma de pago de incremento salarial, horas extras, días feriados y cestatickets. Su coordinador expresa que no se abonarán los días correspondientes a la huelga.
- La Asamblea Nacional vota la suspensión del decreto de aumento del 10% del salario mínimo para los trabajadores de los sectores público y privado.
- El presidente del IAN se reúne con los campesinos que protestan en Zulia sin llegar a un acuerdo.

- Sábado 25** • En Cuba, el canciller venezolano descarta el ingreso del país al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
- Jueves 30** • Cerca de 200 transportistas bloquean junto al Sindicato de Transporte de Combustible de Zulia las salidas de la refinería de Bajo Grande, exigiendo el pago de 1.000 bolívars por cada cisterna llenada, además de otros acuerdos laborales firmados con PDVSA hace tres años.
- Viernes 31** • El presidente de la Asociación de Empresarios Gasolineros de Zulia expresa que, de continuar el bloqueo en la refinería de Bajo Grande, en dos días podría peligrar el expendio de combustible en el estado.

Glosario de siglas

ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
APUZ	Asociación de Profesores de la Universidad de Zulia
CTV	Central de Trabajadores de Venezuela
CVG	Corporación Venezolana de Guayana
DEM	Dirección Ejecutiva de la Magistratura
FAPUV	Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela
FBT	Federación Bolivariana de Trabajadores
FENATEV	Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela
FENEGAS	Federación Nacional de Expendedores de Gasolina
FVM	Federación Venezolana de Maestros
IAN	Instituto Agrario Nacional
PDVSA	Petróleos de Venezuela S.A.
PEQUIVEN	Petroquímica de Venezuela
SIDOR	Siderúrgica de Orinoco
SINCOR	Sincrudos de Oriente
SINTRAPEQ	Sindicato de Trabajadores de PEQUIVEN
SITA	Sindicato de Trabajadores Asistenciales
SITRAENSEÑANZA	Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza
SUONTRAT	Sindicato Unico Organizado Nacional de Trabajadores Tribunalicios
SUTISS	Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares
TSJ	Tribunal Supremo de Justicia
UCV	Universidad Central de Venezuela

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández y Juan Chaves.
Fuentes: diarios *El Nacional* y *El Universal*.



Las luchas sociales en Centroamérica

mayo-agosto de 2001

Por Breny Cuenca Saravia* y
Rodrigo Páez Montalbán**



Las luchas sociales en Centroamérica, y aquí nos referimos principalmente a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua –y a las respectivas cronologías que aquí se publican–, se desenvuelven en un momento histórico caracterizado por ciertos rasgos comunes como los siguientes: a. situaciones de posguerra, con transiciones hacia la democracia signadas por tensiones entre los proyectos democratizadores y los proclives a una restauración autoritaria; b. la privatización y firma de tratados de libre comercio intra y extrarregionales; c. el desempleo y la informalización del trabajo; d. el éxodo continuo de la población rural y urbana hacia los Estados Unidos; e. la dolarización de las economías, principalmente de El Salvador y Guatemala (las economías de Honduras y Nicaragua caminan más lentamente en esa dirección); f. la subordinación local respecto a las políticas centralistas del Estado; g. el incremento incontrolado del crimen organizado y de la delincuencia; y el abandono y vulnerabilidad de los sectores más pobres frente a los desastres naturales (terremotos, sequías y huracanes).

129

■ Guatemala y El Salvador

Después de décadas de rebelión armada contra regímenes militares, y del logro de acuerdos negociados para terminar con la guerra (El Salvador en 1992 y Guatemala en 1996), los movimientos sociales, que fueron actores destacados para alcanzar la paz e iniciar la democratización, tienen ahora que innovar sus formas organizativas y de lucha para responder a situaciones inéditas. Los procesos de reconstitución organizativa, no obstante, son todavía precarios. Suponen, en gran medida, una acumulación de nuevos conocimientos, que permitan captar los profundos cambios económicos y culturales que se viven, y que escapen a los parámetros tradicionales del análisis sociopolítico.

El curso de estos aprendizajes y metamorfosis no implica necesariamente el inmovilismo de las organizaciones sociales tradicionales, pero sí menor despliegue e inventiva que otros actores sociales emergentes. El abanico de agendas políticas, humanitarias y culturales parece moderarse en estos meses. Surge, más bien, un impulso de respuesta a situaciones económicas amenazantes que las organizaciones asumen como prioridades y que concentran sus energías en exigencias y demandas frente a los gobiernos.

* Maestra en Ciencia Política. Investigadora del Centro Tendencias, El Salvador.

** Doctor en Sociología. Investigador del Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, UNAM.



■ El auge de la economía informal. Los vendedores ambulantes

En Guatemala y El Salvador, el desempleo, las más agudas necesidades y el desamparo social, acentuados por las políticas de ajuste estructural de las economías promovidas por el Fondo Monetario Internacional, han lanzado a la gente a la calle. Allí se producen y, sobretudo se comercializan, los más variados objetos: comida, ropa, videos, discos compactos, artesanías, relojes, productos importados (y en muchos casos robados). Miles de desempleados deambulan en el caótico paisaje urbano para ofrecer sus habilidades en distintos oficios, lícitos o ilícitos. Carpinteros, albañiles, lustrabotas, payasos, prostitutas, portadores, mezclados con contrabandistas y traficantes minoristas, pueblan los centros de las principales ciudades. Los espacios urbanos, que otrora fueron los centros del poder, del gran comercio, y también los escenarios históricos de grandes luchas sociales, se han ido transformando en inmensos mercados, desordenados, multicolores, sucios, agresivos, intensamente pobres y marginados.

En ese marco, los vendedores ambulantes están multiplicando sus protestas y demandas. Frente a situaciones que les son adversas, los trabajadores informales y sus familias comparten la lucha en las calles para sobrevivir, creando vínculos de solidaridad que los ayudan a enfrentar la marginación. Las acciones se desarrollan normalmente en contra de las autoridades municipales, que son identificadas como responsables directos del cierre de sus fuentes de trabajo y de la privación de lo que consideran sus territorios de supervivencia. En el caso de Guatemala, los vendedores mayoristas toman la iniciativa y el liderazgo, y muchas veces manipulan el descontento social para sus propias agendas.

Las luchas de los vendedores ambulantes y de mercados se manifiestan, indistintamente, contra alcaldías gobernadas por la izquierda o la derecha. En la ciudad de San Salvador, por ejemplo, los vendedores ambulantes se han enfrentado, más de una vez, con una administración que es de izquierda. Para el Alcalde Héctor Silva ha sido complejo negociar con un sector popular que cifra su supervivencia en la toma de las calles para el comercio informal, lo que se contradice con la necesidad del edil de cumplir sus compromisos de campaña, entre ellos la recuperación del Centro Histórico para los ciudadanos. En algunos casos los conflictos entre los vendedores y las municipalidades se han reducido gracias al diálogo, pero también ha habido fuertes enfrentamientos entre la policía municipal y los vendedores y vendedoras. Lo cierto es que ni la propia izquierda posee políticas consistentes para los vendedores ambulantes, principalmente porque no se les reconoce como un actor social emergente, cuya compleja identidad social y formas de movilización pueden propiciar el cambio, o inducir el caos.

■ La fuerza social de los damnificados

Un actor social inédito en Centroamérica son los damnificados que han emergido de las ruinas de las poblaciones más pobres arrasadas por los desastres naturales. En El Salvador, los terremotos han dejado aproximadamente doscientas cincuenta mil familias sin casa. A ello se suman miles de víctimas más de los ciclones, como el Mitch, y de las recientes sequías, que acabaron con las cosechas y amenazan con la hambruna. Cada vez más, los damnificados asumen que las tragedias no son solamente personales y familiares, sino que afectan a sus comunidades, a sus territorios y a sus bienes. No todos, pero miles de personas han pasado de la estricta soledad frente al derrumbe al reconocimiento de los otros. La presión colectiva y la lucha organizada frente a las autoridades (centrales y municipales) las han unido y les han permitido hacer menos torpe y burocrática la canalización de la ayuda internacional destinada a la reconstrucción.

Las movilizaciones de los damnificados suelen ser inorgánicas, heterogéneas y discontinuas, aunque están surgiendo organismos, como el Comité Pro Defensa de los Damnificados, COPRODES, que, reconociendo esas realidades de fragmentación, están logrando dotar de un sentido más estratégico a las luchas por la reconstrucción.

■ Las demandas del sector campesino de los ex patrulleros

Como herencia paradójica de la guerra en El Salvador, los ex patrulleros que formaron las redes paramilitares del ejército, y que fueron una pieza clave para mantener la dominación oligárquica, se han transformado ahora en un sujeto que subvierte el orden establecido. En su gran mayoría, se trata de campesinos empobrecidos, que fueron enrolados y financiados para reprimir despiadadamente a la población civil, bajo el supuesto de que eran bases de apoyo a la guerrilla. En esa misión, las estructuras paramilitares fueron implacables en la represión, la inteligencia y el patrullaje en el campo. Cuando a raíz de los acuerdos de paz los ex patrulleros fueron desmovilizados, lograron obtener la promesa de una indemnización que luego les fue escamoteada por el gobierno. Aunque la antigua guerrilla y hoy partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, les ha brindado apoyo en la Asamblea Legislativa, votando a favor de la ley de indemnización solicitada, hasta ahora el ejecutivo la ha vetado.

Las manifestaciones de los ex patrulleros en las calles son violentas. El discurso populista e incendiario de sus líderes y su virtual dependencia del Partido de Conciliación Nacional, PCN (que fue durante mucho tiempo el pivote político de los militares y un organizador territorial muy eficiente de los fraudes electorales), crean dudas sobre la verdadera naturaleza de su agenda y de sus compromisos políticos. El PCN los considera una reserva electoral y un factor de presión para mejorar sus condiciones de negociación y alianzas con el partido gobernante, Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Muchas veces, las movilizaciones de los ex patrulleros confluyen con otras protestas y paros populares o empresariales (como los transportistas), lo que tiende a crear situaciones explosivas que pueden ser manipuladas para restringir las libertades de expresión social y política.

■ El paquete impositivo

Las movilizaciones más notables de los sectores sociales guatemaltecos han sido motivadas por el rechazo popular y empresarial al paquete impositivo aprobado por el gobierno. Si bien Guatemala posee como especificidad la existencia de un movimiento social maya que desarrolla sus propias luchas políticas y culturales, en este período sus movilizaciones aparecen cruzadas o sumadas a las acciones generales emprendidas para impedir los incrementos impositivos.

Durante esos meses, se destacan las protestas de los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que cuestionaron el aumento del IVA de un 11 a un 13%.

Los habitantes de la capital y de muchos municipios y zonas rurales, de distintos sectores sociales y filiaciones políticas, han hecho causa común en manifestaciones, paros y protestas contra los impuestos. En ese movimiento envolvente, apoyado por los medios de comunicación, se han sumado las demandas del gremio de maestros por aumentos de salario, de la Central de Trabajadores de Guatemala (CGT) por reformas al Código del Trabajo, y de las organizaciones del medio ambiente contra la tala indiscriminada de bosques.

En todas las movilizaciones, las denuncias contra la corrupción han tenido un papel muy importante. Pero, en el caso de los municipios, principalmente indígenas, las acusaciones de corrupción y de abuso de poder en contra de los alcaldes han derivado en acciones violentas, como en el caso del departamento de Sololá.

La lucha contra el paquete impositivo ha sido alentada por la poderosa CACIF, Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, considerada por muchos analistas como el estado mayor de la burguesía guatemalteca. Esta gremial empresarial impulsó la convocatoria al paro nacional de veinticuatro horas, del pasado 1° de agosto, denominado “Día de la Dignidad Nacional”, que se propuso revertir la aprobación del paquete impositivo. Activamente, el CACIF ha capitalizado las movili-



ciones populares, contra el aumento del IVA, para rechazar los impuestos que afectan al capital; entre ellos, el aumento de un 2,5 a un 3,5% que grava a las empresas mercantiles y agropecuarias y el “timbre” a las bebidas alcohólicas, gaseosas y cigarrillos, cuya producción es parte de los negocios de las familias más poderosas de Guatemala.

La corrupción gubernamental, la impunidad con que actúa la delincuencia organizada, los fraudes financieros, los múltiples conflictos laborales, las demandas insatisfechas en materia de derechos humanos, han creado un escenario volátil de mucha debilidad del gobierno. Por esos meses, los rumores de golpe de estado fueron frecuentes. El mismo presidente de la República, Alfonso Portillo, expresó el 19 de julio: “En el incremento al IVA no hay marcha atrás, aunque sea lo último que haga como presidente. El país necesita una reforma fiscal”. Esta reforma ha sido promovida intensamente por el FMI, el BID, el Banco Mundial y el “Grupo Consultivo”, integrado por los países que financian los acuerdos de paz, organismos que condicionan la entrega de préstamos y donaciones a un incremento de la carga tributaria por lo menos de un 10 a un 12% del PBI.

■ Honduras y Nicaragua

La bancarrota de la economía del café debido a la caída de los precios internacionales afecta a toda Centroamérica, pero en donde ha sido más notable es en Honduras y en Nicaragua, por la rotunda falta de políticas del estado para enfrentar la emergencia, que implica el incremento vertiginoso del desempleo en el campo.

La difícil situación de los pequeños caficultores y las miles de familias campesinas que viven de la recolección del grano y de la prestación de servicios conexos ha ido empeorando a medida que bajan los precios internacionales del café y se extiende, además, la sequía en algunas de las zonas tradicionales de este cultivo. Esta problemática ha llevado incluso a la perspectiva de suspender las cosechas o las siembras de nuevos cultivos. A ello hay que añadir el compromiso adquirido por los gobiernos del área, de destruir una parte importante de las cosechas de baja calidad, con el fin de mejorar los precios internacionales.

En Honduras, la Asociación Hondureña de Productores de Café ha pedido un financiamiento de 300 millones de lempiras al gobierno para poder sostener al sector, y en Nicaragua los productores han solicitado la reestructuración de las deudas cafetaleras a ocho años. En este último país, las medidas de presión han incluido el bloqueo de la carretera Panamericana.

Una de las situaciones más dramáticas que afecta a Centroamérica es la simultaneidad con que se han presentado la crisis del café, las inundaciones y la sequía, cuyos efectos son devastadores en el campo. Particularmente, los campesinos de Honduras y Nicaragua están seriamente amenazados por el espectro del hambre. La extrema pobreza que sufre una gran parte de la población de ambos países es la base de su vulnerabilidad frente a las recurrentes crisis de la economía de exportaciones agrícolas tradicionales y los desastres naturales. La hambruna es ya una dramática realidad en varias regiones. Los campesinos han comenzado a abandonar sus lugares de origen y a protestar en las ciudades, particularmente en las capitales departamentales o nacionales.

La situación ha sido particularmente grave en la zona norte de Nicaragua, en donde los trabajadores agrícolas han sido despedidos de las fincas cafetaleras. Centenares de ellos se han desplazado a Matagalpa, y luego a Managua, en una “Marcha del Hambre” para protestar, reclamando a su gobierno que no haya declarado el estado de emergencia ante la gravedad de la situación. El gobierno de ese país, a diferencia de las autoridades de Guatemala y El Salvador, se ha negado a formular esa declaración, que lo comprometería a una política de estado frente a la emergencia. Los campesinos han recibido únicamente ofertas temporales de trabajo por comida, atención médica y otras donaciones con tal de que re-

greden a sus poblados. En algunas localidades de Madriz, los mismos pobladores han declarado su propio “estado de emergencia”.

■ El “estallido” de múltiples protestas

Las cronologías muestran un variado y heterogéneo conjunto de acciones de protesta en Honduras y Nicaragua, cuyos protagonistas son las comunidades. En el primer caso, los habitantes de Tela han cortado el paso de un puente de la localidad, los de la ciudad de Comayagüela han bloqueado sus calles o sitios estratégicos como el acceso al aeropuerto de Toncontín; por su parte, los maestros de Sabá, Tocoa, Trujillo y Sonaguera, interrumpieron la ruta de acceso al Valle de Aguán, mientras pobladores de Olancho han optado por cortar los caminos, en protesta por la construcción de la represa hidroeléctrica de Babilonia.

En Nicaragua, este tipo de medidas, aparentemente erráticas, se ha vuelto moneda corriente en zonas indígenas como las de Waslala o Mulukukú, y en las zonas adyacentes al triángulo minero del Norte. Allí se suman todo tipo de demandas, entre ellas la creación de nuevos municipios, o el cumplimiento de los ofrecimientos que se hicieron a los “levantados en armas” en las negociaciones para el desarme.

En medio de este paisaje, de fragmentario (pero febril) activismo de las comunidades, aparecen también las manifestaciones más tradicionales y articuladas, tales como la celebración del Día del Trabajo en Honduras y las marchas separadas de las centrales sindicales y de trabajadores del campo. Las continuas movilizaciones protagonizadas por los trabajadores de la educación en todos los niveles –su frecuencia, perdurabilidad y consistencia para alcanzar sus demandas– constituyen un factor que irradia organicidad y convicciones de lucha gremial hacia otros sectores menos consistentes.

Las luchas de los sectores laborales para conseguir el alza del techo de cotizaciones al Instituto Hondureño de Seguro Social han sido también muy significativas. Ellas enfrentaron a los trabajadores con las patronales, conflicto que fue dirimido, en una primera instancia, por la intervención del estado al reformar la Ley Orgánica y al elevar dicho techo hasta 2.400 lempiras para este año y a 4.800 en el año 2003. Esta situación llevó a que el sector empresarial presentara un recurso de amparo ante las autoridades de la Corte Suprema.

Como puede observarse, la mayoría de hechos, situaciones y movilizaciones sociales reseñados en las cronologías de Honduras y Nicaragua, del periodo mayo-agosto de este año, muestra la convivencia entre formas de lucha espontáneas e inéditas protagonizadas por las comunidades y las formas más ortodoxas de lucha del movimiento social.

Las primeras se proponen metas puntuales; los esfuerzos crecen y se agotan en demandas específicas, en su urgente inmediatez. Cuando se logran los objetivos locales, las luchas tienden a extinguirse, a disolverse, sin que aparentemente apunten hacia formas organizativas permanentes. No obstante, hay que observar estas luchas como experiencias en que las comunidades construyen identidad y solidaridad, en la lucha por metas comunes. Esas luchas tienen como característica el ejercicio limitado de poder y de autonomía, ya que sus acciones se desenvuelven con independencia de los partidos políticos, y aún en oposición a ellos.

El ejercicio directo aunque limitado de poder y la autonomía parecen ser características de las movilizaciones que reseñamos, lo cual no parece afectar sus capacidades para establecer las coordinaciones horizontales que se proponen. A principios del siglo XXI, las luchas sociales en los cuatro países, que hemos comentado, parecen alejarse de las tradiciones predominantes en las décadas anteriores, en donde fue frecuente que sus agendas dependieran de las prioridades de los partidos y fuerzas políticas.



Costa Rica

REGION
NORTE



MAYO

- Martes 1** • Cerca de 2 mil personas, entre campesinos, asociaciones de desarrollo, educadores, ecologistas, bananeros, oficinistas, cocineros, profesionales del sector salud, pensionados, estudiantes y representantes de otros empleos, marchan en San José por la Avenida Segunda en demanda de salarios más justos y en pro del fortalecimiento y defensa de los derechos laborales y sindicales.

JUNIO

- Jueves 7** • La Unión de Taxistas Costarricenses (UTC) protesta en las afueras de la Corte para exigir que se sancione al transporte ilegal. También se realizan bloqueos en Cieneguita, Guácimo y Guápiles.

- Jueves 14** • Estudiantes universitarios, campesinos, trabajadores de la salud y educadores marchan por la Avenida Segunda para reiterar a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) su oposición a la compra de servicios y otras acciones que tienden a la privatización.

- Martes 19** • Unos 500 transportistas realizan una caravana de autobuses por las calles de San José hasta la Casa Presidencial para exigir a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) un aumento del 18% en las tarifas, y que se combata al transporte "pirata".

- Lunes 25** • Los taxistas ilegales bloquean la autopista Florencia del Castillo en demanda de oportunidades legales para trabajar.

- Jueves 28** • La Central del Movimiento de los Trabajadores Costarricenses (CMTC) y el Frente Agrícola de Organizaciones Sociales (FOAS), que agrupa a la Federación Campesina Cristiana Costarricense (FECCC), a la Federación Nacional Campesina (FENAC), a la Federación Sindical Agraria Nacional (FESIAN), a la Federación Agraria Nacional (FAN) y a la Unión Nacional Campesina (UNAC), bloquean la vía hacia Limón, la carretera Interamericana Sur y algunas carreteras en Guanacaste en reclamo de la aprobación del proyecto de Ley de Fideicomiso Agrícola que comprará y recaudará las deudas de los productores, la creación de un banco de desarrollo, la constitución de una comisión que elabore un proyecto de reforma agraria, y el mejoramiento de caminos de varias zonas del país. Los campesinos levantan la medida luego de que el ministro de Agricultura y Ganadería se comprometiera a reunirse con ellos.

JULIO

- Domingo 15** • Decenas de manifestantes del sindicato de productores independientes de la península de Osa bloquean el puente sobre el río Térraba, en la carretera Interamericana Sur, en protesta por la crítica situación de la agricultura regional y en espera de una respuesta del gobierno.

- Martes 31** • Chile aprueba el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Costa Rica.

AGOSTO

- Miércoles 1** • El gobierno publica en el diario oficial La Gaceta el decreto mediante el cual se define un aumento del 7% para el salario base de todos los empleados públicos.
- Lunes 6** • Estudiantes del Liceo Invu–Las Cañas bloquean algunas vías cercanas al aeropuerto Juan Santamaría en demanda de mejoras edilicias y que el gobierno les otorgue un terreno para construir su centro educativo. Los manifestantes levantan el corte, condición pedida por el Ministerio de Educación para iniciar conversaciones sobre sus peticiones.
- Domingo 12** • Productores arroceros de la zona sur del país bloquean las principales vías de acceso a esa región como medida de presión para exigir a los industriales que compren el producto nacional.
- Lunes 13** • Los productores arroceros bloquean nuevamente las vías de acceso al sur del país después de que fracasó una reunión entre sus representantes y funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
- Vecinos de Pejibaye de Jiménez, en Cartago, bloquean la vía de acceso a esa comunidad en protesta por el mal servicio de transporte público.
- Jueves 23** • El Banco Mundial (BM) realiza un préstamo de 17 millones de dólares al gobierno de Costa Rica destinado a reforzar el sector salud.
- Lunes 27** • Más de 1.000 habitantes de los distintos barrios precarios de San Felipe marchan hasta la Casa Presidencial para reclamarle al presidente de la República una vivienda digna.

■ Glosario de siglas

BM	Banco Mundial
CCSS	Caja Costarricense del Seguro Social
CMTC	Central del Movimiento de los Trabajadores Costarricenses
FAN	Federación Agraria Nacional
FECCC	Federación Campesina Cristiana Costarricense
FENAC	Federación Nacional Campesina
FESIAN	Federación Sindical Agraria Nacional
FOAS	Frente Agrícola de Organizaciones Sociales
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería
MOPT	Ministerio de Obras Públicas y Transportes
TLC	Tratado de Libre Comercio
UNAC	Unión Nacional Campesina
UTC	Unión de Taxistas Costarricenses

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
 Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch y Florencia Ayala.
 Fuentes: diarios El Herald, La Nación, La República, Prensa Libre, Radio
 Periódicos Net, Tiempos del Mundo.*

El Salvador

REGION
NORTE



MAYO

Martes 1 • Trabajadores y estudiantes de la Universidad de Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y diversas organizaciones sindicales, realizan una marcha en San Salvador para conmemorar el Día del Trabajador y protestar en contra de la dolarización.

Jueves 3 • Cerca de un centenar de vendedores ambulantes, nucleados en la Coordinadora Nacional de Vendedores (CNV), protestan frente al Distrito Centro Histórico (DCH), en San Salvador, en rechazo al plan de desalojo de puestos ambulantes que impulsa la Alcaldía.

Viernes 4 • Campesinos de Ahuachapán, apoyados por la Asociación Comunal Campesina Democrática Salvadoreña (ACCD) y la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria, se concentran frente a las instalaciones del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria para exigir la entrega de tierras excedentes de terratenientes.

Miércoles 16 • El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Costa Rica llegan a un acuerdo con Panamá, en lo que respecta a las bases sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) que regiría a partir del año 2002.

Lunes 21 • Cerca de 20 trabajadores despedidos de la empresa textil "Hang Chang", de San Marcos, apoyados por la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS), protestan frente a las instalaciones de la empresa para exigir su reincorporación a sus puestos de trabajo.

Lunes 28 • Un grupo de ex patrulleros toman parcialmente la Alameda Juan Pablo II, cerca del Palacio Legislativo, en San Salvador, en reclamo de una respuesta sobre una indemnización y pensión económica por haber participado en el conflicto armado de El Salvador durante los años '80.

Jueves 31 • Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), agremiados al Sindicato de Trabajadores del ISSS (STISSS) y al Sindicato de Médicos de Trabajadores del ISSS (SIMETRIS), realizan un paro nacional en protesta por el desabastecimiento de medicinas, congelamiento de plazas y una posible privatización de los servicios.

Junio

Martes 12 • Cerca de 4 mil ex patrulleros, niños y mujeres, aglutinados en diferentes organizaciones como la Unión Salvadoreña de Ex Patrulleros Obreros y Campesinos (USEPOC), entre otras, cortan las calles en San Salvador, para exigir que el gobierno no vete la Ley de Compensación Económica por la cual se otorgaría una indemnización a los ex combatientes.

Viernes 15

• Los representantes de gobierno de los países de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá firman una declaración conjunta, en el marco de la Reunión Extraordinaria de los Países Integrantes del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, llevada adelante en San Salvador, en la que lanzan oficialmente la consigna de ejecutar de inmediato el Plan Puebla Panamá (PPP) y fomentar la constitución del TLC en la región.

• El presidente salvadoreño veta el decreto 432 por el cual se les otorgaría una indemnización a las Fuerzas Armadas. La USEPOC se une a la Asociación de Ex Escoltas de la Fuerza Armada de El Salvador (ADEFAES) y anuncia que accionarán con fuerza en rechazo al veto de la ley.

Viernes 29

• El Sindicato de Empresa de Trabajadores de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SETA) realiza un acto público en San Salvador, en protesta frente a la inminente privatización del servicio del agua.

Julio

Miércoles 11

• Centenares de ex patrulleros bloquean varias calles de San Salvador y realizan una marcha en esa ciudad para exigir que el gobierno les entregue la indemnización.

Jueves 12

• El presidente Francisco Flores reitera que no entregará dinero en efectivo a los ex-patrulleros y a cambio les ofrece tierras.

Lunes 16

• Trabajadores y ex miembros de la red de Telecomunicaciones TELECOM, apoyados por el Sindicato de Trabajadores de Telefonía, se concentran frente a las instalaciones del edificio de la Ex Antel Roma, para exigir que cesen los despidos dentro de la institución.

Viernes 20

• Alrededor de 200 empleados municipales que trabajan en la recolección de residuos, apoyados por la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), realizan una marcha en San Salvador para exigir a las autoridades el cumplimiento de los acuerdos salariales.

Miércoles 25

• Vendedores ambulantes se enfrentan con el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), en Nueva San Salvador, quienes intentan desalojarlos de su lugar de trabajo. Posteriormente, los vendedores bloquean con llantas la 2ª Calle Oriente y Poniente en rechazo a los intentos de desalojo y son reprimidos por la policía.

Jueves 26

• Miembros de ASTRAM se reúnen con el concejo municipal de El Salvador y llegan a un acuerdo que contempla la detención de la privatización de los servicios de aseo.

Viernes 27

• Un grupo de trabajadores, agremiados al Sindicato de Trabajadores de Maquinaria Industrial, realizan una protesta en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, en Comalapa, en rechazo al proceso de privatización de dicha terminal.

Agosto

Jueves 2 • Cientos de habitantes de la zona rural y urbana de Zacatecoluca, en La Paz, marchan para protestar contra el aumento en las tarifas del servicio de electricidad, dispuesto por la empresa distribuidora de energía Del Sur.

Viernes 3 • Los vendedores ambulantes acuerdan con la alcaldía de Nueva San Salvador ser reubicados en el predio Girola, una de las tres opciones que les propone el alcalde.

Sábado 11 • Decenas de vendedores ambulantes de Sensuntepeque, apoyados por otros de distintos puntos del país, realizan una protesta en esa ciudad para exigir la reanudación de las negociaciones sobre la ubicación de sus puestos de trabajo y la liberación de un compañero detenido.

Martes 21 • Obreros de la empresa textil Tainan de El Salvador, ubicada en la zona franca de San Bartolo, al oriente de San Salvador, agremiados al Sindicato de Industrias Textiles Seccional Tainan, realizan un paro de labores dentro de las instalaciones de la planta para exigir el reintegro de una trabajadora despedida, y para que se respeten los derechos laborales.

Miércoles 22 • Se conforma el Movimiento Nacional Pro Defensa del Pueblo bajo el lema “Basta ya a la injusticia en El Salvador”, en el cual participan más de 20 sindicatos, entre ellos el Movimiento de Organizaciones Laborales Integradas (MOLI), el SIMETRISSS, la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM) y el STISSS. El Movimiento denuncia el modelo neoliberal y exige al gobierno que se combata la crisis económica.

• Vendedores ambulantes bloquean y queman llantas en la calle Rubén Darío, en San Salvador, en protesta por el decomiso de mercadería que lleva adelante este mismo día el CAM. Tres vendedores son detenidos.

Miércoles 29 • Representantes de los vendedores ambulantes se reúnen con la Procuradora de Derechos Humanos y representantes de la Alcaldía Municipal para tratar de llegar a una solución al conflicto de los vendedores de la calle Rubén Darío, en San Salvador. Los trabajadores exigen que se les devuelva la mercadería.

■ Glosario de siglas

ACCDS	Asociación Comunal Campesina Democrática Salvadoreña
ADEFAES	Asociación de Ex Escoltas de la Fuerza Armada de El Salvador
AGEPYM	Asociación General de Empleados Públicos y Municipales
ASTRAM	Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales
CAM	Cuerpo de Agentes Metropolitanos
CNV	Coordinadora Nacional de Vendedores
CTS	Central de Trabajadores Salvadoreños
DCH	Distrito Centro Histórico
FMLN	Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
ISSS	Instituto Salvadoreño del Seguro Social
MOLI	Movimiento de Organizaciones Laborales Integradas
PPP	Plan Puebla Panamá
SETA	Sindicato de Empresa de Trabajadores de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
SIMETRISSS	Sindicato de Médicos de Trabajadores del ISSS
STISSS	Sindicato de Trabajadores del ISSS
TLC	Tratado de Libre Comercio
UES	Universidad de El Salvador
USEPOC	Unión Salvadoreña de Ex Patrulleros Obreros y Campesinos

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
 Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera y María Chaves.
 Fuentes: diarios La Prensa, El Diario de Hoy y Colatino.*

Guatemala

REGION
NORTE



MAYO

Martes 1 • Entra en vigencia la Ley de Libre Negociación de Comercio y transacciones en moneda extranjera.

• Alrededor de 30 mil guatemaltecos marchan hasta el Parque Central en la ciudad de Guatemala en conmemoración por el Día Internacional de los Trabajadores. Expresan su malestar por la crisis económica, su oposición a la Ley de Libre Negociación de Divisas y al aumento del 10 al 12% al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Miércoles 9 • Los vendedores mayoristas del mercado La Terminal de la zona 4 de la capital, que se resisten a ser trasladados a la Central de Mayoreo (CENMA) en la zona 12, se concentran en la calzada de Roosevelt y 39 de la zona 11 para bloquear el paso de los camiones que se dirigen a dicha central.

Viernes 11 • Los estudiantes de la Escuela de Ciencias Comerciales de Jutiapa ocupan las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación para oponerse a participar en el programa de alfabetización, que establece que cada estudiante del último año del nivel medio deberá, como prerrequisito para graduarse, enseñar a leer a cinco personas.

Lunes 14 • Miembros de sindicatos aglutinados en la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) realizan un plantón en las puertas del Congreso de la República para exigir que las reformas que se apliquen al Código de Trabajo estén en consonancia con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las normas de los Acuerdos de Paz. Los militantes de la Coordinadora de Organizaciones e Instituciones Indígenas (COI) se unen a la manifestación, para oponerse a la intervención del Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala (FODIGUA), instancia que es bipartita, fruto de la lucha del movimiento indígena.

JUNIO

Viernes 8 • Más de 1.000 habitantes de la ciudad de Guatemala se concentran en la plaza El Obelisco de la capital para protestar contra la administración del presidente Portillo y rechazar la posibilidad de pagar más impuestos.

• Los habitantes de las poblaciones de San Miguel Chicaj, San Jerónimo Verapaz y Salamá, del departamento de Baja Verapaz, inician una huelga de pago al servicio de energía eléctrica, como consecuencia de un aumento de 150% por parte de la empresa DEORSA.

Viernes 22 • Al cumplirse un año del asesinato del dirigente sindical de trailers Oswaldo Monzón Lima, y 20 años de la desaparición de 22 dirigentes de la CGTG, esta central encabeza una marcha de más de 1.000 personas hasta el Ministerio Público en la capital, para protestar contra la impunidad y la intención de imponer nuevos impuestos e incrementar el IVA de 10 a 12%.

Lunes 25

• En el Día del Maestro, decenas de docentes, encabezados por el Sindicato de Maestros de Guatemala (SMG), se congregan en la Plaza de la Constitución para oponerse a la política educativa gubernamental, solicitar aumento salarial y protestar por el incremento del IVA.

Martes 26

• Grupos sindicales y del sector informal se manifiestan frente al Congreso en oposición al alza del IVA.

Viernes 29

• Miembros de unas 50 organizaciones, que se agrupan en el colectivo Asamblea de la Sociedad Civil, se concentran frente al Congreso, en rechazo al incremento del IVA.

Sábado 30

• El grupo Hijos e Hijas de los Desaparecidos y la Asamblea Nacional de Jóvenes de Guatemala organizan en la capital una jornada de protestas contra la militarización de la sociedad, en recuerdo de los desaparecidos y para promover la sustitución del servicio militar obligatorio por el servicio social.

JULIO

Miércoles 4

• Unas 500 familias que ocupaban terrenos de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA) en el cruce de Villa Hermosa y San Miguel Petapa son desalojadas por 200 efectivos de la Fuerza Especial Policial (FEP), que detienen a sus dos dirigentes.

Martes 10

• Alrededor de 5 mil personas, entre sindicalistas, estudiantes, jubilados, militantes sociales y de derechos humanos, y sectores populares en general, convocados por la CGTG, marchan hasta la Casa Presidencial y el Congreso de la República, para rechazar el aumento del IVA y exigir al gobierno que encarcele a los empresarios evasores.

• Los más de 50 trabajadores de la maquila Sul-Ki S.A., quienes desde 15 días atrás están en paro reclamando el pago de sus prestaciones y mejores condiciones laborales, comienzan una huelga de hambre.

Viernes 13

• Por séptimo viernes consecutivo, al menos 500 personas se congregan en el Obelisco, en la ciudad capital, para repudiar el incremento del IVA. En tanto, vecinos de Cobán (Alta Verapaz), Coatepeque (Quetzaltenango), Puerto Barrios (Izabal) y Antigua (Sacatepéquez), entre otros municipios, realizan actos por el mismo motivo.

Martes 24

• Cientos de estudiantes y maestros de los institutos Aqueche, Central, Belén y Gómez Carrillo, junto con universitarios y sindicalistas, marchan hasta el Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso para exigir al gobierno que dé marcha atrás con el aumento del IVA.

• Más de 1.500 estudiantes, maestros y ex alumnos de la Escuela Normal Pedro Molina, de La Alameda, Chimaltenango, inician una caminata de protesta hacia la capital, para exigir el retiro de una base militar instalada durante el conflicto armado interno de 1981 que ocupa el 70% de los terrenos escolares.

Miércoles 25

• Los habitantes de Jalapa, Coatepeque, Mazatenango, Chiquimulila y Chiquimula paran durante la jornada y realizan multitudinarias marchas en sus poblados para rechazar la aprobación del paquete fiscal. En la capital, unos 4 mil estudiantes de cinco institutos públicos marchan desde la Plaza Central hasta el Congreso para expresar consignas contra la suba de impuestos.

Jueves 26 • Pese a la oposición popular, la bancada del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que cuenta con mayoría parlamentaria, con apoyo de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y de la Unión Democrática (UD), aprueba el alza del IVA de 10 a 12% y otros impuestos y reformas legales contra la defraudación fiscal.

Viernes 27 • Miles de guatemaltecos cierran sus comercios, realizan marchas multitudinarias en sus respectivos poblados, inclusive en la capital, y bloquean las principales carreteras del país, muchos de ellos vistiendo de luto, en protesta por el alza del IVA.

Martes 31 • Más de 5 mil personas, entre maestros y estudiantes, sindicalistas, jubilados y vendedores informales, marchan en la capital desde el Palacio Nacional de la Cultura hasta la embajada de Estados Unidos para rechazar el aumento del IVA y la injerencia extranjera, que presiona al gobierno guatemalteco en la implementación de las medidas económicas.

AGOSTO

Miércoles 1 • Denominándolo “Día de la Dignidad Nacional”, la sociedad guatemalteca –convocada por la cúpula empresarial y distintos sindicatos y agrupaciones sociales– realiza un paro de 24 hs. a nivel nacional e importantes manifestaciones, con numerosos cortes de ruta, en todo el país. En la ciudad capital, 20 mil personas marchan para intentar que el gobierno dé marcha atrás con el paquete impositivo y repudiar al Presidente y a los diputados del FRG. Concluida la marcha de protesta, se producen disturbios frente al Palacio Nacional de la Cultura, por lo que 205 personas son detenidas.

• En el departamento de Totonicapán, más de 5 mil manifestantes que salen a las calles para rechazar el incremento del IVA incendian la casa del alcalde y de un diputado del FRG, además de destruir varios inmuebles. Veinte personas son detenidas y doce manifestantes resultan heridos, uno con herida de bala.

• Tras su publicación en el Diario Oficial y pese a la oposición popular, entra en vigencia la reforma a la Ley del IVA, subiendo de 10 a 12%, entre otros impuestos que también se incrementan.

Jueves 2 • Tras las violentas protestas en contra del alza del IVA del miércoles último en Totonicapán, el gobierno decreta el estado de sitio durante 30 días en dicho departamento “para resguardar la vida de los pobladores del lugar”.

Viernes 3 • Los estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC) paralizan el tránsito frente a las instalaciones de la universidad para protestar por el alza del IVA.

• Los maestros de Mazatenango, Suchitepéquez, marchan hasta la gobernación departamental para expresar su oposición al aumento del IVA.

Sábado 4 • Los pobladores de Salamá, Baja Verapaz, se concentran frente a la municipalidad para oponerse al IVA y reclamar por la inseguridad y la corrupción que azota el país.

Domingo 5 • El estado de sitio decretado en Totonicapán debe quedar sin efecto, ya que el Congreso no ha resuelto nada al respecto, por lo cual, tras tres días de ser decretada la medida, al no haberse seguido todos los pasos establecidos por ley, su aplicación pasa a ser ilegal.

Lunes 6

• Un grupo de 9 estudiantes, sindicalistas y maestros comienza una huelga de hambre frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) como presión para que ésta resuelva con un fallo jurídico y no político sobre los recursos legales interpuestos en contra del aumento del IVA.

Viernes 10

• Más de 1.000 maestros de Sacatepéquez realizan una manifestación en el parque central de Antigua Guatemala para exigir al gobierno que deje sin efecto el incremento del IVA.

• Alrededor de 2 mil personas, entre universitarios, maestros, jubilados, médicos y otros sectores afectados, recorren las principales calles de Mazatenango hasta el parque central, en protesta por el aumento del IVA.

Domingo 12

• Comerciantes y vecinos de Zacapa salen en pequeños grupos a las calles del centro de la ciudad para protestar por el alza del IVA y los altos precios en los productos.

Miércoles 15

• El grupo de universitarios, docentes y gremialistas que desde 10 días atrás realizaba una huelga de hambre frente a la CC levanta la medida, habiendo recolectado más de 50 mil firmas de adhesión a su postura de rechazar el aumento del IVA.

• Los habitantes de los 22 municipios del departamento de Quetzaltenango recorren el centro de Xela hasta el edificio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para reclamar por el aumento del IVA. Asimismo, en la capital, grupos sindicales y populares marchan desde la Av. de la Reforma hasta el Centro Cívico y la CC en oposición a las medidas tributarias.

Lunes 27

• Los pobladores de Retalhuleu, San Marcos, San Pedro Sacatepéquez, Totonicapán, Sololá, Quetzaltenango, Coatepeque, Jutiapa, Petén y la capital cortan carreteras en sus respectivos departamentos y realizan marchas multitudinarias para oponerse al alza del IVA.

Viernes 31

• Unos 500 estudiantes, sindicalistas y docentes se manifiestan frente a la CC y entregan al secretario de la Corte un documento con más de 50 mil firmas para pedir que se rechace el decreto que estableció el alza del IVA.

143

■ Glosario de siglas

CC	Corte de Constitucionalidad
CENMA	Central de Mayoreo
CGTG	Central General de Trabajadores de Guatemala
COI	Coordinadora de Organizaciones e Instituciones Indígenas
DCG	Democracia Cristiana Guatemalteca
FEGUA	Ferrocarriles de Guatemala
FEP	Fuerza Especial Policial
FODIGUA	Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala
FRG	Frente Republicano Guatemalteco
IVA	Impuesto al Valor Agregado
OIT	Organización Internacional del Trabajo
SAT	Superintendencia de Administración Tributaria
SMG	Sindicato de Maestros de Guatemala
UD	Unión Democrática
USAC	Universidad de San Carlos

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert y Mariana Fassi.

Fuentes: diarios La Hora y Prensa Libre.

Honduras

REGION
NORTE



MAYO

Martes 1 • Las centrales sindicales realizan actos en conmemoración de los Trabajadores. En Tegucigalpa, la Central General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUTH) marchan hacia el Parque Central. La Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) marcha hacia la Plaza Cívica General. El movimiento de mujeres participa de las movilizaciones de la capital.

Lunes 7 • El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH) expresa su apoyo a los docentes en paro de la Asociación de Docentes de la UNAH (ADUNAH), que reclaman desde el 4 de abril por la derogación de las reformas al Estatuto Docente realizadas en diciembre, un aumento salarial, y la modificación del régimen de elección de las autoridades del Centro Universitario Regional Norte (CURN), entre otras cosas.

Martes 8 • La Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH) exige a la ADUNAH la deposición del paro y expresa su rechazo a la destitución de la rectora de la UNAH. El Frente de Reforma Universitaria (FRU) se manifiesta frente a la Ciudad Universitaria exigiendo su renuncia, lo que motiva el ingreso policial a los predios universitarios.

Miércoles 9 • El Colegio de Profesionales de la Educación Media de Honduras (COPEMH) realiza un paro nacional exigiendo la reestructuración del escalafón magisterial, la entrega de 140 millones de lempiras al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), el nombramiento de maestros y el pago de salarios atrasados de 600 docentes.

Sábado 19 • Los docentes de la Facultad de Odontología de la UNAH deponen el paro.

Martes 22 • La asamblea de ADUNAH resuelve continuar con la huelga. La Facultad de Química y Farmacia anuncia la normalización de las clases.

Lunes 28 • Integrantes del Consejo Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) toman las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) de San Pedro Sula exigiendo la titulación de tierras.

Jueves 31 • Los más de 1.500 maestros de Cortés, afiliados al COPEMH, inician un paro por 48 hs. exigiendo a la Secretaría de Educación la aplicación del Manual de Puestos y Salarios y el pago de sueldos atrasados, además de un aumento salarial.

JUNIO

Viernes 1 • Los docentes de la UNAH resuelven reincorporarse a sus labores tras aprobar en asamblea los acuerdos aceptados por el Consejo Universitario. Dichos acuerdos incluyen, entre otras cuestiones, el pago a los docentes que estuvieron en huelga y la entrega de cheques destinados a cancelaciones.

Lunes 18

- Más de 15 ex empleados de la Procuraduría General de la República se manifiestan frente a su sede reclamando su reincorporación además de la anulación del plan de reducción de personal.

- Tras una reunión con autoridades de Educación y Finanzas, la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) decreta un paro indefinido y asambleas informativas en demanda del cumplimiento del Estatuto Docente en lo que refiere al ajuste salarial.

Martes 19

- Decenas de maestros marchan en Tegucigalpa hacia los Ministerios de Educación y Finanzas, donde se realizan las negociaciones con el apoyo del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras (COLPROSUMAH). La dirigencia magisterial resuelve levantar las movilizaciones luego de acordar que el aumento referente al Estatuto Docente sea cancelado además de la continuación de las negociaciones.

Miércoles 20

- El COPEMH y el COLPROSUMAH rechazan el acuerdo entre la FOMH y el gobierno, por considerar que afecta sólo a una minoría de maestros, y continúan con el paro en la costa norte del país.

Viernes 22

- Los empleados de las 20 seccionales de la Empresa Hondureña de Correos (HONDUCOR) inician un paro exigiendo un aumento salarial.

Martes 26

- La organización Interforos de Campesinos del Aguán, que aglutina a más de 10 movimientos y asociaciones de campesinos de la zona, toma la ruta que comunica Tocoa, Colón, con el resto del país, impidiendo el ingreso de mercaderías a la Empresa Nacional Portuaria de Castilla en demanda de mayor seguridad y de intervención en el proceso de reforma agraria.

Miércoles 27

- Cuatro mil integrantes del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) toman la ruta de ingreso a Tocoa.

JULIO

Miércoles 4

- En Tegucigalpa, cerca de 150 campesinos del municipio de Gualaco, Olancho, se manifiestan frente al Congreso exigiendo la derogación del proyecto de construcción en la zona de la represa hidroeléctrica Babilonia que se le otorgó a la empresa Energisa.

Miércoles 18

- Hacia el Palacio Legislativo marchan 1.500 indígenas provenientes de La Paz, Intibucá y Lempira agrupados en el Consejo de Organizaciones de los Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH) junto al Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CO-DEH) y el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (COFADEH) exigiendo la detención de la construcción de la hidroeléctrica Babilonia, y el reconocimiento legal de la propiedad de la tierra de varios municipios, entre otras medidas. Doscientos policías reprimen la manifestación y detienen a 11 manifestantes tras un enfrentamiento.

Lunes 23

- Un grupo de 170 ex-empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) se manifiesta frente al Congreso Nacional exigiendo su reincorporación.

Lunes 30 • Más de 3.500 empleados del Registro Nacional de las Personas y del Tribunal Nacional Electoral (TNE) realizan un paro nacional exigiendo que el Congreso apruebe el presupuesto destinado al cumplimiento del aumento salarial retroactivo de entre un 15 y un 25% acordado en marzo.

Martes 31 • Maestros marchan junto a la FOMH hacia el Palacio Legislativo, exigiendo el cumplimiento del Estatuto Docente y la revalorización de la hora de clase.

AGOSTO

Miércoles 1 • Las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca son tomadas indefinidamente por 117 maestros, quienes exigen préstamos ante el INPREMA, obtener las categorías respectivas, y que sus salarios sean cancelados con fondos nacionales y no del exterior.

Jueves 2 • Maestros de primaria y secundaria del departamento de Cortés toman la autopista que conduce a San Pedro Sula exigiendo un salario base para el año próximo. La ministra de Finanzas expresa que incluirán el aumento salarial en el presupuesto de 2002, pero que el valor de la hora clase tendrá que ser discutido con el próximo gobierno.

Lunes 6 • Los maestros, convocados por la FOMH, paralizan el dictado de clases en 16 ciudades del país.

Martes 7 • Más de mil maestros de Sabá, Tocoa, Trujillo, Sonaguera y otras comunidades importantes de Colón, toman junto a la FOMH la ruta que comunica el valle del Aguán con el resto del país, tras marchar por la primera. Los de La Ceiba cortan el puente que une a la ciudad con el sector oeste. En Choluteca, más de mil profesionales cortan calles en apoyo a quienes tomaron la Dirección Departamental de Educación tras marchar por la ciudad.

• Los 16 centros de salud del área metropolitana se pliegan al paro de enfermeras auxiliares. Las 79 profesionales del Hospital Catarino Rivas se pliegan al paro.

• En La Lima, Cortés, más de 700 trabajadores de la maquila Can y Caw toman las instalaciones del parque industrial Zip Continental exigiendo la reincorporación de 30 empleados despedidos por conformar un sindicato.

Miércoles 8 • Los 10 mil docentes de prescolar, primaria y secundaria del departamento de Cortés realizan una jornada de huelga convocada por la FOMH que incluye el corte y la toma de la caseta de peaje de la autopista a Puerto Cortés. En Tegucigalpa la federación organiza una marcha a la que acuden 6 mil docentes.

• La dirección del Hospital Catarino Rivas anuncia que un contingente militar reemplazará a las enfermeras en huelga.

Jueves 9 • Las más de 80 enfermeras auxiliares del hospital de Tocoa, Colón, se pliegan al paro indefinido atendiendo al llamado de la Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEAH).

- Viernes 10** • El Sindicato de Enfermeras Auxiliares del Hospital Escuela realiza un paro de cuatro horas.
- Mil maestros se manifiestan frente a la Casa Presidencial.
- Martes 14** • Miles de maestros de Cortés, Yoro y Santa Bárbara toman por dos horas la autopista de San Pedro Sula a Choloma, tras haber decidido suspender las evaluaciones de la primaria. Los docentes de La Ceiba y los de Colón cortan la ruta que conduce hacia Tela. El presidente del COPEMH anuncia la realización de una huelga de hambre y exige el pago del salario de febrero.
- Miércoles 15** • El Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (SITRAMEDHYS) realiza un paro nacional exigiendo al Ministerio de Salud un aumento salarial de 1.400 lempiras y el cumplimiento de acuerdos pactados con el gobierno. Las enfermeras profesionales adhieren a la medida.
- Jueves 16** • Las enfermeras auxiliares se manifiestan frente a la Casa de Gobierno. La presidenta de la ANEAH informa que son 8 mil las trabajadoras que acatan el paro y anuncia que se retirarán de las salas de emergencia de los hospitales.
- Martes 21** • Los docentes mantienen el paro. Mientras se suceden las negociaciones, la presidenta del COPEMH expresa que volverán a las aulas pero que realizarán un paro por 72 hs. a partir del lunes. El gobierno afirma que respetará el Estatuto Docente como criterio para fijar el valor de la hora de clase.
- Miércoles 22** • Cientos de afiliados al SITRAMEDHYS se manifiestan frente al Ministerio de Salud, desde donde marchan hacia el Palacio Legislativo. El titular de Salud afirma que la huelga del sindicato y la de las enfermeras auxiliares son ilegales. Frente a la catedral de San Pedro Sula confluyen las marchas de los trabajadores de la salud y los 3 mil docentes convocados por el COLPROSUMAH.
- Sábado 25** • Las autoridades de Salud acuerdan con las enfermeras auxiliares la renovación de labores en las áreas críticas de los hospitales a cambio del pago de los sueldos variables correspondientes al período mayo-diciembre de 2000.
- Domingo 26** • El presidente de la FOMH expresa que las negociaciones con el gobierno están rotas tras haber suspendido la ministra de Finanzas la sesión en la que discutían el aumento del valor de la hora clase y del salario base.
- Martes 28** Los maestros inician una huelga indefinida nacional y marchan hacia la Casa de Gobierno y el Congreso Nacional. La titular de Educación los exhorta a levantar las medidas. En El Progreso, Yoro, 600 docentes toman el puente La Democracia. Maestros de San Pedro Sula marchan en la ciudad.
- Miércoles 29** Cerca de 3 mil docentes toman junto a la FOMH el boulevard Fuerzas Armadas y exigen la intervención del presidente del Congreso en el conflicto. La ministra de Finanzas pone su cargo a disposición del gobierno tras expresar que no aprobará un aumento salarial. El titular de la Presidencia expresa que no hay recursos para asignar a los maestros. Más de 3 mil maestros de Yoro, Cortés y Santa Bárbara toman la ruta de Pito Solo, que comunica al norte con el sur del país. En Colón, Copán y El Paraíso también se realizan manifestaciones.

• La ANEAH acuerda con el gobierno el pago del salario variable, las nivelaciones y re-clasificaciones, entre otras cosas. El sindicato llama a deponer las medidas. SITRAMEDHYS expresa que impedirán la reincorporación de las enfermeras.

Jueves 30

• Las organizaciones magisteriales inician un paro indefinido. Más de 6 mil docentes marchan hacia la Casa Presidencial, el Ministerio de Educación y el Congreso Nacional.

• Mil quinientos trabajadores de la salud marchan junto a SITRAMEDHYS hacia la Casa Presidencial y al parlamento.

Viernes 31

• Alrededor de 20 mil docentes marchan desde la Universidad Pedagógica Nacional hacia el Parque Central capitalino, donde realizan un mitin.

• Las enfermeras del Hospital Catarino Rivas regresan a sus puestos de trabajo tras recibir los cheques de pago del mes, horas extras y turnos variables.

Glosario de siglas

ADUNAH	Asociación de Docentes de la UNAH
ANEAH	Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Honduras
CGT	Central General de Trabajadores
CNTC	Consejo Nacional de Trabajadores del Campo
CODEH	Comité para la Defensa de los Derechos Humanos
COFADEH	Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras
COLPROSUMAH	Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras
COPEMH	Colegio de Profesores de la Educación Media de Honduras
COPINH	Consejo de Organizaciones de los Pueblos Indígenas de Honduras
CTH	Confederación de Trabajadores de Honduras
CURN	Centro Universitario Regional del Norte
CUTH	Confederación Unitaria de Trabajadores
FEUH	Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras
FOMH	Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras
FRU	Frente de Reforma Universitaria
HONDUCOR	Empresa Hondureña de Correos
HONDUTEL	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
INA	Instituto Nacional Agrario
INPREMA	Instituto Nacional de Previsión del Magisterio
MCA	Movimiento Campesino del Aguán
SITRAMEDHYS	Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares
SITRAUNAH	Sindicato de Trabajadores de la UNAH
TNE	Tribunal Nacional Electoral
UNAH	Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández y Juan Chaves.

Fuentes: diarios *La Prensa* y *La Tribuna*.

México

REGION
NORTE



MAYO

Martes 1 • El Congreso del Trabajo (CT), en donde participó de México (CTM), la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y gremios del sector petrolero, de ferrocarriles, mineros y bancarios entre otros, se manifiesta en el Zócalo del Distrito Federal (DF) junto a 60 mil personas para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y se pronuncia en contra del proyecto de reforma fiscal de Fox, el cual implica la extensión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a alimentos, medicamentos, libros, colegiaturas y a las prestaciones de los contratos colectivos de trabajo.

Lunes 7 • El Consejo Nacional de Alianza Democrática de Jubilados y Pensionados de Oriente (CNADJPO) marcha hacia el Zócalo capitalino en rechazo a la iniciativa de reforma fiscal de Fox.

Lunes 14 • El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE anuncia haber acordado un aumento de un 13% con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Martes 15 • Docentes de todo el país se movilizan en desacuerdo con el aumento salarial del 13% acordado entre el gobierno y el SNTE. Más de 10 mil afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchan en el DF exigiendo un aumento del 100% y en rechazo a la generalización del IVA y a la aprobación de la ley sobre derechos y cultura indígena. En Oaxaca, marchan cerca de 30 mil integrantes de la sección 22 del SNTE e inician paros escalonados. En Morelia, Michoacán, más de 5 mil maestros de la sección 18 del SNTE finalizan una movilización frente al Palacio de Gobierno, donde se instalan en forma indefinida.

Miércoles 16 • Cientos de maestros de la CNTE bloquean las entradas de las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del DF exigiendo a su director que acepte la conformación de mesas de negociación a nivel nacional.

Jueves 17 • Integrantes de la Unión de Mujeres Indígenas y Campesinas (UMIC) acompañadas por representantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) se manifiestan frente al Poder Legislativo de Querétaro exigiendo que los legisladores voten en contra de la ley sobre derechos y cultura indígena además del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

• Cerca de 16 mil maestros de Zacatecas se declaran en paro indefinido exigiendo un aumento salarial mayor al acordado por Fox y la dirigencia del SNTE.

Viernes 18 • Centenares de maestros de la CNTE bloquean los accesos de la Secretaría de Gobernación rechazando su propuesta de mediar ante los gobiernos estatales.

• El Comité de Derechos Humanos Fray Lorenzo de la Nada informa que desde el 14 de mayo el Ejército realiza patrullajes en Ocosingo, Chiapas.

• Alrededor de 1.500 campesinos de Tepeaca, Puebla, retienen a dos visitantes de la Dirección General de Gobierno en la cabecera municipal de San Francisco Mixla exigiendo la suspensión de la construcción de una autopista y dos parques agroindustriales, por lo cual eran presionados a vender sus tierras.

Lunes 21 • Cerca de 2 mil indígenas realizan junto a la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO) marchas en dicha ciudad y se concentran frente a la presidencia municipal en protesta contra la ley sobre derechos y cultura indígena, la reforma fiscal y el Plan Puebla-Panamá. Exigen también el cese de los patrullajes del Ejército en Ocosingo y Las Margaritas.

• Dos grupos de 400 y 700 docentes de la CNTE se manifiestan frente a las embajadas de Estados Unidos y Japón y las de España, Bélgica y Francia respectivamente, para denunciar la postura gubernamental ante sus reclamos. En Oaxaca, el plantón frente al Palacio de Gobierno convoca a 7 mil docentes, mientras que 56 mil acatan el paro convocado por la sección 22 del SNTE. En Zacatecas, son 16 mil los que realizan la huelga.

Miércoles 23 • Cientos de docentes se manifiestan frente al Senado de la República. En Morelia, Michoacán, 10 mil docentes marchan junto al Movimiento Democrático Magisterial (MDM).

Jueves 24 • Con los votos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), y en medio de manifestaciones en contra de organizaciones indígenas, el Congreso de Veracruz aprueba la ley indígena. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votan en contra.

Lunes 28 • En Morelia, Michoacán, los docentes realizan plantones frente a bancos y centros comerciales informando a los ciudadanos sobre los motivos de sus medidas.

Martes 29 • El Congreso de Puebla aprueba con los votos del PRI y el PAN la ley sobre derechos y cultura indígena. El PRD, el PT y el PVEM sufragán en contra. El parlamento de Colima se expide de igual forma, también con el apoyo de los partidos mayoritarios y el rechazo del PRD y el PT.

Miércoles 30 • Con el apoyo del PAN y de dos priístas, el Congreso de Aguascalientes aprueba la ley indígena. Siete legisladores del PRI y un perredista se pronuncian en contra.

Jueves 31 • Con los votos del PAN y del PRI se aprueba la ley indígena en Campeche, Guanajuato y Querétaro. Legisladores disidentes del PRI se oponen a las respectivas ratificaciones junto al PRD, el PT y el PVEM. En Guanajuato se manifiestan más de cien indígenas chichimecas junto a grupos de enlace del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En Hidalgo, 200 militantes del PRD se manifiestan exigiendo a los legisladores locales el rechazo a la ley.

• Se realiza el paro nacional de la CNTE. Tras una reunión con el gobierno, líderes de la organización expresan que quedó inaugurada una mesa de negociación nacional. Previamente, alrededor de 10 mil docentes marchan del Zócalo a Los Pinos.

JUNIO

Domingo 3

• La sección 18 del SNTE firma con el gobierno de Michoacán una minuta de acuerdo que establece 4 días más de aguinaldo y estímulos para los docentes con más de 30 años de antigüedad además de la entrega gratuita de uniformes escolares y libros, tras lo que finalizan las acciones de protesta.

Lunes 4

• La Secretaría de Gobernación asume el compromiso de instalar 16 mesas de negociación entre la CNTE y los gobiernos locales en aquellos estados donde no avanzan las pláticas. Los casi 56 mil miembros de la sección 22 del SNTE, que continúan con las demandas expresadas el 15 de mayo por la CNTE, inician un paro de 48 hs. en Oaxaca antes de ofrecer una respuesta a la propuesta gubernamental.

Martes 5

• El Congreso de Zacatecas rechaza con los votos del PRD y el PT la ley indígena. El de Durango la aprueba con el apoyo del PAN y el PRI y la oposición del PRD y el PT.

• En Durango, maestros indígenas del Mezquital inician una huelga de hambre exigiendo a las autoridades estatales la creación de un nuevo departamento educativo que brinde atención a 11 comunidades indígenas. En Baja California Sur la sección 3 del SNTE acepta el ofrecimiento de 4,5 días de aguinaldo del gobernador del estado.

Miércoles 6

• La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos denuncia la realización de por los menos cinco excursiones militares a San Isidro El Ocotal, Chiapas.

Jueves 7

• La Cámara de Diputados de Quintana Roo aprueba la ley indígena con el apoyo del PRI y el PAN. El PRD y el PT votan en contra. En Tuxtla Gutiérrez marchan cerca de dos mil integrantes de la Coalición de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas y bloquean la entrada a la Cámara de Diputados exigiendo el rechazo de la ley.

• Cerca de 500 maestros de la CNTE bloquean los accesos a la Secretaría de Gobernación en demanda de mesas de negociación en el estado de México y Oaxaca. Integrantes de la sección 22 del SNTE toman los accesos a bancos y centros comerciales de Oaxaca. La sección 15 del SNTE acuerda con el gobernador de Hidalgo el otorgamiento de 90 días de aguinaldo y un incremento para los jubilados, entre otras cosas, como complemento al aumento del gobierno federal.

Viernes 8

• El secretario de Educación Pública expresa que, salvo con los de Oaxaca, las negociaciones con la CNTE han terminado. Integrantes de la sección 22 del SNTE bloquean los accesos a la ciudad de Oaxaca. En Morelia, Michoacán, dos marchas de 2 mil maestros en total confluyen frente al Palacio de Gobierno. En Durango, integrantes de la CNTE marchan hacia el Palacio de Gobierno. Las autoridades de Baja California acuerdan con la sección 2 del SNTE un aporte del estado del 2% como complemento del aumento nacional. El gobierno de Hidalgo acuerda con la sección 15 un aumento de 10 días de aguinaldo, entre otras cosas.

• Integrantes del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) realizan un plantón frente a las oficinas del gobierno de Querétaro en el DF exigiendo la liberación de dos presos ligados al EZLN. Por otro lado, indígenas pro-zapatistas cierran las puertas del ex-cuartel militar de Guadalupe Tepeyac, donde funcionan oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, en rechazo a la propuesta de creación de centros de desarrollo comunitarios en esa localidad y en Río Euseba.

Sábado 9

• Los integrantes de la CNTE de Oaxaca marchan en el DF, junto a delegaciones menores de Michoacán, Guerrero y Zacatecas, estados donde terminaron las negociaciones. La sección 22 del SNTE levanta el paro tras acordar con el gobierno oaxaqueño la adquisición de 3 mil lotes de mobiliario escolar y la asignación de 10 millones de pesos, entre otras cuestiones.

Lunes 11

• El gobierno de Chiapas suspende la construcción de un camino rural en Las Margaritas que, según los zapatistas, serviría para realizar acciones de contrainsurgencia. En Sinaloa, gobernadores de seis comunidades indígenas del municipio de Ahome se manifiestan contra la ley indígena.

Martes 12

• En Coahuila, el PRI y el PAN aprueban la ley indígena. El PRD, el PT, el PVEM, los partidos locales y 6 diputados priístas votan en contra. Doscientos indígenas de los pueblos tlapaneco, mixteco, nahua y amuzgo, integrantes del Frente de Lucha Popular, Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Policía Comunitaria de San Luis Acatlán y del Consejo Regional de Autoridades Indígenas, toman el Congreso de Guerrero exigiendo a los diputados el rechazo de la ley de derechos y cultura indígena.

Miércoles 13

• La Asamblea Nacional de la CNTE resuelve levantar el plantón del DF. Los contingentes de Oaxaca, Guerrero, Zacatecas y Michoacán inician el retorno a sus estados. Los maestros abandonan también las instalaciones del SNTE.

Viernes 15

• En la capital de El Salvador, su presidente y los de México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, Belice y Nicaragua firman un convenio que contiene las líneas generales del Plan Puebla Panamá, entre las que se destacan la interconexión energética, la integración de los servicios de telecomunicación y la creación de un corredor vial.

• Cerca de 30 mil maestros de la CNTE protestan en Tuxtla Gutiérrez contra el Plan Puebla-Panamá y la reforma fiscal. Asimismo, en Durango, los maestros marchan hacia el Palacio de Gobierno.

Lunes 18

• Productores agrícolas de Sinaloa toman tres plantas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) exigiendo que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria destraben la venta de 287 toneladas de maíz a 1.600 pesos cada una, y que entreguen 460 pesos de apoyo por tonelada de trigo, 1.100 por el cárgamo y 390 por el sorgo.

Jueves 21

• El Congreso de Sinaloa rechaza la ley indígena con los votos del PRI y el PRD. El PAN vota a favor. Cientos de campesinos se manifiestan frente al Congreso junto a la Coalición de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas, exigiendo el rechazo de la ley. En Tapachula, habitantes de 16 municipios marchan por la ciudad con el mismo reclamo.

• Los productores agrícolas de Sinaloa deponen las tomas tras acordar con el gobernador la creación de un programa de venta para el maíz y un aporte de 240 pesos por tonelada de trigo.

Viernes 22

• Los diputados de Morelos rechazan la ley indígena. A diferencia del PRI y el PRD, el PAN vota por la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve no considerar la votación ni a favor ni en contra por no contar el sufragio con el apoyo de las dos terceras partes del total.

Sábado 23 • El consejo autónomo del municipio Ricardo Flores Magón denuncia el inicio de una etapa de guerra contrainsurgente en la selva Lacandona, con movimientos militares registrados el viernes en Taniperla, San Caralampio y San José.

Domingo 24 • Propietarios de 16 estaciones de servicio de Mazatlán, Sinaloa, suspenden la venta de gasolina y diesel debido a las tomas de instalaciones de PEMEX realizadas por los pescadores.

Jueves 28 • Con los votos del PRI y del PRD los congresos de Chiapas, Guerrero, Hidalgo y San Luis Potosí rechazan la ley indígena. En la legislatura chiapaneca 27 diputados sufragán contra 5 en oposición a la ley. En Sonora la ley es aprobada por 18, del PAN y el PRI, contra 15 del PRI y el PRD.

• PEMEX, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y la Confederación Nacional Cooperativa Pesquera, acuerdan implementar un mecanismo para devolver a los consumidores de diesel marino la diferencia entre el precio de dicho combustible y el de tipo industrial.

Viernes 29 • El Congreso de Tlaxcala aprueba la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena. El PRI, el PAN, el PT y el PVEM votan la ratificación, al contrario del PRD.

Sábado 30 • Miles de personas participan en la 23ª Marcha del Orgullo por el Respeto al Derecho a la Diversidad Sexual dirigida hacia el Zócalo capitalino.

JULIO

153

Domingo 1 • Junto al PRI, el PAN aprueba en Nuevo León la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena. El PRD y el PT votan en contra.

Jueves 5 • Agricultores de Sinaloa realizan plantones en las instalaciones de PEMEX de Culiacán y Ahome y cortan la ruta internacional México 15, exigiendo el pago de 2 millones de toneladas de maíz adeudadas por la SAGARPA. La CNC y el Movimiento Agrícola también participan en las protestas.

Viernes 6 • El PRI, el PRD, el PVEM, el PT, el Partido Democracia Social (PDS) y la fracción independiente del Congreso del estado de México, rechazan la ley indígena.

Domingo 8 • Productores arroceros toman la planta maquiladora de Tolloacán e inician el blanqueo del cereal para su comercialización en el mercado interno al encontrarse la cosecha deteriorada, dado que el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) rechazó renegociar una deuda de 40 millones de pesos.

Lunes 9 • Encabezados por la Unión Nacional de Productores de Caña (UNPCA) de la CNC, 4 mil agricultores procedentes de Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Jalisco, Puebla y Morelos bloquean la SAGARPA exigiendo el pago inmediato de 4.500 millones de pesos que les adeuda la industria azucarera.

• Los productores de arroz toman la maquiladora de Champotón. El presidente del Comité de Comercialización de la Unión de Productores de Arroz expresa que mantendrán las medidas a pesar de posibles sanciones penales.

- El Congreso de Tabasco aprueba con los votos del PAN y el PRI la ley indígena. El gobernador de Tlaxcala veta la ley aprobada bajo el argumento de que carece del concepto de territorios indígenas. El ayuntamiento de Molcaxac presenta una querrela contra las reformas ante la SCJN.

- En El Saltillo, Coahuila, 300 trabajadores de la maquila North Port inician un paro por tiempo indeterminado exigiendo el pago de salarios atrasados.

Martes 10

- Los maiceros sinaloenses liberan parcialmente las tres instalaciones de PEMEX que mantenían tomadas, permitiendo el abastecimiento de combustible a las 124 gasolineras del centro y norte del estado.

- En Veracruz, 2 mil productores de piña locales y oaxaqueños marchan exigiendo al gobierno federal que frene la importación de fruta.

- Los productores de caña bloquean la Secretaría de Hacienda exigiendo que el gobierno presione a los Estados Unidos para ampliar los cupos de exportación.

Jueves 12

- Tras aprobar la ley indígena los Congresos de Nayarit y Michoacán, la iniciativa adquiere rango constitucional por haberse pronunciado a favor más de la mitad de los estados del país. En ambos estados la reforma se aprueba con los votos del PAN y el PRI.

- Los productores maiceros sinaloenses levantan la toma de la planta de PEMEX de Culiacán tras anunciar las autoridades estatales y federales, así como los industriales, un programa de recepción y pago de las cosechas de maíz. El Frente de Defensa de Productores Agrícolas de Sinaloa (FDEPAS) continúa sus protestas en las plantas de PEMEX de los municipios de Salvador Alvarado y Ahome.

Sábado 14

- Cerca de 5 mil personas participan en la Marcha Lésbico-Gay 2001 realizada en Guadalajara.

Lunes 16

- Productores agrícolas del noroeste de Chihuahua toman cinco casetas de peaje exigiendo una reducción en el precio del diesel, de la tarifa eléctrica y de los fertilizantes además de una revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por parte del Senado.

Miércoles 18

- Más de 100 organizaciones rechazan la ley indígena propuesta por el Senado al concluir el primer Encuentro de Pueblos Indígenas, Originarios y Migrantes del DF y el Área Metropolitana.

Jueves 19

- Es aprobado por fast-track el cómputo de los votos de los congresos locales en torno a la reforma indígena en el parlamento nacional. La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) critica la aprobación.

Viernes 20

- Opositores a la reunión del Grupo de los 8 (G8) en Génova se manifiestan frente a las embajadas de Japón, Francia, Estados Unidos e Inglaterra y las oficinas del Citibank y la Bolsa Mexicana de Valores. Exigen la aplicación de un impuesto a las transacciones financieras internacionales y una reglamentación sobre las inversiones directas.

- Integrantes del Foro Agrícola Regional del Noroeste ocupan la garita aduanal del municipio de Janos, Chihuahua, exigiendo al gobierno federal la venta de energía eléctrica, diesel y fertilizantes a precios similares a los de Estados Unidos y la revisión de los capítulos agropecuario y forestal del TLCAN.

Sábado 21

- Militantes antiglobalización se manifiestan frente a la embajada italiana para protestar por la represión ocurrida en Génova contra los opositores a la reunión del G8. La Policía Judicial de la ciudad de México reprime la manifestación.

Martes 24

- Cañeros y dueños de 4 ingenios llegan a un acuerdo de pago. Cerca de 100 productores mantienen los bloqueos en las secretarías de Agricultura, Economía y Hacienda. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Alcohólica de la República Mexicana (STIAARM) apoya la propuesta de que el gobierno federal embargue a por lo menos 22 de los 60 ingenios que operan en el país.

- En Chihuahua, cerca de 450 productores agrícolas toman –junto al Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Comerciantes, Industriales y Prestadores de Servicios El Barzón, la CNC y el Comité de Mejoras del Noroeste– el puente internacional Zaragoza, que comunica a esta localidad con El Paso, Texas, exigiendo al gobierno federal una rebaja en los precios del diesel, la electricidad y los insumos agrícolas.

Lunes 30

- Miles de indígenas chiapanecos, miembros de las Coordinadoras Regionales de la Sociedad Civil en Resistencia, bloquean rutas en el estado de Chiapas en rechazo a la ley indígena y al Plan Puebla-Panamá. Exigen también el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, la liberación de nueve zapatistas presos, la cancelación de las órdenes de aprehensión contra luchadores sociales, el desarme de grupos paramilitares, la salida del Ejército de la zona y la aparición de 49 desaparecidos tras un operativo policiaco realizado el viernes pasado, entre otras cuestiones. Estudiantes y campesinos apoyan las medidas marchando en Tuxtla Gutiérrez.

AGOSTO

Jueves 2

- Las autoridades del municipio autónomo Ricardo Flores Magón denuncian acciones militares en sus comunidades.

- Los obreros de las fábricas del Grupo Dina, Composites y Dina Plásticos, ubicadas en Hidalgo, inician huelgas en demanda de un aumento salarial de un 35% y exigen que la empresa no aplique un plan que reduciría en 120 puestos el plantel total de la industria.

Viernes 3

- Decenas de campesinos viticultores de Zacatecas, provenientes de los municipios de Ojocaliente, Luis Moya, Villa Hidalgo y Cuauthémoc, bloquean la ruta federal 45 exigiendo que se restrinja la importación de uva y derivados provenientes de los Estados Unidos.

- Cerca de 1.500 productores de piña bloquean dos tramos carreteros en los límites de Veracruz y Oaxaca exigiendo un aumento de precio y el freno a las importaciones del producto desde Tailandia.

- Alrededor de 200 representantes de campesinos de Coahuila, Tamaulipas, Durango, Sonora y Sinaloa, pertenecientes a la Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas (UNORCA), la Alianza Campesina del Noroeste, la CNC, el Congreso Agrario Permanente (CAP), la Central Campesina Cardenista, la Unión de Ejidos y Campesinos de la Laguna y el Frente Nacional para la Defensa de los Productores Agropecuarios (FNDPA), comienzan en El Tajito, Sinaloa, las negociaciones para conformar un frente nacional contra las importaciones agropecuarias.

Sábado 4

- Las organizaciones reunidas en El Tajito conforman el Frente Nacional de Defensa de la Agricultura Mexicana y anuncian una movilización para el 15 de septiembre. Los productores demandan financiamiento para el sector, apoyo y subsidios a insumos y comercialización, planeamiento agrícola y una ley de desarrollo rural.

Lunes 6 • Los cañeros mantienen el bloqueo frente a Agricultura y Economía.

• La Organización Campesina Emiliano Zapata realiza un plantón frente al palacio de gobierno chiapaneco, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, exigiendo tierras para cultivar.

Miércoles 8 • Se realizan las manifestaciones convocadas por el CAPen reclamo de un cambio en la política agropecuaria nacional. Cinco mil personas provenientes de distintos estados del país –integrantes de la Coordinadora Plan de Ayala-Movimiento Campesino Revolucionario Independiente (MOCRI), la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), el CNI y de la UNORCA– se manifiestan en el DF. Dos mil marchan luego hacia la SAGARPA y el resto se dirige hacia el Zócalo junto a 500 delegados campesinos e indígenas de organizaciones de 20 países de Latinoamérica. Los manifestantes reclaman por una agricultura fuera de la Organización Mundial de Comercio (OMC), además de rechazar la ley indígena y el neoliberalismo, entre otras cosas. Más de 2.500 labriegos ocupan en Tapachula la SAGARPA.

Jueves 9 • Mil campesinos de Veracruz –junto a la CNC y otras organizaciones– inician sus protestas con marchas y bloqueos de las sedes regionales de la SAGARPA en tres ciudades del estado. Cientos de labriegos de 10 municipios de Chihuahua toman las oficinas del despacho en cuatro de ellos, exigiendo la renuncia del titular además de la revisión del TLCAN.

Sábado 11 • La UNPCA levanta los tres bloqueos a la SAGARPA iniciados el 9 de julio.

• En el tercer congreso de la CLOC, las 50 organizaciones latinoamericanas participantes acuerdan defender la capacidad de definir qué y cómo producir, realizar consultas sobre el impacto que tendría el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la agricultura, promover el uso de semillas no-transgénicas y llevar la paridad de representantes mujeres a los cargos de dirección y coordinación de su movimiento.

Viernes 17 • Miembros de la Unión Campesina Oaxaqueña (UCO) bloquean accesos a Juchitán exigiendo a la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) la liberación de créditos de respaldo a proyectos productivos, y al gobierno local la entrega de subsidios para comprar y regularizar los predios que ocupan.

Sábado 18 • En Puebla, los 12.500 afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos de Volkswagen de México (SITIAVW) inician una huelga exigiendo un incremento salarial de 21%. La empresa solicita a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) que declare la ilegalidad de la medida.

Lunes 20 • Los trabajadores de Volkswagen reducen su demanda salarial de un 21 a un 19%.

Martes 21 • El presidente del SITIAVW expresa que no aceptarán un incremento menor al 10%. La empresa mantiene su oferta de 7%.

Miércoles 22 • El líder del SITIAVW rechaza el ofrecimiento de la empresa en una asamblea a la que asisten 5 mil trabajadores pertenecientes a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), los sindicatos del Metro del Monte de la Piedad, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el tranviario, la Federación de Trabajadores Democráticos, el CAP y la CIOAC. Los trabajadores marchan al antiguo palacio de gobierno, donde se reúnen con el secretario de Gobernación estatal.

Lunes 27

• Volkswagen de México presenta una propuesta secreta de aumento salarial. El sindicato informa que mediante el voto directo los trabajadores de la empresa responderán a la oferta.

Martes 28

• Más de 10 mil trabajadores de Volkswagen votan en contra de la propuesta empresarial de aumentar los salarios en un 10,2%.

Miércoles 29

• Dirigentes de las principales organizaciones de productores de granos, hortalizas, vegetales, frutas y ganado, entre las que se encuentra la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras Productoras del Campo, exigen a los senadores integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural aplazar por lo menos tres años la apertura a la importación de granos, leche y otros alimentos prevista en el TLCAN.

• Cerca de 600 productores de caña de azúcar del sur de Quintana Roo toman las instalaciones del ingenio San Rafael de Pucté, propiedad del Grupo Beta San Miguel, exigiendo el pago de 68 millones correspondientes a la zafra 2001.

• La UNT, la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios (FESEBS), el Frente Sindical Mexicano (FSM) —encabezado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)— y el CAP acuerdan en reunión plenaria la toma de carreteras, la realización de marchas, mitines, paros, bloqueos de oficinas públicas y una caravana multitudinaria contra la actual política gubernamental y en apoyo a los trabajadores de Volkswagen en el marco del primer Informe de Gobierno del presidente Fox a realizarse el 1° de septiembre.

Jueves 30

• En el Día Internacional del Detenido Desaparecido, la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas y el Comité de Chihuahua Pro Defensa de los Derechos Humanos realizan un plantón en la Plaza de Armas de Ciudad Juárez exigiendo la aparición con vida de 530 personas secuestradas en los últimos años.

■ Glosario de siglas

ALCA	Area de Libre Comercio de las Américas
BANRURAL	Banco Nacional de Crédito Rural
CAP	Congreso Agrario Permanente
CEN	Comité Ejecutivo Nacional
CIOAC	Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
CLOC	Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo
CNADJPO	Consejo Nacional de Alianza Democrática de Jubilados y Pensionados de Oriente
CNC	Confederación Nacional Campesina
CNI	Congreso Nacional Indígena
CNTE	Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
COAO	Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo
COCOPA	Comisión de Concordia y Pacificación
CODUC	Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas
CROC	Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
CROM	Confederación Regional Obrera Mexicana
CT	Congreso del Trabajo
CTM	Confederación de Trabajadores de México
DF	Distrito Federal
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FDCCCh	Frente Democrático Campesino de Chihuahua
FDEPAS	Frente de Defensa de Productores Agrícolas de Sinaloa

FESEBS	Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios
FNDPA	Frente Nacional para la Defensa de los Productores Agrícolas
FSM	Frente Sindical Mexicano
FSTSE	Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
FZLN	Frente Zapatista de Liberación Nacional
G8	Grupo de los 8
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
ISSSTE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
IVA	Impuesto al Valor Agregado
MDM	Movimiento Democrático Magisterial
MOCRI	Movimiento Campesino Revolucionario Independiente
OMC	Organización Mundial de Comercio
PAN	Partido Acción Nacional
PDS	Partido Democracia Social
PEMEX	Petróleos Mexicanos
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PT	Partido del Trabajo
PVEM	Partido Verde Ecologista de México
SAGARPA	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SEDESOL	Secretaría de Desarrollo Social
SEP	Secretaría de Educación Pública
SITIAVW	Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos de Volkswagen de México
SME	Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
STIAARM	Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Alcohólica de la República Mexicana
STPS	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UCO	Unión Campesina Oaxaqueña
UMIC	Unión de Mujeres Indígenas y Campesinas
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
UNORCA	Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas
UNPCA	Unión Nacional de Productores de Caña
UNT	Unión Nacional de Trabajadores

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández y Juan Chaves.
Fuente: diarios La Jornada y El Universal.*

Nicaragua

REGION
NORTE



MAYO

Martes 1

• Más de 2 mil trabajadores procedentes de diferentes zonas por el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), marchan en Managua en el marco del Día Internacional del Trabajador.

Miércoles 2

• Cerca de 620 trabajadores de Occidente, apoyados por el Sindicato Ervin Adán Reyes Medina, toman las tierras de las ex empresas Santa Elisa y Emma, ubicadas en la jurisdicción del municipio de El Viejo, en demanda de indemnización por todos los años trabajados.

Jueves 10

• Luego de 10 meses de negociaciones, representantes de la empresa textil Chentex Garment's y los once sindicalistas que demandaban ser reintegrados a sus labores, firman un acuerdo por el cual volverán a su trabajo cuatro de los despedidos y se les pagará el doble de sus liquidaciones a los otros siete trabajadores.

• El presidente Arnoldo Alemán confirma la reducción de la jornada laboral en el estado. La misma se extenderá de 7 a 14 hs., sin contemplar hora de almuerzo. La medida se lleva adelante para ahorrar costos.

Viernes 11

• Cafetaleros, exportadores, el gobierno y representantes de bancos y la empresa privada deciden hacer una reforma total de la Ley de Moratoria por la cual los banqueros y las microfinancieras se comprometen a reestructurar las deudas de los cafetaleros a un plazo de ocho años.

Martes 22

• El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (IRTRAMMA) discuten un incremento en la tarifa del transporte. En León, ocho cooperativas de transporte, entre ellas la Cooperativa de Buses Urbanos de León (COBUL), aumentan 50 centavos el boleto. Asimismo, el Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN), trabajadores del estado y estudiantes universitarios conforman una comisión tripartita para enfrentar el alza en las tarifas del transporte.

• Cerca de 100 trabajadores de la salud del Hospital España, de Chinandega, apoyados por el sindicato de la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD), realizan una huelga de brazos caídos en reclamo del pago de salarios adeudados.

• Pobladores de Mulukukú toman el puente que une el Atlántico con el Pacífico, para exigir al gobierno nacional que cumpla con su promesa de declarar municipio a esa localidad, libere a los 4 manifestantes detenidos por haber participado en la protesta del pasado 24 de abril, y detenga las persecuciones políticas. Se producen fuertes enfrentamientos con la policía.

Lunes 28

• Integrantes de la comisión tripartita conformada para combatir el alza de las tarifas del transporte se reúnen para decidir las acciones a llevar adelante en el marco del llamado "Plan de Protesta para Evitar el Alza".

159

Martes 29 • Miles de estudiantes universitarios, convocados por la Asociación de Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)-Sedes Managua y León, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la UNI-Recinto Universitario Pedro Arauz Palacios (RUPAP), la Universidad Nacional Agraria (UNA), el Recinto Universitario Carlos Fonseca Amador (RUCFA) y la Universidad Politécnica (UPOLI), apoyados por el MCN, realizan plantones frente a la Universidad Centroamericana (UCA), el RUPAP y la UNA, en protesta por el alza ilegal en el pasaje. Distintas organizaciones sindicales, como la FETSALUD, llaman a todos los trabajadores a no pagar el aumento de tarifas.

Miércoles 30 • La alcaldía de Managua y el MTI sostienen que multarán a los transportistas que realicen cobros ilegales.

Jueves 31 • Cerca de mil estudiantes universitarios, convocados por los centros de estudiantes de la UNAN-Managua, UNA, UNI y UCA, realizan una protesta sobre la avenida universitaria, en Managua, en rechazo al alza ilegal en la tarifa del transporte. Se producen enfrentamientos con la policía. Posteriormente, la Unión Regional de Cooperativas del Transporte Colectivo (URECOTRACO) anuncia la suspensión temporal del alza en la tarifa del servicio durante una semana, mientras negocia con la alcaldía de Managua y el MTI.

JUNIO

160

Sábado 2 • Estudiantes y habitantes de Managua realizan un plantón en la capital, en rechazo al alza en la tarifa del transporte y para exigir que el estado negocie la subvención del mismo. La policía reprime con gases lacrimógenos.

Lunes 4 • Cerca de 40 miembros de la ex resistencia nicaragüense de la zona de Waslala toman la sala de espera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en demanda de la entrega de los títulos de propiedad prometidos por el gobierno.

Martes 5 • Estudiantes de distintas universidades de Managua realizan un plantón en las afueras de la UCA para exigir una solución nacional con respecto al alza en la tarifa del transporte. Posteriormente, estudiantes apoyados por grupos de solidaridad con indígenas de Chiapas y con los damnificados por los terremotos, hacen un plantón en las afueras de la Asamblea Nacional donde los diputados tratarían el tema del alza en la tarifa del servicio.

• Cerca de 200 caficultores de los municipios de Madriz y Nueva Segovia bloquean la carretera Panamericana para exigir a la Asamblea Nacional que no vete la Ley de Suspensión de Embargos y Moratoria al sector del café, el próximo martes. Además, un grupo de productores cafetaleros realiza un plantón frente a la Asamblea Nacional, en Managua, por el mismo motivo.

• Transportistas, aglutinados en la URECOTRACO y pertenecientes a otras cooperativas, comienzan un paro escalonado del servicio para exigir al gobierno nacional que negocie con ellos el aumento en las tarifas.

Miércoles 6 • Transportistas de Managua organizados por la URECOTRACO y otras cooperativas independientes, realizan plantones en distintos puntos de la capital, y comienzan un paro por tiempo indeterminado, para exigir al gobierno nacional que negocie junto con la alcaldía un acuerdo con respecto al alza en la tarifa del transporte.

Jueves 7

- Transportistas realizan un tranque en las afueras de la cooperativa Parrales Vallejos, en Managua, para exigir una solución por parte del gobierno nacional al problema de la tarifa del transporte. La policía reprime con balas de plomo, pelotas de goma, gases lacrimógenos y bombas paralizantes.

- Estudiantes del Centro Universitario Regional del Norte (CURN) –adscrito a la UNAN– y de la Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería (EIAG), de Rivas, bloquean la carretera Panamericana en protesta por el alza en las tarifas del transporte.

Lunes 11

- Transportistas en paro bloquean una calle y queman llantas frente a la Cooperativa Parrales Vallejos, ubicada en Managua, para exigir al gobierno central una solución al problema del alza en las tarifas del servicio.

- Cerca de 400 campesinos de Waslala, ex miembros de la resistencia, se concentran frente a la sede del MHCP, en Managua, en demanda de la cancelación de una deuda de 6,8 millones de córdobas que el gobierno mantiene con los antiguos propietarios, quienes se niegan a entregar a los campesinos los títulos de las 8.200 manzanas de tierras hasta que la deuda no sea cancelada.

Miércoles 13

- La Asamblea Nacional veta la Ley de Suspensión de Embargos y Moratoria al sector café, que suspendía por 300 días los intereses moratorios y los embargos en contra de los cafetaleros.

Viernes 15

- Los transportistas urbanos de Managua, agrupados en la URECOTRACO, levantan el paro luego de acordar con la alcaldía la suspensión de las operaciones de los colectivos interurbanos en la ciudad, eliminación de los ómnibus ilegales y rediseñar los itinerarios de varias rutas. La tarifa del servicio se mantiene en 2 córdobas.

161

JULIO

Jueves 5

- Más de 400 trabajadores de 8 centros históricos del país –el Palacio Nacional de Cultura, Centro de Enseñanza Artística “Pablo Antonio Cuadra”, Huellas de Acahualinca, Ruinas de León Viejo, entre otros, que responden al Instituto Nacional de Cultura (INC)– realizan un paro total e indefinido en rechazo a la reducción de más de 1 millón y medio de córdobas del presupuesto para dicha institución.

Jueves 12

- Aproximadamente 600 desmovilizados del Ejército y la resistencia ocupan cerca de 6 mil manzanas de tierras –adjudicándose el derecho a las mismas– a la altura del kilómetro 50 de la carretera Tipitapa-Boaco, pertenecientes a varias cooperativas y personas de esa zona.

Lunes 16

- Decenas de habitantes de Ticuantepeque, apoyados por el Comité de Defensa al Consumidor, toman las instalaciones de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) en ese municipio en protesta por el aumento del 140% en las tarifas del agua.

Miércoles 18

- Más de 500 personas de zonas rurales que se han desplazado por problemas alimenticios, falta de trabajo y vestimenta, que se encuentran en el campo deportivo de Matagalpa, rechazan la propuesta del gobierno de darles comida, empleos temporales de 25 córdobas diarios y asistencia médica a cambio de que estos regresen a la zona rural, ya que no les garantizan alternativas productivas reales.

- Jueves 19** • Miles de nicaragüenses, junto con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se concentran en la plaza principal de Managua para conmemorar el 22° aniversario de la revolución sandinista.
- Domingo 22** • La Secretaría de Acción Social ofrece más de 800 empleos para trabajo comunitario por un período de tres meses a los desplazados que se encuentran en el municipio de Matagalpa, con el fin de frenar el éxodo campesino.
- Martes 24** • Cerca de 200 de los trabajadores cafetaleros que se encuentran en Matagalpa deciden aceptar la propuesta del gobierno de empleos temporales y comienzan a retornar a la zona rural.
- Miércoles 25** • Cerca de 500 personas de La Dalia y 300 de La Mora, en Matagalpa, realizan tranques en esos poblados, para exigir que se les incluya en el Plan de Trabajo Comunitario que comenzó a implementar el gobierno a través de la Secretaría de Acción Social (SAS) en las zonas cafetaleras afectadas por el desempleo.
- Jueves 26** • Pobladores de Managua, acompañados por representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el MCN y la Liga de Defensa al Consumidor de Nicaragua (LIDECONIC), marchan hacia el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) para exigir al director de esa institución una solución al problema de las altas tarifas del servicio.
- Martes 31** • Cientos de familias de obreros agrícolas y parceleros realizan plantones en varias vías de acceso a los municipios cafetaleros de Matagalpa, sobre el puente Las Cañas y el sector de La Corona, entre otros, en demanda de trabajo y comida.

AGOSTO

- Domingo 5** • Un grupo de 36 trabajadores mineros despedidos hace casi seis meses de la empresa Minera Tritón S.A. protestan frente al Palacio de Justicia en demanda de un fallo que ordene el reintegro de los mismos a sus puestos de trabajo y del pago de los salarios de los meses que han estado en juicio.
- Cerca de 60 personas de los barrios El Tambor, Francisco Moreno 1 y 2 y el Lucidia Mantilla toman parte del campo Elías Alonso y del parque Los Monos para exigir al gobierno trabajo y comida.
- Jueves 16** • Obreros de la construcción residencial Las Palmeras bloquean y colocan tranques en la entrada a la misma, impidiendo el paso de los moradores del lugar, para presionar a los socios de Viviendas Nicaragüenses S.A. (VINISA) para que les paguen los salarios que les adeudan desde junio.
- Lunes 20** • Decenas de familias campesinas se desplazan de sus comunidades hacia el poblado de Totogalpa, departamento de Madriz, para demandar a la alcaldía que declare el estado de emergencia en la región. Solicitan al gobierno, a las ONGs y a otros sectores de la sociedad ayuda para superar la hambruna, el desempleo y la pérdida de cosechas.
- Miércoles 22** • Centenares de familias campesinas de Matagalpa, apoyadas por la Coordinadora Civil para la Emergencia, entre otras organizaciones, realizan la Marcha del Hambre desde ese departamento hacia Managua para exigir al presidente Alemán que dé respuestas positivas a sus demandas: empleo permanente, alimentos y financiamiento a los productores, entre otros reclamos.

Domingo 26

• Miles de campesinos se desplazan al Empalme de San Benito, donde esperan la llegada de por lo menos 500 familias campesinas más, para comenzar la marcha a la Presidencia y a la sede del Parlamento, en Managua. Exigen tierras, créditos, insumos, semillas y asistencia técnica, entre otras demandas.

Lunes 27

• Los presidentes de Nicaragua y El Salvador firman una declaración conjunta de acuerdos comerciales y políticos destinados a fortalecer el proceso de integración trinacional, firmado por estos dos países más Guatemala, en mayo del año 2000, e invitan a Honduras a sumarse al mismo. Entre los 23 aspectos de la declaración conjunta se contempla el apoyo al Plan Puebla Panamá.

Miércoles 29

• Las familias campesinas de la zona norte del país que vienen realizando la Marcha del Hambre llegan a Managua y realizan plantones frente a la Asamblea Nacional y la Casa Presidencial para exigir trabajo, tierras y alimentos, entre otros reclamos.

Jueves 30

• Una comisión de los campesinos que participan en la Marcha del Hambre se reúne con el Secretario de la Presidencia y acuerda el retorno de los campesinos a su lugar de origen a cambio de incorporarlos al programa de la SAS de trabajo temporal por dos meses, y la asignación de tres manzanas de tierra por familia en la región de Occidente y en la parte cercana a Zelaya Central, Chinandega o Siuna.

■ Glosario de siglas

CENIDH	Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
COBUL	Cooperativa de Buses Urbanos de León
CURN	Centro Universitario Regional del Norte
EIAG	Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería
ENACAL	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
FETSALUD	Federación de Trabajadores de la Salud
FNT	Frente Nacional de los Trabajadores
FSLN	Frente Sandinista de Liberación Nacional
INAA	Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
INC	Instituto Nacional de Cultura
IRTRAMMA	Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua
LIDECONIC	Liga de Defensa al Consumidor de Nicaragua
MCN	Movimiento Comunal Nicaragüense
MHCP	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
MTI	Ministerio de Transporte e Infraestructura
RUCFA	Recinto Universitario Carlos Fonseca Amador
RUPAP	Recinto Universitario Pedro Arauz Palacios
SAS	Secretaría de Acción Social
UCA	Universidad Centroamericana
UNA	Universidad Nacional Agraria
UNAN	Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNI	Universidad Nacional de Ingeniería
UPOLI	Universidad Politécnica
URECOTRACO	Unión Regional de Cooperativas del Transporte Colectivo
VINISA	Viviendas Nicaragüenses S.A.

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
 Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera y María Chaves.
 Fuentes: diarios La Prensa y El Nuevo Diario.*

Panamá

REGION
NORTE



MAYO

Martes 1

• Alrededor de 5 mil trabajadores reunidos en orq
cional de Unión Sindical (CONUSI), Convergencia Sindical y el Consejo Nacional de Trabajadores (CONATO), así como de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), acompañados por grupos estudiantiles e indígenas, marchan por la capital hacia la Plaza 5 de Mayo para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. Mientras, en la ciudad de Aguadulce unos 300 trabajadores, miembros de agrupaciones sindicales de las provincias centrales afiliados a la CONUSI, se manifiestan por el mismo motivo.

• Unas 75 personas pertenecientes a la Coordinadora Victoriano Lorenzo (organización que agrupa a 14 barriadas de las Áreas Revertidas del distrito de Arraiján) cierran la vía Interamericana a la altura de Loma Cová en protesta por el alza del pasaje.

Miércoles 2

• Alrededor de 300 alumnos del Instituto Nacional bloquean la Avenida de Los Mártires y la vía Transísmica en la capital para protestar por la unificación del pasaje a 25 centavos de balboas. Se enfrentan con la Policía Nacional y 15 personas quedan detenidas.

Jueves 3

• Tras un acuerdo entre los directivos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), dirigentes transportistas y el Ministerio de Gobierno, comienza a regir el aumento en la tarifa del transporte público en la capital.

• Universitarios y obreros realizan una manifestación en la vía Bolívar contra el alza del pasaje público. Son reprimidos por la policía antimotines y al menos 50 de ellos quedan detenidos.

• El Ministerio de Educación anuncia el cierre temporal del Instituto Nacional y del de Artes y Oficios por su participación en las protestas del día de ayer.

• Los estudiantes del Centro Regional Universitario de Colón (CRUC) cierran la vía a Arco Iris, en solidaridad con los compañeros del Campus Central que se están movilizan-
do contra el alza del pasaje en la capital. Son dispersados por unidades policiales, que lanzan gases lacrimógenos dentro del centro de estudios violando la autonomía universitaria.

Viernes 4

• Los estudiantes de los colegios Ramón Cantera, La Profesional y Richard Newman se manifiestan en la capital contra el alza del pasaje. Se producen enfrentamientos con la policía. La ministra de Educación suspende las clases de manera indefinida en los colegios secundarios de los distritos de Panamá y San Miguelito. La Universidad de Panamá (UP) también cierra sus puertas.

Martes 8

• Estudiantes, docentes y administrativos del CRUC marchan por las calles principales de Colón, en rechazo a la violencia que asumió la Policía Nacional el jueves anterior, cuando los manifestantes se solidarizaban con los estudiantes del Campus Central que luchan contra la unificación del pasaje.

Miércoles 9

• Bajo la consigna “unidad para vencer al neoliberalismo”, el Movimiento Nacional por la Defensa y la Soberanía (MONADESO), que agrupa organizaciones sindicales y estudiantiles, encabeza una marcha de más de 20 mil personas desde la UPhasta el palacio presidencial de Las Garzas para exigir al Ejecutivo que suspenda la unificación del pasaje a 25 centavos y repudiar la represión de la que obreros y estudiantes fueron víctimas en la semana.

Jueves 10

• Integrantes del Sindicato Unico Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) cierran la vía Corredor, en solidaridad con sus compañeros que realizan negociaciones con el Ejecutivo respecto del alza del transporte público. A su vez, miembros de SUNTRACS de la capital marchan hasta la Avenida de los Mártires, para repudiar la represión ocurrida el miércoles en las cercanías del Palacio Presidencial.

• Estudiantes universitarios del Centro Regional de Coclé cierran parcialmente la vía Interamericana frente a las instalaciones del plantel para protestar por la violación de la autonomía universitaria ocurrida en la noche del miércoles en el Campus Central. Rechazan también el aumento del pasaje urbano. Mientras tanto, los estudiantes del Centro Universitario de Veraguas (CRUV) cierran la calle Polidoro Pinzón, frente al plantel, por el mismo motivo.

Viernes 11

• Los obreros afiliados a SUNTRACS protestan contra el alza del pasaje en la avenida Balboa en el barrio capitalino de Paitilla. Cuando se están retirando, 3 manifestantes son detenidos por participar del cierre de calle, por lo que los trabajadores se oponen a la policía con piedras y son reprimidos con gases lacrimógenos.

Lunes 14

• Tras una reunión de 15 horas entre la CONATO, la Cámara Nacional del Transporte (CANATRA) y la presidenta Moscoso, la tarifa del transporte vuelve a 15 centésimos hasta el 15 de diciembre, fecha en que los transportistas se comprometen a realizar mejoras en el servicio. A partir de esa fecha, el pasaje se unificará nuevamente en 0,25 balboas. El MONADESO, por su parte, caracteriza la rebaja del pasaje como un triunfo popular.

• Se reanudan las clases en casi todas las escuelas.

Martes 15

• El Consejo de la UP aprueba su apertura y nombra una comisión para recabar información acerca de la violación a la autonomía universitaria por parte de los agentes antimotines la noche del miércoles 9.

Jueves 24

• Obreros de la Mina Santa Rosa en Veraguas cierran la vía Interamericana a la altura de la entrada a Cañazas para reclamar el pago de sus prestaciones, tras el cierre de la empresa. Los trabajadores cumplen 396 días de huelga con el objetivo de asegurar los bienes de la empresa para que, de este modo, se pague lo adeudado a cada obrero.

Viernes 25

• Obreros de la empresa Gran Alianza Forestal, que operaba en el distrito de Soná, trancan la entrada a este poblado demandando el pago de sus prestaciones no abonadas, tras el cierre por quiebra de la compañía. Unidades policiales despejan el camino, luego de la mediación del alcalde de la región, quien se compromete ante los trabajadores a gestionar sus prestaciones.

Sábado 26

• Unos 400 indígenas de Veraguas y Chiriquí cierran la vía Interamericana a la altura del puente sobre el río Vigúí en el área limítrofe entre ambas provincias, en protesta por la construcción del proyecto hidroeléctrico Tabasará 1 y 2.

- Lunes 28** • Unas 30 familias que más de un mes atrás habían invadido terrenos privados ubicados a unas cuadras del puente Perurena, frente a la autopista Arraiján-La Chorrera, son desalojadas del lugar por la policía.

JUNIO

- Sábado 2** • Alrededor de 250 trabajadores de Agromarina S.A., en Veracruz, distrito de Arraiján, protestan junto a sus familiares frente a las instalaciones de la empresa para exigir a los administradores que les paguen sus liquidaciones laborales, adeudadas desde diciembre de 2000, cuando fueron despedidos por el cierre de la planta.

- Martes 12** • Los docentes y estudiantes del Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) marchan en la capital, en rechazo a la Resolución Ejecutiva de Racionalización y Productividad en el Sector Público que en los próximos meses dejaría cesante al 90% de los docentes y al 43% del personal administrativo de la UTPen Panamá Oeste, lo cual significaría la paralización de las labores académicas y administrativas del plantel. En tanto, en la sede regional de la UTPen Chiriquí más de 200 estudiantes y docentes cierran la avenida F Sur y la vía Interamericana, a la altura de la entrada a la ciudad de David, en protesta por el recorte de 250 mil balboas al presupuesto de este año, producto de la Racionalización al Gasto Público.

- Unas 50 mujeres de la comunidad de San Felipe de Portobelo, integrantes del Movimiento de Mujeres Portobeleñas, cierran la carretera que comunica el sector con la Costa Arriba de Colón, para exigir la ejecución de un programa de empleos en la región.

166

- Viernes 15** • Dirigentes de la Unión de Trabajadores Desempleados Colonenses (UTRADECO) y del Movimiento Emancipación Colonense (MEC) cierran la entrada principal a Colón, exigiendo al gobierno que cumpla con el pago del plan de becas y capacitación. Se producen enfrentamientos con la Policía Nacional y seis personas quedan detenidas.

- Lunes 18** • Miembros de la UTRADECO y del MEC se manifiestan pacíficamente frente a la sede de la Policía Nacional y la Alcaldía de Colón, para pedir por la liberación de sus seis compañeros, quienes fueron detenidos durante las protestas del viernes 15.

- Miércoles 27** • Roberto Small, dirigente de la UTRADECO, es detenido luego de una reunión de desempleados con las autoridades locales del Municipio de Colón, a raíz de una orden de detención tras los disturbios registrados el viernes 15 en esa ciudad.

- Jueves 28** • Próspero Brown y Armando Pitalúa, dirigentes del MEC, son detenidos debido a una orden de arresto a raíz de los desórdenes ocurridos a mitad de mes en la ciudad de Colón.

- Unas 200 familias precaristas –quienes ocupan terrenos y construyen viviendas precarias– del distrito de Arraiján, que se habían instalado en el Asentamiento Unión Campesina de Burunga, propiedad del estado, son desalojadas por autoridades municipales. Ante su resistencia, intervienen unidades antidisturbios, que derriban la mayoría de sus viviendas.

- Un grupo de jubilados y pensionados independientes bloquean por casi siete horas las vías de intersección a la Plaza 5 de Mayo para exigir a la Presidenta que cumpla con su promesa de aumentarles 40 balboas.

- Viernes 29** • El pleno de la Asamblea Legislativa aprueba el proyecto de ley, que otorga un aumento de entre 7 y 30 balboas a 127 mil jubilados.

JULIO

Lunes 2

• Un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) cierra la vía Interamericana para protestar por el recorte de presupuesto que se aplicará a la institución. Catorce de ellos quedan detenidos.

• Los precaristas del asentamiento Unión Campesina de Burunga, de Arraiján, que habían sido detenidos el viernes 29 son liberados, tras imponérseles multas de entre 60 y 90 balboas, a pesar de no estar inculcados por delito alguno.

• Los 250 ex empleados de la antigua empresa Agromarina, en Arraiján –que cerró de modo imprevisto mediante remate 5 meses atrás– comienzan una vigilia frente a los predios de la planta, impidiendo el ingreso a los actuales empleados de la empresa Colemar Inc., que alquila las instalaciones y que los ex trabajadores sostienen que son los mismos dueños, en protesta por la deuda que desde aquel entonces la compañía mantiene con ellos.

Martes 3

• Los miembros del Movimiento de Desempleados Colonenses (MODESCO), de la UTRADECO, de la Federación Sindical y del Movimiento de Rescate de la Juventud Colonense (MRJC), marchan por la Av. Central y Bolívar hasta la Municipalidad de Colón, donde se reúnen con la gobernadora de la provincia, la alcaldesa y concejales del municipio para solicitarles que los consideren para trabajar en los diferentes proyectos que se realizan en la región, y se dirigen hacia la sede de la Policía Nacional para esperar a sus tres compañeros detenidos 5 días atrás, quienes son puestos en libertad.

Martes 10

• Miembros del MODESCO, la UTRADECO, la Federación Sindical, del MJRC, de la Alianza Rastafari, de Respuesta Afropanameña y del Movimiento de Desempleados de Cristóbal (MODECRIS) marchan por las calles de Colón, acompañados por la alcaldesa del distrito y varios legisladores, exigiendo un sistema tributario equitativo y la implementación del proyecto turístico La Playita.

Jueves 26

• El MONADESO organiza una concentración frente a la embajada de los Estados Unidos para rechazar la presencia de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el país y oponerse al proyecto de establecer el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Martes 31

• 120 trabajadores de la finca Santa Elena, ubicada en las bananeras independientes del distrito de Divalá, provincia de Chiriquí, comienzan una huelga indefinida, reclamando el pago del seguro social, la cuota obrero patronal y el decimotercer mes que los finqueros les adeudan desde hace dos años.

AGOSTO

Miércoles 1

• Miembros del MODESCO realizan piquetes frente a los predios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAAN), el Ministerio de Salud y la Zona Libre para que los directores de estas instituciones gubernamentales de la provincia expliquen el uso de las partidas que les fueron dadas recientemente y tomen en cuenta la mano de obra de esta agrupación para futuros proyectos.

Jueves 2 • Cientos de moradores del distrito de Chame marchan hasta el municipio local para oponerse al incremento de la tarifa correspondiente a la recolección de basura, dispuesto tras la concesión del servicio a la empresa CREDESOL.

Lunes 6 • Alrededor de 60 trabajadoras de las cuadrillas femeninas de aseo de San Miguelito “Brigadas Celestes” se atrincheran en las oficinas de la Dirección de Aseo de este distrito, en protesta por la privatización de la recolección de basura sin reasignarlas en otras oficinas de la entidad ni comunicarles qué pasará con sus empleos.

Martes 7 • Miembros de la UTRADECO y del MEC protestan vistiendo camisetas rojas desde los predios de la Zona Libre de Colón, pasando por el centro comercial y el puerto, hasta las instalaciones de la empresa del ferrocarril, para exigir puestos laborales.

Miércoles 8 • Moradores de los corregimientos de Cativá, Cristóbal y la Federación Sindical marchan desde la ciudad de Colón hasta la barriada Villa del Caribe para exigir la implementación de plazas de empleo, así como respuestas gubernamentales a los problemas de inundaciones. La Federación Sindical obstruye la vía frente a Villa del Caribe y es reprimida con gases lacrimógenos por las unidades de Control de Multitudes. Al mismo tiempo, moradores del Residencial de Los Lagos cortan el tránsito a la altura de la carretera Boyd Roosevelt, alzando las mismas reivindicaciones.

Jueves 9 • El grupo de desempleados que conforma el “Comité Pro Rescate del Impuesto Transit del Servicio Especial de Vigilancia” marcha por Colón hasta la empresa Panamá Port Company de la Hutchison Whampoa Limited, en el puerto de la ciudad, para reclamar puestos de trabajo.

Viernes 10 • Las trabajadoras de las Brigadas Celestes de San Miguelito, que desde el lunes se atrincheran en las oficinas de la Dirección de Aseo de este distrito, levantan el paro tras firmar un acuerdo con representantes del municipio local mediante el cual se les garantiza seguridad laboral.

Martes 14 • Más de 400 personas pertenecientes al MODESCO, la UTRADECO, el MEC, la Alianza Rastafari, el MRJC y la Federación Sindical marchan aproximadamente 10 km., desde el corregimiento de Cativá hasta la ciudad de Colón, para exigir que se les brinden respuestas a sus necesidades laborales.

Miércoles 15 • Miembros del MODESCO, del MODECRIS, de la UTRADECO y de la Federación Sindical cierran la entrada a la Zona Libre de Colón para exigir 10 mil plazas de empleo. Se enfrentan a piedras con la Policía Nacional, que responde con gases lacrimógenos, perdigones y balas.

Jueves 16 • Los desempleados de Colón se manifiestan por segundo día para pedir planes de emergencia y vuelven a enfrentarse con la Policía Nacional. Un capitán antimotines es herido de bala, tras lo cual 30 personas son detenidas. Previamente, los dirigentes de los desempleados se habían reunido con el presidente de la Cámara de Comercio de Colón y con el gerente de la Zona Libre, quienes habían acordado retirar las denuncias contra los manifestantes y concertar una reunión con la presidenta Moscoso para el 28 de agosto.

Sábado 18 • Los 120 obreros de la Finca Santa Elena, en Chiriquí, levantan la huelga que mantenían desde el 31 de julio en reclamo de haberes atrasados desde dos años atrás, luego de que la empresa firmara un documento en el que se compromete a pagar las sumas adeudadas en un plazo de 90 días.

Jueves 23

• Moradores de los 12 corregimientos del distrito de Chame, integrantes de la coordinadora Chamereros Trabajando Unidos, marchan hasta el Municipio local, en rechazo a la empresa CREDESOL y a cómo se procedió en la privatización del servicio de recolección de basura. Piden que dicha empresa se retire y que se efectúe una nueva licitación.

• 20 familias invaden por segunda ocasión tierras privadas localizadas en el sector de El Gringo, en áreas revertidas de Arraiján, parcelando cada una un pedazo de terreno.

Martes 28

• Representantes de siete grupos de desempleados de Colón se reúnen con el vicepresidente y tres ministros de la Nación para buscar soluciones al desempleo en la provincia. El gobierno se compromete a conseguir fondos que financien obras exclusivas para Colón y a generar empleos en un plazo no mayor a 10 días.

■ **Glosario de siglas**

ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
ATTT	Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre
CANATRA	Cámara Nacional del Transporte
CONATO	Consejo Nacional de Trabajadores
CONUSI	Consejo Nacional de Unión Sindical
CRUC	Centro Regional Universitario de Colón
CRUV	Centro Universitario de Veraguas
FENASEP	Federación Nacional de Servidores Públicos
FMI	Fondo Monetario Internacional
IDAAN	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
MEC	Movimiento Emancipación Colonense
MODECRIS	Movimiento de Desempleados de Cristóbal
MODESCO	Movimiento de Desempleados Colonenses
MONADESO	Movimiento Nacional por la Defensa y la Soberanía
MRJC	Movimiento de Rescate de la Juventud Colonense
SUNTRACS	Sindicato Unico Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares
UNACHI	Universidad Autónoma de Chiriquí
UP	Universidad de Panamá
UTP	Universidad Tecnológica de Panamá
UTRADECO	Unión de Trabajadores Desempleados Colonenses

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
 Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert y Mariana Fassi.
 Fuentes: diarios El Panamá América, Crítica en Línea y El Siglo.*

Puerto Rico

REGION
NORTE



MAYO

Martes 1

• En el Día Internacional de los Trabajadores, un municipio de Arecibo marcha para protestar cont

• Un grupo de 12 desobedientes civiles es arrestado en terrenos de la Marina de EE.UU. en Vieques cuando intentaba detener las prácticas militares.

Sábado 5

• El ambientalista Alberto de Jesús (Tito Kayak) es arrestado por haber colocado en Nueva York, EE.UU., un aviso en apoyo a la desmilitarización de Vieques.

Viernes 18

• La magistrado federal Aída M. Delgado sentencia a 45 días de prisión a tres estudiantes afiliados a la Federación de Universitarios Pro Independencia (FUPI) que incursionaron en terrenos restringidos de la Marina de Guerra de los EE.UU.

Lunes 28

• Miles de personas convocadas por la Coalición Ecuménica Pro Vieques se concentran frente a la cárcel federal de Guaynabo en apoyo a los manifestantes encarcelados por entrar a las áreas restringidas de la Marina de Guerra de EE.UU. en Vieques.

Martes 29

• El reverendo Al Sharpton inicia una huelga de hambre en la prisión federal de Brooklyn, EE.UU., donde cumple una condena de 90 días por su desobediencia civil en Vieques.

JUNIO

Domingo 3

• La Coalición Orgullo Arcoiris (COA) que agrupa a organizaciones y activistas de la Comunidad Gay, Lésbica, Bisexual, de Transgéneros y Transexuales (CGLBTT), realiza la Marcha del Orgullo y reclama la impugnación del artículo 130 del Código Penal que criminaliza las relaciones entre las personas del mismo sexo.

• Cerca 500 personas se inscriben en los grupos de desobediencia civil en la Isla Nena organizados por el Congreso Nacional Hostosiano (CNH) y la Coordinadora Todo Puerto Rico con Vieques.

Martes 5

• El juez federal Juan Pérez Giménez sentencia a siete desobedientes civiles por entrar a terrenos militares de la Marina de EE.UU. en Vieques.

• La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) realiza una conferencia de prensa para denunciar las intenciones de la Junta de Síndicos de incluir al principal centro docente del país en la Ley 45 o Ley de Sindicación de Empleados Públicos, ya que la misma prohíbe negociar salarios, entre otros puntos.

Jueves 7

• Representantes de la Federación Laborista de Empleados Universitarios y de la Asociación de Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) se unen al reclamo de la HEEND en contra de que la Ley 45 se pueda aplicar a la UPR.

Sábado 9 • La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riesgo (UTIER) denuncia prácticas de hostigamiento y persecución política de supervisores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contra miembros de ese gremio.

Viernes 15 • El presidente de los EE.UU. George W. Bush anuncia el retiro de la Marina de Guerra de Vieques a partir de mayo de 2003.

Domingo 17 • Más de 30 desobedientes civiles invaden los terrenos en la isla de Vieques.

Lunes 18 • La Marina de Guerra de EE.UU. reinicia los bombardeos en Vieques.

Martes 19 • Decenas de desobedientes civiles protestan en Vieques contra las maniobras militares, donde son detenidos por la policía federal. Tras las manifestaciones de repudio, la Marina de Guerra de EE.UU. suspende sus prácticas durante todo el día.

Jueves 21 • El Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprueba en Nueva York una resolución de apoyo a la libre determinación de Puerto Rico en la que pide a EE.UU. que cese de inmediato las maniobras en Vieques.

Lunes 25 • El alcalde de Ponce, Rafael “Churumba” Cordero Santiago, penetra junto a otras diez personas a los terrenos restringidos por la Marina en Vieques.

JULIO

171

Miércoles 4 • Decenas de manifestantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) se concentran frente a la cárcel federal de Guaynabo para exigir la libertad del presidente de esa organización y otros desobedientes civiles.

Domingo 29 • El Gobierno de Puerto Rico realiza un referéndum no vinculante para EE.UU. para conocer la opinión de los pobladores de la isla sobre las prácticas militares de la Marina de Guerra de ese país en Vieques. La opción del cese inmediato y permanente de los bombardeos obtiene el 68% de los votos, la propuesta de continuación de las maniobras es votada por el 30%, un 1,7% elige seguir con los bombardeos hasta el año 2003 y se contabilizaron 12 votos nulos, entre impugnados y en blanco.

AGOSTO

Martes 7 • El reverendo Wilfredo Estrada Adorno es arrestado junto a cuatro acompañantes en los terrenos restringidos de la Marina de Guerra de EE.UU. en Vieques después de haber interrumpido por dos horas las maniobras que el cuerpo militar realiza en la isla.

Martes 14 • El alcalde de Vieques, Dámaso Serrano, es condenado a cuatro meses de prisión por haber penetrado en los terrenos de la Marina de Guerra de EE.UU.

■ Glosario de siglas

AEE	Autoridad de Energía Eléctrica
CGLBTT	Comunidad Gay, Lésbica, Bisexual, de Transgéneros y Transexuales
CNH	Congreso Nacional Hostosiano
COA	Coalición Orgullo Arcoiris
FUPI	Federación de Universitarios Pro Independencia
HEEND	Hermandad de Empleados Exentos No Docentes
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PIP	Partido Independentista Puertorriqueño
RUM	Recinto Universitario de Mayagüez
UPR	Universidad de Puerto Rico
UTIER	Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riesgo

República Dominicana

REGION
NORTE



MAYO

Martes 1 • En Bonao, nueve comunidades paralizan sus actividades por tiempo indefinido y bloquean calles para reclamar al gobierno que finalice la construcción de un acueducto, paralizada hace 25 años.

Jueves 3 • Se mantiene el paro de actividades en Bonao donde se producen enfrentamientos con la policía con el saldo de más de 20 personas heridas y decenas de detenidos.

Lunes 7 • Decenas de comerciantes y empleados de Moca marchan hasta las oficinas de la Empresa Distribuidora de Energía del Norte (EDENORTE), donde realizan un piquete en protesta por las prolongadas interrupciones del servicio.

Miércoles 9 • En Jarabacoa, sus habitantes comienzan un paro cívico de 72 hs., organizado por el Comité de Apoyo Pro Defensa del río Yaque Norte, en protesta por la decisión del gobierno nacional de autorizar la construcción de la presa Manabao-Bejucal Tavera.

Jueves 10 • La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) comienza un paro de 48 hs. con movilización en todas las escuelas y liceos públicos del Distrito Nacional en reclamo de un aumento salarial y del pago de los salarios adeudados.

Martes 15 • En Santiago continúan las protestas con bloqueos de calles para exigir que la empresa EDENORTE restablezca el servicio energético. La policía intenta dispersar los cortes con balas de goma donde un joven resulta herido.

Lunes 21 • En el Sector Pueblo Nuevo de Mao decenas de habitantes realizan protestas con bloqueos de calles en demanda de mejoras de los servicios de agua potable, energía eléctrica y asfaltado de las calles. La policía realiza varias detenciones.

• En el municipio de Navarrete la población realiza una huelga convocada por el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) para reclamar al gobierno la construcción de numerosas obras.

Martes 22 • En Nagua, miembros del grupo popular Frente Unido 4 de Octubre piquetean las oficinas del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA), las de EDENORTE y la gobernación provincial, en demanda de un nuevo acueducto, cese de los apagones y rebaja de la factura eléctrica, entre otras reivindicaciones.

Miércoles 23 • La protesta continúa en Navarrete cumpliendo ya las 36 hs. mientras las organizaciones sociales convocantes y la FALPO la extienden por tiempo indefinido ante la negativa de las autoridades provinciales de acceder al diálogo. Se producen enfrentamientos con la policía con un saldo de cinco manifestantes heridos de bala y 80 detenidos.

173

Jueves 24 • Las organizaciones populares convocantes al paro en Navarrete decidieron darle un compás de espera al gobierno para atender a sus reclamos, levantando la medida de fuerza.

Martes 29 • En Licey al Medio, los habitantes paralizan las actividades comerciales, escolares, industriales, de transporte, y realizan cortes de calles en demanda de la libertad de los dirigentes del FALPO apresados en Navarrete. Reclaman también de la ejecución de varias obras públicas.

Jueves 31 • En San Francisco de Macorís los pobladores realizan manifestaciones en demanda del restablecimiento del servicio energético y de obras. Se producen enfrentamientos con la policía con un saldo de varios heridos. También se realizan protestas en las comunidades de Paraíso, Erriquillo, Los Patos, entre otras, contra la Empresa Distribuidora de Energía del Sur (EDESUR) por los cortes en el suministro eléctrico.

JUNIO

Domingo 3 • Manifestantes en Gualvez, sector castigado por los apagones, destruyen todos los controladores de la barriada en protesta por la situación.

Lunes 4 • Se producen manifestaciones en los barrios Los Tres Brazos y en el sector Herrera de la capital a raíz del recrudecimiento de los cortes prolongados de energía. También en Haina, Bonao y otros pueblos de provincia, se realizan protestas con quema de neumáticos por el mismo motivo.

174

Miércoles 13 • La Asociación Médica Dominicana inicia un paro de 24 hs. en los hospitales públicos de la región Este para demandar a la Secretaría de Estado de Salud Pública un aumento salarial y la provisión de medicamentos, entre otras cosas.

• Se realizan nuevas manifestaciones en el barrio Los Tres Brazos con obstaculación de la vía pública y quema de neumáticos y postes de tendido eléctrico en protesta por los apagones prolongados que sufren. Asimismo, los habitantes de Azua-San Juan y Azua-Bani obstruyen el tránsito, y la policía detiene a 20 personas.

Martes 19 • Se realiza una jornada nacional de protesta convocada por la Coordinadora de Organizaciones Populares, Choferiles y Sindicales y el FALPO. Se paralizan el 90% del transporte público y el 65% del comercio. Unas 70 personas son detenidas en algunos pueblos de Cibao.

Miércoles 27 • En los barrios del norte de la capital decenas de personas salen a las calles de Guachupita en protesta por las intensos cortes de energía eléctrica. Se producen enfrentamientos con la policía.

JULIO

Domingo 1 • Durante el fin de semana siguen los prolongados apagones en la capital y amplias zonas del interior del país.

• Se realiza por primera vez en el país una marcha de gays y lesbianas para manifestar el orgullo de su condición.

• El Consejo de Unidad Popular (CUP) realiza una asamblea en donde decide convocar para el 8 de agosto a una Segunda Jornada Nacional de Protesta en demanda del cese de los apagones y por la reversión del proceso de privatización de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE).

Martes 7

• Los habitantes del municipio de Guanico paralizan por 48 hs. todas las actividades en demanda de la reconstrucción de la carretera, detenida desde hace meses. Mientras —en el marco del plan de lucha de la Asociación Médica Dominicana— los médicos realizan una huelga en los hospitales por la demora en el cobro de sus salarios.

• En varios barrios de Santiago continúan las protestas contra los apagones.

Miércoles 11

• Los carteros del Instituto Postal Dominicano (IMPOSDOM) suspenden la distribución de cartas en la ciudad en demanda del pago de salarios adeudados.

Lunes 16

• Decenas de obreros que trabajan en la carretera Las Matas-Yabonico, en ese municipio, paralizan sus labores en demanda del pago de salarios adeudados por parte de los contratistas.

• En el barrio de Gualey, en la capital, se realizan importantes manifestaciones en protesta por las interrupciones del servicio de energía eléctrica. Se producen graves enfrentamientos con la policía.

Viernes 20

• En Bonao cientos de personas y organizaciones representativas de la ciudad marchan por las calles para exigir agua potable, reparación de las vías, construcción de viviendas y el cese de los apagones por parte de EDENORTE.

Lunes 23

• En el municipio de Licey del Medio, los pobladores realizan nuevas protestas contra las suspensiones del servicio eléctrico, con interrupciones del tránsito por varias horas.

Miércoles 25

• En la comunidad de Palmar Arriba, del municipio de Villa González, se realiza un paro de 24 hs. convocado por las juntas de vecinos, el sindicato local de choferes y demás organizaciones sociales, en demanda del restablecimiento del servicio de agua interrumpido hace seis meses.

Domingo 29

• Vecinos del Parque del Este realizan una vigilia contra las obras que inició el gobierno para la adecuación del lugar para la celebración de los juegos panamericanos del año 2003, ya que consideran que las mismas afectan la ecología del lugar. Grupos importantes de agentes policiales y miembros del ejército se aglomeran en las distintas zonas del parque para proteger las obras de los contratistas.

AGOSTO

Martes 7

• Luego de una reunión con funcionarios de la presidencia de la República, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Populares, Sindicales y Choferiles suspende la Segunda Jornada Nacional de Protesta que daría comienzo el día de mañana, tras haberse iniciado el diálogo con el gobierno, al que le darán un plazo hasta el 26 del corriente para que sean atendidos sus reclamos.

- Jueves 9** • Los habitantes de Lacey del Medio, liderados por el FALPO y el Comité Unidos para Vencer (CUPAVE), se movilizan contra los apagones de hasta 18 hs que sufre la zona. Se producen fuertes enfrentamientos con la policía.
- Viernes 10** • Las organizaciones populares de Lacey del Medio –junto a comerciantes, productores avícolas y porcinos, y amas de casa– realizan una manifestación para exigir la solución del problema del suministro eléctrico y en repudio a la empresa EDENORTE.
- Martes 14** • Cientos de manifestantes interrumpen el tránsito en la autopista Sánchez en Canastota en protesta por la falta de agua como producto de los cortes de energía.
- Miércoles 15** • Se producen nuevas movilizaciones en la capital del país contra la empresa EDENORTE por los cortes de energía. Miembros de la policía enfrentan a tiros a los manifestantes, causando la muerte de un joven.
- Jueves 16** • Los habitantes de los barrios de la parte norte de la ciudad, donde ayer resultó muerto un joven durante las manifestaciones contra los cortes de energía, vuelven a protestar y a enfrentarse con la policía. El saldo de la jornada es de 8 personas heridas y 50 detenidos.
- Miércoles 22** • En Lacey del Medio se producen nuevas manifestaciones auspiciadas por el CUPAVE, con interrupción del tránsito vehicular en rechazo a los prolongados apagones de hasta 24 hs. que sufren.

■ Glosario de siglas

ADP	Asociación Dominicana de Profesores
CDE	Corporación Dominicana de Electricidad
CUP	Consejo de Unidad Popular
CUPAVE	Comité Unidos para Vencer
EDENORTE	Empresa Distribuidora de Energía del Norte
EDESUR	Empresa Distribuidora de Energía del Sur
FALPO	Frente Amplio de Lucha Popular
IMPOSDOM	Instituto Postal Dominicano
INAPA	Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala, Magdalena Rauch y Clara Algranati.

Fuentes: diarios Listín y Última Hora.

Los nuevos movimientos sociales¹

Por Boaventura de Sousa Santos*

He sostenido anteriormente que las dos últimas décadas fueron experimentales. También fueron contradictorias. El hecho de que hasta ahora no se haya estabilizado en los países centrales un nuevo modo de regulación social en sustitución del modo fordista llevó a que las soluciones experimentadas, además de empíricas (el *Adhocismo*) e inestables (el *Stop and go*, no sólo en el campo económico, sino también en los dominios social y cultural), sean contradictorias. No es de extrañar pues que el exceso de regulación que acabo de mencionar haya convivido en los últimos veinte años con movimientos emancipatorios poderosos, testigos del surgimiento de nuevos protagonistas en un renovado espectro de innovación y transformación sociales. La contradicción reside en que la hegemonía del mercado y sus atributos y exigencias alcanzó un nivel tal de naturalización social que, aunque lo cotidiano sea impensable sin él, no se le debe por eso mismo, ninguna lealtad cultural específica. Así, es socialmente posible vivir sin duplicidad y con igual intensidad la hegemonía del mercado y la lucha contra ella. La concreción de esta posibilidad depende de muchos factores. Por ejemplo, se puede decir con certeza que la difusión social de la producción contribuyó a desenmascarar nuevas formas de opresión y que el aislamiento político del movimiento obrero facilitó el surgimiento de nuevos sujetos sociales y de nuevas prácticas de movilización social.

La sociología de la década de los ochenta estuvo dominada por la temática de los nuevos sujetos sociales y de los Nuevos Movimientos Sociales (NMSs). Aún aquellos que no compartieron la posición de Touraine (1978), para quien el objeto de la sociología es el estudio de los movimientos sociales, reconocen que la última década impuso esa temática como una fuerza sin precedentes, siendo sólo objeto de debate el elenco y la jerarquización de las razones explicativas de ese fenómeno. Se trata pues de un tema sobre el cual se acumuló una extensa bibliografía, tanto en los países centrales como en América Latina y que aquí no es del



caso revisar². Sólo interesa mencionarlo brevemente en la medida en que intercepta los dos polos estructurantes de este texto: la relación entre regulación y emancipación y la relación entre subjetividad y ciudadanía.

La identificación de la intersección de los nuevos movimientos sociales en esta doble relación es tarea difícil, porque es grande la diversidad de estos movimientos y porque es dudoso si esa diversidad se puede reconducir a un concepto o a una teoría sociológica únicos. Una definición genérica como la que por último nos proponen Dalton y Kuechler —“un sector significativo de la población que desarrolla y define intereses incompatibles con el orden político y social existente y que los prosigue por vías no institucionalizadas, invocando el uso de la fuerza física o de la coerción” (1990: 227)— abarca realidades sociológicas tan diversas que a la postre, es muy poco lo que se dice de ellas. Si en los países centrales la enumeración de los nuevos movimientos sociales incluye típicamente los movimientos ecológicos, feministas, pacifistas, antirracistas, de consumidores y de autoayuda, la enumeración en América Latina —donde también es corriente la designación de movimientos populares o nuevos movimientos populares para diferenciar su base social que es característica de los movimientos en los países centrales (la “nueva clase media”)— es bastante más heterogénea. Teniendo en cuenta el caso brasileño, Scherer-Warren y Krischke destacan la “parcela de los movimientos sociales urbanos propiamente dichos, los CEBs (Comunidades [Eclesiales de Base] organizadas a partir de adeptos de la iglesia católica), el nuevo sindicalismo urbano y más recién-

* Doctor en sociología del derecho de la Universidad de Yale. Profesor de la Universidad de Coimbra y de la Universidad de Madison, Wiscconsin. Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal.

temente también rural, el movimiento feminista, el movimiento ecológico, el movimiento pacifista en etapa de organización, sectores de movimientos de jóvenes y otros” (1987: 4 l). La enumeración de Kärner, para el conjunto de América Latina es aún más heterogénea e incluye “el poderoso movimiento obrero democrático y popular surgido en el Brasil, liderado por Luís Inácio da Silva (Lula) y que luego derivó en el Partido de los Trabajadores; el Sandinismo que surgió en Nicaragua como un gran movimiento social de carácter pluriclasista y pluriideológico; las diferentes formas que asume la lucha popular en el Perú tanto a nivel de los barrios (“pueblos jóvenes”) como a nivel regional (Frentes Regionales para la Defensa de los Intereses del Pueblo); las nuevas experiencias de “paros cívicos nacionales”, con la participación de sindicatos, partidos políticos y organizaciones populares (grupos eclesíásticos de base, comités de mujeres, grupos estudiantiles culturales, etc.) en Ecuador, en Colombia y en el Perú; los movimientos de invasiones en Sao Paulo; las invasiones masivas de tierras por los campesinos de México y otros países; los intentos de autogestión en los tugurios de las grandes ciudades como Caracas, Lima y Sao Paulo; los comités de defensa de los Derechos Humanos y las Asociaciones de Familiares de Presos y Desaparecidos, habiendo surgido estas dos últimas iniciativas, básicamente de los movimientos sociales³.

178

Estas enumeraciones son en sí mismas reveladoras de la identidad tan sólo parcial entre los movimientos sociales de los países centrales y de América Latina, un tema al que volveré más adelante. Por ahora, nos sirven para identificar algunos de los nuevos factores que los movimientos sociales de las dos últimas décadas introdujeron en la relación regulación-emancipación y en la relación subjetividad-ciudadanía y para mostrar que esos factores no están presentes del mismo modo en todos los NMSs en todas las regiones del globo.

La novedad más grande de los NMSs reside en que constituyen tanto una crítica de la regulación social capitalista, como una crítica de la emancipación social socialista tal como fue definida por el marxismo. Al identificar nuevas formas de opresión que sobrepasan las relaciones de producción, y ni siquiera son específicas de ellas, como son la guerra, la polución, el machismo, el racismo o el productivismo; y al abogar por un nuevo paradigma social, menos basado en la riqueza y en el bienestar material del que, en la cultura y en la calidad de vida, denuncian los NMSs, con una radicalidad sin precedentes, los excesos de regulación de la modernidad. Tales excesos alcanzan no sólo el modo como se trabaja y produce, sino también el modo como se descansa y vive; la pobreza y las asimetrías de las relaciones sociales son la otra fase de la alienación y del desequilibrio interior de los individuos; y finalmente, esas formas de opresión no alcanzan específicamente a una clase social y sí a grupos sociales transclasistas o incluso a la sociedad en su todo.



En estos términos, la denuncia de nuevas formas de opresión implica la denuncia de las teorías y de los movimientos emancipatorios que las omitieron, que las descuidaron cuando no fue que pactaron con ellas. Implica pues, la crítica al marxismo y al movimiento obrero tradicional, así como la crítica al llamado “socialismo real”. Lo que es visto por estos como factor de emancipación (el bienestar material, el desarrollo tecnológico de las fuerzas productivas) se transforma en los NMSs en factor de regulación. Por otro lado, porque las nuevas formas de opresión se revelan discursivamente en los procesos sociales donde se forja la identidad de las víctimas, no hay una preconstitución estructural de los grupos y movimientos de emancipación, por lo que el movimiento obrero y la clase obrera no tienen una posición privilegiada en los procesos sociales de emancipación. Además, el hecho de que el movimiento obrero de los países centrales haya estado muy involucrado en la regulación social fordista en el segundo período del desarrollo capitalista tiende a hacer de él una traba, más que un motor de emancipación en este tercer período. Por último, aunque las nuevas opresiones no deben hacer perder de vista las viejas opresiones, la lucha contra aquellas no se puede hacer en nombre de un futuro mejor en una sociedad por construir. Al contrario, la emancipación por la que se lucha, tiene como objetivo transformar lo cotidiano de las víctimas de la opresión aquí y ahora y no en un futuro lejano. La emancipación o comien-

za hoy o no comienza nunca. De ahí que los NMSs, con la excepción parcial del movimiento ecológico, no se movilen por responsabilidades intergeneracionales.

Las enumeraciones de los diferentes movimientos arriba citadas muestran por sí mismas que esa nueva relación entre regulación y emancipación bajo el impacto de los NMSs es tan sólo manifestación de una constelación político-cultural dominante, diversamente presente o ausente en los diferentes movimientos concretos. Lo que la caracteriza verdaderamente es un fenómeno aparentemente contradictorio de globalización-localización, tanto a nivel de la regulación como a nivel de la emancipación. La globalización a nivel de la regulación se hace posible por la creciente promiscuidad entre producción y reproducción social señalada atrás. Si el tiempo vital y el tiempo de trabajo productivo se confunden cada vez más, las relaciones sociales de la producción se descaracterizan como campo privilegiado de dominación y jerarquización social; y el relativo vacío simbólico así creado lo llenan las relaciones sociales de reproducción social (en la familia y en los espacios públicos) y por las relaciones sociales en la producción (relaciones en el proceso de trabajo productivo asalariado entre trabajadores, hombres y mujeres, blancos y negros, jóvenes y adultos, católicos y protestantes, hindúes y musulmanes, chiítas y sunitas).

Cualquiera de estos dos últimos tipos de relaciones sociales ha venido adquiriendo creciente visibilidad social en los últimos veinte años. Pero, contradictoriamente, este proceso de visibilidad social sólo es posible anclado en la lógica (y no en la forma) y en la historicidad de la dominación propia de las relaciones de producción. Es decir la difusión social de la producción, al mismo tiempo que conduce al no privilegio relativo de la forma de dominación específica de las relaciones de producción (la explotación a través de la extracción de plusvalía económica), hace posible que la lógica de ésta (la extracción de plusvalía en una relación social que no tiene como fin explícito tal extracción) se difunda socialmente en todos los sectores de la vida social y, por esa vía, se globalice. Mientras más fuerte fue en el pasado la vivencia social de la dominación en las relaciones de producción, más intenso será ahora su carácter socialmente difuso. La plusvalía puede ser sexual, étnica, religiosa, generacional, política, cultural; puede tener lugar en el hábito (y no en el acto) de consumo; puede tener lugar en las relaciones desiguales entre grupos de presión, partidos o movimientos políticos que deciden el armamento y el desarme, la guerra y la paz; puede incluso tener lugar en las relaciones sociales de destrucción entre la sociedad y la naturaleza, o mejor entre los llamados recursos “humanos” y los llamados recursos “naturales” de la sociedad.

Sin querer entrar en el debate sobre la continuidad o la ruptura entre los viejos y los nuevos movimientos sociales⁴,

me parece innegable que sin la experiencia histórica de la dominación en la esfera de la producción, hoy no sería, social y culturalmente posible, pensar la reproducción social en términos de relaciones de dominación. Y la verdad es que los países con fuertes NMSs, tienden a ser países donde fueron, y quizás todavía son fuertes los viejos movimientos sociales.

También es por eso, que en el campo de los NMSs, América Latina sobresale en forma destacada del resto de los países periféricos y semiperiféricos. El proceso de globalización en el campo de la regulación también es un proceso de localización. La razón está en que, como formas de intersubjetividad, las relaciones sociales de reproducción y las relaciones sociales en la producción, son mucho más concretas e inmediatas que las relaciones sociales de producción.

Mientras éstas últimas se pueden esconder y *abstractizar* fácilmente detrás de las máquinas, ritmos de producción, normas de fabricación, reglamentos de fábrica, aquellas no son sino vivencias de relaciones entre personas, entre grupos, entre personas o grupos y el aire, los ríos, los bosques o los animales, entre la vida y la muerte. Es cierto que también aquí hay *mediaciones abstractizantes*, sean ellas las leyes, las costumbres, la religión, el discurso político, la publicidad o la idea de progreso, pero difícilmente excusa, ya sea la relación frente a frente entre opresor y oprimido, ya sea la relación frente a frente entre la víctima y la causa de su victimización. De ahí que lo cotidiano —que es, por excelencia, el mundo de la intersubjetividad— sea la dimensión espacio-temporal de la vivencia de los excesos de regulación y de las opresiones concretas en que ellos se desdobl原因.

A nivel de la emancipación, ocurre también un fenómeno correspondiente de globalización-localización. Una vez liberada de la envoltura estructural que le conferían las relaciones sociales de producción —el estado capitalista y el movimiento obrero— la tarea de descubrir las opresiones y de la lucha contra ellas, es potencialmente una tarea sin fin, sin un sujeto social específicamente titular de ella y sin lógica de acumulación que permita distinguir entre táctica y estrategia. Los valores, la cultura y la calidad de vida, en nombre de los cuales se lucha son, por sí mismos, maximalistas y globalizantes, no susceptibles de finalización y poco inclinados hacia la negociación y el pragmatismo. Por otro lado, si en algunos movimientos es discernible un interés específico de un grupo social (las mujeres, las minorías étnicas, los habitantes de las *favelas*, los jóvenes), en otros, el interés es colectivo y el sujeto social que los titula es potencialmente la humanidad en su todo (movimiento ecológico, movimiento pacifista).

Por último, la lucha emancipatoria, siendo maximalista, dispone de una temporalidad absorbente que compromete en cada momento todos los fines y todos los medios, siendo difícil la planeación y la acumulación y por lo tanto más probable, la discontinuidad. Porque los momentos son “locales” de tiempo y de espacio, la fijación momentánea de la globalidad de la lucha también es una fijación localizada, y es por eso que lo cotidiano deja de ser una fase menor o un hábito descartable para pasar a ser el campo privilegiado de la lucha por un mundo y una vida mejores.

Frente a la transformación de lo cotidiano en una red de síntesis momentáneas y localizadas, de determinaciones globales y maximalistas, el sentido común y el vulgar del día a día, tanto público como privado, tanto productivo como reproductivo, se desvulgarizan y pasan a ser oportunidades únicas de inversión y protagonismo personal y de grupo. De ahí la nueva relación entre subjetividad y ciudadanía.

■ Subjetividad y ciudadanía en los nuevos movimientos sociales

Uno de los más encendidos debates sobre los NMSs incide en el impacto de éstos en la relación subjetividad-ciudadanía. Según algunos, los NMSs representan la afirmación de la subjetividad frente a la ciudadanía. La emancipación por la que luchan no es política sino ante todo personal, social y cultural. Las luchas en que se traducen se pautan por formas organizativas (democracia participativa) diferentes de las que precedieron a las luchas por la ciudadanía (democracia representativa). Al contrario de lo que se dio con el dúo marshalliano ciudadanía-clase social en el período del capitalismo organizado, los protagonistas de estas luchas no son las clases sociales, son grupos sociales, a veces mayores, a veces menores que las clases, con contornos más o menos definidos en función de intereses colectivos, a veces muy localizados pero potencialmente universalizables. Las formas de opresión y de exclusión contra las cuales luchan no pueden, en general, ser abolidas con la mera concesión de derechos, como es típico de la ciudadanía; exigen una reconversión global de los procesos de socialización y de inculcación cultural y de los modelos de desarrollo, o exigen transformaciones concretas, inmediatas y locales (por ejemplo, el cierre de una central nuclear, la construcción de una guardería infantil o de una escuela, la prohibición de publicidad violenta en la televisión), exigencias que, en ambos casos, van más allá de la mera concesión de derechos abstractos y universales. Por último, los NMSs tienen lugar en el marco de la sociedad civil y no en el marco del estado y, en relación con el estado mantienen una distancia calculada, simétrica a la que mantienen con los partidos y con los sindicatos tradicionales.

Esta concepción, que basa la novedad de los movimientos sociales en la afirmación de la subjetividad sobre la ciudadanía, ha sido criticada ampliamente. La crítica más frontal proviene de aquellos que precisamente contestan la novedad de los NMSs. Según ellos, los NMSs son, de hecho, viejos (los movimientos ecológicos, feministas, pacifistas del siglo XIX y el movimiento antirracista de esa época y de los años cincuenta y sesenta); o son portadores de reivindicaciones que fueron parte integrante de los viejos movimientos sociales (el movimiento obrero y el movimiento agrario o campesino); o, por último, corresponden a ciclos de la vida social y económica y, por eso, su novedad, porque aunque recurrente, tan sólo es aparente. Los modos de movilización de recursos organizativos y otros, y no la ideología, deben ser para estos autores, el punto de apoyo del análisis de los NMSs. Para esta segunda concepción, el impacto buscado por los NMSs es, en última instancia, político y su lógica prolonga la ciudadanía, que orientó los movimientos sociales del pasado. La distancia de los NMSs con el Estado es más aparente que real, pues las reivindicaciones globales-locales siempre acaban por traducirse en una exigencia hecha al Estado y en los términos en que el Estado se sienta ante la contingencia política de tener que darle respuesta⁵. Además, la prueba de eso mismo es que no es raro que los NMSs jueguen el juego de la democracia representativa, aunque sea por el *lobbying* y por la vía extraparlamentaria; y entran en alianzas más o menos oficiales con sindicatos y partidos, cuando ellos mismos no se transforman en partidos.

En mi opinión, no es preciso rechazar la novedad de los NMSs para criticar las ilaciones que saca de ella la primera concepción. La novedad de los NMSs, tanto en el campo de la ideología como en el de las formas organizativas, me parece evidente, aunque no deba ser defendida en términos absolutos. Tal como Scott (1990), dudo que los NMSs puedan ser explicados en su totalidad por una teoría unitaria. Basta tener en mente las diferencias significativas en términos de objetivos de ideología y de base social entre los NMSs de los países centrales y los de América Latina. Entre los valores postmaterialistas y las necesidades básicas; entre las críticas al consumo y las críticas a la falta de consumo, entre el hiperdesarrollo y el sub (o anarco) desarrollo, entre la alienación y el hambre, entre la nueva clase media y las (poco esclarecedoras) clases populares, entre el estado-providencia y el estado autoritario, hay naturalmente diferencias importantes. No se excluye, por otro lado, que algunos de los NMSs de América Latina tengan grandes afinidades con el tipo dominante de NMSs en los países centrales pero, en general, están correctos Fernando Calderón y Elizabeth Jelin cuando afirman que, en contraste con lo que pasa en los países centrales, “una de las características propias de América Latina es que no hay movimientos sociales puros o claramente definidos, dadas la multidimensionalidad, no solamente de las relaciones sociales sino también de

los propios sentidos de la acción colectiva. Por ejemplo, es probable que un movimiento de orientación clasista esté acompañado de juicios étnicos y sexuales, que lo diferencian y lo asimilan a otros movimientos de orientación culturalista con contenidos clasistas. Así, los movimientos sociales se nutren con innumerables energías que incluyen, en su constitución, desde formas orgánicas de acción social por el control del sistema político y cultural hasta modos de transformación y participación cotidiana de auto-reproducción societaria” (en Ponte, 1990: 281). A mi modo de ver, en esta “impureza”, reside la verdadera novedad de los NMSs en América Latina y su extensión a los NMSs de los países centrales es una de las condiciones de la revitalización de la energía emancipatoria de estos movimientos en general. En la medida en que esto suceda, será más verosímil la teoría unitaria. Pero ahora, sólo es posible hablar abiertamente de tendencias y de opciones.

La novedad de los NMSs no reside en el rechazo de la política sino, al contrario, en la ampliación de la política hasta más allá del marco liberal de la distinción entre estado y sociedad civil. Los NMSs parten del presupuesto de que las contradicciones y las oscilaciones periódicas entre el principio del estado y el principio del mercado son más aparentes que reales, en la medida en que el tránsito histórico del capitalismo se hace de una interpenetración siempre creciente entre los dos principios, una interpenetración que subvierte y oculta la exterioridad formal del estado y de la política frente a las relaciones sociales de producción. En estas condiciones, invocar el principio del estado contra el principio del mercado, es caer en la trampa de la radicalidad fácil que consiste en transformar lo que existe en lo que ya existe, como es propio del discurso político oficial.

Apesar de estar muy colonizado por el principio del estado y por el principio del mercado, el principio de la comunidad rousseauiana, es el que tiene más potencialidades pa-



ra fundar las nuevas energías emancipatorias. La idea de la obligación política horizontal entre ciudadanos y la idea de la participación y de la solidaridad concretas en la formulación de la voluntad general, son las únicas susceptibles de fundar una nueva cultura política y, en última instancia, una nueva calidad de vida personal y colectiva basadas en la autonomía y en el autogobierno, en la descentralización y en la democracia participativa, en el cooperativismo y en la producción socialmente útil. La politización de lo social, de lo cultural, e incluso de lo personal, abre un inmenso campo para el ejercicio de la ciudadanía y revela, al mismo tiempo, las limitaciones de la ciudadanía de extracción liberal, incluso de la ciudadanía social, circunscrita al marco del estado y de lo político por él constituido. Sin postergar las conquistas de la ciudadanía social, como en últimas pretende el liberalismo político-económico, es posible pensar y organizar nuevos ejercicios de ciudadanía –porque las conquistas de la ciudadanía civil, política y social no son irreversibles y están lejos de ser plenas– y nuevas formas de ciudadanía –colectivas y no meramente individuales: ejercicios y formas basados en formas político-jurídicas que, al contrario de los derechos ge-

nerales y abstractos, incentiven la autonomía y combatan la dependencia burocrática, personalicen y localicen las competencias interpersonales y colectivas en vez de sujetarlas a patrones abstractos; ejercicios y formas que partan las nuevas formas de exclusión social, basadas en el sexo, en la raza, en la pérdida de calidad de vida, en el consumo, en la guerra, que ahora ocultan o legitiman, ahora complementan y profundizan la exclusión basada en la clase social.

No es sorprendente que, al regresar políticamente, el principio de la comunidad se traduzca en estructuras organizacionales y estilos de acción política diferentes de aquellos que fueron responsables de su eclipse. De ahí la prefe-

No rechazo una cierta normatividad en este análisis y, un campo de muchas opciones, la preferencia por la opción más optimista o prometedora. Son conocidas las limitaciones de los NMSs y hoy en día empieza a ser común afirmar que ya pasó su momento de apogeo. Es debatible si la relación tensa o de distancia calculada entre la democracia representativa y los NMSs ha sido benéfica o perjudicial para éstos últimos. Según algunos, esa tensión o distancia es responsable por la inestabilidad, por la discontinuidad y por la incapacidad de universalización que, en general, han sufrido los NMSs y que a la postre son responsables por el impacto relativamente restringido de los movimientos en la transformación política de los países donde han ocurrido. Por ejem-

plo, Tullo Vigevani señala los riesgos de asambleísmo, plebiscitarismo y mesianismo resultantes de que no exista “ningún tipo de institucionalización”, de que no existan los mecanismos necesarios para la construcción de la voluntad colectiva”, y lo lleva a preguntarse por los “alcances cuantitativos de los movimientos sociales” (1989: 108). Pero, por otro lado, con un éxito muy diferenciado, algunos movimientos se han “institucionalizado” convirtiéndose en partidos y disputando la política partidaria con lo que, en este caso, corren el riesgo al adoptar la estructura organizativa del partido de movimiento, de subvertir la ideología y los objetivos del movimiento que condujo al partido: este es un riesgo bien

rencia por estructuras descentralizadas, no jerárquicas y fluidas, en violación de la racionalidad burocrática de Max Weber o de la “ley de hierro de la oligarquía” de Robert Michels. De ahí también la preferencia por la acción política no institucional, fuera del compromiso neocorporativista, dirigida a la opinión pública, con vigorosa utilización de los medios de comunicación social, involucrando casi siempre actividades de protesta y confiando en la movilización de los recursos que ellas proporcionan. Dialécticamente, esta novedad en las estructuras organizativas y en el estilo de acción política es el eslabón que une los NMSs con los viejos movimientos sociales. A través de esta novedad continúan y ahondan la lucha por la ciudadanía, no siendo por eso correcto justificar (con base en esta novedad) un pretendido desinterés por las cuestiones de la ciudadanía en los NMSs como lo hacen Melucci (1988) y otros.

expresado en la forma del fraccionalismo entre pragmatismo y fundamentalismo, propia de estos partidos.

Dada la gran diversidad de los NMSs, es imposible hablar de un patrón único de relaciones entre democracia representativa (cuando ésta existe, debido a que en América Latina la lucha de los NMSs se ha dado muchas veces por lograr dicha democracia) y democracia participativa. No me parece en sí mismo negativo el hecho de que esas relaciones, cualesquiera que sean, siempre se hayan caracterizado por la tensión y por la difícil convivencia entre las dos formas de democracia, toda vez que es de esa tensión que se han liberado muchas veces las energías emancipatorias necesarias para la ampliación y la redefinición del campo político. Hay que agregar que, incluso cuando las formas de institucionalización son más tenues, la discontinuidad de los NMSs puede ser más aparente que real, pues, como afir-



ma Paulo Krischke, es necesario tener en cuenta las contribuciones positivas de los movimientos “tanto para la memoria colectiva de la sociedad, como para la reforma de las instituciones” (1987: 287). Similarmente, para Inglehart (1990: 43) y Dalton y Kuechler (1990: 227), los NMSs son señal de transformaciones globales en el contexto político, social y cultural de nuestra contemporaneidad y por eso sus objetivos serán parte permanente de la agenda política de los próximos años, independientemente del éxito, necesariamente diverso de los diferentes movimientos concretos.

Los años noventa

Si las dos últimas décadas fueron experimentales, es natural que los años noventa traigan una profundización de algunas de las experiencias, a menos que la sociedad del futuro no necesite de un modo específico y dominante de autorreproducirse y haga de la inestabilidad de las nuevas experiencias, la única forma viable de estabilidad. También es posible pensar, como quiere algún postmodernismo, que lo nuevo que hubo en estos últimos veinte años no cesará de repetirse, como nuevo, en los años venideros, no quedándonos otra actitud sino perder el hábito de imaginar otras posibilidades más allá de lo que existe y celebrar lo que existe como el conjunto de todas las posibilidades imaginables. Esta teoría, que tiene la peculiaridad de ser indeterminista en relación con el presente y determinista en relación con el futuro, no nos impide sin embargo imaginar otras teorías posibles donde quepa la diferencia del futuro y nuestra diferencia en relación con él.

Si fuera correcto hablar de “patologías de la modernidad”, diríamos que ellas consistieron hasta ahora en subsíntesis entre subjetividad, ciudadanía y emancipación, que resultaron en excesos de regulación, los cuales además, en ocasiones, se insinuaron bajo la forma de emancipaciones, denunciadas posteriormente como falsas. En las secciones anteriores, mencionamos tales excesos en sus diferentes formas y el siguiente cuadro lo presenta de modo sinóptico.

SUBSÍNTESIS	EXCESO
Ciudadanía sin subjetividad ni emancipación.	Normalización disciplinaria foucaultiana.
Subjetividad sin ciudadanía ni emancipación.	Narcisismo: autismo des-socializante; consumismo.
Emancipación sin subjetividad ni ciudadanía.	Despotismo; totalitarismo; reformismo autoritario.
Emancipación con ciudadanía y sin subjetividad.	Reformismo social-democrático.
Emancipación con subjetividad y sin ciudadanía.	Basismo; mesianismo.

No cabe analizar aquí cada uno de ellos. Los concibo como diferentes subsíntesis de la modernidad, es decir

constelaciones socio-políticas que, por una u otra vía, no lograron una síntesis entre subjetividad, ciudadanía y emancipación, dando de ella una versión truncada, desfigurada, perversa. Frente a los fracasos de la teoría crítica moderna, que está, además, por detrás de algunas de las formas de falsa emancipación, la tarea de la teoría crítica postmoderna consiste en apuntar de nuevo hacia los caminos de la síntesis, tomando como método, por un lado, la citación de todo lo que existió de positivo en la experiencia histórica de nuestra contemporaneidad, por más negativa que ocasionalmente haya sido, y por otro lado, la disponibilidad para identificar lo que de nuevo caracteriza el tiempo presente y hace de él verdaderamente nuestro tiempo. El esfuerzo teórico que está por emprender debe incluir una *nueva teoría de la democracia* que permita reconstruir el concepto de ciudadanía, una *nueva teoría de subjetividad* que permita reconstruir el concepto de sujeto y una *nueva teoría de la emancipación* que no sea más que el efecto teórico de las dos primeras teorías en la transformación de la práctica social llevada a cabo por el *campo social de la emancipación*.

Bibliografía

Brand, Karl-Werner (1990) “Cyclical Aspects of New Social Movements: Waves of Cultural Criticism and Mobilization Cycles of New Middle-Class Radicalism”, en Dalton y Kuechler: 23.

Cardoso, Ruth 1983 “Movimentos Sociais Urbanos: um balanço crítico”, en Almeida, M.H. y Sori, B. (org.) 1988 *Sociedade e Política no Brasil Pós-64* (Sao Paulo: Brasiliense).

Dalton, Russel y Kuechler, M. (orgs.) 1990 *Challenging the Political Order: New Social and Political Movements in Western Democracies* (Oxford: Polity Press).

Frank, André G. y Fuentes, M. (1989) “Dez Teses Acerca dos Movimentos Sociais” en *Lua Nova* 17:19.

Inglehart, Ronald 1990 “Values, Ideology and Cognitive Mobilization in New Social Movements”, en Dalton, Russel y Kuechler, M. (orgs.) *Challenging the Political Order: New Social and Political Movements in Western Democracies* (Oxford: Polity Press) 43.

Jacobi, Pedro 1987 “Movimentos Sociais: Teoria e Prática em Questão”, en Scherer-Warren y Krischke 1987: 246.

Krischke, Paulo 1987 “Movimentos Sociais e Transição Política: contribuições da Democracia de Base”, en Scherer-Warren, Ilse y Krischke, P. (orgs.) *Uma Revolução no Quotidiano?: os Novos Movimentos Sociais na América do Sul* (Sao Paulo: Brasiliense) 276.

Laranjeira, Sonia 1990 (org.) *Classes e Movimentos Sociais na América Latina* (Sao Paulo: Hucitec).

Melucci, Alberto 1988 "Social Movements and the democratization of everyday life", en Keane, John (org.) *Civil Society and the State* (Londres: Verso).

Ponte, Victor M.D. 1990 "Estruturas e Sujeitos na Análise da América Latina", en Laranjeira, Sonia, 270.

Scherer-Warren, Ilse y Krischke, P. (orgs.) 1987 *Uma Revolução no Quotidiano?: os Novos Movimentos Sociais na América do Sul* (Sao Paulo: Brasiliense).

Scott, Alan 1990 *Ideology and the New Social Movements* (Londres: Unwin Hyman).

Touraine, Alain 1978 *La Voix et le Regard* (París: Seuil).

Vigevani, Tullo 1989 "Movimentos Sociais na Transição Brasileira: A Dificuldade de Elaboração do Projecto", en *Lua Nova* 17: 93.

la postmodernidad (Santafé de Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Facultad de Derecho Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes) 312-331.

2 Entre la extensa bibliografía, ver cuatro importantes libros (tres de ellos colectivos), dos centrados en los NMSs de los países capitalistas avanzados (Scott, 1990; Dalton y Kuechler, 1990) y dos centrados en los NMSs de América Latina (Scherer-Warren y Krischke, 1987; Laranjeira, 1990).

3 Hasta el inicio de los noventa los movimientos indígenas son raramente mencionados. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo en América Latina, han sido muy importantes e innovadores en la lucha social y política.

4 A título de ejemplo, cf. ver las posiciones de Frank, G. y Fuentes, M. (1989) y de Brand, Karl-Werner (1990), a favor de las tesis de la continuidad entre viejos y nuevos movimientos sociales; y las posiciones de Dalton y Kuechler (1990) en favor de la tesis de la novedad de los NMSs.

5 Para el debate en el Brasil, ver por ejemplo, cf., Cardoso, Ruth y Jacobi, Pedro.

■ Notas

1 Extraído de de Sousa Santos, Boaventura 1998 (1995) *De la mano de Alicia. Lo social y lo político en*



La estructura de los movimientos sociales en Bolivia¹

Por Alvaro García Linera*

En Bolivia, en los últimos quince años, a raíz de las reformas estructurales que han afectado la economía, el estado y la estructura de las clases sociales, todo el basamento que hizo de los sindicatos obreros el núcleo de las identidades subalternas, ha sido desmontado sistemáticamente.

Las grandes empresas y ciudadelas obreras han sido sustituidas por numerosas medianas y pequeñas fábricas capaces de extender el trabajo industrial hasta el domicilio produciendo un efecto de desagregación social contundente y fragmentación material de la fuerza de masa del trabajo. El contrato fijo que sostuvo el sentido de previsibilidad, es hoy una excepción frente a la subcontratación, la eventualidad, el contrato por obra que precariza la identidad colectiva y promueve el nomadismo laboral limitado en su capacidad de forjar fidelidades a largo plazo, dando lugar por una parte a una hibridación de la condición de clase y a la emergencia de “identidades contingentes” de los trabajadores según la actividad, los oficios laborales, los entornos culturales donde se encuentren transitoriamente y la dinámica de “contornos difusos” entre el espacio del trabajo y del no trabajo (Bhabha, 1997; Beck, 2000). La transmisión de saberes por estratificaciones laborales estables y los ascensos por antigüedad van siendo sustituidos por la polivalencia, la rotación del personal y el ascenso por mérito y competencia, quebrando la función del sindicato como mecanismo de ascenso y estabilidad social, tan propios de la antigua forma sindical de movilización. Por último, el sindicato ha sido proscrito de la mediación legítima entre estado y sociedad, papel que desempeñó durante décadas, para ser lentamente sustituido por el sistema de partido, erosionando aún más la eficacia representativa que antes poseía en la medida en que era el mediador político y el portador de ciudadanía.

Pero la disolución de las condiciones de posibilidad de la *forma sindicato*, en parte también han sido las condiciones de posibilidad del surgimiento de otras formas de inter-



unificación social y de acción colectiva manifiestas en los últimos años a partir de la defensa del agua, los servicios públicos y el reconocimiento de derechos indígenas.

■ La forma multitud

A raíz de los intentos gubernamentales de entregar la administración de la empresa de agua potable en la tercera ciudad del país, Cochabamba, a un consorcio norteamericano, y de mercantilizar la gestión de los recursos hídricos con que cuentan comunidades campesinas, ha surgido desde el año 2000 un movimiento social urbano-rural, llamado Coordinadora del Agua y la Vida, con tal fuerza de movilización que fue capaz de protagonizar un levantamiento civil, expulsar a la empresa extranjera y modificar el panorama político regional. Veamos algunas de las características de esta forma de acción colectiva, que hemos denominado *forma multitud*.

1. Modo de unificación territorial y flexible. A medida que se derrumbaba el centro de trabajo estable como lugar de agregación; formas de organización territorial preexistentes,

* Matemático e investigador social. Docente de la Carrera de Sociología y de la Maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia.

como las juntas vecinales, los sindicatos por jurisdicción (campesinos y gremiales), asociaciones por rama de oficio y una multifacética, compleja y generalizada urdimbre organizativa de la sociedad subalterna enraizada en ámbitos locales y territoriales de preocupación, han adquirido una relevancia de primer orden con gran fuerza de movilización.

Lo decisivo de esta *forma multitud* es que, mayoritariamente, resulta de la agregación de sujetos colectivos, es decir, una asociación de asociaciones donde cada persona que está presente en el acto público de encuentro no habla por sí misma sino por una entidad colectiva local ante la cual tiene que rendir cuenta de sus acciones, de sus decisiones, de sus palabras.

Pero además, y ésta es una virtud respecto a la *forma sindicato*, esta multitud no crea una frontera entre afiliados y extraños. Tanto en sus reuniones locales o departamentales, como en las acciones de masas, en las asambleas, en las movilizaciones, bloqueos o enfrentamientos, otras personas, carentes de filiación grupal (individuos) o representantes de otras formas de organización (sindicatos obreros), también pueden intervenir, opinar, participar, etc., ampliándose enormemente la base social de acción y legitimidad. En este sentido, la *multitud* es una red organizativa bastante flexible, hasta cierto punto laxa que, presentando un eje de aglutinación bastante sólido y permanente, es capaz de convocar, dirigir y movilizar a una inmensa cantidad de ciudadanos “suelos” que por su precariedad laboral, por los procesos de modernización e individualización, carecen de fidelidades tradicionales.

2. Tipo de reivindicaciones y base organizacional.

Las principales demandas en torno a las cuales han comenzado a articularse estos centros locales de asociación han sido la gestión del agua, el acceso a la tierra y el precio de los servicios básicos que en conjunto delimitan el espacio de riquezas vitales y primarias que sostienen materialmente la reproducción social.

En ese sentido, utilizando la clasificación dada por Tilly, se podría decir que estamos ante un tipo de acción colectiva “reactiva” similares a las que él estudió en el siglo XVIII europeo (Tilly, 1975). La preexistencia de “comunidades solidarias locales” como base de la movilización tiende a reforzar esta mirada. Sin embargo, la *forma multitud* también contiene, y de una manera creciente, grupos de base asociacionista y electiva emergentes de los intermitentes y mutilados procesos de modernización social.

Igualmente, la *forma multitud* también ha puesto en escena demandas y acciones de tipo “proactivas”. En la medida en que se fue consolidando, ampliando y radicalizando el movimiento social, la base movilizadora de la Coordinadora comenzó a buscar reconocimiento a sus formas de democracia asambleísta como técnica de gestión de demandas ci-



viles, la institucionalización de otras maneras de ejercer los derechos democráticos —como el referéndum llevado a cabo en marzo de 2000 o la convocatoria a una asamblea Constituyente—, el control directo del poder político a nivel departamental durante las jornadas de movilización, o la propuesta de la implementación de una forma autogestionaria de la provisión de agua potable. Tenemos así una combinación entre defensa de recursos anteriormente poseídos (el agua), con la demanda de recursos que anteriormente no existían, en este caso derechos democráticos y poder político que hacen a la multitud una forma de movilización profundamente tradicional y radicalmente moderna por una parte, y por otra defensiva y ofensiva a la vez.

3. Soberanía y democratización social. Teniendo como base a las estructuras territoriales donde la asamblea, la deliberación y la consulta directa son prácticas cotidianas para atender asuntos particulares, estas extendidas prácticas de democracia directa comenzaron a convertirse en soporte para la consulta y elaboración de estrategias de movilización primero en el ámbito regional o provincial. Pero a medida que las redes de movilización centradas en una misma demanda crecieron a nivel departamental, estos saberes democráticos y estas técnicas de deliberación tuvieron que expandirse, al tiempo que reconfigurarse, para dar paso a una compleja y sistemática estructura de ejercicio democrático

de prerrogativas públicas, de formación de una opinión pública y, con el tiempo, de resolución de la gestión de un bien público (el agua) a escala regional, incluso en competencia con el estado.

4. Institucionalidad y amplitud. A diferencia de lo que fue el movimiento obrero, la *forma multitud* carece de mecanismos duraderos de convocatoria y consulta que permitan tornar rutinarios los ámbitos de presencia de sus componentes. Si bien los sujetos colectivos locales que la componen mantienen continuamente prácticas de asamblea, la actuación mancomunada como multitud es siempre una incertidumbre que sólo se resuelve en la práctica. De ahí que cada convocatoria a la movilización sea a su vez un referéndum acerca de la vitalidad, la continuidad o la debilidad de la multitud, que permite entonces forjar una cultura organizativa que asume la unidad como resultado de un paciente trabajo y no como un hecho dado que sólo basta evocar para presenciarlo.

■ La forma comunidad

En el mismo año 2000, paralelamente a estas movilizaciones urbano-rurales ubicadas en la región central de Bolivia, en el Altiplano y alrededor de la sede de gobierno, dos grandes rebeliones indígenas aymaras han bloqueado todas las carreteras de acceso a la ciudad de La Paz impidiendo la entrada o salida de productos y personas, y obligando al gobierno a modificar varias de sus políticas públicas para atender las demandas indígenas. Lo que ahora nos interesa señalar son los mecanismos de movilización social que, al igual que lo que sucedió en abril en la ciudad de Cochabamba, marcan pautas y tendencias para una regeneración de la política y de la acción de los movimientos sociales.

Primero: sustitución del poder estatal por un poder político comunal supra-regional descentralizado en varios nodos (cabildos). A pocos días de la movilización, el sistema estatal de autoridades (subprefecturas, corregidores, alcaldías, retenes policiales, administración estatal) fue disuelto en toda el área de movilización comunal y reemplazado por un complejo sistema de autoridades comunales (denominadas dirigentes sindicales, pero que en verdad funcionan bajo la lógica comunal de la responsabilidad pública rotativa ligada a la legitimidad de la tenencia familiar-comunal de la tierra). Este armazón de poder político alternativo tenía a las asambleas de comunidad (sindicato campesino) como punto de partida y soporte de la movilización.

Durante los dieciocho días nada se movía, nadie transitaba por los caminos y ninguna decisión se tomaba si no era a través de estas redes de poder que ocuparon carreteras, pueblos intermedios y medios de comunicación. En los hechos, la autoridad territorial de la zona de rebelión se desplazó del estado a las estructuras sindicales de la comuni-

dad y a sus cabildos y por quince días, en octubre de 2000, y treinta días, en junio-julio de 2001, éstas se mostraron como eficientes y coordinadas formas de ejercicio de poder gubernamental en una extensa región del país.

Segundo: sistema comunal productivo aplicado a la guerra de movimientos. La posibilidad de que tanta gente pueda mantenerse por tantos días en las carreteras se sostuvo en el tradicional sistema de “turnos”, mediante el cual cada veinticuatro horas la gente movilizada de una comunidad es sustituida por la de otra comunidad a fin de permitir que la primera descanse, se dedique durante unos días a sus faenas agrícolas y regrese nuevamente a la movilización cuando le toque su “turno”. Por cada cien personas movilizadas en uno de los cientos de bloqueos hay un círculo de otras mil o dos mil personas que esperan su turno para desplazarse. De ahí el cálculo conservador de que sólo en el altiplano se movilizaron cerca de quinientos mil comunarios aymaras.

La logística del bloqueo estuvo también asentada en las propias comunidades. Cada grupo movilizado traía su alimentación, su sistema de mandos, y sus armas. El momento culminante de esta organización de las comunidades indígenas ha sido sin duda la formación de un “Cuartel General Indígena de Q’alachaca” donde cerca de cuarenta mil aymaras, hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos, se atrincheraron durante semanas a fin de prepararse para un enfrentamiento bélico contra el ejército republicano. Lo más significativo de estas comunidades militarizadas fue el carácter confederado que ha asumido la estructura de movilización y mando. El llamado “Ejército Indígena Aymara” concentrado en el cuartel era una formación compuesta por destacamentos compactos de pequeños ejércitos regionales y zonales que rotativamente se concentraban en la zona de operaciones al mando de sus propias autoridades, con sus propios mecanismos de abastecimiento y logística militar (piedras, palos, dinamita, fusiles), y que en base a acuerdos temporales, tensos y permanentemente negociados, establecían acuerdos flexibles y provisionales de acción conjunta con los otros destacamentos provenientes de otras zonas.

Tercero: ampliación de la democracia comunal al ámbito regional-nacional. La pedagogía de democratización de la vida pública, en este caso de la decisión de desplazar la institucionalidad estatal, de conservar el agua como un bien común, de levantar una estructura militar separada del estado, fue sin duda extraordinaria, y se ejerció mediante la aplicación de los saberes democráticos practicados en el ámbito de las comunidades campesinas a escala superregional, que permitió acordar fines colectivos, consultar reiteradamente a las bases acerca de la continuidad de la movilización, lograr consensos acerca de las demandas, coordinar la defensa territorial de las comunidades movilizadas ante el avance del ejército, y controlar la vida política en las zonas sublevadas.

Bajo esta nueva forma de poder político, las prácticas democráticas mediante las cuales la población recuperó su capacidad de intervención y gestión en la formulación del bien común y el uso de la riqueza colectiva fueron:

a. Los cabildos y las asambleas que funcionaron como organismos públicos de intercambio de razones y argumentos del que nadie estaba excluido, constituyeron un espacios de producción de igualdad política real y de formación de opinión pública, ambos componentes básicos de lo que se denomina “democracia deliberativa”; pero no complementando el estado de derecho, como lo hubiera deseado Habermas (1998), sino precisamente interpelando a un estado que, como el boliviano, está atravesado de profundos racismos que han institucionalizado la desigualdad entre hombres y mujeres pertenecientes a distintas culturas.

b. Las deliberaciones entre iguales se sustentaron en movimientos sociales (las comunidades movilizadas) portadores de una moral de responsabilidad pública (local) en la que rigen formas de acción normativamente reguladas. Ciertamente, esto lleva a que muchos de los valores colectivos que guían los comportamientos de sus integrantes estén regidos por principios previos y obligatorios que pudieran limitar la generación de nuevos consensos sustanciales, como por ejemplo sucede a escala comunal donde lo público tiene la misma dimensión territorial que el espacio de eficacia de los valores normativos. Sin embargo, en el marco de las acciones colectivas a gran escala donde la esfera pública, lo común que interconecta a los sujetos colectivos, rebasa el marco de las regulaciones normativas locales, tiende a ser fruto de una nueva interacción comunicativa productora de nuevos consensos y normas colectivas.

Cuarto: política de la igualdad. Uno de los componentes más impactantes de la movilización social, tanto en las declaraciones de sus portavoces como en la gestualidad colectiva de los comunarios bloqueadores, fue el derrumbe simbólico del prejuicio de la desigualdad entre indígenas y elites empresariales “blancoides”. La afirmación de que el dirigente indígena iba a negociar “de presidente a presidente”, de que los aymaras tenían derecho a “gobernar al país”, y la exigencia de que la “vida de un indio debe valer lo mismo que la vida de un blanco”, fueron palabras y gestos que rompieron una secular jerarquía étnico-cultural por medio del ejercicio y la reivindicación del derecho básico de la igualdad (Rancière, 1996).

Quinto: política de la identidad y la alteridad. La rebelión de septiembre-octubre, pero ante todo de junio-julio de 2001, ha sido en primer lugar una guerra simbólica, una lucha por las estructuras de representación, jerarquización, división y significación del mundo. A medida que los esquemas mentales dominantes (coloniales) eran impugnados,

otros se interponían y se levantaban orientando la acción movilizadora de los objetadores del orden establecido. En las movilizaciones indígena-campesinas recientes, el conocimiento territorial devino en materialidad de soberanía que separó dos mundos, el de ellos y el de las élites dominantes. El idioma devino de medio de comunicación en medio de diferenciación entre un “nosotros” y un “ellos” verificable por el saber lingüístico y su modo de adquisición.

En conjunto, estos componentes del movimiento social, tal como tendieron a ser resignificados, comenzaron a recrear los ejes de una identidad cultural contrapuesta, escindida a la dominante, de un sentido de filiación colectiva, de alteridad irreductible y que, por la dimensión de disputa territorial y de autonomía política que adquirió esta construcción comunal de destino compartido, tiene todas las características de una rearticulación de identidad nacional indígena, mayoritariamente aymará, cuya vitalidad o existencia efímera se medirá en los siguientes años.

Bibliografía

Bhabha, Homi 1993 *The location of culture* (Londres: Routledge).

Beck, Ulrich 2000 (1999) *Un nuevo mundo feliz* (España: Paidós).

García, Álvaro; Gutiérrez, Raquel; Prada, Raúl y Tapia, Luis 2001 *Tiempos de rebelión* (La Paz: Muela del Diablo).

Habermas, Jürgen 1998 (1992 y 1994) *Facticidad y validez* (Valladolid: Trotta).

Rancière, Jacques 1996 *El desacuerdo* (Buenos Aires: Nueva Visión).

Tilly Charles; Tilly Louise y Tilly Richard 1975 *The rebellious century /1830-1930* (Cambridge, Mass, Harvard University Press).

Notas

1 Versión extractada y modificada del artículo “Sindicato, multitud y comunidad” en García, Álvaro; Gutiérrez, Raquel; Prada, Raúl y Tapia, Luis 2001 *Tiempos de rebelión* (La Paz: Muela del Diablo).